*Steve Ellner*
*(compilador)*

# LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA EN EL PODER: CAMBIOS Y ENFRENTAMIENTOS EN EL SIGLO XXI

CELARG
Fundación
Centro de Estudios
Latinoamericanos
Rómulo Gallegos

CENTRO
NACIONAL
HISTORIA

# La izquierda latinoamericana en el poder

## *Cambios y enfrentamientos en el siglo XXI*

Caracas-Venezuela

# La izquierda latinoamericana en el poder

## *Cambios y enfrentamientos en el siglo xxi*

Steve Ellner (compilador)

Fundación Celarg
Fundación Centro Nacional de Historia
Colección Nuestra América

*La izquierda latinoamericana en el poder. Cambios y enfrentamientos en el siglo xxi*
Steve Ellner (compilador)

**Responsable de esta edición**
María Riera
**Corrección**
Anabell Daher R.
**Asistencia editorial**
Alexander Zambrano
**Traducción**
Giomar Salazar y Eligio Damas (introducción de Steve Ellner y artículo de Roger Burbach)
**Diagramación y diseño de portada**
Orión Hernández
**Imagen de portada**
Hugo Mariño, *Desde la vía… por ahora,* 2012, Díptico. Acrílico y barra de óleo sobre tela, 1,45 x 184 cm
**Fotografía de la portada**
Martín Ustáriz

© Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 2016
© Fundación Centro Nacional de Historia, 2018
© Steve Ellner, 2018

Depósito Legal: MI2018000435
ISBN: 000-000-000-000-0

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno

Fundación Centro Nacional de Historia
Av. Panteón, Foro Libertador, Edificio Archivo General de la Nación, Caracas-Venezuela.

Casa de Rómulo Gallegos
Av. Luis Roche, cruce con Tercera Transversal,
Altamira. Caracas 1062/ Venezuela
Teléfonos: (0212) 285-2990 / 285-2644
Fax: (0212) 286-9940
Página Web: http://www.celarg.gob.ve
Correos electrónicos: publicaciones@celarg.gob.ve, publicacionescelarg@gmail.com

Editado en la República Bolivariana de Venezuela

# Prólogo

La reflexión sobre el pensamiento y la acción de la izquierda en la contemporaneidad latinoamericana es necesaria y urgente, considerando además que la izquierda radical latinoamericana ha llegado al poder por vías electorales, pero no ha dejado de estar amenazada por fuerzas exógenas y endógenas. Como afirma Steve Ellner, el conflicto ha sido y sigue siendo una constante de los gobiernos de la izquierda radical en América Latina. Y esta afirmación resulta más evidentemente acertada en el contexto actual, en el que el avance de las fuerzas de la derecha ha levantado un cerco agresivo a las experiencias transformadoras. La realidad continental actual hace aún más pertinentes los análisis que nos presenta el texto, y con seguridad iluminan y permiten explicar sucesiones de acontecimientos que han tenido lugar con posterioridad a las fechas en que fueron escritos los ensayos que conforman el libro.

A la luz de las experiencias que se han venido desarrollando en Venezuela, Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Cuba, el propósito de la obra que a continuación se despliega consiste en profundizar en las características y aportes que Latinoamérica ha hecho a la izquierda, en su ontología y en sus prácticas políticas. Con el concepto de Izquierda Radical Latinoamericana, Steve Ellner y sus co-autores definen el Socialismo del siglo XXI, y distinguen los gobiernos claramente anticapitalistas de los gobiernos progresistas

más moderados, como los que estuvieron en Brasil y Argentina, y persiste en Uruguay.

Steve Ellner, en la Introducción al volumen, plantea la tesis de que los desafíos que encara la izquierda radical latinoamericana en el poder son diferentes y más complejos que los que tuvo que enfrentar la izquierda en siglo XX. El capitalismo global no solamente es poderoso en lo económico, sino que está anclado en las subjetividades de los pueblos. La vía electoral y gradual resulta más complicada porque debe lidiar con oposiciones rígidas y fuertemente combativas, que utilizan mecanismos legales y semi legales. Por otra parte, el avance gradual también genera al interior de la izquierda radical disconformidad, con la lentitud con que se producen los cambios. La diversidad y heterogeneidad impulsada por los movimientos sociales, que se hicieron fuertes en la década de 1990 con sus luchas identitarias, determinó un nuevo concepto de la lucha de clases, con diversidad de sujetos. En este contexto, los liderazgos fuertes garantizan la unidad que articula los diversos intereses y expectativas. En las conclusiones, Ellner destaca las formulaciones originales y creativas que practica la izquierda radical latinoamericana en el ejercicio del poder.

La izquierda radical latinoamericana en el poder ha planteado un combate por la hegemonía, que cuestiona el poder desde el Estado, proponiéndose construir un poder desde abajo. Sin embargo, esta construcción de otro tipo de poder, que se plasma en la democracia participativa, es un camino difícil, porque es combatida no sólo desde las derechas, sino desde el mismo interior del Estado, que se resiste a entregar parte de su poder a las comunidades. La utopía ha estado y está presente en América Latina, ha venido renaciendo, sin haberse ido nunca, en los conceptos y acciones del Socialismo del siglo XXI como horizonte, éste es el planteamiento central de Roger Burbach.

El chavismo es presentado en el ensayo de Ellner como un campo de disputas entre sectores sociales: grupos moderados y grupos radicalizados, sectores sindicalizados, trabajadores independientes y burocracia estatal. Disputas contenidas por el liderazgo fuerte de

Hugo Chávez. La apuesta por la sustitución del modelo económico y el reemplazo de las empresas transnacionales o tradicionales por una economía social no ha sido exitosa, lo que determina un peligro concreto y real para el proceso de justicia distributiva e inclusión que promovió Hugo Chávez.

También tensiones y controversias se muestran en el decurso boliviano, en la óptica del análisis de Federico Fuentes. Tensiones que se dan dentro del sector que impulsa el cambio, tensiones que García Linera denomina como tensiones creativas, porque ayudan a motorizar la propia revolución. Las acciones de movimientos sociales plantaron oposición a algunas políticas del gobierno, y han sido determinantes para poner en debate público el extractivismo, la minería y sus consecuencias.

El Salvador y Nicaragua son países en los que los frentes guerrilleros llegaron al poder por elecciones. Ambos se han enfrentado con la necesidad de mantener alianzas con sectores no revolucionarios para consolidar su poder y realizar mejoras significativas en la vida de la población más pobre, que constituye una amplia mayoría. No han encarado transformaciones económicas ni han cortado lazos con EE UU, aunque han diversificado sus alianzas internacionales. La tensión en ellos viene dada por la aparente contradicción entre la ideología y la práctica.

En los cambios en el siglo xxi, que están dándose en el socialismo del siglo xx de Cuba, se presenta la confrontación entre tres visiones: la estatista, la economicista y la autogestionaria. Hay discursos sobre la necesidad de la centralización estatal de la producción que se enfrentan con el economicismo que presenta la empresa privada y el mercado como más eficientes, y ambos discursos confrontan la posición autogestionaria que propone la democratización de las empresas del Estado y la ampliación de la economía solidaria y cooperativa. Camila Piñeiro Harnecker postula que si el objetivo sigue siendo justicia y dignidad, la autogestión debería predominar, tomando ejemplos del Socialismo del siglo xxi, pero ésta es una vía que todavía no está clara.

El capítulo escrito por George Ciccariello-Maher postula el protagonismo de los movimientos sociales en Ecuador, Bolivia y

Venezuela, que irrumpen en el momento constituyente y son la principal garantía de la continuidad de los procesos y su radicalización. Kevin A. Young llama la atención sobre la deshonestidad sistemática de la cobertura mediática, que como aliada del imperialismo estadounidense distingue entre una izquierda buena y una izquierda mala, a la que estigmatiza, para dividir el campo internacional entre buenos y malos. Pascal Lupien demuestra cómo los medios fuertemente cartelizados han venido construyendo la peligrosidad de los gobiernos de la izquierda radical.

Temas y análisis contenidos en el presente libro representan un aporte sustantivo para la comprensión de los procesos políticos latinoamericanos en el siglo XXI, mostrando cómo han venido enriqueciendo el pensamiento y la práctica de la izquierda mundial. Las nuevas vías y los sujetos que se hicieron visibles en los procesos y nuevos pactos sociales en América Latina han abierto nuevos horizontes emancipatorios que potencian las propuestas de la izquierda, y le dan cualidades más abarcantes, no exentas de desafíos.

Es importante también señalar que este nuevo trabajo de Steve Ellner continúa la línea de sus investigaciones, centradas en explicar de manera penetrante los procesos políticos de transformación y emancipación de nuestros pueblos. Su obra ha ido iluminando y entregando claridad teórica a los hechos y prácticas de la izquierda latinoamericana; se trata de una labor necesaria en medio de la perentoriedad de los cambios. Contribuciones de lectura ineludible.

Alba Carosio*
Mayo del 2018

* Doctora en Ciencias Sociales, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora de Investigación del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Autora de numerosos artículos en las temáticas de género, ética y emancipación.

# Prefacio

¿Qué implica intentar llevar a cabo transformaciones revolucionarias en el siglo XXI, cuando tantos de nuestros puntos conocidos de referencia y reglas del juego han cambiado en esta nueva época del capitalismo global? Los desafíos de semejante transformación son abrumadores. Sin embargo, dichos desafíos son más urgentes que nunca en la medida que el sistema se hunde en una crisis cada vez más profunda. La transformación fundamental de nuestra sociedad global aparece como una necesidad para poder sobrevivir como especie. Estamos viviendo momentos de gran conmoción, incluyendo la verdadera posibilidad de un colapso, así como la amenaza creciente de los sistemas represivos de control social para contener las contradicciones explosivas de un capitalismo global envuelto en profunda dislocación estructural, ambiental y cultural. El impulso implacable del capital transnacional por acumular a escala mundial está precipitando un holocausto ecológico y la guerra sin fin. No obstante estos peligros que enfrenta la humanidad, el interregno actual nos presenta grandes oportunidades para proyectos transformadores y liberadores. Primero, el sistema ha perdido su legitimidad para muchas personas. Segundo, el neoliberalismo aparentemente está llegando al agotamiento material e ideológico. Tercero, los grupos dominantes alrededor del mundo se presentan como divididos y a la deriva. Cuarto, la "tercermundialización"

del Primer Mundo abre nuevas oportunidades para practicar la política radical globalizada, o sea, para desarrollar alianzas orgánicas entre el Norte y el Sur.

En efecto, ha habido dos oleadas de rebelión global desde que la crisis del capitalismo global se inició en los últimos años del siglo xx. La primera abarcó el surgimiento de un movimiento de justicia global, la incorporación de numerosas luchas populares y movimientos de resistencia alrededor del mundo en una masa crítica hacia finales de 1990 y la formación del Foro Social Mundial bajo la bandera de "Otro mundo es posible". Esta oleada llegó a su apogeo con el cambio de siglo y fue descarrilado, en parte, así como fue transformado, por otra, como resultado de los eventos del 11 de setiembre del 2001 y la contra-ofensiva que pudo lanzar la élite transnacional gracias a dichos eventos. La segunda oleada empezó a raíz del colapso financiero de 2008 y se extendió entre 2009 y 2011. Entre otros eventos más, llamaron la atención de los medios globales de comunicación: las repetidas huelgas y movilizaciones en los países de la Unión Europea, especialmente en los países más golpeados por la austeridad; el Movimiento *"Occupy Wall Street"* en Estados Unidos; el movimiento estudiantil chileno; la oleada de huelgas por parte de los obreros y las obreras chinas; las luchas de los inmigrantes en muchos países; etcétera.

No hay una sola conclusión que podemos sacar en cuanto al contenido y la dirección de la revuelta mundial, la cual va desde las revoluciones abiertamente socialistas en América del Sur, los movimientos bien organizados de los campesinos de La Vía Campesina en el Sur, la coordinadora de los ocupantes de las chozas en Sudáfrica, y el anti-capitalismo amorfo que proponen las coaliciones cambiantes de jóvenes profesionales de la clase media y tecnócratas neoliberales en Egipto o Grecia. La pregunta clave es si estas revueltas globales lograrán alterar las estructuras de poder económico y político, o más bien terminarán renovando estas estructuras por medio de una combinación de tímidas reformas y la cooptación. O, peor aún, ¿responderá el estado policíaco global a aquellos levantamientos de masas que sí intentan

transformar el orden social a favor de las mayorías pobres, imponiendo un fascismo del siglo xxi?

Es aquí donde entran en el cuadro los ensayos del presente libro. Cualquiera que quiera comprender las perspectivas –así como las complejidades– de los proyectos transformativos en esta época del capitalismo global y su crisis tendrá que estudiar las experiencias de la izquierda radical del siglo xxi en América Latina. Steve Ellner y sus colegas nos proporcionan con esta colección, oportunidad y perspicacia que nos ayudan a navegar las complejidades de estas experiencias. Tomados en su conjunto, estos ensayos se enfocan en una serie de cuestiones vitales en el ejercicio de contemplar las perspectivas para los proyectos transformativos en la sociedad global. La revuelta global aún no se ha dirigido a la cuestión del poder político. Los casos de estudio en la presente colección –Venezuela y Bolivia en particular, así como Nicaragua, El Salvador y Cuba– aunque sea un grupo heterodoxo, constituyen precisamente aquellos países donde la izquierda ejerce el poder político, o al menos intenta impulsar un proyecto popular desde el interior del Estado. No puede haber verdaderos proyectos liberadores sin dirigirnos a la cuestión del poder político, es decir, a la cuestión del Estado. Y una vez que la izquierda logra alcanzar alguna cuota de control sobre el Estado, es entonces cuando surjen una serie de complicaciones para las cuales no hay fórmulas pre-determinadas ni respuestas fáciles. La resolución de cualquier contradicción abre paso a nuevas contradicciones, pues se trata de la Ley de la dialéctica.

Aquí está el aporte de los ensayos contenidos en la presente colección. La experiencia de la izquierda radical en América Latina ofrece lecciones vitales para las luchas populares alrededor del mundo. El estudio de estas experiencias es crucial para el debate –lejos de ser resuelto– sobre «el significado de hacer revolución hoy en día», lo cual es el subtítulo del conocido libro de John Holloway, *Change the World Without Taking Power* (*Cambiar el mundo sin tomar el poder,* 2002), quizá el tratado más influyente en círculos como el Foro Social Mundial y las protestas antiglobalización. Central al argumento de Holloway, de que no se debe

tomar el poder (político/estatal), es que el Estado mismo es una relación de dominación y por tanto, la abolición de la dominación no compagina con la lucha por dicho poder.

Sin embargo, el capitalismo global hoy en día es demasiado arrollador y omnipresente para plantear una estrategia de retiro (en vez de transformación) que resulta de este análisis. ¿Cuán viables son las estrategias transformadoras arraigadas en la noción de que las comunidades locales pueden retirarse del capitalismo global? Son necesarios e importantes los intentos de crear comunidades alternativas a nivel local, de establecer cooperativas, de descentralizar los circuitos de abastecimiento de alimentos, de retirarse del régimen global agro-industrial, de descentralizar la energía, la distribución y el consumo, y de construir empresas cooperativas y economías solidarias locales. No obstante, estos proyectos en sí no resuelven el problema del poder. En la ausencia de una estrategia para confrontar el Estado y transformar el sistema "desde adentro", nos queda la ilusión peligrosa de que el mundo se puede cambiar sin resolver la cuestión del poder. El capitalismo global está ahora arraigado a lo interno de prácticamente todas las comunidades en el planeta. Ha tejido telarañas globales de interdependencia que nos vinculan a todos nosotros a una totalidad más amplia. Efectivamente, el capitalismo global es "totalizante". La noción de que uno puede escapar del capitalismo global sin derrotarlo, sólo por la vía de la creación de los espacios alternativos o las islas de utopía, ignora el hecho desagradable de que sin importar cuánta voluntad o determinación tenemos, no podemos desacoplarnos del capitalismo así como así, ya sea porque el capital mismo y, por ende, el Estado capitalista penetra y continuamente se re-incorpora a estos espacios, a menudo por la fuerza.

Para mí, un estudio de la política de la nueva izquierda radical en América Latina evidencia que tanto el "vanguardismo" como el "horizontalismo" son escollos. El "vanguardismo" adopta la perspectiva de que las luchas autónomas deben subordinarse desde abajo a la lucha de un partido político para tomar el poder estatal y transformar la sociedad desde la cima de poder. Esta

estrategia demostró ser un desastre en el siglo xx. El "horizontalismo" es la perspectiva de que las mayorías deben organizarse desde abajo sin ninguna necesidad de tener liderazgos ni partidos políticos o, de hecho, sin ningún programa o agenda unificadora. No es necesario confrontar el Estado y el poder estatal; basta con crear espacios locales supuestamente desconectados del sistema. Oponerse al vanguardismo **no** significa estar en contra de las organizaciones políticas revolucionarias, y oponerse al horizontalismo **no** significa estar en contra de las luchas autónomas de las clases populares desde abajo. Al igual que "la reforma y la revolución" nunca eran luchas o procesos mutuamente exclusivas, de la misma manera, no son mutuamente exclusivas ni antagónicas la lucha por construir el poder popular desde abajo y la lucha por ganar el poder del Estado. Todo lo contrario: se refuerzan mutuamente como parte de un proyecto más amplio de transformación.

Así, ¿qué debe hacer la izquierda radical una vez que esté en el poder? No soy yo el que pueda contestar esta pregunta. Pero más al punto, los ensayos en la presente obra no pretenden proporcionar las respuestas. Más bien, plantean numerosos interrogantes más que respuestas, y he aquí su importancia. Ilustran la complejidad del poder político en función de los proyectos liberadores o de orientación socialista en este siglo xxi. Hay dos cuestiones que en particular sobresalen para mí, referentes a estas complejidades que, en mayor o menor grado se ven reflejadas en los aportes a esta colección de ensayos, cuestiones que dejo para que los lectores las consideren y reflexionen al dirigir la atención hacia los presentes ensayos.

La primera es ¿cómo pueden los movimientos sociales desde abajo lograr el control sobre la izquierda política organizada y sobre lo que hace dicha izquierda al interior de las instituciones del Estado? ¿Cómo puede el poder social desde abajo y desde afuera del Estado, este último concebido como una relación de dominación, fluir hacia arriba de tal manera que contrarreste el poder del capital transnacional y sus agentes y representantes locales, así como la influencia corrompedora que ejerce el poder estatal

sobre la izquierda? En esta cuestión no hay respuestas fáciles. Un número de escritores y activistas han planteado en los últimos años, que los nuevos gobiernos izquierdistas en América Latina han funcionado no para promover los proyectos liberadores de las clases populares sino para "contener" las luchas de dichas clases. «Los gobiernos progresistas son necesarios para la preservación del Estado», argumenta Daun Paley (2012, pp. 4-5). De verdad, es difícil no encontrar algún grano de verdad en la dura afirmación de que

> … en esta situación ellos (los gobiernos progresistas) son los agentes más eficaces para desarticular la naturaleza anti-sistémica de los movimientos sociales (…) En esencia, los partidos izquierdistas logran tareas que la derecha no podía lograr por medio de la represión: una derrota histórica de las fuerzas populares, sin un baño de sangre pero con la misma eficacia de los estados autoritarios de ataño (íd.).

La segunda es ¿cómo puede la izquierda en el poder promover un programa anti-capitalista mientras los países que gobiernan deben continuar su participación en una economía global dominada por el capital corporativo transnacional e impulsado por la lógica deshumanizante del valor de intercambio. El contexto más amplio de la política radical en América Latina ha cambiado drásticamente, dado el nuevo capitalismo global en el cual cada país y región –y de hecho, prácticamente cada nación en el mundo– ha sido integrada, más allá del comercio, por medio de circuitos transnacionales de producción y finanzas. Hoy día no hay muchos que abogarían por las desfasadas nociones de un desacoplamiento del sistema capitalista mundial como estrategia viable hacia caminos no capitalistas de desarrollo nacional o regional, por la sencilla razón de que el alcance y la intensidad de la integración global comunicativa y socio-económica en esta época de la «línea de ensamblaje global» y el internet hacen que las propuestas de «desacoplamiento», para usar la frase de Samir Amin, sencillamente no sean posibles, tal como descubrieron

los cubanos a raíz del colapso del antiguo sistema soviético y el monstruo, o la fuerza irresistible de las fuerzas globales del mercado. Lo que ha logrado la izquierda radical en el poder es romper la hegemonía del neoliberalismo, pero no del capital transnacional.

Visto desde el gran panorama, la realidad latinoamericana ha sido impulsada a lo largo de los últimos cinco siglos por olas de integración, cada vez mayor, a un capitalismo mundial en un proceso continuo de evolución y expansión. Desde una perspectiva estructural, las guerras de la independencia de las primeras décadas del siglo xix, fueron provocadas por la decadencia del control español (y portugués) y el surgimiento de Gran Bretaña, con su imperialismo del libre comercio, procesos que generaron incentivos para que una élite criolla emergente persiguiera la independencia (por no mencionar la amenaza de una revolución desde abajo por parte de la mayoría negra, indígena y mestiza). Los proyectos multi-clasistas, nacionalistas y populistas de principios de siglo xx, se desprendieron de los cambios producidos por el *boom* de las exportaciones en las décadas anteriores, seguido por el colapso de la década de 1930, al igual que los movimientos revolucionarios de las décadas de 1960 a 1980 respondieron, en parte, al agotamiento de los proyectos populistas de industrialización por sustitución de importaciones. La embestida de la globalización neoliberal arrojó a la defensiva a las fuerzas izquierdistas y populares hacia finales del siglo xx, pero ya para el cambio del siglo, el neoliberalismo aparentemente llega a sus límites materiales e ideológicos, abriendo espacio para el resurgimiento de la izquierda radical bajo nuevas condiciones históricas.

Existen muchas evidencias que indican la entrada del mundo en una nueva crisis de hegemonía al nivel sistémico en esta segunda década del siglo xxi. Recordemos que todo proceso revolucionario, todo proceso de transformación socialista, todas las coyunturas históricas son únicas. Para comprender las complejidades del poder político en el siglo xxi, debemos estudiar lo "histórico concreto", en donde la izquierda radical ha resurgido

y ha llegado al poder en algunos países. Como observó Gramcsi, «la verdad está en lo concreto». Estos ensayos nos proporcionan una amplia variedad de evidencia concreta y de análisis, en la tarea de comprender los desafíos por delante y las lecciones para las luchas populares en América Latina y alrededor del mundo.

William I. Robinson*, Santa Bárbara
Enero de 2015

## Referencias

HOLLOWAY, John (2002). *Change the World Without Taking Power: The Meaning of Revolution Today.* London: Pluto Press.

PALEY, Daun (2012). «Foreword». En Raúl Zibechi, *Territories in Resistance: A Cartography of Latin American Social Movements,* pp. 4-5. Oakland: AK Press.

* Profesor de sociología de la Universidad de California, Santa Bárbara, y autor de numerosos libros sobre la globalización y América Latina, incluyendo *Globalization and the Crisis of Humanity* (Cambridge University, 2014), *Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization Perspective* (Johns Hopkins University, 2008), *A Theory of Global Capitalism: Transnational Production, Transnational Capitalists, and the Transnational State* (Johns Hopkins University, 2004).

# Introducción

## Las complejidades de la izquierda radical latinoamericana en el poder

El camino pacífico y democrático hacia el socialismo que ha sido tomado por los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador y sirve como fuente de inspiración para gran parte de la izquierda latinoamericana, está lejos de representar un nuevo enfoque. Los movimientos social demócratas en todo el mundo, agrupados en la Internacional Socialista fueron los máximos defensores del socialismo por medios pacíficos en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, mientras que las tres naciones latinoamericanas han sido objeto de intenso conflicto político y polarización política y social, los social demócratas favorecieron políticas moderadas destinadas a evitar la discordia y lograr un amplio consenso. En este sentido, los tres gobiernos izquierdistas en América Latina se asemejan a las experiencias comunistas en la Unión Soviética, Europa Oriental, China y Cuba, caracterizadas por los agudos enfrentamientos con los enemigos del cambio de gran alcance, así como con las instituciones que representaban al viejo orden. A diferencia de Venezuela, Bolivia y Ecuador, sin embargo, el discurso oficial de los partidos comunistas en el poder descartaba la posibilidad de la transición democrática pacífica al socialismo, de acuerdo con el pensamiento marxista

ortodoxo sobre la inevitabilidad de la lucha armada (Roberto Regalado 2007, p. 232)[1].

El término «izquierda radical latinoamericana del siglo XXI» (en adelante IRL21) se define, en gran parte, por las estrategias seguidas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y excluye a los movimientos más moderados que están tanto en el poder (como en el caso de Brasil)[2] como fuera del poder. Las posiciones de la IRL21 contrastan con las de los moderados en varios aspectos fundamentales. Los gobiernos de Hugo Chávez-Nicolás Maduro (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) son críticos acérrimos del sistema capitalista, por no decir defensores del socialismo, a diferencia de los gobiernos moderados de Brasil y Uruguay (Atilio A. Borón 2008, pp. 28-42). Además se aprovecharon de su llegada al poder y las posteriores victorias políticas, al moverse rápidamente contra los adversarios y profundizar el proceso de cambio. Esta radicalización constante contrasta con Luiz Inácio "Lula" da Silva de Brasil, quien, al asumir la presidencia, diseñó políticas macroeconómicas más conservadoras que las pedidas por los organismos internacionales de crédito. De manera parecida, la IRL21, a diferencia de la izquierda moderada, se ha mostrado renuente a negociar y llegar a acuerdos con sus adversarios, ni otorgarles concesiones consistentes. Así, en México, los social demócratas y otros moderados asociados con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) favorecieron las alianzas con el conservador Partido Acción Nacional (PAN), tanto en 2000 como en años posteriores, mientras que los líderes a su izquierda, tales como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, promovieron candidaturas izquierdistas. Del mismo modo, el presidente Chávez rompió con la tradición de crear comisiones tripartitas de las

1 Marx y Engels se opusieron a la posibilidad de la transición pacífica al socialismo. En el párrafo final del *Manifiesto comunista,* ellos escribieron: «Los comunistas declaran abiertamente que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente».

2 Hasta el proceso de *impeachment* a la presidenta Dilma Rousseff, finalizado en agosto del 2016 (N. del E.).

máximas organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales para resolver problemas urgentes.

Otras características que comparten los tres gobiernos de la IRL21 los distinguen de los izquierdistas moderados. En primer lugar, los tres presidentes ganaron elecciones, referendos y revocatorios con mayorías considerables, a veces superiores al 60 % de los votos. Estos triunfos les proporcionaron mandatos y una mayor capacidad de maniobra que en el caso de los presidentes izquierdistas moderados que recibieron menos porcentaje de votación. En segundo lugar, Chávez, Morales y Correa iniciaron sus presidencias con un llamado a una Asamblea Constituyente, que terminó con la transformación de la estructura política existente. En tercer lugar, el impulso generado por las victorias de la IRL21 y la radicalización de las posiciones estimularon las filas del movimiento. Este fervor a nivel de las bases explicaba la movilización constante que en diferentes ocasiones resultó esencial para la supervivencia política del gobierno. En política internacional, los gobiernos de la IRL21 fueron críticos agudos de Washington, y a través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) actuaron como un bloque en reuniones internacionales (Ellner 2012a, p. 10). Finalmente, los tres presidentes dirigían partidos políticos relativamente débiles, que, al contrario de Brasil y otras partes, no lograron establecer vínculos sólidos con los sectores populares fuera del ámbito electoral (Ellner 2012b).

No es sorprendente que esta radicalización encontrara una fuerte resistencia por parte de los defensores del *statu quo* y desatara una intensa polarización, que es otra característica distintiva de la IRL21 en el poder. De hecho, los grupos políticos, sociales y económicos opuestos a los gobiernos de la IRL21 representaban una "oposición desleal". No sólo condenaban virtualmente todas las políticas y acciones del gobierno, sino que lo acusaban de intenciones totalitarias y en ocasiones recurrieron a la violencia en un intento de desatar un golpe militar.

Finalmente, la IRL21 se ha abstenido de usar lenguaje anticomunista o aceptar las acusaciones de dudosa veracidad formuladas

por la derecha contra los izquierdistas. Chávez, por ejemplo, declaró públicamente que no era ni comunista ni anti-comunista, al mismo tiempo que sus seguidores se llaman unos a otros "camaradas", como un reproche implícito a los estereotipos de tipo macartista. Los presidentes izquierdistas moderados en Brasil, Argentina y otros países han actuado de una manera similar. No sólo rechazan la tesis de la "izquierda buena"–"izquierda mala" promovida por Washington, sino que también han mantenido relaciones excepcionalmente cordiales con la IRL21 en el poder. Sin embargo, hubo excepciones a este comportamiento de principios entre los izquierdistas moderados. Así, por ejemplo, Gustavo Petro, el candidato presidencial del izquierdista Polo Democrático Alternativo en Colombia (y posteriormente alcalde de Bogotá) pidió a su partido defender los intereses nacionales, cerrando filas en torno al presidente Álvaro Uribe en sus ataques contra Chávez por ayudar a la guerrilla del país («Precandidato presidencial Gustavo Petro pide a Chávez que deje de agredir a Uribe», 2009). Comentarios ocasionales del presidente salvadoreño Mauricio Funes contra Chávez también parecían servir como una afirmación del compromiso de su gobierno de evitar el cambio radical.

La radicalización no era un proceso lineal, a pesar del compromiso de los movimientos de la IRL21 con el cambio de largo alcance y sus marcadas diferencias con los movimientos izquierdistas moderados. El gobierno Sandinista después del 2006, por ejemplo, se unió al ALBA y se identificó con las posiciones de la IRL21 en Venezuela, Bolivia y Ecuador en otros aspectos, pero al mismo tiempo intentaba apaciguar a grupos a su derecha. Después de haber llegado al poder de nuevo con sólo el 38 % de los votos, los sandinistas trataron de neutralizar a diversos sectores e indudablemente por esta razón, se opuso al derecho al aborto, lo que representó un completo revés para el presidente Daniel Ortega.

Las experiencias de la IRL21 en el poder también contrastan con las de los izquierdistas democráticos, tales como el gobierno de Allende y el de los sandinistas en la década de 1980, quienes llegaron al poder en América Latina en el calor de la Guerra Fría y estuvieron comprometidos con una ruptura radical con

el pasado. Aunque están menos seguros en el poder que los comunistas en la Unión Soviética y China, la IRL21 en Venezuela, Bolivia y Ecuador ejerce mayor control en las diferentes esferas del Estado, que incluye los poderes legislativo y judicial, y las Fuerzas Armadas, contrario al caso de los izquierdistas democráticos radicales en el siglo pasado. En consecuencia la IRL21 se ha visto obligada a lidiar con temas espinosos relacionados con la consolidación en el contexto de una transición prolongada al socialismo. Ni Allende, ni los sandinistas en la década de 1980, confrontaron una situación similar a la de Chávez en 2007, Correa en 2009 y 2013 y Morales en 2010, después de ser reelegidos por amplios márgenes; resultados que desmoralizaron a la oposición. Durante estos períodos de relativa estabilidad, el reto de demostrar la viabilidad del nuevo modelo fue una tarea ardua para los líderes de la IRL21. Por el contrario, el control del poder menos seguro de los gobiernos de izquierda radical del siglo xx, debido a desórdenes políticos que incluían actos de violencia y sabotaje, y el apoyo más amplio en los EE UU para el intervencionismo norteamericano durante la Guerra Fría, descartaron su consolidación y eventualmente condujeron a su derrocamiento. Allende, por ejemplo, llegó al poder con sólo el 36 % de los votos y fue derrocado después de sólo tres años, mientras que los sandinistas en la década de 1980 tenían que concentrar gran parte de sus esfuerzos y recursos en la resistencia armada contra su gobierno promovida por los Estados Unidos.

La IRL21 se enfrenta a desafíos teóricos y prácticos complejos que son distintos, de maneras fundamentales, a los que confrontaron los movimientos sociales marxistas democráticos y ortodoxos del siglo xx. La teórica de la IRL21, Marta Harnecker, ha afirmado que «la situación que enfrentan nuestros gobiernos de "izquierda" es aún más compleja que la que enfrentó el gobierno soviético» (2010, p. 32). Las características sobresalientes de la izquierda del siglo xxi del continente ayudan a explicar esta complejidad. Lo más importante es que la vía electoral y gradual hacia el cambio de largo alcance, en ausencia de una política de entendimientos y concesiones a los adversarios, involucra

un conjunto de variables que complica el proceso. La estrategia abre espacio y proporciona oportunidades a los adversarios que, en el contexto de la aguda polarización, emplean tácticas legales, semi-legales y extra-legales para socavar la autoridad del gobierno e impedir la aplicación de sus políticas económicas. Un ejemplo de esta guerra de baja intensidad fue el caso de la resistencia empresarial a los controles de precios en Venezuela, la cual produjo un verdadero tira y encoje entre el gobierno de Chávez y el sector privado, lo que eventualmente condujo a un conjunto de expropiaciones. Este tipo de enfrentamiento plantea a la izquierda el dilema permanente de si seguir adelante con una mayor radicalización o enfatizar la consolidación. Al mismo tiempo, el camino gradual, pacífico al socialismo crea espacios para aquellos ubicados en el extremo izquierdo del espectro político, algunos fuera de la coalición gobernante (particularmente en el caso de Bolivia y Ecuador) y otros dentro de ella (como en Venezuela) que claman por un ritmo de cambio más acelerado.

Estos desafíos son de una naturaleza diferente y en algunos casos de mayor complejidad que los confrontados por los movimientos socialdemócratas y comunistas en el poder en el pasado. El pensamiento social demócrata (tal como es defendido por la Internacional Socialista) estaba sustentado por los planteamientos positivistas que se refieren a la inevitabilidad del cambio en ausencia de lucha (una diferencia teórica fundamental entre el padre del positivismo, Auguste Comte, y Marx). La estrategia social demócrata que intenta minimizar el enfrentamiento y lograr un cambio armonioso, contrasta con la dinámica más compleja de la implementación de las políticas radicales, seguidas por la resistencia de las fuerzas hegemónicas y la aguda polarización dentro de un marco democrático que caracteriza a la IRL21 en el poder.

El ejemplo de los comunistas que tomaron el poder en el siglo XX, también fue distinto en que todas las formas de oposición al gobierno fueron reprimidas y el socialismo fue impuesto sin una larga lucha. Este proceso fue la antítesis de "la guerra de posición" de la IRL21 en el poder, donde las fuerzas hegemónicas tradicionales han mantenido la ventaja en instituciones como la

iglesia, los medios de comunicación e incluso partes de la esfera estatal. Por otra parte, en contraste con el marxismo rígido y las fórmulas del gobierno comunista, la IRL21 es en realidad ecléctica y defiende e incluso celebra un enfoque de ensayo y error al socialismo que carece de claridad ideológica, el cual se ve como un correctivo al dogmatismo (Vladimir Acosta 2007, pp. 25-27). Por eso, la IRL21 carece de los denominadores ideológicos comunes que caracterizaron a los gobiernos izquierdistas del siglo xx que se fundamentaban en la doctrina marxista.

El escenario posterior a la Guerra Fría contribuye a la complejidad del fenómeno de la izquierda del siglo xxi. La Guerra Fría condujo a la conceptualización y las estrategias simplistas en las cuales el campo pro norteamericano confrontó los movimientos y gobiernos que favorecían el socialismo, el cual se percibía como un sistema bien definido. La presión desde ambos polos limitaba las opciones de los países más débiles y tendía a obviar las innovaciones y la originalidad por parte de la izquierda (como ocurrió en el caso de Cuba en el transcurso de la década de 1960). El colapso del bloque soviético dio impulso a la idea, igualmente simplista y monolítica, del neoliberalismo y la doctrina relacionada del "fin de la historia", que describía todas las alternativas al modelo de la democracia y el capitalismo estilo norteamericano como obsoletas.

Para finales del siglo pasado, la protesta generalizada contra el neoliberalismo en América Latina fomentó mayor diversidad política que incluía a los movimientos izquierdistas nacionalistas opuestos con firmeza a las políticas de Estados Unidos. Los izquierdistas rechazaban la política de concesiones a los grupos económicos poderosos implícita en la estrategia de las alianzas centro-izquierdistas defendidas por Jorge Castañeda durante el auge del neoliberalismo en la década de 1990[3]. El modelo anti-neoliberal emergente, asociado con la IRL21, combina la democracia representativa y la democracia radical basada en la tradición de Jean-Jacques Rousseau de la participación

3 Para un análisis del enfoque centro-izquierdista, ver Ellner 2005, pp. 42-64.

directa en la toma de decisiones. Las dos no son completamente compatibles y han creado tensiones internas debido a las diferencias paradigmáticas, y esta forma contribuye a la complejidad de los desafíos que confrontan los movimientos izquierdistas del siglo XXI (David Smilde 2011).

La IRL21 en el poder encaró dos imperativos para los cuales se emplearon dos estrategias distintas y a veces conflictivas. Por un parte, las políticas pragmáticas que promovían la institucionalización fueron diseñadas para fomentar la eficiencia, al mismo tiempo que priorizaban los objetivos económicos sobre los sociales. Por otra parte, la movilización generalizada y los programas sociales que promueven la participación, en concordancia con el objetivo de la IRL21 de la democracia participativa (y la democracia directa), generaron entusiasmo popular, el cual era un elemento esencial para avanzar hacia el socialismo y confrontar los adversarios de la derecha. Los dos conjuntos de objetivos eran igualmente apremiantes. Era improbable que las fórmulas dogmáticas o simplistas y las formulaciones ideológicas que favorecen a uno y excluyen al otro tuvieran éxito (Ellner 2011c, pp. 439-440, 445). La estrategia resultante ideada para lograr una síntesis –al contrario de las recetas dogmáticas– era más compleja.

## La heterogeneidad social de la izquierda latinoamericana del siglo XXI

La base social y la estrategia de los movimientos izquierdistas del siglo XXI divergen del pensamiento y práctica marxistas tradicionales y explican en gran parte la complejidad descrita anteriormente. El enfoque de Marx sobre la producción como el componente esencial de la «estructura de la sociedad» (en contraposición a la categoría más superficial de la «superestructura») lo llevó a postular al proletariado como el agente clave (o la «vanguardia») en el proceso del cambio. Posteriormente, el marxismo ortodoxo minimizó el papel de otras clases no-hegemónicas y pasó por alto, en gran parte, sus intereses conflictivos; una tendencia llamada algunas veces «obrerismo». Marx

cuestionó el potencial revolucionario del campesinado, debido a sus aspiraciones de ser propietario. Lenin compartía inicialmente esta desconfianza pero luego procedió a plantear una «alianza obrera-campesina» sin expresar preocupación por intereses o visiones divergentes (una convergencia representada por el símbolo del martillo y la hoz). Del mismo modo, el marxismo ortodoxo negaba el carácter revolucionario y la importancia política de la «pequeña burguesía» de acuerdo con la predicción de Marx de la polarización social, en la que una mayoría de la clase terminaría en las filas de la clase trabajadora. Por último, el término peyorativo de Marx «lumpenproletariado» ha sido algunas veces asociado con el componente no proletariado de la clase baja urbana que en América Latina se compone, en gran parte, de los miembros de la economía informal.

En otro orden de ideas, Mao Zedong reconoció la multiplicidad y complejidad de las contradicciones internas en el socialismo, así como «el periodo de tiempo moderadamente largo» que tomará resolverlas (1957/1971, pp. 444, 464). Las mismas contradicciones se manifestaron también dentro y entre los diferentes sectores que apoyan el movimiento revolucionario, así como en el Estado socialista. Sin embargo, Mao caracterizó estas contradicciones como esencialmente «no antagónicas» (Mao 1937/1971, p. 127) y creía que la forma correcta de resolverlas era mediante «el método democrático, el método de la discusión, de la crítica, de la persuasión y la educación» y mediante la «auto-crítica» (Mao, 1957/1971, pp. 438-439, 442). También consideró las contradicciones dentro del partido comunista como un choque entre el «pensamiento correcto» y el «pensamiento falaz», que eran a su vez un reflejo de las diferencias de clase (Mao, 1937/1971, pp. 126-127). Estos comentarios sobre las contradicciones parecerían quedarse cortos ante el grado al cual la heterogeneidad representa un desafío complejo para el Socialismo del siglo xxi[4].

4 El grado hasta el cual la teoría de las contradicciones de Mao concuerda con el marxismo "ortodoxo" ha sido fuertemente debatido, como también el impacto de su pensamiento (Nick Knight 1997, pp. 105-107).

A diferencia del marxismo ortodoxo, los escritores a partir de la revolución soviética que provienen de distintas tradiciones han señalado a las cualidades de transformación revolucionaria de las clases no proletarias en el tercer mundo, mientras que argumentan contra el papel exclusivo de vanguardia de la clase obrera. En la década de 1920, Víctor Raúl Haya de la Torre postuló a la clase media como el grupo social más revolucionario en los países subdesarrollados ya que sus miembros «son las primeras víctimas de la ofensiva económica del imperialismo», a diferencia de la clase obrera y los trabajadores rurales que, al menos en el corto plazo, se benefician de las inversiones extranjeras (1928/1976, p. 255).

De manera similar, Frantz Fanon hace hincapié en el potencial combativo del campesinado, el cual contrastó con el comportamiento egoísta de la mayoría de la población urbana que incluye a la clase obrera. También reconoció el potencial revolucionario del «lumpenproletariado», el cual al igual que el campesinado estaba más distante del gobierno colonial, y por lo tanto menos corrompido por el sistema (Fanon 1963, pp. 129-130). La diferenciación de Fanon entre la clase obrera y los pobres urbanos

---

Liu Kang (1997) señala que los conceptos de especificidad de Mao, el papel decisivo de la lucha ideológica y la multiplicidad de contradicciones en todos los niveles han influenciado a Louis Althusser (a menudo considerado un precursor del post-marxismo). El rechazo de Althusser al reduccionismo y su teoría de la dependencia mutua de los elementos de la estructura y la autonomía relativa resultante de la superestructura (un principio que llamó «sobredeterminación») son argumentos a favor de la complejidad de las relaciones sociales y la política revolucionaria en los siglos xx y xxi. Como este ensayo pretende demostrar, la complejidad del proceso de cambio, como reconoció Mao y destacó Althusser, es fundamental para comprender la izquierda latinoamericana del siglo xxi. Cabe destacar que una de las principales teóricas de la IRL21, Marta Harnecker, fue una estudiante de Althusser. Harnecker ha reconocido que la refutación de Althusser del marxismo dogmático y sus argumentos en relación con la complejidad del proceso de cambio dejaron un impacto profundo en su pensamiento. En este sentido, ella afirma que Marx estaba aún luchando con la definición de las clases sociales cuando murió (Marta Harnecker, correo electrónico, 20 de febrero del 2012).

no proletarios ha llegado a ser particularmente convincente en la época de la globalización (Laclau 2005, pp. 146-150, 231). Kurt Weyland y otros académicos que escriben sobre el neopopulismo en la década de 1990 señalaban los intereses conflictivos entre los trabajadores de la economía formal y los de la economía informal. Estos últimos –a diferencia de los primeros– eran adversamente afectados por el modelo existente de sustitución de importaciones (Weyland 1999, pp. 182-184 y Oxhorn 1998, pp. 200, 215-216)[5].

Los escritores algunas veces identificados como postmodernistas también han centrado su atención en la heterogeneidad de los grupos no hegemónicos. La mayoría de ellos se han distanciado del pensamiento marxista, al rechazar no sólo el papel revolucionario de la clase obrera, debido a su aceptación generalizada de los valores burgueses y el chauvinismo, sino también al dar por perdida la clase misma como una categoría útil. En su lugar, ellos celebran la «identidad» del grupo basada, en gran parte, en las convicciones y el comportamiento políticos y culturales, un enfoque que es lo mismo que el «reconocimiento de la diferencia», según Nancy Fraser (citada por Verity Burgmann 2005, p. 2).

El post-marxista Ernesto Laclau va más allá de esta tesis, al centrar su análisis de la política y la estrategia política en el carácter

5 La literatura sobre la economía informal varía en cuanto al grado en el cual sus miembros representan una clase inferior con poca movilidad ascendente. El célebre libro de Hernando de Soto (1989) *El otro sendero* se enfocó en su potencial para convertirse en emprendedores exitosos y prósperos. Otros escritores atribuyen el crecimiento de la economía informal en las últimas décadas a las estrategias de tercerización del capitalismo en la época de la globalización, lo que implica un estatus menos marginado para algunos de sus miembros que incluye un nivel de vida relativamente confortable (Castells y Portes 1989, pp. 12-13). Por el contrario Weyland y Fanon, al hacer hincapié en la condiciones de oprimidos de aquellos que pertenecen a los sectores informales y sus intereses que entran en conflicto con los de la clase trabajadora más privilegiada, dan a entender un estatus de exclusión más cristalizado. Este ensayo, que caracteriza a un gran número de miembros de la economía informal como marginados y no incorporados, también centra su atención en las diferencias de intereses y visiones entre ellos y la clase obrera de la economía formal.

irreconciliable de las diferencias entre los grupos subalternos. El concepto de Laclau del «significante vacío» intenta demostrar la profundidad de las divisiones. Según Laclau, el líder exitoso (a quien él llama un «populista») es aquel que ingeniosamente une los sectores no privilegiados distintos al acuñar eslóganes («significantes vacíos») que son interpretados de maneras diferentes por cada grupo, de acuerdo a su propia visión del mundo y sus intereses. A pesar de su papel unificador, los líderes populistas en ningún momento son capaces de superar completamente la discrepancia entre estas diferentes interpretaciones.

En la década de 1980, la celebración de «nuevos movimientos sociales», que fueron definidos como aquellos que hacen hincapié en la identidad y la participación directa y que estaban asociados a nivel teórico con Laclau (1985) y otros post-marxistas y post-modernistas, obtuvo aceptación entre algunos escritores y activistas latinoamericanos. Durante estos años, las organizaciones y los movimientos sociales jugaron un papel fundamental en la democratización, y algunos de ellos facilitaron la participación de sectores anteriormente excluidos en una escala masiva que incluyó a las mujeres y la población indígena. El papel predominante que jugaron las activistas femeninas en muchas de estas actividades (desde comedores populares hasta las Madres de Plaza de Mayo) tenía un impacto cultural, ya que la igualdad de género dentro y fuera del hogar comenzó a obtener mayor aceptación en la población en general, lo que condujo a los «cambios discursivos» en cuanto a los motivos de participación originalmente expresados (María del Carmen Feijoo y Mónica Gogna 1990, p. 100; Elizabeth Jelin 1990, p. 190 y Ellner 1994, pp. 75-76). Un ejemplo importante de la expresión de la política de identidad fue el movimiento katarista en Bolivia, el cual formuló dentro del movimiento campesino consignas relacionadas con la opresión étnica, una situación ignorada en gran parte por la revolución de 1952. Uno de los kataristas, Álvaro García Linera, fue encarcelado por su participación en el Ejército Guerrillero Túpac Katari y llegó a ser vicepresidente en el gobierno de Morales y un prominente teórico de la IRL21. García Linera ha descrito al gobierno de Morales como el «gobierno de los movimientos

sociales» y ha adoptado el modelo de «vivir bien», basado en los principios anti-capitalistas de la cultura indígena, pero al mismo tiempo defiende la importancia primordial de los objetivos económicos de desarrollo. En otro ejemplo de incorporación de los sectores excluidos por la IRL21, las mujeres han constituido la abrumadora mayoría de los «voceros» de los 30.000 consejos comunales que están concentrados en los barrios y representan un pilar fundamental del modelo político del gobierno venezolano chavista.

Las experiencias de la IRL21 en el poder y el análisis de clase de sus defensores concuerdan con el énfasis post-marxista en la heterogeneidad y el carácter irreconciliable de intereses entre los que apoyan el proceso de cambio (Harnecker, ob. cit., pp. 65-66 y Emir Sader 2008, pp. 77-78). Algunos pensadores de la IRL21 como García Linera consideran las tensiones resultantes como conducentes a desenlaces «creativos» (2011, pp. 23-72). Los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador demuestran la profundidad de las tensiones entre los sectores sociales no pertenecientes a las élites, así como entre las corrientes políticas internas, y la relación que existe entre las dos. No solamente son sus intereses diferentes, sino que en algunos casos han entrado en conflicto.

La IRL21, a diferencia de los partidos de izquierda tradicionales, rechaza la priorización marxista ortodoxa de la clase obrera y la preferencia de los gobiernos comunistas del siglo xx por el sector industrial (Harnecker 2007, pp. 115-116; Álvarez 2010, pp. 114-116 y Borón, ob. cit., pp. 122-130). Algunos teóricos izquierdistas latinoamericanos señalan que la «sociedad increíblemente fraccionada» en la época de la globalización afecta incluso a la clase obrera, que ha llegado a ser «extremadamente heterogénea» debido, en gran parte, a la práctica de la flexibilización promovida por el neoliberalismo (Harnecker 2010, p. 66). Prominentes izquierdistas del siglo xxi como Chávez y García Linera han argumentado que en las décadas recientes la clase obrera organizada no ha estado a la altura de las expectativas revolucionarias inherentes en el marxismo tradicional (Agustín Blanco Muñoz 1998, p.p. 392, 397; Álvaro García Linera 2010,

pp. 38-39 y Borón, ob. cit., p. 123). Como una alternativa al obrerismo proletario, la IRL21 coloca a todos los trabajadores en pie de igualdad incluyendo a los miembros de la economía informal, la fuerza laboral rural y los empleados en las pequeñas empresas comerciales (Benjamin Goldfrank 2011, p. 6).

Los eslóganes «inclusión» e «incorporación» adoptados por la izquierda del siglo XXI están dirigidos más a los miembros de la economía informal –quienes en gran parte están excluidos de la legislación laboral y carecen de representación organizacional– que a la clase obrera organizada. Un importante filósofo y teórico izquierdista del siglo XXI, Enrique D. Dussel, subraya la «liberación» y los derechos de los excluidos mediante el argumento de que la ética implica empatía por «el otro» o «por la víctima». Plantea que

> … la afirmación de su dignidad y libertad (…) de su trabajo fuera del sistema es la fuente de la misma movilidad de la dialéctica (ellos afirman lo que es "trabajo improductivo" para el capital, pero real en sus propios términos (…) el sistema los considera "nada" o no-existente: y es fuera de esta nada que se construyen los nuevos sistemas)… (Dussel 2003, p. 143; 2008, p. 78 y 2012)[6].

Los teóricos izquierdistas radicales del siglo XXI y los actores políticos, al mismo tiempo que descartan el obrerismo característico de los grupos marxistas ortodoxos, no rechazan el análisis de clase. El izquierdista argentino Atilio Borón, por ejemplo, argumenta que «la proliferación de los actores sociales no decreta la abolición de las leyes de movimiento de una sociedad de clases sociales: solamente significa que la escena social y política ha llegado a ser más compleja» (ob. cit., p. 126). Además, la izquierda

6 El postmodernismo comparte esta preocupación por la situación apremiante de los históricamente "excluidos". Además, la glorificación por parte de la IRL21 de la originalidad de los pensadores latinoamericanos, que van desde Simón Bolívar, Simón Rodríguez y José Carlos Mariátegui hasta el pueblo aimara, implica un rechazo al eurocentrismo, igual que lo que hacen los postmodernistas.

del siglo xxi ha valorado las demandas y las luchas en la esfera de la producción de acuerdo con la esencia del marxismo. Ejemplos de estos tipos de demandas, que favorecen a los sectores no proletarios de la fuerza laboral, incluyen el derecho de los trabajadores de la economía informal a escoger las ubicaciones de sus puestos de ventas y de los consejos comunales a contratar los residentes locales para la ejecución de las obras públicas en sus comunidades, la legalización de la actividad de los cultivadores de coca en pequeña escala (particularmente en Bolivia), y la preferencia gubernamental por las cooperativas de trabajadores en la adjudicación de los contratos, aún cuando puedan ser menos efectivos económicamente. Estos asuntos que implican el sustento de los trabajadores fuera de la industria a gran escala produjeron controversia entre los izquierdistas, algunos de los cuales favorecían una estrategia basada en economías de escala (Ellner 2011c, pp. 440-445 y Ciccariello-Maher 2013, pp. 218-233). Algunos izquierdistas radicales del siglo xxi proponen las unidades de producción y las ubicaciones geográficas (tales como las comunidades) como fuentes de lucha igualmente importantes y como las semillas para la construcción de una nueva sociedad (Harnecker 2008, pp. 66-67 y Silva 2009, pp. 269-272).

La decisión de la IRL21 de abrazar la heterogeneidad social en lugar de dar prioridad a una clase específica o tipos de luchas produce ciertos retos. Lo más importante es que las agudas diferencias sociales y políticas dentro de los movimientos izquierdistas pusieron a prueba el compromiso de la izquierda con la democracia interna, ya que las estructuras verticales representan hasta un cierto punto un correctivo a la aguda discordia interna. Históricamente, los líderes izquierdistas latinoamericanos de partidos multiclasistas, influenciados por el principio marxista de la inevitabilidad del conflicto de clase, trataron de superar la difícil situación de los intereses conflictivos internos al promover el centralismo y el estricto control organizacional[7].

7 A principios de la década de 1930, Rómulo Betancourt abordó el problema de cómo construir un partido de varias clases que incluyera a la pequeña burguesía y no privilegiara al proletariado. Él reconoció la dificultad

Del mismo modo, la principal justificación para el poder omnímodo del ejecutivo nacional y el líder máximo en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua es que garantiza la unidad del movimiento, esencial para hacer frente a los adversarios poderosos y agresivos.

Los escritores de la izquierda radical del siglo XXI han adoptado dos modelos que se ocupan del problema de la heterogeneidad de formas diferentes y suponen diferentes niveles de conciencia política en la población en general. La democracia radical o «participativa», que estaba plasmada en las nuevas Constituciones de los gobiernos del IRL21, celebra la participación y garantiza la participación popular directa en la toma de decisiones. De este modo, la «democracia radical» fomenta la creación de una amplia gama de movimientos y organizaciones sociales que reflejan una multiplicidad de intereses y visiones (Harnecker 2010, p. 7). Un ejemplo de democracia directa es los consejos comunales promovidos por el gobierno en Venezuela, Bolivia (específicamente, los ayllus) y Nicaragua. En vez de apoyar mecanismos para lograr la armonía de clases, algunos de los defensores de la democracia radical visualizan el conflicto social como una constante y las diferencias políticas como naturales y saludables, siempre que no degeneren en choques frontales (Chantal Mouffe 2005, pp. 120-121; Mariana Garzón Rogé y Mariano Perelman 2010, pp. 69-72, 82-83). Su punto de vista de la proliferación de las fuentes de conflicto en el transcurso del último siglo se presta a la «profundización de la democracia» y la democracia participativa en que un número cada vez mayor de personas ha sido incorporado a la vida política (Laclau

---

de lograr la unidad orgánica entre «los individuos con tendencias o ideologías dispares que son (…) a veces completamente antagónicos y representan intereses de clase antagónicos e irreconciliables, para unirlos en la lucha contra un enemigo común» (*El libro rojo del general López Contreras, 1936,* 1985, p. 264). La respuesta de Betancourt a la situación fue la creación de una dirigencia centralizada y muy unida. Señaló que «los partidos, independientemente de cuán doctrinarios y de masas puedan ser, siempre se mueven en la dirección donde sus líderes los lleven» (ídem, p. 143).

y Mouffe 1985, p. 163). El optimismo de estos escritores con respecto a la capacidad democrática de la población en general los lleva a estar en desacuerdo con aquellos que son aprensivos de la energía y la participación popular (ibíd., pp. 171-175 y Esteva 2009, pp. 48-53). La democracia radical en los gobiernos comprometidos con el cambio de largo alcance presupone una conciencia política elevada en la cual la madurez política y organizacional sean un prerrequisito para la participación directa en la toma de decisiones. Además, un alto nivel de conciencia ayuda a combatir el economicismo mediante el cual las excesivas demandas corporativistas de un sector determinado no privilegiado bloquean el logro de los objetivos de largo plazo en beneficio de toda la población. La madurez política es de este modo un antídoto para las contradicciones secundarias, o lo que Mao llamó las «contradicciones en el seno del pueblo» (García Linera 2011, p. 24).

Un segundo modelo se enfoca en la relación «dialéctica» entre las bases de los movimientos de la izquierda y los líderes izquierdistas carismáticos, quienes son capaces de lograr la unidad de un bloque extremadamente fragmentado de los no privilegiados. D. L. Raby, influenciado por los escritos de Laclau sobre el populismo, señala las «contradicciones internas» de «amplios sectores populares y democráticos» que líderes como Chávez intentan superar (Raby 2006, pp. 19, 184). Raby parafrasea a Laclau al afirmar que los seguidores del líder izquierdista populista se convierten en un «sujeto político» y desarrollan «una conciencia e identidad política», al mismo tiempo que asumen el papel de participantes y no de espectadores (ibíd., pp. 240, 115). A diferencia de los defensores de la «teoría de la multitud» y gran parte de los escritos originales sobre el populismo que data de la década de 1950 (Ginol Germani 1962), Laclau ve al líder populista como el que se ubica «a la par de a sus seguidores» cuando «será solamente aceptado si muestra, de un manera notable, características que comparte con los que se supone que lidera»; un proceso de unión descrito como «investidura» (Laclau 2005, pp. 59-60). Muchos activistas y simpatizantes de la IRL21 describen este

intercambio como una «relación mágica» que representa una expresión legítima de la democracia (citado en Ellner 2011c, p. 435). En resumen, los sectores no privilegiados de la población están altamente divididos pero al mismo tiempo están lejos de ser impotentes, ya que ellos hacen valer con efectividad sus visiones del mundo, sus metas y demandas específicas.

No obstante, aquellos izquierdistas del siglo XXI que colocan al líder radical populista en el escenario principal son menos optimistas que los del modelo de la «democracia radical» sobre la existencia de condiciones subjetivas, y específicamente la capacidad de los sectores populares de actuar en forma autónoma de manera constante dentro de una estructura organizacional[8]. De hecho, algunos de los escritores que se identifican con la IRL21 señalan a la concentración del poder en manos del líder máxi-mo como un símbolo de atraso y un impedimento al debate abierto y la participación popular en la toma de decisiones (Monedero 2009, pp. 190-192; Biardeau 2009, p. 66 y Acosta 2009, pp. 12-13).

El asunto de la heterogeneidad social contiene una implicación estratégica importante para la izquierda latinoamericana. Si ningún grupo social es el agente clave del cambio revolucionario o recibe tratamiento prioritario, y si las diferencias políticas tienen una base social, entonces los gobiernos izquierdistas necesitan reconciliar las diferentes posiciones internas en lugar de seguir una línea monolítica a favor de una corriente política o grupo social determinado. Una estrategia amplia de este tipo incluso intentaría ganar el apoyo de los sectores de la clase media, específicamente los menos privilegiados que apoyan la transformación estructural, y se abstendría de subestimar sus propuestas al calificarlas de «pequeño burgués». Sin embargo, con un enfoque flexible, bien balanceado que intente lograr la reconciliación, el gobierno no será capaz (como Mao pensó que sucedería) de poner fin a las tensiones internas, las cuales, como señala Laclau, son inevitables. La alternativa para los izquierdistas es un movimiento arraigado en la hegemonía revolucionaria

8 Ver Laclau 2006, pp. 119-120.

de una clase dada o una vanguardia política cerrada; una estrategia dogmática que ignora la complejidad de los retos que enfrenta la izquierda del siglo xxi, como hace también la tesis de «las dos izquierdas» que viene de la derecha[9].

## La simplicidad de la tesis de las «dos izquierdas»: ir más allá del debate actual

El enfoque en la complejidad de la izquierda del siglo xxi y la heterogeneidad de sus seguidores es diametralmente opuesto al concepto simplista de populismo encarnado en la tesis de las «dos izquierdas» formulada por intelectuales como Jorge Castañeda y Mario Vargas Llosa. Sus argumentos son usados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como parte del esfuerzo por aislar los gobiernos latinoamericanos percibidos como «anti-americanos». La tesis de las dos izquierdas clasifica a la IRL21 como la «izquierda mala» o «izquierda populista», la cual contrasta con las políticas supuestamente responsables de la «izquierda buena», es decir, los moderados tales como Lula[10]. La izquierda mala es distinguida por su retórica radical, intransigencia y tácticas de confrontación. Ejemplos incluyen a Andrés Manuel López Obrador, quien creó un gabinete de sombra para protestar por el supuesto fraude de las elecciones presidenciales del 2006, y Ollanta Humala (en el momento de su primera candidatura presidencial en 2006), quien, según Castañeda,

9 La aceptación por parte de la IRL21 de la diversidad y el pluralismo político se manifestó en Venezuela con el fallido esfuerzo de Chávez por crear el PSUV como «el partido único de la izquierda» en 2007. Debido a la resistencia de varias fuentes, Chávez terminó echándose atrás al crear la alianza "Gran Polo Patriótico" para las elecciones presidenciales del 2012. El Polo incluía no sólo al Partido Comunista (PCV) y Patria Para Todos (PPT), los cuales se habían negado a disolverse, sino también organizaciones sociales que apoyaron la candidatura de Chávez con su propia tarjeta electoral. Un pensador izquierdista venezolano aplaudió la decisión, por considerar que «generaría mayor riqueza de discusión», mientras que la existencia de un partido izquierdista hegemónico «generaría arrogancia» (Acosta 2009, pp. 13-14).

10 Ver Ellner 2011a.

intentaba «invadir» Chile en lo que fue realmente una protesta simbólica pacífica en abril del 2007 para llamar la atención a las reclamaciones fronterizas de Perú (2008, p. 232). La tesis de las dos izquierdas destaca la ambición personal, el estilo y el discurso y de este modo pasa por alto la compleja gama de grupos políticos y sociales que forman parte de la izquierda del siglo XXI y las difíciles decisiones que le han sido impuestas como resultado de su compromiso con el camino pacífico al poder.

La «tesis de las dos izquierdas» señala las áreas de convergencia entre la IRL21 y los populistas radicales clásicos de las décadas de 1930 y 1940, pero al hacerlo, simplifica ambos fenómenos (Ellner 2011b, p. 422). Indudablemente, la IRL21 en algunos aspectos se asemeja al populismo radical clásico (Dussel 2008, pp. 76-77), cuyas características sobresalientes incluían el liderazgo carismático, debilidad organizativa, objetivos a largo plazo no bien definidos, política exterior nacionalista, reformas socio-económicas que favorecían a los sectores populares, una tendencia a ignorar las instituciones políticas existentes y un discurso que contribuía a la aguda polarización política y social. La complejidad del populismo radical clásico (a diferencia del neopopulismo pro-neoliberal asociado con Alberto Fujimori en la década de 1990) surgió de su potencial de transformación de gran alcance que chocaba con las intenciones e intereses de muchos de sus propulsores originales (Laclau 1977/1979, pp. 175, 190-191).

Los movimientos de la IRL21, debido a su marcada diversidad interna y contradicciones, son aún más complejos, como es repetidamente reconocido por los teóricos izquierdistas latinoamericanos (Borón, ob. cit., p. 126 y Dussel 2008, p. 72). Así, por ejemplo, están comprometidos a superar su carencia organizativa y promover la democracia participativa, mientras que en muchos casos conservan los fuertes poderes ejecutivos de un líder máximo. Por otra parte, si bien carece de los proyectos de cambio a largo plazo del marxismo ortodoxo, los izquierdistas del siglo XXI se han definido a sí mismos como socialistas y han debatido diferentes opciones socialistas, a diferencia del populismo clásico de las décadas de 1930 y 1940, que fue más

ideológicamente ambiguo. De hecho, su indefinición ideológica puede ser una respuesta lógica al vacío creado por el colapso de la Unión Soviética, o en las palabras de Laclau «una condición previa para la construcción de un significado político relevante» (2005, pp. 17-18). En resumen, la agenda política que está detrás de la tesis de las «dos izquierdas» descarta un análisis matizado de los movimientos no comunistas de transformación en América Latina, tanto en el siglo xx como actualmente, y no concuerda con la rica escritura académica que demuestra su naturaleza compleja y dinámica.

Desde la publicación de *Lo que queda de la izquierda: Relatos de las izquierdas latinoamericanas* (Castañeda y Morales 2010), el debate sobre la tesis de las dos izquierdas se ha centrado en el grado en el cual la categoría de ambas izquierdas –en los dos casos– pueda considerarse homogénea. Varios libros importantes caracterizan explícitamente *Lo que queda de la izquierda* como simplista por no reconocer la diversidad entre los gobiernos de la «buena izquierda», como también los de la «mala izquierda». Así, por ejemplo, los ensayos de Juan Pablo Luna (2010, pp. 30-31), Maxwell A. Cameron y Kenneth E. Sharpe (2010), Jennifer McCoy (2010, p. 99, pie de página 7) y Santiago Anria (2010, pp. 121-123) en *Latin America's Left Turn* contrastan el flujo de arriba hacia abajo en la toma de decisiones de Chávez con el de Morales, quien como líder del movimiento laboral y social, supuestamente, ha estado más en sintonía, y dispuesto a negociar, con la base del movimiento y las clases populares en general. En el mismo libro Luna (ob. cit., p. 28) propone desglosar la categoría de la social democracia para demostrar las diferencias fundamentales entre los gobiernos de la «izquierda buena». De manera parecida, Steven Levitsky y Kenneth Roberts concluyen su *The Resurgence of the Latin American Left* afirmando que «la izquierda de América Latina se caracteriza por una gran diversidad» que la de Brasil y Chile con su «ortodoxia macroeconómica», y Venezuela con «políticas abiertamente estatistas y el modo de gobierno cada vez más autoritario» hay una «amplia

gama de casos intermedios» (Steven Levitsky y Kenneth M. Roberts 2011, p. 399)[11].

El debate sobre la tesis de la «buena izquierda» y la «mala izquierda» puede enmarcarse en términos diferentes. Incluso, si la premisa de la tesis de las «dos izquierdas» de Castañeda con respecto a las similitudes básicas de los gobiernos de la «izquierda mala» es aceptada, la teoría es de todos modos fundamentalmente defectuosa. Independientemente del grado de diversidad dentro de la IRL21, la tesis de las dos izquierdas es simplista porque ignora la complejidad de los retos que confrontan. La complejidad se deriva de tres factores: la heterogeneidad social y política de los partidarios de los gobiernos de izquierda; los espacios que la estrategia democrática al cambio radical abre para la crítica que viene tanto de la izquierda como de la derecha; y la novedad relativa de la estrategia de ensayo y error que se está siguiendo. Por esta razón, la aplicación del concepto de populismo hecha por Castañeda y otros que destacan las características semi-autoritarias y el debilitamiento de las instituciones es engañosa. Del mismo modo, la afirmación de la tesis de las «dos izquierdas» de que las políticas de la IRL21 no son sostenibles, simplifica el proceso de cambio en curso en el continente e ignora ciertos avances inequívocos (Weyland 2010, pp. 11-12 y 2011, pp. 75-82)[12].

Los capítulos en este libro se centran en las características particulares de la izquierda radical latinoamericana en el poder en el siglo XXI y los desafíos que confronta. La tesis básica planteada en todos los capítulos es que los obstáculos y complejidades provenientes de estas experiencias son cuantitativa

11 Por el contario, Raúl Madrid, Wendy Hunter y Kurt Weyland (2010) defienden el marco de las dos izquierdas en su *Performance of Leftist Governments in Latin America.* Ellos justifican su enfoque binario contrastando la «izquierda contestataria» representada por Chávez y Morales con la izquierda moderada, la cual «ha tomado un rumbo más prometedor y sostenible, que con el tiempo puede producir un mayor progreso social y económico en una democracia que funcione bien» (ídem, p. 180).

12 Ver también la discusión en Levitsky y Robert, ob. cit., pp. 413-415 y Oxhorn 2009, pp. 228-230.

y cualitativamente diferentes de los casos de gobiernos izquierdistas en el siglo xx. El libro se enfoca en los gobiernos y movimientos izquierdistas en Bolivia, Ecuador y Venezuela, que han servido como punto de referencia para la izquierda latinoamericana en todo el continente, como está reconocido por analistas políticos de diversas posiciones políticas[13].

Los capítulos de Federico Fuentes y el mío describen el extenso período de aguda polarización social y política en los países gobernados por la izquierda radical, en contraste a la situación de los gobiernos comunistas y social demócratas del siglo pasado. No solamente la oposición legal cuestionaba la legitimidad del gobierno, sino que un terreno medio caracterizado por apoyo condicional al gobierno o por críticas no beligerantes se quedó casi completamente desocupado. En los casos de Nicaragua y El Salvador analizados por Héctor Perla y Héctor Cruz Feliciano, la polarización fue menos intensa. Perla y Cruz Feliciano señalan a un dilema confrontado por los movimientos guerrilleros que terminaron en el poder por medios electorales. En ambos casos, las altas expectativas y visiones de largo alcance chocaron con la realidad de haber llegado a acuerdos con grupos a su derecha con el fin de garantizar la estabilidad, que fue un imperativo no comprendido por algunos de los miembros originales de los movimientos.

El caso de Cuba también es importante para los efectos del enfoque de este libro. Chávez reconoció la influencia de Fidel Castro, cuyo consejo provino de la experiencia de construcción socialista en Cuba durante medio siglo. Un área de la influencia cubana incluye las políticas y actitudes asumidas por la dirigencia cubana hacia la religión organizada basada en la tolerancia e influenciadas por la enseñanza de la Teología de la Liberación, como analizo en el capítulo final. Sin embargo, la influencia entre los países de la izquierda radical se manifiesta en dos direcciones (Max Azicri 2009, pp. 103-104). Camila Piñeiro Harnecker,

13 Ver, por ejemplo, Harold A. Trinkunas 2011, pp. 25–27 y el capítulo de Raby en este tomo.

por ejemplo, plantea en su capítulo que los participantes en el debate sobre las reformas económicas y políticas en Cuba han asimilado las experiencias de la izquierda radical en otros países latinoamericanos. Piñeiro hace referencia a dos conjuntos de experiencias que sirven para canalizar la presión para liberalizar la estructura económica y política, y en esta forma demuestra que el debate en Cuba hasta cierto punto es un fenómeno del siglo XXI. Por un lado, los cubanos se sienten cautelosos del tipo de transformación que hizo posible la restauración de capitalismo en la Unión Soviética y, hasta un cierto punto, en China. Por otro lado, están inspirados por el ejemplo de la izquierda radical latinoamericana en el poder, particularmente en Venezuela, que combina la democracia con una economía de mercado altamente regulada. Además los cubanos han observado con mucho interés los resultados positivos de los programas sociales novedosos implementados por los gobiernos latinoamericanos izquierdistas y centro-izquierdistas, que podrían ayudar a facilitar la salida del sector público de un millón de trabajadores estatales cubanos, como contemplan los reformistas en ese país.

Otros desafíos para la izquierda en Venezuela, Bolivia y Ecuador que difieren de los procesos revolucionarios del siglo XX son los obstáculos a la transformación pacífica del Estado cuya fuerza laboral en el sector público incluye muchos opositores al cambio. En su capítulo, Marcel Nelson analiza esta dinámica a través de la estructura conceptual de Nicos Poulantzas, que veía el Estado como un campo estratégico altamente fragmentado en el cual los izquierdistas en el poder tienen que navegar. La complejidad proviene de la presencia en el campo de representantes del viejo orden y se agrava por el peligro que algunos de los izquierdistas en el poder pueden ser absorbidos por el viejo sistema todavía dominante. Nelson ve al gobierno de Chávez como dividido entre la tendencia de centralizar el poder en respuesta a las amenazas de la derecha y la necesidad de profundizar la democracia y fortalecer el movimiento popular como la única estrategia viable para lograr el cambio de largo alcance.

David L. Raby, en su capítulo, concuerda con Nelson al caracterizar la transformación estatal como un «proceso complejo y multifacético» en el marco de la «guerra de posición» descrita por Gramsci. Raby resalta que la discusión sobre el papel del Estado en Venezuela ha provocado un debate rico y vivaz, y luego nombra una lista de analistas prominentes que han participado en él. En la parte final de su ensayo, Raby invoca la teoría del populismo como un fenómeno dinámico y potencialmente progresista formulada por Ernesto Laclau. De esta forma plantea que la izquierda radical del siglo xxi está caracterizada tanto por dirigentes carismáticos como por un movimiento de masas que desempeña un papel protagonista en la lucha por el cambio.

George Ciccariello-Maher argumenta en su capítulo que los gobiernos izquierdistas han dedicado mayor atención a los movimientos sociales y han sido más receptivos a sus demandas que los gobiernos centro-izquierdistas. Sin embargo, aún en el caso de Venezuela bajo Chávez, que ha ido más lejos en este sentido, la relación entre el gobierno y los movimientos sociales a veces parece más un punto muerto «que un debate entre camaradas» (p. 317 de este libro). La priorización de los tres gobiernos a favor de las metas sociales por encima de las económicas también rompe con las experiencias de la izquierda tradicional pero puede a la larga impedir la transformación estructural.

Otros capítulos en el libro contribuyen a la tesis principal sobre las características particulares de la izquierda radical en el poder en el siglo xxi y los desafíos que enfrenta. El capítulo de Roger Burbach subraya la heterogeneidad de las corrientes políticas dentro de la izquierda radical latinoamericana como también su base social de apoyo. De hecho, otros capítulos en el libro demuestran la correlación que existe entre las diversas corrientes ideológicas izquierdistas y los diversos grupos sociales que incluyen a los sectores populares y medios.

Dada la heterogeneidad de la base social de apoyo de la izquierda radical del siglo xxi y la complejidad de los desafíos que confronta, no es sorprendente que los medios corporativos de comunicación, que son conocidos por su tendencia de simplificar,

no han ofrecido una cobertura amplia e imparcial de los gobiernos izquierdistas. Además, el sesgo anti-izquierda de los medios corporativos explica su preferencia por los gobiernos moderados por encima de los izquierdistas. En sus capítulos, Kevin Young y Pascal Lupien afirman que al caracterizar la izquierda radical en el poder como irresponsable y populista, los medios corporativos pasan por alto la complejidad y diversidad del ambiente político. Young examina los medios norteamericanos mientras que Lupien revisa los de América Latina para demostrar su aceptación de la tesis de los «dos izquierdas» (la «buena» y «mala» izquierda) desarrollada por Jorge Castañeda entre otros, que subestima o ignora por completo las complejidades. Young concluye que los medios distorsionan y exageran «las fallas de los países de la "mala izquierda" en el campo de la democracia, derechos humanos y rendimiento económico».

En resumen, las dimensiones relativamente nuevas y complejas de las experiencias de la IRL21 en el poder, además de contradecir la tesis simplista de las «dos izquierdas», tienen consecuencias importantes, sobre todo para la estrategia izquierdista. El enfoque de ensayo y error abrazado por la IRL21, por ejemplo, es propicio para el rechazo de posiciones dogmáticas basadas en modelos preconcebidos. Además, la aceptación de la IRL21 de la heterogeneidad en lugar de la priorización de un agente social determinado o del vanguardismo, apunta en la dirección de una estrategia que sintetiza diferentes intereses y visiones que son algunas veces conflictivos. Finalmente, las tendencias de la IRL21 de rechazar el dogmatismo, celebrar la diversidad y adoptar el eclecticismo son ingredientes que se prestan al debate profundo por parte de izquierdistas, así como para la investigación académica.

Steve Ellner

Traducción de la prof. Giomar Salas y el prof. Eligio Damas
de la Universidad de Oriente, núcleo Anzoátegui.

## Referencias

ACOSTA, Vladimir (2007). «El Socialismo del siglo xxi y la Revolución Bolivariana: una reflexión inicial». En Margarita López Maya (coord.), *Ideas para debatir el Socialismo del siglo xxi*. Caracas: Alfa.

_____ (2009). «Perder el temor a hacer la crítica». *Comuna: pensamiento crítico en la revolución (Intelectuales, democracia y socialismo)*, Caracas, (1), pp. 11-19.

ÁLVAREZ R., Víctor (2010). *Del estado burocrático al estado comunal: la transición al socialismo de la revolución bolivariana*. Caracas: Centro Internacional Miranda.

ANRIA, Santiago (2010). «Bolivia's MAS: Between Party and Movement». En Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (eds.), *Latin America's Left Turns: Politics, Policies and Trajectories of Change*. Boulder (Colorado): Lynne Rienner Publishers.

AZICRI, Max (2009). «The Castro-Chávez Alliance». *Latin American Perspectives*, Riverside (California), *36* (1), pp. 99-110.

BIARDEAU, Javier (2009). «Es necesario replantear la relación entre socialismo y democracia». *Comuna: pensamiento crítico en la revolución (Intelectuales, democracia y socialismo),* Caracas, *1*, pp. 63-71.

BLANCO MUÑOZ, Agustín (1998). *Habla el comandante*. Caracas: UCV.

BORÓN, Atilio A. (2008). *Socialismo siglo XXI: ¿Hay vida después del neoliberalismo?* Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.

BURGMANN, Verity (2005). «From Syndicalism to Seattle: Class and the Politics of Identity». *International Labor and Working-Class History*, Cambridge, *67*, pp. 1-21.

CAMERON, Maxwell A. y Kenneth E. Sharpe (2010). «Andean Left Turns: Constituent Power and Constitution Making». En Maxwell Cameron y Eric Hershberg (eds.), *Latin America's Left Turns: Politics, Policies and Trajectories of Change*, pp. 98-127. Boulder (Colorado): Lynne Rienner Publishers.

CASTAÑEDA, Jorge G. (2008). «Where Do We Go From Here?». En Jorge G. Castañeda y Marco A. Morales (eds.), *Leftovers: Tales of the Latin American Left*, pp. 231-243. Nueva York: Routledge.

CASTAÑEDA, Jorge G. y Marco A. Morales (eds.) (2010). *Lo que queda de la izquierda: relatos de las izquierdas latinoamericanas*. México: Taurus.

CASTELLS, Manuel y Alejandro Portes (1989). «World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy». En Alejandro Portes, Manuel Castells y Lauren A. Benton (eds.), *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries*, pp. 11-37. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

CICCARIELLO-MAHER, George (2013). *We Created Chávez: A People's History of the Venezuelan Revolution*. Durham (Carolina del Norte): Duke University Press.

DUSSSEL, Enrique D. (2003). *Beyond Philosophy: Ethics, History, Marxism, and Liberation Theology*. Lanham (Maryland): Rowman and Littlefield.

_____ (2008). *Twenty Theses on Politics*. Durham (Carolina del Norte): Duke University Press.

_____ (2012). *Ethics of Liberation in the Age of Globalization and Exclusion*. Durham (Carolina del Norte): Duke University Press.

*El libro rojo del general López Contreras, 1936: Documentos robados por espías de la policía política* (1985). (6° ed.). Caracas: Centauro.

ELLNER, Steve (1994). «Two Conceptual Approaches to Latin American Social Movements». *Studies in Comparative International Development*, University Park (Pennsylvania), *29* (3), pp. 70-80.

_____ (2005). *Neoliberalismo y antineoliberalismo en América Latina: el debate sobre estrategias*. Caracas: Tropykos.

_____ (2011a). «Reseña: "*Lo que queda de la izquierda: Relatos de las izquierdas latinoamericanas*"». *Cuadernos del Cendes*, Caracas, *30* (78), pp. 149-158.

_____ (2011b). «The Rightward Drift of a Latin American Social Democrat». *Science and Society*, Brooklyn (Nueva York), *75* (3), pp. 419-428.

_____ (2011c). «Venezuela's Social-Based Democratic Model: Innovations and Limitations». *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, *43* (3), pp. 421-449.

_____ (2012a). «Latin American Unity Takes Center Stage at Cartagena Summit». *NACLA: Report on the Americas*, Nueva York, *45* (2), pp. 9-11.

_____ (2012b). «The Distinguishing Features of Latin America's New Left in Power: The Chávez, Morales, and Correa Governments». *Latin American Perspectives*, Riverside (California), *39* (1), pp. 96-114.

ESTEVA, Gustavo (2009). «Another Perspective, Another Democracy». *Socialism and Democracy*, Somerville (Massachusetts), *23* (3), pp. 45-60.

FANON, Frantz (1963). *The Wretched of the Earth*. Nueva York: Grove.

FEIJOO, María del Carmen y Mónica Gogna (1990). «Women in the Transition to Democracy». En Elizabeth Jelin (ed.), *Women and Social Change in Latin America*, pp. 79-114. Londres: Zed Books.

GARCÍA LINERA, Álvaro (2010). «The State in Transition: Power Bloc and Point of Bifurcation». *Latin American Perspectives*, Riverside (California), *37* (4), pp. 34-47.

_____ (2011). *Las tensiones creativas de la revolución: La quinta fase del proceso de cambio*. La Paz: Vicepresidencia del Estado.

GARZÓN ROGÉ, Mariana y Mariano Perelman (2010). «Consenus or Conflict? The Problem of an Anti-Political Imagery of Democracy in Contemporary Argentina». En Brendan Howe, Vesselin Popovski y Mark Notaras (eds.), *Democracy in the South: Participation, the State and the People*, pp. 69-84. Tokyo: United Nations University Press.

GERMANI, Ginol (1962). *Política y sociedad en una época de transición: de la sociedad tradicional a la sociedad de masas*. Buenos Aires: Paidós.

GOLDFRANK, Benjamin (2011). *Deepening Local Democracy in Latin America: Participation, Decentralization, and the Left*. University Park (Pensilvania): Pennsylvania State University Press.

HARNECKER, Marta (2007). *Rebuilding the Left*. Nueva York: Zed Books.

_____ (2008). «The Communal Councils and Popular Power». En Jim Mcllroy y Coral Wynter (eds.), *Voices from Venezuela: Behind the Bolivarian Revolution*, pp. 65-69. Chippendale (Australia): Resistance Books.

_____ (2010). «Latin America and Twenty-First Century Socialism: Inventing to Avoid Mistakes». *Monthly Review*, Nueva York, *62* (3), pp. 3-83.

HAYA DE LA TORRE, Víctor Raúl (1928/1976). *El antimperialismo y el APRA*. Caracas: Centauro.

JELIN, Elizabeth (1990). «Introduction». En *Women and Social Change in Latin America*. Londres: Zed Books.

KANG, Liu (1997). «The Legacy of Mao and Althusser: Problematics of Dialectics, Alternative Modernity, and Cultural Revolution». En Arif Dirlik, Paul Healy y Nick Knight (eds.), *Critical Perspectives on Mao Zedong's Thought*. Atlantic Highlands (Nueva Jersey): Humanities Press.

KNIGHT, Nick (1997). «The Laws of Dialectical Materialism in Mao Zedong's Thought: The Question of "Orthodoxy"». En Arif Dirlik, Paul Healy y Nick Knight (eds.), *Critical Perspectives on Mao Zedong's Thought*, pp. 84-116. Atlantic Highlands (Nueva Jersey): Humanities Press.

LACLAU, Ernesto (1977/1979). *Politics and Ideology in Marxist Theory: Capitalism, Fascism, Populism*. Londres: Verso.

_____ (1985). «New Social Movements and the Plurality of the Social». En David Slater (ed.), *New Social Movements and the State in Latin America*, pp. 27-42. Amsterdam: Foris Publications.

_____ (2005). *On Populist Reason*. Londres: Verso.

_____ (2006). «Consideraciones sobre el populismo latinoamericano». *Cuadernos del Cendes*, Caracas, *23* (62), pp. 115-120.

LACLAU, Ernesto y Chantal Mouffe (1985). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. Londres: Verso.

LEVITSKY, Steven y Kenneth M. Roberts (2011). «Conclusion: Democracy, Development, and the Left». En Levitsky y Roberts (eds.), *The Resurgence of the Latin American Left*, pp. 399-428. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

LUNA, Juan Pablo (2010). «The Left Turns: Why They Happened and How They Compare». En Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (eds.), *Latin America's Left Turns: Politics, Policies and Trajectories of Change*. Boulder (Colorado): Lynne Rienner Publishers.

MADRID, Raúl L., Wendy Hunter y Kurt Weyland (2010). «The Policies and Performance of the Contestatory and Moderate Left». *The Performance of Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings*, pp. 28-56. Cambridge: Cambridge University Press.

MAO ZEDONG (1937/1971). «On Contradiction». *Selected Readings from the Works of Mao Tsetung*. Peking: Foreign Languages Press.

_____ (1957/1971). «On the Correct Handling of Contradictions among the People». *Selected Readings from the Works of Mao Tse-tung*. Peking: Foreign Languages Press.

MCCOY, Jennifer (2010). «Venezuela under Chávez: Beyond Liberalism». En Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (eds.), *Latin America's Left Turns: Politics, Policies and Trajectories of Change*. Boulder (Colorado): Lynne Rienner Publishers.

MONEDERO, Juan Carlos (2009). «La reinvención de Venezuela revolucionaria y los fantasmas del pasado». *Comuna: Pensamiento Crítico en la Revolución (Intelectuales Democracia y Socialismo)*, Caracas, *1*, pp. 187-195.

MOUFFE, Chantal (2005.) *On the Political*. Londres: Routledge.

OXHORN, Philp D. (1998). «Is the Century of Corporatism Over? Neoliberalism and the Rise of Neopluralism». En Philp Oxhorn y Graciela Ducatenzeiler (eds.), *What Kind of Democracy? What Kind of Market? Latin America in the Age of Neoliberalism*, pp. 195-218. University Park (Pensilvania): Penn State University Press.

_____ (2009). «Beyond Neoliberalism? Latin America's New Crossroads». En John Burdick, Kenneth M. Roberts y Philp Oxhorn (eds.), *Beyond Neoliberalism in Latin America*: *Society and Politics at the Crossroads*. Nueva York: Palgrave Macmillan.

«Precandidato presidencial Gustavo Petro pide a Chávez que deje de agredir a Uribe» (2009, 18 de septiembre). *Informe 21.com* [periódico en línea]. Recuperado de http://informe21.com/hugo-chavez/precandidato-presidencial-gustavo-petro-pide-chavez-deje-agredir-uribe

RABY, David L. (2006). *Democracy and Revolution: Latin America and Socialism Today*. Londres: Pluto Press.

REGALADO, Roberto (2007). *Latin America at the Crossroads: Domination, Crisis, Popular Movements, and Political Alternatives*. Melbourne (Australia): Ocean Press.

SADER, Emir (2008). *Refundar el Estado: Posneoliberalismo en América Latina*. Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación de la CTA.

SILVA, Eduardo (2009). *Challenging Neoliberalism in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.

SMILDE, David (2011). «Introduction: Participation, Politics, and Culture: Emerging Fragments of Venezuela's Bolivarian Democracy». En David Smilde y Daniel Hellinger (eds.), *Venezuela's Bolivarian Democracy: Participation, Politics, and Culture under Chávez*. Durham (Carolina del Norte): Duke University Press.

SOTO, Hernando de (1989). *The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World*. Nueva York: Harper & Row.

TRINKUNAS, Harold A. (2011). «The Logic of Venezuelan Foreign Policy during the Chávez Period». En Ralph S. Clem y Anthony P. Maingot (eds.), *Venezuela's Petro-Diplomacy: Hugo Chávez's Foreign Policy*. Gainesville (Florida): University Press of Florida.

WEYLAND, Kurt (1999). «Populism in the Age of Neoliberalism». En Michael L. Conniff (ed.), *Populism in Latin America*, pp. 172-190. Tuscaloosa (Alabama): University of Alabama Press.

_____ (2010). «The Performance of Leftist Governments in Latin America: Conceptual and Theoretical Issues». En Kurt Weyland, Raúl Madrid y Wendy Hunter (eds.), *The Performance of Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings*. Cambridge Cambridge University Press.

_____ (2011). «The Left: Destroyer or Savior of the Market Model?». En Steven Levitsky y Kenneth M. Roberts (eds.), *The Resurgence of the Latin American Left*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

# Las transiciones turbulentas de la izquierda radical: una visión general

Roger Burbach
Traducción de Giomar Salas

Al dirigirse a la quinta reunión anual del Foro Social Mundial el 30 de enero del 2005, el presidente venezolano Hugo Chávez declaró: «Es necesario trascender el capitalismo (…) a través del socialismo, el verdadero socialismo con igualdad y justicia» (Cleto A. Sojo 2005). Como parte de la multitud rugiente de 15.000 asistentes en el estadio Gigantinho en Porto Alegre, Brasil, oí al presidente Chávez continuar diciendo: «Tenemos que reinventar el socialismo. No puede ser la clase de socialismo que vimos en la Unión Soviética, sino que surgirá a medida que desarrollemos nuevos sistemas que se fundamenten en la cooperación, no en la competencia» (íd.). Esto marcó lo que muchos refieren como el inicio del «Socialismo del siglo XXI».

Cuatro años más tarde en la reunión del 2009 del Foro Social en Belén, Brasil, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, al señalar que el mundo estaba en medio de una calamidad económica, declaró: «Saquemos ventaja de esta crisis, de esta debilidad actual del capitalismo y aprovechemos la oportunidad para crear algo nuevo y mejor, un Socialismo del siglo XXI» (Canadian Centre

for Policy Alternatives 2009). Con Chávez y el presidente Evo Morales de Bolivia a su lado en el auditorio Hangar la noche del 29 de enero, Correa declaró que el nuevo socialismo, a diferencia del «socialismo tradicional», impulsaría la justicia de género y la igualdad étnica y defendería «la vida y el valor social de los ecosistemas como la selva amazónica» (Mario Osava 2009). Morales dijo a los presentes que el mundo:

> … está siendo sacudido por muchas crisis: de finanzas, clima, comida, y de las instituciones. Pero todas estas crisis son parte de una gran crisis que vive el sistema capitalista. Si nosotros, los pueblos del mundo, no somos capaces de enterrar el capitalismo, entonces el capitalismo enterrará nuestro planeta (…) Esta crisis nos presenta una gran oportunidad para construir un mundo diferente, siempre y cuando estemos dispuestos a emplear un modelo alternativo (Canadian Centre for Policy Alternatives, ob. cit.).

Algo nuevo está en marcha en América Latina. La hegemonía de Estados Unidos está debilitándose, mientras un nuevo orden está luchando por nacer. Tal como declaró el vicepresidente Álvaro García Linera a mediados del 2011, «el continente puede estar viviendo su momento más progresista, (y) hasta cierto punto su momento más revolucionario de los últimos cincuenta años…» (Paul Walder, 2011). Estamos presenciando «el surgimiento de gobiernos revolucionarios progresistas de izquierda en el continente, pero que no son gobiernos necesariamente socialistas» (íd.).

Ninguno de los nuevos gobiernos de izquierda ha tomado posesión del cargo como resultado de levantamientos revolucionarios como los ocurridos en Cuba en 1959, y Nicaragua en 1979. Elegidos a través de las urnas, ellos controlan sólo una parte del poder del Estado. Los militares no fueron derrotados o reconstituidos, y ninguna de las plataformas electorales pidió un asalto frontal contra el reino del capital. También vemos que la izquierda contemporánea en América Latina es renuente a pedir

una economía socialista basada en la propiedad pública de los medios de producción, dado el fracaso del modelo soviético.

Y sin embargo, la búsqueda de una utopía socialista persiste en América Latina a diferencia de cualquier otra región del mundo. La decadencia del imperio estadounidense, la erupción de movimientos sociales anti-neoliberales, el ascenso de los nuevos gobiernos de izquierda y la creciente integración de la región en sus propios términos han creado un espacio para el rejuvenecimiento del socialismo después de los dramáticos reveses del último siglo. En lo que sigue, se explorarán las raíces históricas, los debates teóricos y la praxis del Socialismo del siglo xxi. La intención no es proporcionar una teoría singular del nuevo socialismo, sino presentar las distintas interpretaciones de las luchas contemporáneas que están produciéndose en América Latina.

## Teorías del Socialismo del siglo xxi

Sobre la base de los debates de amplio alcance del Socialismo del siglo xxi que está ocurriendo en el hemisferio, la teórica política Marta Harnecker, quien se desempeñó como consejera informal de Hugo Chávez, describe cinco componentes clave de lo que constituye el socialismo. En primer lugar, el socialismo es el desarrollo de los seres humanos, lo que significa que la búsqueda del beneficio debe ser reemplazada por una lógica del humanismo y la solidaridad, orientada a satisfacer las necesidades humanas. En segundo lugar, el socialismo  respeta la naturaleza y se opone al consumismo, nuestra meta no deberíaser vivir "mejor" sino vivir "bien", como declaran las culturas indígenas andinas. En tercer lugar, tomando prestado del profesor radical de economía Michael Lebowitz, Harnecker (26 de marzo del 2012) dice que el socialismo establece la nueva dialéctica de producción/distribución/consumo, basada en: a) la propiedad social de los medios de producción, y b) la producción social organizada por los trabajadores con la finalidad de c) satisfacer necesidades comunales. En cuarto lugar, el socialismo está guiado por un nuevo concepto de eficiencia que respeta la naturaleza y busca el desarrollo humano.

En quinto lugar, hay una necesidad del uso racional de los recursos humanos y naturales disponibles, gracias a un proceso de planificación participativa descentralizada, que es lo contrario de la planificación burocrática soviética hipercentralizada[1].

Construir una utopía socialista en este sentido será un esfuerzo largo, ya que toma décadas y generaciones. Las «complejidades y desafíos» que enfrenta la izquierda radical son muchos, como señala Steve Ellner en la introducción de este libro. Hoy se ejecutan diferentes exploraciones o procesos contrahegemónicos en todo el hemisferio. Como escribe Arturo Escobar –un antropólogo colombo-americano conocido por su contribución a la teoría del post-desarrollo–:

> Algunos argumentan que estos procesos podrían dar lugar a una reinvención del socialismo; para otros, lo que está en juego es el desmantelamiento de las políticas neoliberales de las últimas tres décadas –el fin de "la larga noche neoliberal", como se conoce el periodo en los círculos progresistas de la región– o la formación de un bloque suramericano (y anti-estadounidense). Otros apuntan a la posibilidad de un nuevo comienzo que podría provocar una reinvención de la democracia y el desarrollo o, más radicalmente aún, el fin del predominio de la sociedad liberal de los últimos doscientos años fundamentada en la propiedad privada y la democracia representativa. Socialismo del siglo XXI, la plurinacionalidad, la interculturalidad, la democracia directa y sustantiva, la revolución ciudadana, el desarrollo endógeno centrado en el buen vivir de la gente, la autonomía territorial y cultural, y los proyectos descoloniales hacia sociedades post-liberales son algunos de los conceptos que apuntan a las transformaciones en curso (2010, p. 2).

Orlando Núñez Soto, un importante teórico marxista de Nicaragua, amplía nuestra comprensión de la larga transición al

1 Para una discusión extensa del socialismo contemporáneo por seis autores que incluyen a Marta Harnecker, ver el número especial «Designing Socialism: Visions, Projections, Models» de abril del 2012 de *Science and Society*.

socialismo con un enfoque más ortodoxo. Núñez Soto (2012, p. 1) rechaza el Socialismo del siglo xxi como un concepto para describir lo que está ocurriendo en América Latina hoy, al mismo tiempo que afirma que la región se encuentra en una fase muy preliminar de transición al socialismo en la que no debemos pretender que estamos construyendo el socialismo. Más bien, estamos confrontando el neoliberalismo y cada país en América Latina está confrontando condiciones diferentes. Añade que nuevas banderas están apareciendo en la lucha social contra el sistema dominante que no pueden ser resueltas por la lógica del capitalismo; se trata de una lucha post-neoliberal o post-capitalista contra la desigualdad de la mujer y el patriarcado, la discriminación racial y étnica, la degradación del medio ambiente y, en términos básicos, el «capitalismo salvaje» y «el neocolonialismo», tanto interna como externamente.

El politólogo brasileño Emir Sader, en su libro *El nuevo topo: los caminos de la izquierda latinoamericana*, sostiene que el revés para el socialismo en el siglo xx fue tan severo que todavía está recuperándose en la actualidad. El socialismo puede ser parte de la agenda, pero la prioridad debe ser la formación de gobiernos y coaliciones políticas para desmantelar el neoliberalismo, incluso si eso significa aceptar, por el momento, el sistema capitalista en general (Sader 2011, pp. 104-105). Esto explica en parte por qué la construcción del socialismo en los años próximos y décadas será un proceso diverso, y diferirá de un país a otro. No hay una definición o modelo único.

## El socialismo histórico en América Latina

Sader también cree que el socialismo es incontenible en América Latina. El topo del título de su libro es una metáfora prestada de un pasaje de Carlos Marx en *El 18 brumario de Luis Bonaparte.* Para Sader, el socialismo en América Latina es como el topo que está constantemente tomando prestado de manera clandestina y aparece en los momentos y lugares menos esperados.

Las profundas raíces históricas del socialismo en América ayudan a explicar su vitalidad y la imposibilidad de su extinción. El socialismo apareció por primera vez en las primeras décadas del siglo xx con la formación de los partidos socialistas y comunistas en todo el hemisferio. Al proporcionar liderazgo a los sindicatos y participar en coaliciones y gobiernos de frente popular, estos partidos fueron los más afectados de la intervención estadounidense en la era post Segunda Guerra Mundial, particularmente en Centroamérica y el Caribe.

El paisaje ideológico de Latinoamérica se transformó para siempre con el establecimiento de una sociedad socialista en Cuba poco más de dos años después del triunfo revolucionario en 1959. Para el próximo medio siglo, el socialismo, con todos sus altibajos, estaría en el centro de los debates políticos y las discusiones de las estrategias para transformar las sociedades. La revolución cubana también desencadenó una serie de movimientos guerrilleros comprometidos con la lucha anti-imperialista y el socialismo que se extendieron desde Bolivia y Perú en el sur hasta Venezuela, Guatemala y la República Dominicana en el norte. La derrota del Che Guevara y su banda de guerrilleros en 1967 bloqueó temporalmente la estrategia de utilizar la lucha armada en el campo para tomar el poder.

Los chilenos intentaron un enfoque diferente. Creyendo que las elecciones y las instituciones democráticas formales podían ser usadas para avanzar en el socialismo, el gobierno de la Unidad Popular encabezado por el presidente Salvador Allende (1970-1973) comenzó a implementar un programa socialista que pedía nacionalizar las minas de cobre del país y expropiar las grandes empresas manufactureras. Pero tomar el control del "alto comando" de la economía y sólo la rama ejecutiva del aparato del Estado no era suficiente para avanzar en el socialismo. El ejército chileno, apoyado por la burguesía chilena y los Estados Unidos, dio un golpe que derrocó a la única democracia socialista elegida en el mundo. Para erradicar el socialismo chileno profundamente arraigado, la represión fue severa y sangrienta.

La clase dominante, durante el gobierno del dictador general Augusto Pinochet, llevó a cabo una campaña despiadada contra las clases populares y las organizaciones políticas de izquierda en un esfuerzo por purgar de la conciencia popular la visión de una sociedad socialista. El régimen de Pinochet duró 17 años.

El Frente de Liberación Nacional Sandinista en Nicaragua resucitó la estrategia armada de la guerrilla y en julio de 1979 logró derrocar la dictadura de la familia Somoza. El gobierno revolucionario sustituyó la Guardia Nacional de Somoza con su propio ejército sandinista y tomó el control de los sectores clave de la economía. Aunque la dirigencia sandinista tenía una orientación socialista, nunca proclamó formalmente que estaba construyendo el socialismo en Nicaragua. Incluso Fidel Castro aconsejó a los sandinistas ir lentos en la toma de control de la economía. Tomando en cuenta que Nicaragua, a diferencia de Cuba, tenía fronteras porosas a través de las cuales podían moverse las mercancías, así como bandas contrarrevolucionarias (los llamados "Contras"), el gobierno sandinista intentó formar la coalición más amplia posible que incluyera los sectores de la burguesía y la pequeña burguesía.

Sin embargo, incluso este enfoque no pudo evitar la contrarrevolución. El 25 de febrero de 1990, una mayoría de los nicaragüenses votó contra el presidente Daniel Ortega y los sandinistas en gran parte porque reconocieron que no habría fin a la violencia a menos que la candidata respaldada por los Estados Unidos se instalara en la presidencia.

La derrota electoral de los sandinistas coincidió con la caída del Muro de Berlín en noviembre de 1989 y el desmantelamiento de la Unión Soviética en 1991. El socialismo de Estado estaba desmoronándose. Aislada y sin sus aliados internacionales, Cuba entró en un "periodo especial" de severa austeridad económica. En este vacío, el neoliberalismo consolidó su control en América Latina.

## La rebelión de los movimientos sociales y las nuevas teorías de la lucha social

Pero la historia nos enseña que la lucha desde abajo nunca es totalmente erradicada. Una ola de movimientos sociales y organizaciones dirigidas por campesinos y grupos indígenas surgió en las áreas rurales de América Latina mientras el socialismo de Estado se estaba derrumbando. Para mediados de la década de 1990, habían asumido el liderazgo en desafiar el orden neoliberal, particularmente en Ecuador, México, Bolivia y Brasil. Estas nuevas organizaciones eran generalmente más democráticas y participativas que las organizaciones de clase que los partidos políticos marxistas tradicionales habían creado en las áreas rurales en décadas anteriores. En general, ellas vinieron a llenar el vacío dejado por una clase obrera que estaba más fragmentada, desorientada y dispersa que nunca, y por lo tanto incapaz de proporcionar un liderazgo real. Con una amplia gama de intereses y demandas, estos nuevos movimientos sociales trascendieron las narrativas modernistas tanto del capitalismo como del socialismo tradicional.

A medida que la década de 1990 llegaba a su fin y se iniciaba el nuevo milenio, las luchas sociales y las rebeliones populares estallaron principalmente en las ciudades que a menudo coincidían en parte con las luchas rurales existentes. Las organizaciones urbanas variaban grandemente, algunas de ellas basadas en una clase determinada y otras con una composición multiclasista.

Los filósofos posmarxistas, Michael Hardt y Antonio Negri, rompieron con el marxismo clásico en su enfoque teórico de los nuevos movimientos sociales. En *Multitud* (2005, pp. 68-69), ellos declaran: «Algunos de los modelos básicos tradicionales del activismo político, la lucha de clases, y la organización revolucionaria han llegado a ser hoy obsoletos e inútiles». Añaden que «la recomposición global de las clases sociales, la hegemonía del trabajo inmaterial, y las formas de la toma de decisión fundamentadas en las estructuras de red cambian radicalmente las condiciones de cualquier proceso revolucionario…» (íd.).

Para Hardt y Negri, el Movimiento Zapatista en México –con su red nacional e internacional, el proceso democrático en la toma de decisiones, sus formas horizontales de organización y la insistencia en cambiar el mundo desde abajo hacia arriba– es parte de lo que ellos llaman la "multitud". Mientras que las teorías marxistas más viejas agruparon a todos los colectivos implicados en la rebelión global en una categoría llamada "las masas", el concepto de "la multitud" reconocía la diversidad de los grupos involucrados. También difiere de la creencia marxista clásica de que la clase obrera industrial tiene que ser la vanguardia de cualquier movimiento revolucionario.

Aunque Göran Therborn no rompe tan fuertemente con el marxismo clásico, en su artículo «Class in the Twenty-First Century» publicado en la revista *New Left Review*, él ve una nueva dinámica social y geográfica emergente que rompe con el siglo xx: «La bandera roja ha pasado de Europa a América Latina, la única región del mundo donde el socialismo está actualmente a la orden del día, con los gobiernos en Venezuela, Ecuador y Bolivia que hablan del "Socialismo del siglo xxi"» (2013, p. 20). A diferencia del siglo pasado, cuando la clase obrera industrial impulsaba la política socialista, el nuevo socialismo «encontrará su base entre los trabajadores y las clases populares en toda su diversidad, los plebeyos, en lugar del proletariado» (íd.). Añade: «El "socialismo" de Morales, Correa y Chávez es un nuevo fenómeno político, que hace hincapié en su independencia de los modelos eurásicos izquierdistas del siglo xx y es al mismo tiempo bastante heterogéneo» (íd.).

Orlando Núñez Soto toma un rumbo algo diferente en la caracterización de las luchas sociales y económicas actuales mediante el concepto de Carlos Marx de «productores asociados libremente organizados» (ob. cit., p. 16). El término originalmente significaba que los trabajadores en una sociedad socialista operarían las fábricas y los lugares de trabajo, y establecerían el orden para el Estado y la economía como un todo. Hoy Núñez Soto sostiene que hay una «vía asociativa hacia el socialismo»,

un camino al socialismo que es construido por los productores desde abajo (ibíd., p. 18).

Núñez Soto señala que en la mayoría de los países del tercer mundo el empleo formal en las empresas capitalistas de gran escala está siendo substituido por un número cada vez mayor de trabajadores por cuenta propia, muchos de los cuales son parte de lo que él llama «la economía popular». Incluye los vendedores de la calle, los micro-emprendedores, artesanos, comerciantes en mercados a cielo abierto, pescadores, madereros, pequeños granjeros, propietarios de buses y taxis, los camioneros y muchos más. Este es el nuevo proletariado que está siendo explotado en el ámbito del comercio y transporte. La mayoría de sus participantes obtienen ingresos de subsistencia, ya que venden sus servicios y mercancías en un mercado dominado y manipulado por el gran capital y las corporaciones transnacionales.

Muchos en la economía popular se convierten en productores asociados libremente organizados porque se afilian en cooperativas crediticias y de productores, asociaciones de comerciantes y campesinos y colectivos de transporte. Ejercen presión sobre el gobierno para obtener recursos y llegan a ser conscientes de su papel de explotados en la sociedad, por lo cual exigen un Estado más socializado que proporcione educación universal, servicios de salud, acceso a créditos, etc. Núñez Soto, al igual que los teóricos radicales como Marcos Arruda, de Brasil, plantea que está construyendo una economía con solidaridad social en América Latina en la cual proliferan las redes de colaboración y el intercambio equitativo entre los trabajadores y los productores independientes en la base de la economía[2].

## Impugnación del Estado

Una perspectiva innovadora sobre cómo estas fuerzas sociales y movimientos populares maniobran y participan en una lucha

2 Para una visión de un extenso trabajo de Marco Arruda sobre la economía solidaria, consulte http://programaeconomiasolidaria.blogspot.com/2010/06/economista-marcos-arruda-lanca-amanha.html

por el control del Estado proviene de Katu Arkonada y Alejandra Santillana en su artículo de 2011 de *Le Monde Diplomatique,* «Ecuador y Bolivia: el Estado, el gobierno y el campo popular en la transición». Afirman que el Estado debería ser visto como «una aspiración histórica de las organizaciones populares y los pueblos indígenas, y como un espacio abierto a la disputa política». En los últimos años, los movimientos populares han buscado alterar el Estado para hacerlo sensible a sus intereses y necesidades. Con el ascenso de los nuevos gobiernos de izquierda, la contienda sobre quién controlará el Estado está haciéndose aún más intensa. Arkonada y Santillana argumentan que «la construcción de la hegemonía surge de la sociedad civil» (íd.), lo que significa que el «campo popular» en este periodo de transición está presentando sus proyectos e intereses, con la esperanza de captar cada vez más espacio dentro del Estado. Ellos creen que las fuerzas populares se harán hegemónicas a medida que el Estado se convierta en un instrumento de «intereses colectivos», y «un proyecto político universalizante» (íd.).

Una pregunta central que confronta las fuerzas populares es ¿qué tipo de democracia debería ser construida? En la actualidad los sistemas políticos donde la nueva izquierda ha llegado al poder pueden describirse como liberales en el sentido clásico. A grandes rasgos, este paradigma liberal surgió con las filosofías de John Locke y Thomas Hobbes. Se consolidó en el siglo xviii con la revolución americana, la francesa y la industrial, basadas en los conceptos de la propiedad privada, democracia representativa, derechos individuales y el mercado como el principio organizador de la economía y la vida social (Escobar ob. cit., p. 9). Con el aumento del capital, los intereses económicos dominantes han manipulado el Estado, lo que resulta en democracias controladas donde a los ciudadanos se les permite votar cada cierto número de años por candidatos que generalmente no cues-tionan el orden capitalista o no responden a los intereses de la gente. Hoy en América Latina existe un creciente desencanto con esta forma de gobierno liberal y democracia representativa.

Las fuerzas populares están concibiendo una democracia que sea más sustantiva, integral y participativa, y que comience a nivel local. Como nunca antes, el auto-gobierno comunal está siendo adoptado en América Latina. Lo vemos en las comunidades indígenas de Bolivia y los zapatistas de México en el estado de Chiapas. En el 2006, los ciudadanos de Oaxaca tomaron el control de la capital del estado y formaron la Asamblea General de los Pueblos de Oaxaca que mantuvo a raya a las fuerzas federales por varios meses de una manera que recuerda a la Comuna de París de 1871. Durante la última década y media, cientos de municipalidades brasileñas han puesto en marcha los presupuestos participativos para involucrar a las comunidades locales en las asignaciones de los fondos de la ciudad. Las comunidades venezolanas han fundado más de 30.000 consejos comunales de vecinos organizados. Y por primera vez en Venezuela, luego en Bolivia y Ecuador, las asambleas constituyentes han redactado nuevas constituciones que permiten mayor participación popular y ciudadanía plena para todos los grupos étnicos que habían sido marginados en el pasado (Roger Burbach, Michael Fox y Federico Fuentes 2013, pp. 7-8).

Una característica central de los tres gobiernos suramericanos comprometidos con la bandera del socialismo es que apoyan los procedimientos democráticos. Durante los catorce años de Hugo Chávez en el poder, a partir de su primera elección presidencial, hubo dieciséis elecciones o referéndums, mientras que durante los siete años de Evo Morales ha habido siete y durante los seis años de Rafael Correa han ocurrido ocho.

El compromiso con los procedimientos democráticos significa que el Socialismo del siglo XXI en América Latina está vinculado con el ciclo electoral. Existe una probabilidad de que en Venezuela, Bolivia o Ecuador, los presidentes en funciones o sus sucesores designados sean eventualmente sacados del poder. Esto marcará una nueva fase impredecible en la lucha por el socialismo. ¿Los nuevos líderes no socialistas tratarán de revocar las profundas reformas de sus predecesores o tendrán que aceptar muchos de los cambios, particularmente las reformas económicas

que han beneficiado a las clases populares? En este caso, ¿los nuevos candidatos abiertamente socialistas recuperarían la oficina presidencial en futuras elecciones?

## La renovación del Socialismo Cubano

Aquí es importante hablar de la trayectoria del socialismo en Cuba y su relación con el Socialismo del siglo xxi. Aurelio Alonso, sub-director de la revista *Casa de las Américas,* en Cuba, hace una distinción entre el socialismo en el siglo xxi vs. Socialismo del siglo xxi. Esta diferencia en la redacción refleja el hecho de que el socialismo que se está construyendo en América Latina es único para el nuevo milenio mientras que en Cuba tiene una trayectoria mucho más larga. Alonso (entrevista personal, 12 de abril del 2012) expresa que «el punto de partida» es diferente para Cuba y el resto de América Latina, tanto en los términos del tiempo como en cuanto a la política:

> El proceso cubano hoy día es un intento de avanzar el socialismo que triunfó en el siglo xx mientras en América Latina, en general, la izquierda está en una lucha prolongada con la oligarquía para construir un nuevo Socialismo del siglo xxi (íd.).

El socialismo tiene protagonistas y antagonistas muy diferentes en cada región. Para Cuba, la oposición no es la oligarquía sino la burocracia y elementos dentro del partido comunista que desean mantener el viejo orden del siglo xx con una economía centralizada y un Estado autoritario.

Cuba es también diferente del continente latinoamericano puesto que su trayectoria histórica se relaciona con los otros socialismos sobrevivientes del siglo xx, en particular los de China y Vietnam. Los tres países en sus primeras etapas adoptaron el modelo soviético de manera diversa en la centralización de sus economías y la propiedad estatal de los medios de producción. El mercado jugó sólo un papel marginal ya que el Estado fijaba

los precios y emitía planes quinquenales para determinar las metas de producción.

Los dos países asiáticos cambiaron, mucho antes que Cuba, en establecer economías de mercado; China, que comenzó en 1978 con el gobierno de Deng Xiaoping con sus políticas de "modernización", y Vietnam en 1986 con el programa de "renovación" que adoptó ante la escasez generalizada de alimentos y el hambre. Ambas eran sociedades mayoritariamente rurales en el momento, y muchas de las primeras reformas fueron dirigidas en el campo y rápidamente tuvieron éxito en incrementar la producción agrícola. Aunque sólo un cuarto de la población cubana es rural, las primeras reformas económicas estaban dirigidas para dar rienda suelta a la agricultura mediante la concesión de parcelas de 10 hectáreas en usufructo a los pequeños productores, quienes vendían una parte de sus productos en el mercado libre. Y al igual que China, el gobierno cubano alentó a la elaboración de alimentos y a la industria ligera rural a través de empresas municipales y cooperativas que también operan en el mercado abierto. Las medidas que permiten las ventas de casas y automóviles, junto con la creación de 171 categorías de empleos por cuenta propia, son diseñadas para colocar muchas de las empresas y actividades económicas menores –que van desde taxis y barberías hasta restaurantes y vendedores de productos– en manos de los propietarios independientes, comerciantes y productores, quienes fijan sus propios precios de mercado[3].

China, Vietnam y Cuba comparten la creencia de que el mercado no debería identificarse exclusivamente con el capitalismo. El mercado funcionó en las sociedades feudales y puede ayudar a distribuir los recursos de manera eficiente en una economía socialista. Pero a las personas no se les puede dar rienda suelta para que dominen y manipulen el mercado. El mercado debe ser regulado.

3 Ver Burbach (2001, capítulo 6) para una discusión más extensa de las economías alternativas.

La dirigencia cubana no expresa un punto de vista oficial sobre la acumulación a gran escala de capital privado y el surgimiento de una nueva burguesía en China. Pero de manera informal, los académicos cubanos e incluso algunos líderes del partido reconocen que los extremos de riqueza y pobreza están creciendo en China y que la nueva burguesía tiene una presencia dentro del partido comunista chino. En este punto los cubanos afirman que su proceso de reformas será diferente tanto de la experiencia china como la de Vietnam, porque ellas son «sociedades asiáticas», mientras que Cuba está firmemente arraigada en la «tradición occidental». Hay diferencias importantes en la cultura, la historia, las perspectivas sobre el liderazgo, y el papel de los campesinos y los trabajadores. Las diferencias en la geografía y el tamaño de las poblaciones también tienen un gran peso en determinar qué tipos de economía e instituciones políticas evolucionan bajo el socialismo de mercado en cada país (Julio Díaz Vásquez 2011, p. 128 y Juan Valdés Paz, entrevista personal, 7 de abril del 2012).

Las discusiones críticas están sucediendo en Cuba sobre cómo "actualizar" la economía. Camila Pinerio Harnecker en su capítulo en este libro describe tres posiciones fundamentales: la posición del estatista que busca perfeccionar el socialismo de Estado de arriba hacia abajo, la posición economista que aboga por el socialismo del mercado, y la posición autogestionaria que argumenta a favor de las cooperativas y la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.

Mientras que el debate dentro del gobierno y el Partido Comunista Cubano sobre la dirección de la economía es amplio, el liderazgo ha dejado claro que Cuba seguirá siendo un Estado con un solo partido. En este aspecto Cuba se diferencia de las sociedades socialistas emergentes en el resto de América Latina que están comprometidas con la celebración de elecciones nacionales multipartidistas. Sin embargo, importantes cambios están ocurriendo dentro del aparato político y estatal. De acuerdo con Juan Valdés Paz, un asesor de varios funcionarios del gobierno, «con la salida de Fidel Castro y las limitaciones de Raúl, quien

está ahora en sus 80, una nueva generación está comenzando a destacar que actuará más colectivamente» (entrevista personal, 7 de abril del 2012). Raúl ha anunciado que se retirará en el 2018 y Miguel Díaz Canal, quien tiene unos 50 años –con amplia experiencia en el Partido Comunista y el Estado, en particular a nivel provincial–, es el heredero aparente como el nuevo vice-presidente. La legislación está avanzando en la propia Asamblea Nacional que limitaría todos los cargos gubernamentales de nivel superior a dos mandatos de cinco años. La propia Asamblea Nacional es cada vez más importante como centro de debate y discusión sobre las políticas, mientras que la elección de los delegados es más competitiva que en el pasado.

## Extraccionismo y socialismo

El talón de Aquiles de estos procesos contra-hegemónicos y anti-sistémicos es la dificultad de romper con el viejo modelo económico. Los nuevos gobiernos de izquierda dependen en gran medida de las exportaciones de extracción: el petróleo en Venezuela y Ecuador, gas natural y minerales en Bolivia. El sociólogo Raúl Zibechi (2011, p. 9) sostiene que la dependencia de las exportaciones extractivas significa que países como Bolivia y Ecuador se encuentran sumidos en una segunda fase del neoliberalismo y no han escapado del desarrollo capitalista dependiente. Pero esta crítica es demasiado dura y absoluta. Las economías de América Latina siempre han sido impulsadas por las exportaciones de extracción. Esperar que esto cambie en más o menos una década no es realista, especialmente en un sistema global dominado por el capital transnacional. Lo que estamos presenciando en el corto plazo es la determinación de estos países de capturar una porción mucho mayor de las rentas provenientes de las exportaciones y usar este ingreso para ampliar los programas sociales y fomentar el desarrollo endógeno. Zibechi está aprovechando el debate dentro de la izquierda sobre cómo explotar estos recursos naturales, con muchas organizaciones

indígenas y ecológicas que insisten en que la tierra no debería ser arrasada y que el medio ambiente debe ser respetado.

En el ámbito del comercio internacional, los países de orientación socialista están promoviendo políticas innovadoras. En el 2004, Venezuela y Cuba fundaron la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que fomenta el "comercio justo" no el "comercio libre", y promueve la integración a través de la complementariedad y la solidaridad. Bolivia se unió en el 2006 y más tarde Nicaragua, Ecuador y cinco países del Caribe.

El intercambio de personal médico cubano por petróleo venezolano es sólo un primer ejemplo del tipo de acuerdo alcanzado en el ALBA. Cuba y Venezuela también han colaborado en el ALBA para alfabetizar a la gente de otros países miembros del ALBA, como Bolivia. El concepto clave es comerciar e intercambiar los recursos en aquellas áreas donde cada país tiene fortalezas complementarias y hacerlo sobre la base de la justicia, en vez de la de los precios determinados por el mercado (Portal ALBA-TCP 2009).

Junto con estas iniciativas a nivel económico, un diálogo transformador y radical, que no puede ser explícitamente socialista pero que es anti-sistémico, se está llevando a cabo en las bases. La sociedad civil y los movimientos locales están cuestionando el proceso de desarrollo mismo porque daña el medio ambiente y está íntimamente ligado al capitalismo. Los movimientos sociales y muchos de los nuevos gobiernos de izquierda se han enfrentado cada vez más con sus gobiernos respectivos por sus proyectos de desarrollo. En Bolivia la disputa sobre una carretera que uniría las partes del país que antes estaban desconectadas, pero que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis), planteó preguntas fundamentales sobre los problemas del desarrollo, la autonomía indígena y los derechos de la Madre Tierra (Federico Fuentes 2010a, 2010b y 2011).

En Ecuador los movimientos sociales, incluso después de la rotunda reelección de presidente Correa en febrero del 2013, continúan con la crítica de sus políticas de explotación del petróleo

y los recursos minerales del país a expensas de las comunidades locales. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), principal organización indígena en ese país, está desafiando abiertamente el enfoque desarrollista de Correa en la minería, los derechos al agua y la explotación de las reservas de petróleo en una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo.

El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera le da un giro positivo a estos acontecimientos y afirma que estos conflictos son inherentes en un proceso de transformación. Las fuerzas populares tendrán diferentes facciones que tratan de promocionar sus intereses particulares y visiones de donde desean que la sociedad vaya. El vicepresidente denomina a estos conflictos «tensiones creativas» e incluso argumenta que son esenciales para que se produzca el progreso social y político (García Linera 2011).

Venezuela hizo avances significativos durante los ocho años después del llamado de Chávez por el Socialismo del siglo XXI en el Foro Social Mundial en Brasil, a principios del 2005. Luego ese año instó a los ciudadanos a formar los Consejos Comunales. La Ley de Consejos Comunales definió a estos consejos como «instancias para la participación, la articulación y la integración entre las diversas organizaciones comunitarias, los grupos sociales y ciudadanos, que permiten a la gente organizada ejercer directamente la gerencia de las políticas y proyectos públicos» (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 2009). Hasta la fecha se han formado más de 30.000 consejos comunales. Las cooperativas son también una forma fundamental de construir el socialismo desde abajo. El camino al socialismo, sin embargo, está lleno de dificultades, sobre todo ahora que la escasez y la inflación se han apoderado de la economía.

A pesar de estos problemas, y contrario a la opinión de los críticos liberales que censuraron su «gobierno autoritario», Hugo Chávez dejó un legado político, social y económico que está imbuido de praxis socialista. Su sucesor, Nicolás Maduro, es un líder dinámico de origen obrero y sindical que se desempeñó

como ministro de Relaciones Exteriores hasta convertirse en vice-presidente. Al igual que Chávez, está decidido a llevar adelante la lucha por el socialismo democrático.

## Dos, tres, muchas transiciones al socialismo

Este es un periodo de turbulencia y transiciones. No es una era de revolución armada como fue el siglo pasado. El socialismo en la América Latina del siglo xxi es parte de un proceso complejo de cambio que recorre la región. Cuba se esfuerza por actualizar su economía mientras en el continente suramericano, la bandera socialista está desplegándose a ritmos muy distintos. En Venezuela, la búsqueda del socialismo es más avanzada política y económicamente, mientras que en Ecuador el concepto del socialismo se menciona con poca frecuencia en el discurso público, debido en parte a la amplia brecha entre los movimientos sociales y la autoproclamada «revolución ciudadana» de Correa (2012). Bolivia ocupa una posición intermedia en la que los debates innovadores están teniendo lugar dentro y entre los movimientos sociales y gubernamentales que relacionan el socialismo al concepto indígena del *buen vivir*.

El socialismo está haciendo acto de presencia a través de una variedad de actores sociales. En Chile, la rebelión estudiantil del 2011 encendió los movimientos sociales chilenos, que ahora están replanteando el legado socialista del país. En Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la mayor organización social en el hemisferio, continúa apoyando el socialismo en su plataforma y en las prácticas cotidianas de sus asentamientos de reforma agraria. No se parece a un Estado paternalista, como lo demuestra su crítica frecuente de las políticas de los ex presidentes Lula da Silva y Dilma Rouseff. El MST busca maximizar la participación de sus miembros en la gestión de sus propias cooperativas y comunidades (Bruce Gilbert 2006, pp. 73-86).

Mientras que la redacción no es explícitamente socialista, las constituciones de Bolivia y Ecuador piden a la gente vivir en armonía

con la «Pachamama», la Madre Tierra, y el *buen vivir*, una cosmovisión holística del mundo donde las personas se esfuerzan por la armonía. Es más que un sueño vano por cuanto influye en las políticas contemporáneas en oposición al desarrollo capitalista. Por ejemplo, la soberanía alimentaria como se concibe en los países andinos, se adapta al *buen vivir*. Rompe con el concepto tradicional de desarrollo ya que afirma que la producción de alimentos no debe ser impulsada simplemente por el mercado, especialmente el mercado internacional. La soberanía alimentaria significa que la gente tenga acceso a los alimentos nutritivos y saludables que sean producidos a nivel comunal por productores locales de conformidad con las necesidades y culturas locales, sean ellos andinos o no. Como afirma Francisco Hidalgo Flor, un sociólogo ecuatoriano en «Tierra: Soberanía Alimentaria y el Buen Vivir» (2011), «el Estado tiene la responsabilidad de estimular la producción (…) para proporcionar apoyo a los pequeños y medianos productores», y asegurar que tengan asistencia técnica adecuada y crédito. La tierra debe ser controlada o ser propiedad de quienes la trabajan.

La promoción de la soberanía alimentaria y la producción local son parte del esfuerzo para construir economías solidarias, estén ellas en Brasil con el MST o en Bolivia con las comunidades indígenas. De hecho, la expansión de las economías solidarias en países de orientación socialista y capitalista por igual, es la clave para la construcción de sociedades socialistas de abajo hacia arriba y romper con el socialismo de Estado del siglo xx. Los trabajadores administran las cooperativas, las empresas de propiedad municipal y comunitaria, las campañas de comercio, justo diseñadas para ayudar a los pequeños exportadores de productos básicos y a las cooperativas, los bancos de micro-créditos y los fondos comunales que hacen préstamos a los pequeños productores (a menudo en el sector informal). Todas estas actividades y muchas otras están generando economías alternativas que están afianzándose en América Latina así como en otras partes del mundo. La transición del capitalismo a economías socialistas se producirá como la transición del feudalismo al capitalismo:

será un proceso gradual, en el que las actividades alternativas, políticas y sociales así como económicas, se afianzarán a nivel local y socavarán el orden existente[4].

«América Latina está viviendo una crisis de hegemonía de proporciones enormes», escribe Emir Sader en *El nuevo topo* (2011, p. 104). Agrega que la lucha es gramsciana, «una batalla prolongada por la hegemonía, o guerra de posición» (ibíd., p. 158). Este es ciertamente un periodo turbulento de transición. El reto para la izquierda y los movimientos sociales es hallar el balance apropiado entre la insistencia de los nuevos gobiernos de izquierda en avanzar hacia sociedades post-neoliberales y socialistas sin profundizar las divisiones que permitan un fortalecimiento de la derecha.

En resumen, América Latina es un caldero de efervescencia política y social. No hay leyes discernibles de la historia que impulsen esta agitación, pero el socialismo es un componente central del fermento que está siendo provocado por los movimientos sociales y las fuerzas populares. Como señala Steve Ellner en la introducción, «la izquierda radical del siglo xxi es ciertamente ecléctica y abarca e incluso celebra un enfoque de ensayo y error para el socialismo, carente de claridad ideológica, que se ve como un correctivo al dogmatismo». En lugar de un enfrentamiento histórico lineal entre el capitalismo y el socialismo que el marxismo clásico previó, estamos ahora presenciando una plétora de luchas y confrontaciones que zigzaguean a través de las páginas de la historia: entre el liberalismo clásico y las políticas post-liberales, el extractivismo y el post-desarrollo, la agroindustria transnacional y la soberanía alimentaria, el capitalismo global y las economías solidarias, el patriarcado y el feminismo, sistemas educativos excluyentes y centros de aprendizaje democráticos libres, estados nacionales dominados por los descendientes de los colonizadores y los nuevos estados plurinacionales.

4 Ver Burbach (2001, capítulo 6) para una discusión más extensa de las economías alternativas.

En lugar de un solo horizonte socialista, una multiplicidad de grupos y movimientos están ahora imaginando nuevas utopías. «Un mundo donde quepan muchos mundos», proclaman los zapatistas. En el corto plazo, el Socialismo del siglo XXI pudiera tener dificultades o experimentar retrocesos en cualquiera de los países donde la bandera socialista se ha plantado, Venezuela, Bolivia, Ecuador, o menos probable, Cuba. Pero no desaparecerá. El socialismo está muy arraigado en las aguas históricas del hemisferio y la necesidad de alternativas a un orden capitalista global turbulento es cada vez mayor.

## Referencias

ARKONADA, Katu y Alejandra Santillana (2011, 13 de septiembre). «Ecuador and Bolivia: The State, the Government and the Popular Camp in Transition». En *Rebelión* [página en línea]. Recuperado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=135502

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2009). «Ley Orgánica de los Consejos Comunales». En *Infocentro* [página en línea]. Recuperado de http://infocentro.gob.ve/archivos/locc.pdf

BURBACH, Roger (2001). Globalization and Postmodern Politics: From Zapatistas to High Tech Robber Barons. Londres: Pluto Press.

BURBACH, Roger, Michael Fox y Federico Fuentes (2013). *Latin America's Turbulent Transitions: The Future of Twenty-First-Century Socialism*. Londres: Zed Books.

Canadian Centre for Policy Alternatives (2009, abril). «Latin American Presidents Address the World Social Forum». En *CCPA Monitor* [página en línea]. Recuperado de http://www.asadismi.ws/latinamericanrevolution1.html

CORREA, Rafael (2012, septiembre-octubre). «Ecuador's Path. Interview». *New Left Review*, Londres (77), pp. 89-111.

«Designing Socialism: Visions, Projections, Models» (2012, abril). *Science and Society*, Brooklyn (Nueva York), *76* (2).

DÍAZ VÁZQUEZ, Julio (2011, abril-junio). «Un balance crítico sobre la economía cubana. Notas sobre dirección y gestión». *Temas (Otros socialismos)*, La Habana, (66), pp. 123-133.

ESCOBAR, Arturo (2010). «Latin America at a Crossroads». *Cultural Studies,* Londres, *24* (1), pp. 1-63. En *The University of North Carolina* [página en línea]. Recuperado de http://www.unc.edu/~aescobar/text/eng/escobar.2010.CulturalStudies.24-1.pdf

FUENTES, Federico (2010a, 22 de mayo). «Bolivia: When Fantasy Trumps Reality». En *Green Left Weekly* [página en línea]. Recuperado de http://www.greenleft.org.au/node/44208

_____ (2010b, 15 de agosto). «Bolivia: Social Tensions Erupt». En *Green Left Weekly* [página en línea]. Recuperado de http://www.greenleft.org.au/node/45140

_____ (2011, 24 de enero). «Fuel Backdown Shows Pressures». En *Green Left Weekly* [página en línea]. Recuperado de http://www.greenleft.org.au/node/46490

GARCÍA LINERA, Álvaro (2011). *Las tensiones creativas de la revolución: La quinta fase del proceso de cambio*. La Paz: Vicepresidencia del Estado.

GILBERT, Bruce (2006). «Workers' Power and Socialism: A Study of Brazil's Movement of Landless Workers». *Situations, Project of the Radical Imagination*, Nueva York, *1* (2), pp. 73-86. En *Situations, Project of the Radical Imagination* [revista en línea]. Recuperado de http://ojs.gc.cuny.edu/index.php/situations/index

HARDT, Michael y Antonio Negri (2005). *The Multitude: War and Democracy in the Age of Empire.* Nueva York: Penguin Books.

HARNECKER, Marta (2012, 26 de marzo). «Cinco reflexiones sobre el Socialismo del siglo XXI». En *Rebelión* [página en línea]. Recuperado de http://www.rebelion.org/docs/147047.pdf

HIDALGO FLOR, Francisco (2011, 14 de octubre). «Tierra: soberanía alimentaria y buen vivir». En *La línea de fuego* [página en línea]. Recuperado de http://lalineadefuego.info/2011/10/14/tierra-soberania-alimentaria-y-buenvivir-por-francisco-hidalgo

NÚÑEZ SOTO, Orlando (2012). «La vía asociativa y autogestionaria al socialismo». *Revista Correo*, Managua, *4* (24), pp. 30-45.

OSAVA, Mario (2009, 30 de enero). «World Social Forum: Presidents for Feminist Socialism». En *Global Issues* [página en línea]. Recuperado de http://www.globalissues.org/news/2009/01/30/483

SADER, Emir (2011). *The New Mole: Paths of the Latin American Left*. Londres: Verso.

SOJO, Cleto A. (2005, 31 de enero). «Venezuela's Chavez Closes World Social Forum with Call to Transcend Capitalism». En *Venezuelanalysis.com* [página en línea]. Recuperado de http://venezuelanalysis.com/print/907

THERBORN, Göran (2013). «Class in the Twenty-First Century». *New Left Review*, Madrid (78).

WALDER, Paul (2011, octubre). «El movimiento social empuja el cambio político». *Punto Final* [revista en línea]. Recuperado de http://www.puntofinal.cl/744/movimiento_social.php/

ZIBECHI, Raúl (2011, 5 de agosto). «Ecuador: A New Model of Domination». *Latin America Bureau*, Londres.

# Breves hipótesis sobre el Estado, la democracia y la revolución en América Latina hoy

D. L. Raby

Los procesos de transformaciones progresistas de la América Latina contemporánea son, sin lugar a dudas, el acontecimiento más alentador en un escenario mundial caracterizado por la intensificación de la explotación, la desigualdad, la exclusión y la guerra. Las transformaciones de América Latina varían en gran medida en grados de radicalismo, pero son cada vez más interrelacionadas y articuladas a nivel regional en una variedad de nuevos proyectos e instituciones. En los casos más avanzados el objetivo de "Socialismo del siglo XXI" se proclama, mientras que otros se limitan (hasta el momento) a los valores de la democracia, la soberanía y la justicia social; y en varios países son apenas ideales de labios para afuera, mientras en la práctica mantienen los vínculos con el neoliberalismo y la hegemonía estadounidense.

La tendencia, común en los análisis tanto de los liberales como de los marxistas (y en la mayoría de los artículos en esta colección), es la de dividir estas transformaciones en dos categorías –reformistas y revolucionarios, socialdemócratas y populistas, "buenos" y "malos"– es sólo parcialmente válida. Es cierto que

hay grandes diferencias entre el alcance y la radicalidad de los cambios en Venezuela, Bolivia y Ecuador en comparación con los de Brasil, Argentina y Uruguay (por ejemplo), pero es notable que estos dos grupos de países proporcionan casi invariablemente apoyo diplomático mutuo en los momentos cruciales. En los últimos años, los líderes de los tres últimos países de hecho han ido más allá del mero convencionalismo diplomático, al dejar claro su apoyo político en primer lugar para Hugo Chávez (en octubre del 2012) y ahora a Nicolás Maduro (abril del 2013) en las elecciones venezolanas. Todos ellos, junto con otros, como Cuba y Nicaragua, han sido protagonistas activos en la independencia frente a Washington y en la creación de nuevos instrumentos de integración regional como el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), Mercosur (Mercado Común del Sur), Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), Telesur, el Banco del Sur y la moneda común, sucre, lo que facilita la consolidación de los procesos más avanzados en las naciones centrales del ALBA. Sería más exacto sugerir que hay una tendencia regional general a la reafirmación de la soberanía y la justicia social, la cual proporciona un entorno favorable para transformaciones más radicales en algunos países.

Dicho esto, no hay duda de que la clave de todo el proceso regional y el foco principal de este análisis, se encuentra en los países del trío: Bolivia, Ecuador y Venezuela, sobre todo en el último. No es casualidad que la trágica muerte de Hugo Chávez dio lugar a una expresión sin precedentes de dolor, tristeza y solidaridad continental (e incluso mundial). Chávez adquirió una estatura como líder popular revolucionario y estadista sin precedentes, excepto por Fidel Castro y Che Guevara[1]. Tanto los movimientos populares como los dirigentes políticos de todo el

1 Cabe destacar que el punto de referencia de Cuba es más importante de lo que muchos están dispuestos a reconocer: la supervivencia de la isla socialista en solitario a través de la sombría década de 1990 ofrece un rayo de esperanza para aquellos que, como Chávez, se esforzaron por crear una nueva alternativa anticapitalista en el hostil desierto neoliberal.

mundo han tenido que reconocer que Chávez era el principal arquitecto y la inspiración de una nueva coalición anti-imperialista, que parecía inconcebible en el mundo unipolar del "Nuevo Orden Mundial" de George Bush padre. Chávez y la Revolución Bolivariana rescataron el concepto de socialismo desde el basurero de la historia y de las manos de las sectas de la izquierda tradicional, un grupo cada vez más aislado por su incapacidad para entender que la praxis política no puede ser derivada en forma lineal desde principios abstractos.

¿Cuál es el significado exacto del proceso venezolano y, para el caso, los procesos de Bolivia y Ecuador? ¿Es socialista de hecho o "en transición" hacia el socialismo? O, como muchos críticos de izquierda siguen manteniendo, ¿no será más que una nueva versión del reformismo socialdemócrata? La re-nacionalización efectiva de la industria petrolera, la nacionalización de varias otras industrias de recursos, servicios públicos y varias empresas manufactureras, las misiones sociales, la ruptura política y militar con Estados Unidos, todas estas acciones sugieren algo mucho más radical, en efecto revolucionario. Sin embargo, como se ha señalado en repetidas ocasiones, gran parte de la economía venezolana (boliviana, ecuatoriana) sigue siendo claramente capitalista, y cada proceso electoral representa una amenaza para la continuación del proceso. También, muchos marxistas tradicionales cuestionan el carácter socialista del proceso, ya que su apoyo más fuerte está en las masas populares heterogéneas de los barrios y en las filas de los militares, más que el proletariado industrial clásico.

Estas cuestiones no se pueden resolver de manera satisfactoria si permanecemos prisioneros de categorías y metodologías obsoletas. La mayoría de los críticos mantiene todavía la posición de que: a) el socialismo supone el control total por un aparato burocrático central, o b) el polo opuesto, que éste sólo se puede lograr mediante la completa destrucción/disolución del Estado. También la fidelidad de los venezolanos (y de los bolivianos, ecuatorianos, etc.) a los procedimientos electorales y constitucionales es vista, por muchos, como un indicador del

liberalismo burgués y una señal de que el proceso bolivariano puede sufrir la misma suerte que la Unidad Popular chilena y Salvador Allende.

Sería, por supuesto, absurdo negar que el proceso está en condición de cambio constante y que la amenaza de la desestabilización y de la derrota está presente siempre. Pero la experiencia de la Unión Soviética y Europa del Este sin duda demuestra que incluso, después de la revolución violenta y décadas de esfuerzos para construir un orden socialista/comunista, la restauración capitalista es todavía posible. En Cuba, un modelo socialista independiente sobrevive pero su carácter y las perspectivas continúan siendo objeto de un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional, y en Nicaragua, la revolución armada y una década de experiencia democrática popular no fueron suficientes para impedir el sabotaje y la derrota (aunque seguía siendo una base para la recuperación del proceso en los últimos años en el entorno favorable proporcionado por la Venezuela revolucionaria y el ALBA). Entonces, ¿qué es el socialismo, qué es la revolución, y cómo van a ser alcanzados en un mundo todavía sujeto a la hegemonía imperialista?

El primer tema crucial para superar es el viejo esquema trotskista/estalinista, en el debate sobre el "socialismo en un solo país". Como argumenta el teórico cubano Jesús Arboleya Cervera (2007, p. 23), tanto Trotsky como Stalin estaban equivocados: era de hecho posible comenzar la construcción del socialismo en un solo país, pero para el avance continuado del proceso era igualmente esencial el internacionalismo y el apoyo dinámico a los movimientos revolucionarios de otros países (y no la mera defensa diplomática y militar de los intereses del Estado soviético). En segundo lugar, y estrechamente vinculado a lo anterior, «No hay tal cosa como "la transición al socialismo", porque el socialismo es en sí mismo un proceso de transición. La característica (esencial) del socialismo es avanzar conscientemente hacia la sociedad sin clases...» (ibíd., p. 27).

En otras palabras, como propongo en mi libro *Democracia y Revolución: América Latina y el socialismo hoy* (Raby 2008,

capítulo 3), lo que es crucial es la existencia de un *Estado de poder popular revolucionario*: una estructura política en la que un gobierno que represente a las clases populares es capaz de hacerse con el control de los recursos naturales esenciales y medios de producción, con una fuerza militar a su servicio y una población movilizada que lucha constantemente para defender el poder revolucionario y conducirlo hacia adelante. La creación de estructuras burocráticas para institucionalizar la producción socializada y administrar el Estado revolucionario se necesita pero, debe ser objeto de una vigilancia democrática permanente; por otro lado, nunca será posible para este Estado revolucionario "extinguir" el capitalismo, mientras que el orden mundial capitalista/imperialista prevalece en otras partes. La propagación del proceso revolucionario a los países vecinos es por supuesto deseable, pero incluso la extensión de la revolución a todo el continente latinoamericano no resolvería el dilema subyacente del poder socialista transitorio/transición incompleta, mientras el capitalismo domine el resto del globo.

Una vez que esta realidad esencial se asimila, es posible analizar la Revolución Bolivariana (y procesos similares) desde una perspectiva diferente. La toma violenta del poder no es necesaria ni suficiente para que un proceso sea considerado legítimamente como revolucionario, y la completa o casi completa expropiación de la empresa privada no es necesaria para que pueda ser categorizado como socialista. Pero igualmente, esto no quiere decir que las tímidas reformas parciales o la aceptación de los mecanismos del mercado capitalista como el imperativo económico *predominante* sean viables. Tampoco significa que las mayorías electorales y votaciones parlamentarias *por sí solas* puedan superar los arraigados intereses de clase.

Por el contrario, la estrategia de la nueva izquierda latinoamericana –iniciada por Hugo Chávez y el movimiento bolivariano– es una verdadera "guerra de posición" gramsciana, una movilización de los pobres y desposeídos en una unidad sostenida y sistemática para transformar la sociedad y para ocupar y transformar el Estado a su imagen y semejanza, mediante

elecciones y procedimientos constitucionales, pero también es el desarrollo de nuevas estructuras de poder popular y la organización social para imponer su voluntad sobre las fuerzas e intereses de clase previamente dominantes. La estrategia se basa en la acumulación constante de las fuerzas populares en relación con el uso calculado de todos los medios legales y constitucionales para adquirir legitimidad. La participación electoral es un componente esencial –de hecho, las elecciones y los referendos se multiplican y los sistemas de votación son más rigurosos– pero al mismo tiempo, tanto la organización de masas como la capacidad del gobierno popular para el uso legítimo de la fuerza se maximizan. Lejos de depender de ilusiones pacifistas, la estrategia implica una sistemática preparación para la confrontación abierta, pero atribuye a la oposición reaccionaria la responsabilidad por el inicio de la violencia, y busca minimizar la intensidad de ésta.

Esta estrategia surgió a partir de un reconocimiento de la imposibilidad de la insurrección armada: el extraordinario éxito de Cuba se repitió sólo una vez (y temporalmente) veinte años después en Nicaragua, y el trágico fracaso de las guerrillas revolucionarias en otras partes demostró el carácter excepcional de estas dos experiencias. Con el fracaso de los dos levantamientos militares venezolanos, en 1992 Chávez y sus camaradas bolivarianos se vieron obligados a reconocer que incluso con el apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas, la insurrección era problemática; no había otra alternativa a una lucha fundamentalmente *política* por la hegemonía.

Pero, para insistir, la adopción de una estrategia esencialmente política y pacífica no implicaba la aceptación del reformismo o del parlamentarismo convencional. Más bien, suponía la organización sistemática y la movilización de las clases populares para recuperar la democracia de las manos de las élites liberales: a disputar y ganar las elecciones, sí (y de hacerlo con una mayoría clara y, donde sea posible, masiva); pero a continuación, a partir del éxito electoral, a ocupar y transformar las instituciones

del Estado, creando al mismo tiempo nuevas instituciones de poder popular. Como lo formula Emir Sader:

> En esta tercera estrategia de la izquierda latinoamericana, no hay alianza subordinada con sectores burgueses como la hubo en la estrategia reformista- ni se aniquilan las clases dominantes - como en la estrategia insurreccional. Más bien, hay una batalla prolongada por la hegemonía, o la guerra de posición, en el sentido gramsciano (2011, p. 138).

Un componente crucial de esta estrategia fue el concepto del «poder constituyente» formulado por Antonio Negri (1999) y la necesidad de una nueva Constitución: no sólo como un documento legal sino como la expresión de la refundación de la república por el poder soberano del pueblo. No es casual que esto también haya sido una característica clave de los procesos de Bolivia y Ecuador, y sea una exigencia central de los movimientos populares en otros países.

Es central en este proceso la transformación de las fuerzas armadas y su progresiva participación en todos los espacios sociales y políticos. Esto implicó la insurrección, la práctica social (comenzando poco después de la primera toma de posesión de Chávez en el "Plan Bolívar 2000" y continuando en las "misiones"), y la educación ideológica para aceptar una nueva identidad como "el pueblo en armas". En lugar de su papel tradicional como guardias pretorianas de la oligarquía o mercenarios del imperialismo, las Fuerzas Armadas se convirtieron en guardianes anti-imperialistas de la Nación concebida como una colectividad popular. Como lo declaró Chávez, «esta es una revolución pacífica, pero armada».

Hoy en Venezuela los miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran entre los más vigorosos defensores de la revolución y del socialismo. Sin duda, todavía hay una minoría de oficiales reaccionarios agazapados, pero el compromiso revolucionario de la mayoría parece claro; llama la atención que la oposición haya sido incapaz de movilizar cualquier apoyo militar significativo

después del año 2002. En los últimos cuatro años este proceso de transformación se ha comenzado a extender –más bien tardíamente– a la policía, con la creación de una nueva Policía Nacional Bolivariana. Cuando en el sentido weberiano el «monopolio del uso legítimo de la fuerza» está en manos socialistas revolucionarias, es sin duda problemático sostener que la República Bolivariana de Venezuela aún se pueda entender como un "Estado capitalista" en el sentido que normalmente se da a este concepto.

Una breve revisión del registro cronológico confirma que el proceso venezolano, aunque predominantemente político y constitucional, está lejos de ser totalmente pacífico. La transformación sólo puede ser entendida como el producto de una serie de enfrentamientos violentos y rupturas: el Caracazo de 1989, los dos levantamientos militares de 1992, el golpe de Estado reaccionario de abril del 2002 y su derrota, el paro patronal de la oposición en 2002-2003 y su derrota, las "guarimbas" (disturbios de la oposición) anteriores al referéndum revocatorio del 2004, y luego las guarimbas en el 2014. Tales confrontaciones y rupturas reflejan el carácter revolucionario del proceso y la realidad de la lucha para controlar diferentes aspectos del poder del Estado, es decir, la "guerra de posición" en curso. Sugerir que un proceso de este tipo es puramente "reformista" es mostrar una falta completa de comprensión de la dinámica política. Lo mismo puede decirse del proceso boliviano, con las llamadas guerras del gas y del agua, y las revueltas separatistas del 2008 en las provincias de la Media Luna que eran controladas por la oposición, y de los levantamientos repetidos en Ecuador durante varios años antes de la primera victoria electoral de Rafael Correa, seguido por el intento de golpe de Estado del 2009 en ese país. El caso de Bolivia se analiza bien en *Transiciones turbulentas de América Latina*:

> Al igual que en Venezuela bajo Hugo Chávez, el avance del gobierno del MAS en la ejecución de su mandato significó un enfrentamiento inevitable (...) Al no poder eliminar Morales en las urnas a través del referéndum revocatorio de julio de 2008,

> la oposición de derecha (en coordinación con la Embajada de Estados Unidos) inició una campaña de violencia, saqueos y ataques de los edificios del gobierno. Los prefectos de la oposición comenzaron a hablar abiertamente de la "independencia regional"... (Burbach, Fox y Fuentes 2013, pp. 90-91).

Varios oficiales militares de alto rango se negaron a obedecer a Morales, pero se encontraron con acciones decididas de parte de los movimientos sociales y de Morales, quien expulsó al embajador de Estados Unidos. Al igual que en Venezuela, la derecha fue la primera en recurrir a la violencia, al organizar una masacre paramilitar de campesinos desarmados en el Departamento de Pando, en la que al menos 13 personas fueron asesinadas; y también, como en Venezuela, esta violencia resultó contraproducente ya que la opinión se volvió contra ellos, y los militares de base exigieron la movilización para la defensa de sus hermanos y hermanas indígenas.

Aquí hay que señalar que el gobierno revolucionario boliviano, encabezado por Evo Morales, emprendió desde el principio un esfuerzo decidido para transformar las Fuerzas Armadas, al igual que en Venezuela. La primera elección de Morales fue apoyada por oficiales militares patrióticos y una de sus primeras acciones en el cargo fue despedir a cerca de 60 generales reaccionarios y reemplazarlos con oficiales progresistas. También reorganizó la Fuerza Contra-Terrorista Conjunta (FCTC) y terminó todos los lazos militares con Washington (Fuentes 2011), emulando el ejemplo de Venezuela en la concentración de la fuerza legítima en manos revolucionarias. Otro factor fundamental, subrayando los vínculos regionales de la transformación revolucionaria, fue la declaración categórica de Unasur (la recién formada Unión de Naciones Suramericanas) defendiendo la integridad territorial de Bolivia y el orden constitucional. La importancia de este tipo de enlaces internacionales y sus implicaciones políticas se hicieron más evidentes en mayo-junio del 2011, con la inauguración en Bolivia del Centro de Estudios

Estratégicos de la Defensa (CEED) para la formación de militares de varios países, entre ellos Venezuela y Cuba (íd.).

Los que persisten en la idea de que el Estado venezolano (boliviano o ecuatoriano) sigue siendo capitalista, también tienen que tener en cuenta el hecho de que las principales instituciones del capitalismo internacional –Washington, Wall Street, la ciudad de Londres, la alta gerencia de las empresas transnacionales y la Organización Mundial del Comercio– tratan a estos gobiernos con hostilidad casi implacable. Si bien a veces pueden estar dispuestos a negociar con ellos, lo hacen como hace cualquier poder cuando se enfrenta a un antagonista inflexible, sobre la base de la *realpolitik*. Ellos son muy conscientes de que estos países han reafirmado la soberanía económica nacional, recuperando el control de los hidrocarburos y otros recursos naturales, además de los servicios públicos y una serie de sectores clave de fabricación. Aquí tiene que ser señalado (en respuesta a los que desestiman la nacionalización, considerándola como meramente reformista) que antes del 2002 (con la reafirmación del control por Chávez sobre PDVSA (Petróleos de Venezuela) que llevó directamente al golpe de Estado y los posteriores paros patronales), la nacionalización era prácticamente tabú para el sistema global, excepto en el caso de las empresas en quiebra. Nacionalizar una industria importante y rentable, en el orden mundial globalizado de hoy, es una acción valiente y realmente revolucionaria, hecho radicalmente diferente a la situación de hace cuatro o cinco décadas, cuando tales acciones eran comunes incluso en Europa occidental.

Del mismo modo, antes de la nacionalización en Bolivia, aproximadamente 82 % de los ingresos del gas y el petróleo era apropiado por las transnacionales, una situación que se ha revertido casi completamente desde 2006 (Aponte-García 2013, p. 127). Bolivia también ha nacionalizado algunas concesiones mineras y la mayor parte de los sectores de telecomunicaciones y electricidad, y está promoviendo pequeñas empresas estatales en una serie de industrias (elaboración de alimentos, cartón, extracción de oro, entre otros) con el fin de convertirla

en proyectos dirigidos por las comunidades (Burbach, Fox y Fuentes, ob. cit., p. 85). En las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera:

> Hoy en día el Estado es el generador principal [de] riqueza en el país (...) Nosotros tratamos de priorizar la riqueza como valor de uso sobre el valor de cambio. En este sentido, el Estado no se comporta como un capitalista colectivo en el sentido de capitalismo de Estado, sino que actúa como un redistribuidor de la riqueza colectiva entre las clases trabajadoras y como facilitador de materiales, técnicas y capacidades asociativas para los modos de producción campesina, comunal y de artesanos urbanos (ibíd, p. 83).

En realidad, si aceptamos que el socialismo no es idéntico a la nacionalización y el control del Estado burocrático, y si el socialismo es en sí mismo una fase de transición, se vuelve necesario especificar cuáles estructuras se pueden considerar socialistas. La respuesta debe contemplar que todas las formas de economía social, todos los arreglos productivos no capitalistas constituyen elementos de socialismo en la medida en que contribuyen al proceso de transición hacia una sociedad sin clases. Ellos incluyen las cooperativas, comunas, empresas controladas por los trabajadores y las empresas nacionalizadas o municipales, esta última con diversos grados de control social y participación. La función del Estado revolucionario es proporcionar un caparazón protector contra las presiones hostiles del capital global y del sector capitalista nacional, y apoyar y facilitar el ulterior avance del proceso de transición; por otro lado, el papel del movimiento popular es la construcción de poder popular desde abajo a través de los consejos comunales, comunas y estructuras similares para sustituir constantemente por la democratización de todas las instituciones del Estado. La cuestión crucial es, por tanto, política, y en este sentido el leninismo sigue siendo válido: el sentido del socialismo es la conquista del poder político, la creación de un Estado controlado por la clase obrera (o, en

términos contemporáneos, por el pueblo, las clases populares), incluso si esa conquista es un proceso prolongado y complejo en lugar de un solo acto decisivo.

Esta es la debilidad fundamental de las teorías autonomistas que están actualmente muy en boga y que encuentran su formulación más coherente en las obras de Negri (1999) y Holloway (2002). El problema está de nuevo bien formulado por Emir Sader:

> Tanto Negri como Holloway terminan presos de un marco teórico producido por el mismo neoliberalismo –la oposición entre lo público y lo privado, el Estado y la sociedad civil (...) No es el ámbito de lo privado lo que caracteriza al proyecto neoliberal (...) lo que realmente impulsa el neoliberalismo es la "mercantilización" o "comercialización" (...) por otro lado, el polo opuesto no es realmente el Estado (...) El polo opuesto a la esfera del mercado es de hecho, la esfera pública (...) Democratizar significa la des-mercantilización, es decir reemplazar al consumidor por el ciudadano (2011, pp. 131-132).

Así, el Estado –un Estado transformado por la revolución, o lo que Thomas Muhr (2013, p. 9) llama un «Estado-en-revolución»– es esencial para cualquier proyecto genuinamente transformador (es decir, socialista). Sólo un Estado revolucionario, con la fuerza derivada del apoyo de las masas populares, el control de sectores claves de la economía y Fuerzas Armadas Revolucionarias, puede recuperar la esfera pública y combatir la tiranía mundial de la mercantilización desenfrenada, creando y protegiendo las esferas de la economía social, la justicia social y el poder popular.

Hay ciertamente un sector capitalista poderoso que es la base financiera y organizativa de la oposición. En Venezuela, controla la mayor parte del sector comercial, la pequeña y mediana industria, gran parte de la agricultura y los medios de comunicación privados. Sin embargo, ha perdido el control del petróleo, aluminio, la siderurgia, la mayoría de los servicios públicos e

industrias pesadas, de un creciente sector cooperativo agrícola, de áreas significativas de la distribución (Mercal y supermercados nacionalizados), y parte del sector bancario y de transporte. Además, ha perdido el control de las Fuerzas Armadas, gran parte de los sectores de educación, salud y vivienda, y la mayoría de su influencia en el poder judicial y otras instituciones clave. En el plano interno, de hecho, está en una situación precaria, y es muy consciente de que la mayoría de las instituciones del Estado y de los sectores estratégicos de la economía son zonas en disputa donde las fuerzas populares y revolucionarias tienen una fuerte presencia. Esto explica la intransigencia y hostilidad virulenta de la oposición a Chávez y al proceso bolivariano.

¿Por qué entonces sobrevive la oposición y cobra tanta importancia? Por dos razones: en primer lugar, porque *su fuerza ya no deriva del control del Estado venezolano, sino del apoyo político y económico en el extranjero*, es decir, del imperialismo estadounidense y sectores clave del capital transnacional; y segundo, porque los fallos y deficiencias del gobierno revolucionario le permiten mantener una base política importante, incluyendo importantes sectores de las clases populares que han sido los principales beneficiarios de la revolución. Esto se ve claramente en los resultados de las elecciones recientes, notablemente en las presidenciales de abril del 2013 cuando la oposición perdió por apenas 1,5 %. Fuera por la ausencia de Chávez con su impacto carismático, el resultado no deja de indicar un problema real. Incluso en las presidenciales anteriores, de octubre del 2012, cuando Chávez –ya gravemente enfermo– hizo un esfuerzo sobrehumano y consiguió una movilización impresionante de las bases populares, sólo obtuvo el 56 %: una mayoría que sería vista como un triunfo masivo en otros países pero que en Venezuela indicaba que después de 14 años de revolución, 43 % del electorado todavía estaba dispuesto a apoyar a un candidato elitista que representaba una amenaza directa a todo el proceso. En cambio, en las presidenciales de diciembre del 2006, Chávez alcanzó casi 63 %, lo que significa que en los últimos años la oposición ha ganado terreno, y lo ha hecho ganando a sectores importantes

de las clases populares a pesar de que éstos han sido los más beneficiados por la revolución.

Esta debilidad electoral apunta claramente a fallas por parte de la dirigencia política. Mientras que el gobierno legítimamente puede señalar el impacto de los medios de comunicación dominados por la oposición, y los actos de sabotaje en las industrias y servicios clave (apagones, explosiones ocurridas en instalaciones petroleras, el acaparamiento de algunos productos básicos), estas explicaciones no son suficientes. Si la propaganda mediática de la oposición es eficaz, y si es posible el sabotaje en una escala tal, sólo puede ser debido a deficiencias políticas y administrativas: la corrupción, la ineficiencia y el autoritarismo. Estos problemas son la causa de la constante discusión, el descontento y la polémica entre los activistas bolivarianos, y subrayan el hecho de que la transformación revolucionaria está lejos de ser completa. Afortunadamente las últimas medidas del presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno apuntan seriamente en este sentido, a la lucha contra la corrupción, contra el contrabando, por la depuración de la policía y del aparato administrativo; queda por ver hasta dónde pueda llegar en este esfuerzo de rectificación.

Esto nos lleva de nuevo al hecho de que el Estado revolucionario debe ser profundamente democrático: democrático en el verdadero sentido de expresar de hecho el poder de la gente. En palabras del propio Hugo Chávez, una democracia participativa y protagónica. Sin esto, inevitablemente se produce la tendencia a revertir las prácticas autoritarias del socialismo de Estado del siglo xx, a una cáscara burocrática cosificada que neutraliza el poder popular revolucionario. Aquí es donde es necesario insistir en el papel de los consejos comunales y las comunas como expresiones embrionarias del verdadero poder popular, tanto económico como político (o en rigor, que trascienda la separación convencional de la economía y la política). En este sentido, Thomas Muhr una vez más ofrece una formulación interesante con el concepto de "sociedad organizada", lo que significa la organización de masas y la organización colectiva del poder popular

en la construcción de las relaciones sociales no capitalistas; tal «sociedad organizada» es, pues, la antítesis de la liberal-burguesa «sociedad civil», con su base individualista y contractual (ob. cit., p. 5). No existe una fórmula sencilla que garantice el éxito de tal transformación popular-democrática: el socialismo es una fase de transición necesariamente inestable que requiere la lucha y vigilancia constante.

Este complejo proceso de múltiples facetas de transformación y de la «guerra de posiciones» gramsciana, y lo que implica, ya es objeto de un debate intenso y fructífero con participantes venezolanos como Carlos Lanz Rodríguez (2004a, 2004b), Víctor Álvarez (2010), Jorge Giordani (2009), Javier Biardeau (2007, 2009) y Haiman El Troudi (El Troudi y Monedero 2006). Aportes teóricos importantes también se han producido por los estudiosos internacionales como István Mészáros (2009), Michael Lebowitz (2006, 2010), Marta Harnecker (2007, 2008), Juan Carlos Monedero (El Troudi y Monedero, ob. cit.), el ya mencionado Thomas Muhr (2012) y este autor (Raby 2008, capítulos 3 y 7). Aunque no se refiere específicamente a Venezuela o América Latina, «la teoría co-revolucionaria» de David Harvey (2010) también es relevante.

El propio Hugo Chávez se refería con frecuencia a las obras de estos y otros teóricos, y aunque no hizo una elaboración teórica extensa sobre el nuevo socialismo, la tendencia generalizada a calificar sus ideas como una «ideología contradictoria y ecléctica» (Webber y Spronk 2013) es injustificada y se basa en una visión superficial que no tiene en cuenta la complejidad de sus contribuciones. Así, cuando Chávez se refirió al «Árbol de las Tres Raíces» –Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora–, al mismo tiempo que discutía cuestiones teóricas complejas a partir de autores como Mészáros, Gramsci o Lebowitz, no es una indicación de eclecticismo vago, sino más bien de su reconocimiento de la necesidad de basar los conceptos teóricos universales en la realidad y las tradiciones nacionales, y de trabajar simultáneamente en diferentes niveles. Lo que ya se ha logrado en Venezuela, y está empezando a ser alcanzado en las

transformaciones distintas pero paralelas de Bolivia y Ecuador, y en la renovación de las revoluciones cubana y nicaragüense, es suficiente para constituir la base para una nueva y más sofisticada ontología del socialismo para nuestros tiempos.

También se desprende de este análisis que la interconexión de los diferentes procesos nacionales es crucial en la nueva arquitectura regional que está siendo construida por los gobiernos progresistas emergentes, tanto revolucionarios como –aparentemente– reformistas. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es la más ambiciosa, desafiando directamente las normas capitalistas a través de su énfasis en el intercambio justo y equitativo, la justicia social y el desarrollo solidario. Bolivia introdujo la noción de Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) con el fin de reforzar el elemento de solidaridad con los países menos desarrollados en lo que hoy es el ALBA-TCP. Venezuela también promovió la idea y práctica de acuerdos bilaterales basados en los principios del ALBA con países que no son afiliados del grupo, como Brasil, Argentina y Uruguay, y además amplió el alcance del proyecto con el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA que intenta trascender las alianzas centradas en el Estado y fomentar la integración directa de las bases.

La creación de grupos más amplios como la Unasur y la Celac –aparentemente contradictorios por la incorporación de gobiernos abiertamente conservadores como Colombia, Perú y México– de hecho ha servido para fortalecer la tendencia hacia la independencia regional y el antiimperialismo. Esto se manifiesta en la demanda casi unánime (y sin precedentes) para la inclusión de Cuba, en abierto desafío a la política estadounidense. De hecho, la ruptura del tabú cubano es un reflejo de la importancia actual de la supervivencia de la isla socialista: como Helen Yaffe (2013, pp. 106-107) argumenta en forma magistral en la nueva colección de Muhr de ensayos sobre el ALBA, la contribución práctica e ideológica del gobierno revolucionario cubano a la nueva alianza regional difícilmente se puede exagerar.

ALBA coexiste y se combina con toda una serie de iniciativas relacionadas, como Petrocaribe, el Banco del Sur, la moneda común sucre, el Consejo de Defensa Suramericano, Telesur y la Universidad del Sur. Las instituciones existentes como el Mercosur y el Pacto Andino también están siendo reorientadas lejos del neoliberalismo y hacia una ética de la solidaridad. El resultado es una nueva institucionalidad de varios niveles que facilita en gran medida las transformaciones populares en marcha en los países más avanzados y la aparición de movimientos similares en el resto de la región. Esta constelación diversa pero articulada de políticas e instituciones está minando poco a poco la hegemonía capitalista e imperialista en las esferas económica, política, militar, social y cultural. Esto, en conjunto con la multiplicidad sostenida de luchas de movimientos sociales dentro y fuera de las fronteras nacionales, es lo que Muhr describe como una «guerra múltiple y pluriescalar de posiciones» (Muhr 2013, p. 7). Muchas de estas iniciativas se encuentran en su infancia y que todos sufren de contradicciones y debilidades, pero su existencia misma es testimonio de la fuerza del movimiento anti-capitalista y anti-imperialista regional y sus implicaciones socialistas.

Hay una última cuestión que no puede ser ignorada y que caracteriza no sólo el proceso venezolano sino también los de Bolivia y Ecuador, y de hecho otros procesos latinoamericanos menos avanzados o incipientes, como Brasil y Argentina (y para el caso, la revolución cubana hace cincuenta años): el papel central del líder carismático individual. En trabajos anteriores (Raby 2006, 2008) este autor ha sostenido que tal liderazgo individual puede ser visto como una expresión de «populismo revolucionario», usando ese término muy controvertido en el sentido positivo teorizado por Ernesto Laclau (1977, 2005). En situaciones de crisis hegemónica y donde los partidos existentes han fracasado en proporcionar liderazgo adecuado, el líder carismático puede articular interpelaciones popular-democráticas, de tal manera como para movilizar un movimiento popular con la capacidad de desbordar el sistema de poder imperante y comenzar la

construcción de una nueva hegemonía. De hecho, Laclau continúa afirmando:

> En este sentido, un "populismo socialista" no es la forma más atrasada de ideología proletaria, es la más avanzada: el momento en que la clase obrera ha logrado condensar el conjunto de la ideología democrática en una determinada formación social dentro de su propia ideología (1977, p. 174).

Las revoluciones auténticas siempre toman por sorpresa tanto a los actores políticos como a los observadores: citando una vez más a Emir Sader «… todos los procesos de transformación implican aspectos que son nuevos y heterodoxos, que deben entenderse, en lugar de reducirse a axiomas teóricos que parece que nunca se han verificado en cualquier situación específica» (ob. cit., p. 143).

Es, a la fuerza elemental de un movimiento de masas que ha encontrado articulación efectiva a través del liderazgo carismático decisivo, a lo que Laclau (y este autor en obras anteriores) se refiere. Pero también hay que señalar, como sostiene Marco D'Eramo (2013) en un artículo reciente, que la connotación peyorativa del término «populismo» data de los últimos cincuenta o sesenta años y se asocia con una nueva versión de «plebe», «chusma», «populacho», «gentuza» que ha sido la manera como el viejo desprecio aristocrático se refiere al pueblo y al movimiento popular.

Podemos, entonces, evitar el desagradable término «populismo» para hablar de este fenómeno revolucionario, pero debemos ser conscientes de que sus enemigos, ya sean políticos, periodistas o académicos, continuarán utilizando esta etiqueta, por más que los protagonistas insistan en su legitimidad, intención seria y coherencia. Como D'Eramo también señala, esto nos dice más acerca de los enemigos del «populismo» que sobre los llamados populistas: con la descalificación, lo que realmente están haciendo es mostrar su desprecio por el común de la población, por el pueblo. Lo que ha ocurrido de hecho en América

Latina en los últimos años es una insurgencia popular democrática: un levantamiento popular masivo, en la medida de lo posible por medios pacíficos, contra el orden burgués y en favor de la democracia verdadera, una democracia protagónica que es necesariamente socialista.

También hay que destacar que el carisma no surge simplemente de la capacidad oratoria o de la atracción personal (por importantes que éstas, sin duda, sean). Para alcanzar de verdad un lugar influyente en la mentalidad popular –como en los casos paradigmáticos de Fidel Castro y Hugo Chávez– se deben demostrar cualidades de liderazgo y valentía, incluso heroísmo: las acciones de Fidel en el asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, en la expedición del Granma y en la Sierra Maestra (Díaz Castañón 2001); el levantamiento de Chávez del 4 de febrero de 1992 y su desafío durante el golpe de abril de 2002 y el posterior paro patronal de la oposición. Son estas acciones las que ganan el reconocimiento del líder popular como *comandante* de hecho, independiente de cualquier rango militar, en una campaña para ganar el poder político: en lo que muchos reconocen como la expresión política de la lucha de clases. Es a través de este tipo de acciones que la insurgencia popular democrática adquiere conciencia y dirección. Al igual que en cualquier movimiento, sea armado o pacífico, se requiere liderazgo; en realidad, para usar otro término fuera de moda, una *vanguardia*. Pero hay que reconocer que la vanguardia no se decreta ni se forma arbitrariamente en aislamiento del movimiento popular: sólo cuando se logra el reconocimiento y la unión con el movimiento popular se realiza su función verdadera y legítima, al convertirse en una *vanguardia orgánica*. Esto es lo que consiguen Fidel y el Movimiento 26 de Julio a través del asalto al Moncada y las acciones posteriores a las que se hacen referencia anteriormente, y lo que Chávez y el MBR-200 logran a través del levantamiento de 4 febrero de 1992 y todo lo que siguió. El líder de esta vanguardia es, en el contexto latinoamericano, el comandante, o para usar otro término de poderosa resonancia histórica, el Libertador: muchos de los que participan en la concatenación de movimientos de

todo el continente ahora se refieren a la segunda "liberación" de América Latina (o de "Abya Yala", "Tahuantinsuyo" u otras denominaciones que expresan la herencia indo-afro-mestiza). También es necesario insistir en que una vanguardia tal debe conservar sus vínculos íntimos y respeto por el movimiento popular para conservar la legitimidad; sin esto, degenerará en una nueva estructura burocrática autoritaria.

Como astutamente señala Samuel Grove (2013) en un artículo reciente, esto es lo que los supuestos expertos mediáticos tienden a ignorar, al adherirse ciegamente a los criterios liberales de la democracia y el constitucionalismo. Por tanto, las famosas palabras de Chávez «por ahora» en relación con su fallido levantamiento, y la respuesta popular entusiasta a esas palabras, mostraron «el intento de golpe de Estado y el discurso exactamente para lo que era. No es una declaración de guerra, sino un reconocimiento de que la guerra ya estaba pasando y él, Chávez, se comprometía a luchar de nuevo» en contra de un gobierno que había utilizado al ejército para disparar en el Caracazo, ocasionando la muerte de miles de personas. Grove propone teorizar este papel de liderazgo al adoptar el concepto de «dominio» de Alain Badiou (2008), en el que son necesarios «maestros» a fin de superar el malestar ideológico imperante: «Ellos nos presentan formas radicalmente nuevas de ver el mundo, nos empujan para replantear los límites de lo que es posible pensar y nos inspiran a reconsiderar nuestras propias limitaciones» (Grove, ob. cit.). El concepto de Badiou es estrictamente filosófico, pero con implicaciones obvias para la práctica política. Si bien es necesario ir más allá de esta dependencia inicial del «maestro», esto no es algo que debe ser repudiado sino una fase inicial crucial en la articulación de un nuevo sujeto revolucionario: una verdadera vanguardia, un «partido del pueblo» que corresponde en el mundo de hoy a la visión original de Marx del «partido del proletariado». Para insistir, ese partido no puede ser simplemente decretado o creado por el proselitismo de los activistas, lo que explica por qué tantas sectas de izquierda han fracasado; ni su estructura y organización se pueden determinar a priori. Más

bien, se plantea en la práctica a través de la emergencia de un movimiento popular combativo (una *insurgencia democrática*) y las acciones decisivas de una *vanguardia orgánica* que los sectores populares instintivamente reconocen y apoyan.

Tal insurgencia y vanguardia, aunque pacíficas, siempre serán vistas como una amenaza por los intereses establecidos. Es por ello que, en palabras de Grove: «Debemos ser cautelosos (...) con la facilidad excesiva en equiparar la aprobación y la admiración de figuras como Chávez con la inmadurez política. Nuestra hostilidad más bien podría revelar falta de madurez política» (íd.) El líder carismático –Fidel, Chávez, Evo Morales, Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner– es el/la Comandante, el/la Libertador(a) a la cabeza de la vanguardia orgánica. Si el movimiento realmente tiene éxito, con el tiempo superará la necesidad de este tipo de liderazgo, pero pretender que la revolución popular pueda triunfar sin esos liderazgos, es ignorar la cruda realidad de la desorientación ideológica, las estructuras políticas anquilosadas, la hegemonía de clase y el poder imperial global.

## Referencias

ÁLVAREZ, Víctor (2010). *Del Estado burocrático al Estado comunal: La transición al socialismo de la Revolución Bolivariana*. Caracas: Centro Internacional Miranda.

APONTE-GARCÍA, Maribel (2013). «The new strategic regionalism in the ALBA-TCP: Alternatives to the food and energy crises». En Thomas Muhr (ed.), *Counter-Globalization and Socialism in the 21st Century: The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America,* pp. 119-137. Londres y Nueva York: Routledge.

ARBOLEYA CERVERA, Jesús (2007). *La revolución del otro mundo: Cuba y Estados Unidos en el horizonte del siglo xxi*. Melbourne: Ocean Sur.

BADIOU, Alain (2008). «Philosophy as Biography». *The Symptom: Online Journal for Lacan.com* [periódico en línea]. Recuperado el 16 de abril del 2013 de www.lacan.com/symptom9_articles/badiou19.html

BIARDEAU, Javier (2007, mayo-agosto). «El proceso de transición hacia el nuevo Socialismo del siglo XXI?: Un debate que apenas comienza». *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Caracas: Universidad Central de Venezuela, *13* (2), pp. 145-179.

_____ (2009). «Es necesario replantear la relación entre socialismo y democracia». *Comuna: Pensamiento Crítico en Revolución,* Caracas: Centro Internacional Miranda.

BURBACH, Roger, Michael Fox y Federico Fuentes (2013). *Latin America's Turbulent Transitions: The Future of Twenty-First-Century Socialism.* Halifax (Londres) y Winnipeg (Nueva York): Fernwood, Londres y Nueva York: Fernwood Publishing y Zed Books.

D'ERAMO, Marco (2013, julio-agosto). «Populism and the New Oligarchy». (Gregory Elliott, trad.). *New Left Review*, Londres (82), pp. 5-28.

DÍAZ CASTAÑÓN, María del Pilar (2001). *Ideología y Revolución: Cuba, 1959-1962.* La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

EL TROUDI, Haiman y Juan Carlos Monedero (2006). *Empresas de Producción Social: Instrumento para el Socialismo del siglo XXI*. Caracas: Centro Internacional Miranda.

FUENTES, Federico (2011, 7 de agosto). «Bolivia fights for sovereignty over military». *Green Left Weekly* [página en línea]. Recuperado el 12 de septiembre del 2013 de www.greenleft.org.au/node/48426

GIORDANI, Jorge (2009). *La transición venezolana al socialismo*. Caracas y Valencia: Vadell Hermanos.

GROVE, Samuel (2013, 20 de marzo). «Estoy con Chávez, Soy un Chavista: Exploring the Political Appeal and Significance of Hugo Chávez». En *Venezuelanalysis.com* [página en línea]. Recuperado el 22 de marzo del 2013 de http://venezuelanalysis.com/analysis/8294

HARNECKER, Marta (2007). *Gobiernos comunitarios: Transformando el Estado desde abajo*. Caracas: Monte Ávila.

_____ (2008). *Transfiriendo poder a la gente: municipio Torres, estado Lara, Venezuela*. Caracas: Centro Internacional Miranda.

HARVEY, David (2010). «Organizing for the Anti-Capitalist Transition» (presentación en el Foro Social Mundial en Porto Alegre). En *Reading Marx's Capital with David Harvey* [página en línea].

Recuperado el 30 de marzo del 2013 de http://davidharvey.org/2009/12organizing-for-the-anti-capitalist-transition

HOLLOWAY, John (2002). *Change the World Without Taking Power: The Meaning of Revolution Today*. Londres: Pluto.

LACLAU, Ernesto (1977). *Politics and Ideology in Marxist Theory.* Londres: New Left Books.

_____ (2005). *On Populist Reason.* Londres: Verso.

LANZ RODRÍGUEZ, Carlos (2004a). *El desarrollo endógeno y la Misión "Vuelvan Caras"*. Caracas: Alcaldía de Caracas.

_____ (2004b). La revolución es cultural o reproducirá la dominación. Caracas: s/i.

LEBOWITZ, Michael (2006). *Build It Now: Socialism for the Twenty-first Century.* Nueva York: Monthly Review Press.

_____ (2010). *The Socialist Alternative: Real Human Development*. Nueva York: Monthly Review Press.

MÉSZÁROS, István (2009). *El desafío y la carga del tiempo histórico: El socialismo en el siglo xxi*. Caracas y Valencia: Vadell Hermanos.

MUHR, Thomas (2012). «Reconfiguring the state/society complex: Venezuela's "revolutionary democracy"». En Barry Cannon y Peadar Kirby (eds.), *Civil Society and the State in Left-led Latin America: Challenges and Limitations to Democracy*, pp. 19-33. Londres: Zed Press.

_____ (ed.) (2013). *Counter-Globalization and Socialism in the 21st Century: The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America*. Londres y Nueva York: Routledge.

NEGRI, Antonio (1999). *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

RABY, David L. (2006). «El liderazgo carismático en los movimientos populares y revolucionarios». *Cuadernos del Cendes,* Caracas (62), pp. 59-72.

_____ (2008). *Democracia y revolución: América Latina y el socialismo hoy*. Caracas: Monte Ávila.

SADER, Emir (2011). *The New Mole: Paths of the Latin American Left*. Londres: Verso.

WEBBER, Jeffery y Susan Spronk (2010, septiembre-octubre). «Voices from Venezuela on Worker Control and Bureaucracy in the

Bolivarian Revolution». *Against the Current* , Detroit (Míchigan) (148). En *Solidarity* [página en línea]. Recuperado el 12 de junio del 2012 de http://www.solidarity-us.org/site/node/3023

YAFFE, Helen (2013). «Cuban socialism: inspiration to the ALBA-TCP». En Thomas Muhr (ed.), *Counter-Globalization and Socialism in the 21st Century,* pp. 101-118. Londres y Nueva York: Routledge.

# El conflicto institucional y la Revolución Bolivariana: La negociación venezolana para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Marcel Nelson
Traducción de Giomar Salas

La Revolución Bolivariana ha conllevado tanto continuidades como discontinuidades a las estructuras políticas y gubernamentales de Venezuela. Los cambios implementados por el gobierno de Hugo Chávez desde que llegó al poder en 1999 son el objetivo principal de la noción de Jorge Castañeda de la «izquierda mala» en América Latina (2006; Castañeda y Marco Morales 2008). La distinción de Castañeda entre una «izquierda mala» populista y una «izquierda buena» social democrática se apoya en un análisis de sus «orígenes» –la ideología e historia de sus movimientos constituyentes y/o partidos. Los líderes de la «izquierda mala», según Castañeda, son herederos del «populismo bueno tradicional» y conciben el poder como el fin último; para ellos «el desempeño económico, los valores democráticos, los logros programáticos y las buenas relaciones con los Estados

Unidos no son imperativos sino limitaciones molestas que pierden de vista el punto fundamental» (2006, p. 38). Sin duda puede hacerse un argumento de que la ideología y la historia de los diversos gobiernos de izquierda del pasado han jugado papeles importantes en los estilos de los gobiernos del siglo XXI. Sin embargo, al centrarse en los orígenes, las categorías de Castañeda tienden al determinismo. No ofrece suficiente peso explicativo al impacto del balance evolutivo de las fuerzas políticas en cada país y las particularidades de sus entornos institucionales.

Dos tendencias que han sido identificadas por Castañeda como características de la «izquierda mala» incluyen el anti-americanismo y el hecho de no fomentar la institucionalización. Por el bien de la evaluación, se considerarán estas características en relación con el cambio en la posición de Venezuela hacia el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Este artículo demostrará que la política de Venezuela hacia los Estados Unidos, uno de los principales defensores del ALCA, no estuvo predeterminada por una cosmovisión populista o su ideología bolivariana sino que evolucionó como resultado de una combinación de las dinámicas nacionales y regionales. También considerará que el gobierno de Chávez no fomentó la institucionalización en relación con la realidad de un Estado políticamente fragmentado, lo cual planteaba impedimentos reales para el desarrollo de las instituciones y la aplicación de reformas. En la práctica, esto ha significado que el gobierno de Chávez o ha tenido que confrontar directamente estructuras estatales nada serviciales o ha tenido que crear mecanismos institucionales alternativos con el propósito de llevar a cabo su agenda. Su actitud hacia los Estados Unidos y su supuesta falta de institucionalización se examinarán a través del enfoque "relacional" del Estado capitalista que permite una evaluación más matizada y compleja de la política y la institucionalización durante la Revolución Bolivariana.

Este artículo comenzará con una revisión del trabajo teórico de Nicos Poulantzas sobre el Estado capitalista. Luego procederá a un análisis de la relación de Venezuela con el ALCA como un estudio de caso para reflexionar sobre la relación del

gobierno de Chávez con los Estados Unidos y su historia de institucionalización y ejercicio gubernamental. Finalmente, se concluirá con una discusión de las contradicciones implícitas en la reforma de las estructuras del Estado dividido como una condición para la implementación de reformas sociales y económicas sustantivas. En concreto, se argumentará que una evaluación de la institucio-nalización durante periodos en los que un gobierno está buscando reformas sustantivas debe tomar en consideración la naturaleza fragmentada y frecuentemente hostil de las estructuras del Estado.

## El Estado como la condensación de una relación de fuerzas

La conceptualización de Nicos Poulantzas del estado capitalista como una «relación» surgió de los debates neo-marxistas sobre la naturaleza del estado capitalista en la década de 1970[1]. En particular, buscaba desarrollar una Teoría Marxista del Estado que pudiera explicar su complejidad sin reducirlo a una «cosa» o un «objeto». En el centro de estas dos concepciones erróneas del Estado, según él, estaba el posicionamiento de las clases sociales en una relación de exterioridad con éste y una concepción del poder como algo que pudiera ser poseído por los actores fuera de sus relaciones con otros actores (Poulantzas 2008, p. 283). Para Poulantzas, la ignorancia del papel constitutivo de las relaciones sociales fue responsable de estas concepciones erróneas. Cuando el Estado es visto como una «cosa», como es común en las interpretaciones «comunistas ortodoxas», según Poulantzas, es concebido como simplemente el «instrumento» o la «herramienta pasiva» de las clases sociales dominantes. Cuando es visto como un «sujeto», como es común en la interpretaciones social-democráticas, se ve como dotado de su propia «racionalidad» y poder, y capaz de actuar de manera autónoma y arbitrar

1 El trabajo de Bob Jessop (2008) sobre el Estado ofrece un informe más reciente de un enfoque «relacional» del mismo.

entre las clases sociales que compiten. Por tanto, en ambas concepciones erróneas del Estado, el poder se concibe como «de suma-cero». Cuando se le considera una «cosa», las clases dominantes son capaces de usar su poder para «absorberlo» para sus propios fines. Por el contrario, cuando se le considera un «sujeto», es capaz de recurrir a su propio poder para «resistir» el poder de las clases sociales dominantes e imponer su voluntad sobre ellos (íd.). Para Poulantzas ninguna de estas concepciones del Estado puede explicar las contradicciones políticas encarnadas por los conflictos interinstitucionales y los intereses institucionales divergentes que emergen dentro del mismo. Esto se debe a que ambas presumen la existencia de una unidad «monolítica» en todas sus instituciones (1978, p. 132).

Poulantzas propuso que para ser capaz de tomar en cuenta las contradicciones dentro del Estado uno tenía que abordar su «relacionalidad», con un enfoque sobre la relación entre los aspectos económicos y políticos del capitalismo. A pesar de la separación formal –según él– el aspecto político, encarnado por el Estado, es parte del aspecto económico. Por ejemplo, el Estado está presente en la constitución y reproducción de las relaciones económicas de producción mediante la formulación de la dominación política e ideológica de las clases subordinadas (ibíd., p. 25). Al mismo tiempo, las relaciones económicas de producción, con énfasis en el conflicto de clases, están presentes en la materialidad institucional del Estado como una «relación». Es su énfasis en el conflicto de clases como una relación, lo que constituye el meollo de su teoría.

El conflicto de clases dentro del Estado se produce como el resultado de un proceso mediante el cual, el poder de clases dentro de las relaciones económicas de producción da lugar a «redes de poder» que se cruzan con redes del poder político en el campo estratégico del Estado. Sin embargo, el campo estratégico del Estado no está totalmente determinado por las relaciones de poder que emanan de las relaciones de producción, ya que se cruzan con otros sitios de poder y los forman. En concreto, las redes de poder de las relaciones de producción constituyen

solamente el «andamiaje inicial de la materialidad institucional del Estado» (ibíd., p. 53) Otros sitios de poder incluyen «aparatos» tales como las iglesias y organizaciones deportivas, que se puede entender su ubicación en la sociedad civil, en algún lugar entre el individuo y el Estado. Estos aparatos pueden dar lugar a sus propias redes de poder, pero de todos modos están incluidos en el campo estratégico del Estado y moldeados por él (ibíd., pp. 36-37). El estado capitalista, en consecuencia, debe su forma y contenido, en parte, a las interacciones complejas dispuestas dentro de las múltiples redes de relaciones de poder.

Poulantzas, sin embargo, sostiene que el Estado no es el simple reflejo de estas interacciones estructurales complejas sino que «muestra una opacidad y resistencia de sí mismo» (ibíd., p. 130). Es importante destacar que la relación de fuerzas entre las clases está presente en el Estado como una «condensación» de una forma «específica» o «mediada». Por lo tanto, los cambios en las relaciones de producción no tendrán consecuencias «directas» o «inmediatas» para el aparato del Estado, sino que son más bien «cristalizadas» en el Estado de una «forma refractada» (2008, p. 283). Es esta refracción estructural o distancia entre el aparato del Estado y las relaciones de producción lo que le presta una medida de «autonomía relativa», lo que significa que puede algunas veces actuar contra los intereses inmediatos de las clases dominantes. Esta refracción se materializa por la presencia de relaciones sociales contradictorias y conflictivas dentro del Estado mismo. Dicho de otra manera, la autonomía relativa del Estado «es inherente a su misma estructura (el Estado es una *relación*) en la medida en que es la resultante de contradicciones y de la lucha de clases como se expresa, siempre en su propia manera específica, dentro del Estado mismo» (íd., énfasis de Nelson). La presencia de relaciones sociales contradictorias dentro del Estado se expresa a través de los aparatos y poderes estatales que representan los intereses de las diferentes clases y fracciones de clases (1978, p. 132). No obstante, lo que hace al Estado un «Estado de clases» es que las clases dominantes o las fracciones de clases, y las clases subordinadas están presentes en

él de diferentes formas. En particular, las clases dominantes están presentes en «los centros del poder» que organizan su dominación dentro del Estado, mientras las clases subordinadas están presentes en los aparatos que se entiende son «los centros de resistencia» (ibíd., pp. 144-145). Básicamente, para Poulantzas la autonomía relativa del Estado es el resultado de la presencia de relaciones sociales contradictorias dentro de él.

La cristalización de las relaciones de producción dentro de la materialidad del Estado se expresa tanto entre los aparatos estatales que representan diferentes clases como dentro de los aparatos mismos. De esta manera, el Estado representa una matriz institucional de diferentes aparatos, y su unidad y la de las políticas que produce no pueden asumirse *a priori,* sino que son el resultado de las interacciones estratégicas entre y dentro de esos aparatos. La selectividad estratégica del ámbito del estado capitalista, según Poulantzas, se establece a través de una jerarquía de interacciones dentro de las redes que tienden a favorecer a las clases dominantes, al establecer «una cadena completa por la que ciertos aparatos son subordinados a otros, y a través de la dominación de un poder o aparato particular (tales como el poder militar, un partido político o un ministerio) que cristaliza los intereses de una fracción hegemónica particular» (ibíd., p. 137). Sin embargo, el poder en el ámbito del Estado se expresa no solamente a través de la posición de cada clase con respecto a las relaciones de producción sino también mediante sus estrategias frente a todo el ámbito. Esto implica que las clases sociales, constituidas como fuerzas políticas en el ámbito del Estado, pueden buscar alterar el campo estratégico estatal para su provecho (ibíd., p. 148). Por lo tanto, las clases subordinadas pueden efectuar cambios positivos en su situación, al alterar las políticas sociales mediante la movilización dentro del Estado y más allá de él. Por consiguiente, el poder político dentro del Estado, según Poulantzas, se expresa a través de las interacciones entre la estructura de un terreno institucional extremadamente desigual y «estratégicamente selectivo» y el desempeño político de las clases sociales.

## Las ramificaciones de un enfoque relacional

La teoría de Poulantzas del Estado capitalista tiene varias ramificaciones para el análisis en consideración. Primeramente, hay una distinción entre el poder «formal» y el poder «real» dentro del Estado. Formalmente –según Poulantzas– la ley constituye un «sistema de reglas generales, abstractas y formales (…) [que] *regula* el ejercicio del poder mediante el aparato estatal» (ibíd., p. 91 ). Por lo tanto, el ejercicio de poder varía en los diferentes estados según las leyes, constituciones o la manera en que son reguladas, y se distinguen, por ejemplo, los regímenes parlamentarios de los presidenciales. No obstante, debido a su naturaleza formal y abstracta, la ley no capta totalmente el ejercicio del poder dentro del aparato estatal. Los cambios en las relaciones de poder dentro y más allá del Estado, por consiguiente, no requieren la reescritura de las leyes del Estado sino que pueden ser adaptadas mediante medidas como la «duplicación» y la «interrupción» de los diferentes aparatos y la creación de redes administrativas específicas para fortalecer las clases particulares o fracciones de clases (ibíd., p. 137). Esto supone que, a pesar de la unidad legal formal del Estado, es un campo estratégico muy fragmentado y conflictivo. Por lo tanto, incluso si se elige un gobierno que represente a las clases no dominantes, es probable que confronte resistencia de diferentes centros de poder dentro del mismo que pueden impedir la implementación de su programa. En otras palabras, los gobiernos electos, de ninguna manera tienen al Estado como un instrumento para llevar a cabo sus programas.

En referencia a Venezuela, la distinción entre el poder real y el formal puede ilustrarse por el hecho de que incluso después de que el gobierno de Chávez alterara la estructura político-legal del Estado para su beneficio, mediante la adopción de la Constitución de 1999 (Chávez y Harnecker 2005, p. 56), el gobierno continuó confrontando una firme oposición a su programa desde dentro del estado capitalista. Por ejemplo, encaró la oposición de elementos dentro de las Fuerzas Armadas durante el intento de golpe del 2002 y de la gerencia de Petróleos

de Venezuela, S.A. (PDVSA) durante la huelga petrolera del 2002 y 2003[2]. Así que el tema de la institucionalización que Castañeda emplea, para distinguir entre la «izquierda mala» y la «izquierda buena» en América Latina, tiene que ser ubicada en el contexto de aparatos estatales fragmentados y algunas veces hostiles.

Una segunda ramificación importante de la teoría de Poulantzas para el análisis en consideración, se refiere a que las políticas del Estado, que incluyen la política exterior, no pueden asumirse *a priori* como un reflejo directo de los valores y objetivos de un gobierno. Más bien, necesitan ser vistas como el resultado de interacciones complejas dentro del campo estratégico del Estado. Por lo tanto, las políticas son desarrolladas por las interacciones con los aparatos con intereses e imperativos muy diferentes, y esto incrementa la importancia de las tácticas empleadas por los funcionarios estatales para promulgar sus políticas preferidas. Poulantzas explica que, a pesar de la complejidad de este proceso, «la política es todavía descifrable no sólo como un cálculo estratégico, sino aún más como el resultado de una coordinación conflictiva de micro-políticas explícitas y divergentes» (1978, p. 136). En consecuencia, una política general, tal como la del Estado venezolano con respecto al ALCA y los Estados Unidos, debe conceptualizarse como el resultado no sólo de acontecimientos políticos fuera del Estado, sino también de procesos frecuentemente contradictorios dentro de él. Los orígenes de un gobierno particular pueden proporcionar indicios de los objetivos políticos que podría desear alcanzar, pero existe frecuentemente un espacio vacío entre estos objetivos y los resultados políticos debido a la naturaleza fragmentada del Estado. Esto indica la importancia

2 La huelga convocada por los sectores de la gerencia de PDVSA, junto con funcionarios de la organización empresarial más importante de Venezuela, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras), y el liderazgo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), se inició en diciembre del 2002. Sin embargo, no logró presionar a Chávez para que renunciara y fue levantada en febrero del 2003.

de historiar la evolución de las políticas gubernamentales, ya que interactúan con las circunstancias dentro y fuera del mismo.

Una tercera ramificación importante de la teoría de Poulantzas del estado capitalista se relaciona con la realidad que confrontan los gobiernos de izquierda cuando toman el poder. Según Poulantzas, debido a la naturaleza fragmentada y relacional del Estado, aun cuando el gobierno de izquierda «controle realmente los poderes y aparatos del Estado, necesariamente no controla el y los que juegan el papel dominante en el Estado» (ibíd., p. 138). Además, la clase dominante puede acomodar el control de ciertos aparatos de la izquierda, a través de la «perturbación y desplazamiento» del poder de un aparato a otro y dentro de las estructuras de los aparatos. Como resultado, para llevar a cabo sus agendas, los gobiernos de izquierda deberían buscar transformar la misma materialidad institucional del Estado. Para hacer esto, Poulantzas sugiere que deberían mantener cierta distancia organizacional del mismo para no estar completamente integrado en los imperativos institucionales de la clase dominante. La alteración de las fuerzas de relación dentro del Estado puede lograrse mediante la coordinación y expansión de los centros de resistencia, «la profundización de las libertades políticas de la democracia representativa» y la introducción de nuevas formas de democracia (ibíd., p. 256).

De manera interesante, el gobierno de Chávez ha buscado alterar la relación de fuerzas del Estado venezolano a través de varias medidas –que incluyen la creación de estructuras estatales paralelas–, y ha introducido otras formas de democracia para reforzar este proceso. No obstante, el uso de tales tácticas es muy riesgoso. Una revisión de la evolución de la actitud de Venezuela hacia el ALCA, demuestra la notoriedad de algunas de las proposiciones de Poulantzas respecto al cambio y la continuidad dentro del estado capitalista, los retos que confrontan los gobiernos de izquierda con relación al Estado y los aspectos problemáticos de la evaluación de un gobierno a través del prisma de sus orígenes.

## Venezuela y el ALCA en la primera etapa de las negociaciones

Las negociaciones para el ALCA, que oficialmente se lanzó en la Cumbre de las Américas realizada en Miami en 1994, comenzaron durante un periodo en Venezuela desfavorable para tal proceso. El país había pasado varios años de agitación política durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989-1993). Esta inestabilidad política fue resultado no sólo de la impopularidad de las reformas neoliberales implementadas por el gobierno de Pérez, después de que había hecho campaña contra ellas, sino también por la erosión a largo plazo de la legitimidad del Pacto de Punto Fijo que había estructurado y regulado la política venezolana y el arte de hacer política desde 1958. Las dos dinámicas estaban relacionadas, porque la legitimidad del sistema político corporativista de Punto Fijo se basó en gran medida en el desembolso de la renta petrolera, a través de las redes clientelares, limitadas por la crisis de la deuda venezolana y las reformas neoliberales posteriores. En consecuencia, el terreno político corporativista y rígido de Venezuela llegó a ser «fluido» (Hellinger 2003, p. 27), y esta fluidez persistió durante la segunda presidencia de Rafael Caldera (1994-1999), cuyo gobierno sería el primero en negociar el ALCA.

Los negociadores de Caldera sentían que su acción fue ambivalente ante la posibilidad de emprender un acuerdo comercial hemisférico con los Estados Unidos y señalaron que había sido históricamente cauteloso para no llegar a ser demasiado dependiente de los Estados Unidos económicamente (Eduardo Porcarelli y Fidel Garofalo Laya 2005, p. 124). Estuvo de acuerdo en participar en las negociaciones para el ALCA con el propósito de mantenerse al corriente de los acontecimientos en América Latina y porque el petróleo no formaba parte de las negociaciones, lo que significaba que no había ningún peligro de que Venezuela quedara limitada en el establecimiento de su política petrolera (Fidel Garofalo Laya, entrevista personal, 1 de abril del 2009). Sin embargo, el ALCA nunca llegó a ser la prioridad

del gobierno de Caldera y la responsabilidad para negociar el acuerdo se mantuvo a nivel ministerial dentro del Instituto de Comercio Exterior.

Los negociadores de Venezuela abordaron las negociaciones de buena fe en los ámbitos individual y ministerial, pero señalaron la falta de coordinación entre los ministerios que tenían un interés en lo que estaba siendo negociado y una falta de participación de las agencias estatales que podían haber desempeñado ese papel coordinador (Porcarelli y Garofalo Laya, ob. cit., p. 124). De hecho, jugaron un gran papel en determinar la posición del gobierno con respecto al ALCA, a través de su propia interpretación del interés nacional de Venezuela (Eduardo Porcarelli, entrevista personal, 29 de marzo del 2009). En los términos de Poulantzas, la ambivalencia manifestada por el gobierno de Caldera hacia el ALCA tuvo el efecto de situar la responsabilidad para negociar el acuerdo en un área del Estado que estaba distante de sus centros de poder y sus prioridades políticas, y otorgar al equipo un grado significativo de autonomía. Una limitación en esa autonomía vino no de dentro del Estado venezolano sino de los países de la Comunidad Andina que habían decidido coordinar sus posiciones con el fin de hablar con una sola voz en la mesa de negociaciones del ALCA. El aumento de la prominencia del ALCA durante la presidencia de Chávez, sin embargo, sí contribuyó a una radicalización cada vez mayor con respecto al acuerdo que tendría ramificaciones importantes para la forma en que el Estado venezolano negoció el proyecto de integración regional.

## El ALCA y Chávez en los primeros años de su presidencia

Durante su primer año de mandato, las acciones del gobierno de Chávez estuvieron dirigidas hacia el cambio constitucional y las reformas internas. En retrospectiva, él argumentó que esto era parte de un ataque estratégico a la oposición: «decidimos comenzar nuestro ataque contra la estructura

político-legal porque era la más débil de todas, y como ves, no estábamos equivocados» (Chávez y Harnecker, ob. cit., p. 56). La adopción de la Constitución en 1999, ciertamente constituyó un ataque a la estructura político-legal del anterior sistema político de Venezuela y hacia quienes se beneficiaban de ella, ya que proporcionaba un nuevo ambiente legal en el que tomaría lugar la confrontación política tanto dentro como fuera del Estado. Sin embargo, en referencia a la distinción de Poulantzas entre el poder real y el poder formal, la adopción de la nueva Constitución, de ninguna manera representó una victoria final decisiva sobre los oponentes políticos del régimen. De manera específica, proporcionaba un escudo de unidad al Estado venezolano en una forma que cambiaba legalmente su "campo estratégico" a favor del gobierno, pero no implicaba una transformación inmediata de la materialidad del Estado; los adversarios del gobierno todavía controlaban importantes centros de poder dentro del aparato estatal. Se estableció por lo tanto un escenario para la confrontación entre las instituciones del Estado que apoyaban la Revolución Bolivariana y los que la adversaban o tenían una actitud ambivalente hacia ella.

Con respecto al ALCA, el ascenso al poder de Chávez en 1999, no señaló de inmediato una ruptura fundamental con la anterior política exterior de Venezuela. Sin duda, la ideología bolivariana que sostuvo el Movimiento V República tenía ramificaciones en la política exterior de Venezuela, dado que Simón Bolívar había previsto la integración latinoamericana y caribeña sin los Estados Unidos (Louise Fawcett 2005, p. 27). Por otra parte, los artículos de la Constitución de 1999, tal como el artículo 153, en el cual explícitamente se promueve la integración latinoamericana y caribeña en aras del «bienestar de sus pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes», marcaron el comienzo de la concepción de una política exterior bolivariana que podría entrar en conflicto con los objetivos del ALCA (República Bolivariana de Venezuela 2009). No obstante, la posición ambigua de Venezuela con respecto a los Estados Unidos y los pronunciamientos por parte del gobierno

sobre la necesidad de reforzar los vínculos con Brasil, Colombia y Guyana representaron más una continuación de la política exterior de Caldera que una ruptura con ella (Nayvilis Naim Soto 2003, pp. 15-16). A pesar de que el gobierno de Chávez comenzó a desarrollar una política exterior más concreta con relación a los temas centrales, había un retraso debido a la relativa autonomía del Estado venezolano entre lo que estaba siendo anunciado en el despacho presidencial y los miembros del poder legislativo, y lo que estaba siendo realizado por los diferentes aparatos institucionales del Estado. Con el cambio de la dinámica política tanto a nivel nacional como internacional, la amplia ideología bolivariana del gobierno de Chávez se fundió gradualmente a través de modificaciones estratégicas e interacciones con el aparato estatal, en un conjunto de políticas que constituirían un rechazo tajante al ALCA.

## Ramificaciones institucionales del chavismo

La autonomía relativa de que gozaba el equipo negociador del Ministerio de Producción y Comercio (MPC) con relación a otros organismos del Estado comenzó a disiparse cuando el MVR gobernante creó una comisión para estudiar el ALCA dentro de la Asamblea Nacional, antes de la Cumbre de las Américas en abril del 2001 en la ciudad de Quebec. El Ministerio de Producción y Comercio fue el resultado de varias fusiones, a finales de la década de 1990, entre el Instituto de Comercio Exterior y otros ministerios. Las movilizaciones contra el ALCA estaban siendo organizadas por prominentes miembros del gobierno, quienes vinculaban el ALCA con los efectos nocivos de la globalización. Las movilizaciones, sin embargo, no tuvieron un impacto inmediato en el equipo negociador (Porcarelli y Garofalo Laya, ob. cit., p. 126). Esto cambió a raíz de la Cumbre de las Américas del 2001, donde Chávez criticó abiertamente al ALCA y argumentó que sus disposiciones, en caso de aplicarse, constituirían una «ruptura en el orden constitucional» de Venezuela (Alonso 2001). El equipo negociador comenzó a recibir

directrices de otros organismos del Estado con respecto a las posiciones que tomarían en sus respectivos grupos negociadores, que incluían la adopción de una postura más rígida en relación a la defensa de la soberanía de Venezuela. Este cambio y la decisión de cooperar más estrechamente con Mercosur condujeron posteriormente a una ruptura con la Comunidad Andina, lo cual significaba que Venezuela ya no tenía que asegurarse de que sus posiciones fueran consistentes con las de los otros miembros de esa organización subregional (Porcarelli y Garofalo Laya, ob. cit., pp. 127-128).

Otro cambio importante en la posición de Venezuela fue el resultado de un esfuerzo concertado del Despacho Presidencial para concretar la crítica creciente de su gobierno al ALCA. Venezuela pensaba que estaba en una posición exclusiva para facilitar la integración de América Latina y el Caribe porque estaba situada como el punto de encuentro entre las dos regiones. Además, Chávez comenzó a promover la idea de que Venezuela podía usar sus recursos petroleros como una herramienta para reforzar la integración regional (Naim Soto, ob. cit., p. 30). En consonancia con esta tendencia, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) surgió de una discusión entre Fidel Castro y Chávez, después de una cumbre de líderes del Caribe en 2001, durante la cual Chávez sugirió que se había sentido aislado en su crítica del ALCA en la ciudad de Quebec (Aleida Guevara 2005, p. 102). Aunque el ALBA inicialmente se centró en un acuerdo en materia del petróleo, con el tiempo se ampliaría en un proyecto de integración regional. Lo que es significativo es que se puso en marcha de manera explícita como un contrapunto al ALCA (José Briceño Ruiz y Rosalba Linares 2004, p. 20). La crítica al ALCA expresada por el ALBA, sin embargo, era sólo un punto de partida, ya que la agitación política aumentaría la importancia de la integración regional y el papel de los Estados Unidos en América Latina, lo que llevó al gobierno de Chávez a adoptar una actitud aún más crítica y de confrontación hacia el ALCA.

## La radicalización política y el ALCA

A raíz de esta modificación inicial de la actitud de Venezuela hacia el ALCA, el gobierno de Chávez pasó por un periodo de radicalización. En primer lugar, hubo un intento de golpe de Estado en abril del 2002, durante el cual Chávez fue hecho prisionero ilegalmente, pero posteriormente volvió al poder. En segundo lugar, en el mismo año, sectores de la oposición procuraron paralizar el gobierno con la huelga petrolera. La mayoría de los gerentes de PDVSA participaron, después de que Chávez había reincorporado en sus puestos a varios ejecutivos despedidos como un gesto de paz, tras el golpe de Estado en abril (Randall Parish, Mark Peceny y Justin Delacour 2007, pp. 220-223). Estos acontecimientos pusieron de relieve la relación tensa y precaria del gobierno con los sectores opositores de la sociedad venezolana y los aparatos del Estado como PDVSA.

Judith Valencia, de la Universidad Central de Venezuela, una figura importante en la Comisión Presidencial para el ALCA, explica que, a raíz de los acontecimientos del 2002, el gobierno aprendió la importancia de la movilización popular más allá del simple electoralismo. Ella sostiene que el gobierno trató de transformar el Estado a través de la participación de los movimientos sociales (Valencia 2005). Esta estrategia era coherente con la nueva Constitución –afirma Judith Valencia– que pedía a la gente transformar el Estado (íd.). Curiosamente el gobierno de Chávez, al usar las herramientas institucionales y retóricas puestas a disposición por la nueva Constitución, comenzó a atraer sectores del Estado que estaban alineados con la oposición o no completamente alineados con el gobierno. El hecho de que los principales organizadores de la huelga venían de PDVSA, demostraba que la estructura del Estado venezolano estaba plagada de divisiones que se convirtieron en los centros de resistencia para el control por parte del MVR, del poder ejecutivo y el legislativo. Como explica Marta Harnecker (Chávez Frías y Harnecker, ob. cit., pp. 46-47), el modo principal de hacer frente a estos centros de resistencia después del 2003, fue crear estructuras estatales paralelas, tales como las *misiones* en el campo de

la salud y la educación. Al mismo tiempo, el gobierno de Chávez enfrentó directamente elementos opositores dentro del Estado, por ejemplo, cuando Chávez declaró durante la huelga: «Ha llegado la hora de librar la gran batalla por el petróleo» (Ellner 2008, p. 119). Posterior a la huelga, fueron removidos de sus cargos los elementos opositores dentro de la gerencia de PDVSA y reemplazados con cuadros leales al régimen, mientras que las empresas mixtas petroleras fueron renacionalizadas. El intento de golpe de Estado y el conflicto en PDVSA tendrían importantes ramificaciones para el ALCA, por cuanto centrarían la atención del gobierno sobre el Estado como un terreno de conflicto. El conflicto con PDVSA amplió la voluntad del gobierno para marginar las instituciones (como el equipo negociador del MPC) percibidas como no concordantes con sus objetivos.

Otra consecuencia importante del intento de golpe de Estado y la huelga fue una mayor radicalización de la posición de Venezuela hacia los Estados Unidos. Chávez no había atacado anteriormente o denunciado a los Estados Unidos tan abierta y directamente como lo hizo después de estos acontecimientos. Las acusaciones de la implicación de Estados Unidos en el fallido golpe marcaron un punto decisivo importante en las relaciones entre los dos países. Por ejemplo, el uso del término de «imperialismo» al referirse a los Estados Unidos se hizo más prominente en la retórica del régimen (ibíd., p. 199). En consecuencia, el ALCA llegó a estar cada vez más asociado con el papel imperial de los Estados Unidos en el hemisferio, y el gobierno de Estados Unidos fue en consecuencia, posicionado como la antítesis de los objetivos de la Revolución Bolivariana tanto a nivel regional como nacional.

## La radicalización y la transformación institucional

En este contexto radicalizado en febrero del 2003, se estableció formalmente la Comisión Presidencial. Los negociadores del MPC creían que esta institución paralela se había establecido porque el equipo oficial de negociación se consideraba

insuficientemente crítico del neoliberalismo y, por lo tanto, en desacuerdo con la actitud del gobierno (Eduardo Porcarelli, entrevista personal, 29 de marzo del 2009). En consecuencia, el margen de maniobra institucional de que gozaba el MPC se disipó gradualmente. De hecho, la comisión estaba estrechamente vinculada a la Presidencia de la República y otros actores institucionales, entre ellos miembros del MVR de la Asamblea Legislativa, quienes estaban alineados con el presidente. Así, el entorno institucional que rodeaba al equipo del MPC cambió cuando los centros de poder alineados con el gobierno de Chávez prestaron mayor atención al ALCA. Para el gobierno, la integración regional se vinculaba cada vez más con sus más amplios objetivos de desarrollo económico, político y social (República Bolivariana de Venezuela, 2003, p. 12). Al mismo tiempo, la Comisión Presidencial comenzó poco a poco a hacerse cargo de la negociación del ALCA desde el equipo del MPC, a las restricciones presupuestarias que limitaban su capacidad de asistir a las reuniones y efectivamente lo marginaron del proceso de negociación (Eduardo Porcarelli, entrevista personal, 29 de marzo del 2009). En efecto, los negociadores del MPC ya no tenían la autonomía relativa para negociar debido a un cambio en el campo institucional. Fue con esta nueva cristalización institucional que el Estado venezolano abrazaría su crítica más radical al ALCA. Posteriormente, bajo la dirección de la Comisión Presidencial, el papel de Venezuela en las negociaciones se alejó de una posición que estaba en gran medida en consonancia con los objetivos generales del ALCA, a una que buscaba activamente detenerla o, al menos, transformar radicalmente su estructura.

## El desafío de Venezuela al ALCA

En una reunión en abril del 2003, Venezuela empezó a presentar una serie de memorandos críticos del ALCA y la formulación de un modelo alternativo. Por ejemplo, en una reunión del ALCA en Puebla, México, ese mismo año, se planteó la preocupación de que las políticas de liberalización propuestas no asegurarían

en realidad, el bienestar de los pueblos del hemisferio. El documento argumentaba que las políticas del Consenso de Washington no habían logrado promover el crecimiento económico en América Latina y que debería dársele mayor importancia a las posibilidades del Estado para lograr «el desarrollo equitativo, democrático y sostenible con el medio ambiente» (República Bolivariana de Venezuela 2003, p. 18). Además de estar influenciado por discursos basados firmemente en la Constitución de 1999, en lo que se refiere al papel desarrollista del Estado y la integración regional, también empleó conceptos que estaban siendo desplegados por la Alianza Social Continental, una coalición de movimientos sociales opuestos al ALCA, para criticar el proyecto (Marcelo Saguier 2007, p. 258). Al proponer una redefinición del papel del Estado en el manejo de la economía para alcanzar los objetivos que iban más allá de la simple promoción del crecimiento económico, introducía conceptos que no se podían acomodar fácilmente dentro del marco del ALCA y su ideología subyacente. Aunque Venezuela no jugó necesariamente un papel determinante en el desenlace de las negociaciones, sus acciones contribuyeron a la sensación de que el ALCA no era inevitable, y presentó una importante crítica ideológica del proyecto de integración.

La evolución de la actitud de Venezuela hacia el ALCA demuestra tanto el cambio como la continuidad, consecuencias de los avances dentro y fuera del Estado. Lo que es de mayor importancia es que originalmente no hubo ninguna posición hostil anti-estadounidense. Sin duda, la ideología bolivariana que formuló el gobierno de Chávez ciertamente influyó en la actitud inicial hacia el ALCA y los Estados Unidos, pero fueron los acontecimientos históricos, como el intento de golpe del 2002 y la huelga petrolera, los que concretaron la política del Estado venezolano. Por lo tanto, había un importante desfase entre la ideología del gobierno y la política estatal que puso en duda un análisis de la posición de Venezuela hacia los Estados Unidos, basado enteramente en sus orígenes.

## Observaciones finales: las contradicciones de la reforma institucional en un Estado fragmentado

La evolución de la relación de Venezuela con las negociaciones del ALCA da una idea de las contradicciones que pueden surgir en un contexto en el cual un gobierno está tratando de poner en práctica reformas sustantivas y radicales en una sociedad altamente polarizada, y un Estado fragmentado. El intento de Chávez de reformar el Estado y la sociedad de Venezuela ha enfrentado retos institucionales desde el inicio, incluso con un mandato popular y un cambio institucional exitoso. Por lo tanto, aunque tiene que considerarse seriamente la acusación de que los gobiernos de la «izquierda mala» en América Latina no han logrado en algunos casos promover la institucionalización y el crecimiento organizacional, tal análisis debe tomar en consideración los contextos sociales e institucionales en los cuales operan esos gobiernos.

La evaluación de la institucionalización en países como Venezuela, sin una cuidadosa consideración de las especificidades de cada Estado, necesariamente producirá resultados incompletos. Es precisamente esta omisión la que permite a Castañeda dividir la izquierda latinoamericana en una "buena" y una "mala", sobre la base de los orígenes de sus regímenes. Sin duda, la ideología y la historia de los partidos políticos que constituyen los gobiernos de izquierda de América Latina juegan un papel en sus políticas y acciones. Por lo tanto, las reformas institucionales sustantivas aplicadas por gobiernos como el liderado por Chávez deben ser puestas en el contexto del conflicto político existente, tanto dentro como fuera del Estado, que puede fomentar la introducción de nuevos mecanismos institucionales cuyo interés es alterar el campo estratégico estatal.

Sin embargo, buscar transformar el Estado, con el fin de hacer frente a los centros de poder de la oposición, conlleva riesgos importantes que pueden, a la larga, socavar las reformas que buscan facilitar. La creación de la Comisión Presidencial para negociar el ALCA demostró una tendencia hacia la centralización.

Aunque el equipo de negociación del MPC había participado de manera constructiva en las negociaciones del ALCA durante la presidencia de Caldera y en los primeros años de la presidencia de Chávez, no está claro el grado en el que estaba casado con la ideología neoliberal y habría presentado un impedimento para la política más radical del gobierno hacia el ALCA. La decisión de prescindir de él y establecer un equipo de negociación paralelo estrechamente vinculado al despacho presidencial reforzó una tendencia hacia la centralización. Además, la relación entre el MPC y la comisión no se había definido y se mantuvo ambigua. Sin embargo, esta ambigüedad no era en sí misma un cambio radical de las prácticas históricas del Estado. De hecho, era coherente con las tácticas institucionales asociadas con los cambios en las relaciones de poder de los Estados. No obstante, como advierte Poulantzas (1978, p. 251), la estrategia de involucrar al Estado en su propio terreno con el fin de promover una transformación socialista democrática debería hacerse con cautela y con la participación democrática de las «masas». No hacerlo así contribuye a que muchos se dejen llevar por un «estatismo» mediante el cual el cambio es dirigido exclusivamente desde arriba, y a otras fallas y deficiencias de los intentos históricos anteriores a la transformación socialista.

El gobierno de Chávez ha buscado incrementar la participación democrática popular en el Estado, sobre todo con las medidas incluidas en la Constitución de 1999. Sin embargo, esto no implica que la democratización se haya aplicado de manera sistemática y uniforme en todo el Estado. Aunque las reformas que buscan mayor descentralización y la participación en la toma de decisiones se han aplicado en algunas instituciones, sobre todo en el barrio y las comunidades, ellas no evitan una tendencia hacia la centralización en otras áreas del Estado, como fue el caso con la creación de la Comisión Presidencial para el ALCA. Jonathan Eastwood (2011, p. 21) afirma, por ejemplo, que no está claro si las instituciones de participación establecidas por el gobierno de Chávez han incrementado la participación dentro del Estado, o si ellas han incrementado el clientelismo al

introducir instituciones que están más directamente vinculadas al poder centralizado. Por lo tanto, en el espíritu de la obra teórica de Poulantzas, una evaluación balanceada de la Revolución Bolivariana con respecto a su esfuerzo por transformar el Estado venezolano y conducirlo por el camino del socialismo debe tomar en cuenta el desempeño mixto del esfuerzo de la democratización dentro del Estado. En concreto, se debe determinar cuáles aparatos han sido democratizados con respecto a los verdaderos centros de poder del Estado, y si esto representa un alejamiento de las anteriores prácticas estatales socialistas no democráticas. En otras palabras, mediante el examen del entorno institucional que rodea a las instituciones participativas, se puede evaluar si ellas constituyen mecanismos clientelares o participativos.

La resistencia por parte de algunos sectores económicos a los intentos del gobierno para controlar la inflación y la movilización, a veces violenta, de la oposición en las calles, entre febrero y abril del 2014, ilustraron los constantes desafíos de la transformación del Estado y la sociedad. Aunque la movilización de la oposición no fue apoyada por las ramas claves del Estado venezolano en la misma medida en que lo habían hecho durante las acciones insurgentes anteriores como en 2002 y 2003, el uso de la violencia de fuerzas poderosas y bien organizadas localizadas dentro de la sociedad civil, demostró la precariedad de la vía pacífica y democrática al cambio estructural. Sirvió como un poderoso recordatorio de que ganar y mantener el poder político dentro de ciertos poderes del Estado a través de medios legales y democráticos no significa que las políticas oficiales pueden ser o serán implementadas, ni que las fuerzas de oposición reconocerán la legitimidad de ese poder. En lo más mínimo demostró la necesidad por parte de la Revolución Bolivariana de continuar profundizando la democracia, y de resistir una tendencia hacia el «estatismo» con el fin de ser capaz de seguir contando con el apoyo de las «masas» para resistir los ataques de la oposición, tanto dentro como fuera del Estado. No hacerlo, sólo servirá para aislar al gobierno y hacer su control sobre el poder aún más

vulnerable la próxima vez que exista una movilización importante de la oposición.

Para regresar al argumento de Castañeda referente al pobre historial de la institucionalización de la «izquierda mala», un análisis cuidadoso del programa de un gobierno de izquierda debe llegar a un punto medio entre la realidad de los terrenos politizados y divididos del Estado y los riesgos involucrados en la transformación de ellos. Centrarse en los problemas de gobernabilidad, como la institucionalización en medio de sólidas reformas sociales y económicas, sin referencia a la real oposición que existe dentro los Estados capitalistas, produce análisis incompletos e intrínsecamente sesgados. Además, este tipo de análisis no puede explicar la evolución de la política en tales contextos, que puede estar fundada sobre la ideología de un movimiento político o la visión del mundo de un líder, pero desde luego no está determinada por ella. El análisis de Castañeda subestima la importancia de las especificidades de los entornos institucionales en la formulación de las políticas gubernamentales.

## Referencias

ALONSO, Jesús María (2001, 22 de abril). «Venezuela has reservations on declaration's "democracy clause"». En *EFE News Service* [página en línea]. Recuperado de http://global.factiva.com.proxy.queensu.ca/ha/default.aspx

BRICEÑO RUIZ, José y Rosalba Linares (2004). «Mas allá del Chavismo y la oposición: Venezuela en el proceso del ALCA y la propuesta del ALBA». *Geoenseñanza,* Mérida: Universidad de Los Andes, *9* (1), pp. 19-46.

CASTAÑEDA, Jorge (2006). «Latin America's Left Turn». *Foreign Affairs*, Tampa (Florida), *85* (3), pp. 28-43.

CASTAÑEDA, Jorge y Marco Morales (2008). «The current state of the utopia». En *Leftovers: Tales of the Latin American Left*, pp. 2-17. Nueva York: Routledge.

CHÁVEZ FRÍAS, Hugo y Marta Harnecker (2005). *Understanding the Venezuelan Revolution: Hugo Chávez Talks to Martha Harnecker*, (Chesa Boudin, trad.). Nueva York: Monthly Review Press.

EASTWOOD, Jonathan (2011). «Introduction: The revolution in Venezuela». En Thomas Ponniah y Jonathan Eastwood (eds.), *The Revolution in Venezuela: Social and Political Change under Chávez*, pp. 1-36. Cambridge (Massachusetts): Harvard University Press.

ELLNER, Steve (2008). *Rethinking Venezuelan Politics: Class, Conflict, and the Chávez Phenomenon*. Boulder (Colorado): Lynne Rienner.

FAWCETT, Louise (2005). «The origins and development of the regional idea in the Americas». En Louise Fawcett y Mónica Serrano (eds.), *Regionalism and Governance in the Americas: Continental Drift*, pp. 25-51. Nueva York: Palgrave Macmillan.

GUEVARA, Aleida (2005). *Chávez, Venezuela, and the New Latin America: An Interview with Hugo Chávez*. Nueva York: Ocean Press.

HELLINGER, Daniel (2003). «Political overview: the breakdown of Puntofijismo and the rise of Chavismo». En Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.), *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization, and Conflict*, pp. 27-54. Boulder (Colorado): Lynne Rienner.

JESSOP, Bob (2008). *State Power: A Strategic-Relational Approach*. Cambridge: Polity Press.

NAIM SOTO, Nayvilis (2003). «La política de integración de Hugo Chávez: un proyecto para Latinoamérica». *Cuadernos Latinoamericanos*, Maracaibo: Universidad del Zulia, *14* (24), pp. 11-37.

PARISH, Randall, Mark Peceny, y Justin Delacour (2007). «Venezuela and the collective defense of democracy regime in the Americas». *Democratization*, *14*, pp. 207-231.

PORCARELLI, Eduardo and Fidel Garofalo Laya (2005). «Evolución de la participación y la posición de Venezuela en las negociaciones del ALCA». En Rita Giacalone (ed.), *Venezuela en el ALCA entre realidades y fantasías,* pp. 117-138. Mérida: Grudir.

POULANTZAS, Nicos (1978). *State, Power, Socialism*. Londres: North London Branch.

_____ (2008). «The capitalist state: a reply to Miliband and Laclau». En James Martin (ed.), *The Poulantzas Reader: Marxism, Law, and the State*, pp. 270-293. Londres: Verso Books.

República Bolivariana de Venezuela (1999). «The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela». En *Axis of Logic* [página en línea]. Recuperado de http: //axisoflogic.com/artman/publish/Article_29881.shtml

_____ (2003). *Venezuelan Position in Relation to the Free Trade Area of the Americas*. Caracas: Ministerio de Producción y Comercio.

SAGUIER, Marcelo (2007, junio). «The Hemispheric Social Alliance and the Free Trade Area of the Americas process: the challenges and opportunities of transnational coalitions against neo-liberalism». *Globalizations, 4* (2), pp. 251-265.

VALENCIA, Judith (2005, 21 y 22 de noviembre). «El ALBA: un cauce para la integración de Nuestra América». Ponencia presentada en el simposio Diálogo sudamericano: Otra integración es posible. Quito: Universidad Simón Bolívar.

# Diversidad político-social y el camino democrático hacia el cambio en Venezuela, 2010-2014

Steve Ellner

La profundización del proceso de cambio y la radicalización que caracterizaba la presidencia de Hugo Chávez desde su inicio en 1999, impactó a los grupos sociales, no pertenecientes a la élite, de diferentes maneras, a veces favoreciendo a algunos a expensas de otros. Cada etapa ha privilegiado diferentes programas, objetivos, consignas y corrientes dentro del movimiento chavista, y ha tenido implicaciones ideológicas distintas. El proceso de radicalización estuvo influenciado por las aspiraciones de diferentes sectores sociales dentro del movimiento y la visión ideológica de los dirigentes chavistas, pero también fue, en gran parte, una respuesta a las acciones y tácticas de los adversarios del gobierno.

Hasta la fecha, el gobierno chavista ha pasado por cinco etapas, cada una con diferentes prioridades: 1999-2000, caracterizada por políticas económicas moderadas y un discurso moderado; 2001-2004, cuya característica sobresaliente fue la legislación antineoliberal; 2005-2006, con el surgimiento del perfil de un nuevo modelo económico basado en la redefinición

de la propiedad privada y un discurso a favor del socialismo; 2007-2008, marcada por la nacionalización de la industria básica; 2009-2012, cuando el gobierno expropió un gran número de compañías por diversas razones y entre ellas la más importante fue la de competir con el sector privado.

Estas transformaciones han estimulado el apoyo de los miembros de algunos grupos sociales mientras que han alejado a otros del movimiento. La posición moderada del chavismo y su crítica al sistema partidista durante la primera etapa, por ejemplo, apelaron a la clase media, un porcentaje importante que votó por Chávez en la primera elección presidencial en 1998, y la segunda en el 2000. La posterior radicalización del gobierno y la preferencia explícita del liderazgo chavista por los sectores menos favorecidos de la población intimidaron a muchos de la clase media, los cuales asumieron una posición cada vez más crítica al gobierno y protestaron de manera masiva, hasta conducir al intento de golpe de Estado de abril del 2002 y la huelga general, ocho meses después.

El cambio político en general y la construcción socialista en particular han producido contradicciones internas agudas que se desenvuelven en diferentes frentes y socavan la unidad del gobierno y del movimiento chavista. Las corrientes y facciones políticas del chavismo corresponden a tradiciones distintas de la izquierda a nivel mundial, y también a diferencias clasistas entre los chavistas. En este sentido, por ejemplo, durante la tercera etapa. el gobierno promovió la incorporación de un gran número de personas de los sectores marginales mediante el reparto de grandes sumas de dinero a las cooperativas de trabajadores. Aunque los miembros del sector marginal de la población se registraron en el programa de manera masiva, muchos sindicalistas tenían dudas acerca de su viabilidad productiva y lo criticaron por estar al margen de la legislación laboral y las organizaciones sindicales. Además, marxistas ortodoxos, tales como los del Partido Comunista de Venezuela (PCV), plantearon que las cooperativas al igual que los consejos comunales no «entraban

en contradicción con el capital», y por eso era necesario «priorizar el trabajo sindical» (Óscar Figuera 2011).

De manera parecida, los trabajadores en las compañías expropiadas durante la cuarta y quinta etapa han exigido mejoras sustanciales en los beneficios laborales y la estabilidad laboral absoluta en concordancia con la consigna chavista del «socialismo humanista», y al mismo tiempo insisten en la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, como un objetivo socialista fundamental. En cambio, los chavistas que pertenecen a los sectores medios de la población están más dispuestos a apoyar a los gerentes estatales que consideran la participación de los trabajadores en la toma de decisiones como un medio para lograr beneficios económicos desmesurados y no realistas. Estos chavistas piden a los trabajadores distinguir entre las empresas del Estado y las privadas, y que moderen sus exigencias a las primeras. Los chavistas pro estatistas acusan al ala más radical y combativa del movimiento laboral de promover perturbaciones en las empresas estatales del acero, aluminio y otras industrias pesadas de la región de Guayana, y de poner en peligro su existencia.

Los miembros de tres principales grupos sociales se identifican con las diferentes líneas de pensamiento dentro del chavismo y defienden intereses divergentes y a veces conflictivos. Estos grupos son: la clase obrera organizada, los sectores medios de la población y los sectores tradicionalmente no organizados y no incorporados (constituidos por miembros de la economía informal, mucha de la fuerza laboral rural y los que trabajan para pequeñas empresas sin representación sindical ni contratos colectivos)[1]. Los últimos dos grupos, en gran medida, carecen de la coherencia política que caracteriza a las clases

1 La globalización y las políticas neoliberales en las décadas de los ochenta y noventa incrementaron el número de personas del sector de la economía informal, después de haber alcanzado una reducción significativa en el período del boom petrolero de la década del setenta. En el 2011, la Organización Internacional del Trabajo reportó que el empleo en el sector informal representaba 47,5 % de la fuerza laboral no agrícola en Venezuela (International Labor Organization 2011).

sociales con posiciones bien definidas y articuladas[2]. Las prioridades entre los tres difieren y su apoyo a consignas específicas, programas y objetivos, aunque coinciden en gran parte, varían en grado e intensidad.

Además de diversos grupos sociales con distintas exigencias y prioridades, coexisten tres visiones de largo alcance dentro del movimiento chavista, y cada una corresponde a diferentes tradiciones socialistas. Una corriente se adhiere a la visión ortodoxa marxista de la clase obrera organizada como el agente clave de la revolución socialista. Una segunda corriente, que idolatra al Che Guevara, recalca los valores revolucionarios como la solidaridad e invoca el principio asociado con el comunismo de «a cada uno según su necesidad». Una tercera visión prioriza los objetivos económicos y el desarrollo industrial de manera similar a las estrategias y prioridades del socialismo soviético durante sus 75 años de existencia. La primera línea de pensamiento apela de manera desproporcionada a la clase obrera organizada, la segunda a los sectores no organizados de la población y la tercera a los sectores medios.

El modelo económico emergente en Venezuela, el cual tiene diferentes implicaciones para los chavistas de distintos orígenes sociales, fue el resultado final de una serie de respuestas gubernamentales a las maniobras emprendidas por los poderosos adversarios que, como demostrará la primera parte de este capítulo, incluyeron el sabotaje económico. La necesidad de responder con ahínco a estas acciones y al mismo tiempo mantener el apoyo activo de los miembros de los tres grupos sociales antes mencionados, explica la complejidad del proceso de cambio de largo alcance en un escenario democrático. Si las decisiones del gobierno fuesen tomadas a partir de consideraciones ideológicas, teniendo en cuenta solamente la correlación de fuerzas entre las corrientes políticas dentro del chavismo y aquellas a favor y en contra del socialismo en la población general, los de-

2 Mientras alguna literatura académica sobre la economía informal recalca el potencial de la movilidad de clase, este capítulo subraya el estatus no incorporado y marginalizado de muchos de sus integrantes.

safíos que confrontan los chavistas serían relativamente simples y con menos variables (Harnecker 2010, p. 66). La vinculación entre las corrientes ideológicas dentro del movimiento chavista y los grupos sociales, en el contexto de las libertades democráticas y los altos niveles de conflicto y movilización, tanto dentro del chavismo como también entre él y la oposición, complican el proceso de transformación socialista. Esta dinámica diferencia a Venezuela de las experiencias de los socialdemócratas en el poder en el siglo xx.

Este capítulo revisará los recientes acontecimientos en Venezuela con el propósito de tratar de determinar la dirección futura del movimiento y el gobierno chavista. Específicamente examinará tres áreas importantes que han impactado las corrientes internas y los grupos sociales pro chavistas en el pasado reciente: las nacionalizaciones y las expropiaciones, las tensiones dentro del movimiento laboral chavista y la consolidación del movimiento de los Consejos Comunales. El análisis de las expropiaciones intenta determinar por qué el gobierno (que estuvo comprometido a pagar indemnización) emprendió una acción tan costosa aún cuando ésta amenazaba con restar recursos a programas sociales de suma importancia, y cómo impactaron las estrategias de los chavistas. La discusión está diseñada para arrojar luz sobre las visiones e intereses divergentes y conflictivos dentro del chavismo.

El análisis de la relación entre el discurso, las acciones y los grupos sociales se diseñó para contribuir al debate teórico referente a la heterogeneidad como asunto problemático para la transformación revolucionaria en tiempos recientes, como plantean pensadores izquierdistas como Ernesto Laclau y Louis Althusser. Ambos escritores hacen hincapié en los diversos niveles de conflicto y contradicciones entre los bloques que se oponen y apoyan el cambio de largo alcance, como también dentro de la última categoría, destacando así la complejidad del proceso de cambio. El enfoque de este capítulo arroja luz sobre la naturaleza compleja del camino democrático a favor del cambio seguido por la izquierda latinoamericana del siglo xxi en general. En resumen,

el capítulo argumentará que, en un contexto democrático, el camino gradual hacia el socialismo confronta dos retos sin soluciones fáciles: un enemigo cuyas tácticas legales y extra legales obligan al gobierno a responder, de manera que algunas veces crea problemas adicionales e intensifica el conflicto; y las divisiones entre los miembros del movimiento chavista con diversos intereses y visiones y una mayor capacidad de movilización, como fue el caso en el pasado de los caminos no democráticos al socialismo.

## Las expropiaciones

La expropiación de numerosas empresas fue la característica resaltante de la cuarta y quinta etapa. Las medidas marcaron el inicio de una economía mixta basada en el control estatal de la industria básica (acero, electricidad y telecomunicaciones) y también en la competencia entre Estado y el sector privado en otras áreas claves, particularmente el procesamiento y distribución de alimentos y la banca.

La transformación ha impactado a los diferentes grupos sociales y a las corrientes políticas de manera diferente. La compensación monetaria pagada a los dueños de las empresas expropiadas representa una gran carga para el Estado y, en consecuencia, se ha disminuido la primacía de los programas sociales, los cuales favorecen principalmente a los sectores no incorporados de la población. Al mismo tiempo, las expropiaciones han enfocado la atención del gobierno hacia las unidades de producción que abren oportunidades a la clase obrera organizada para lograr diversos objetivos, tales como la participación de los trabajadores en la toma de decisiones gerenciales, la legislación a favor de los beneficios laborales y la unificación del movimiento sindical. Finalmente, las expropiaciones señalaron una profundización del proceso de transformación que fue aplaudido particularmente por los chavistas radicales, quienes apoyaban un ritmo de cambio más acelerado que la corriente moderada dentro del movimiento.

La siguiente discusión de los acontecimientos que condujeron a las expropiaciones pone en evidencia la complejidad de la transformación que está en marcha en Venezuela. En general, las corrientes políticas y sociales en el movimiento chavista influenciaron a quienes formularon las políticas. No obstante, una vez que el gobierno descartó la opción de concesiones, la política de las expropiaciones fue impuesta por las circunstancias. Las expropiaciones, a la vez, definieron los términos y temas de debate (como el tratamiento que deben dar los sindicatos a las empresas del Estado) y ayudaron a clarificar las divergencias entre las diferentes corrientes chavistas internas. Esta explicación, que hace hincapié en la complejidad, es la antítesis de lo que argumentan los líderes de la oposición basados en el análisis simplista de la «tesis de las dos izquierdas» (la izquierda «buena» y la izquierda «mala») defendida por Jorge Castañeda, entre otros.

La ola de expropiaciones, lejos de obedecer a un esquema ideológico preconcebido promovido por la corriente radical del chavismo, fue una repuesta a los desafíos políticos y económicos creados por el sector privado, que estaba en algunos casos vinculado a la oposición venezolana[3]. Los grupos económicos, como han hecho en toda la historia cuando perciben que sus intereses básicos están amenazados, crearon escasez de los productos básicos importantes, tanto durante los dos meses de la huelga general del 2002-2003, como los meses anteriores al referéndum nacional de diciembre del 2007, sobre una reforma constitucional patrocinada por el gobierno. Básicamente, estaban en juego cuatro factores: la escasez, la especulación en los precios, los controles económicos establecidos por el gobierno y la expropiación. Cada uno de los cuatro factores desencadenó otro, y así creaba un efecto espiral. El gobierno, por ejemplo,

3 Ciertamente, las expropiaciones no lograron preparar el camino para la planificación socialista. Víctor Álvarez, un intelectual chavista y ex ministro de Industria Básica y Minería, señaló que con sólo el 30 % de la economía en manos del Estado era «imposible tener un plan racional de producción porque las piezas fundamentales de la economía permanecen en manos privadas» (Ellner 2014, pp. 100-101).

respondió a la escasez inducida políticamente durante la huelga general, la cual elevó los precios mediante la implementación de controles de cambio y precios en febrero del 2003. Estas medidas, a la vez, estimularon al sector privado a reducir la producción y establecer patrones alternativos de distribución con la finalidad de evadir los controles de precios, que incluyeron la exportación a las naciones vecinas. La reacción del gobierno fue expropiar las empresas con el propósito de cubrir el faltante en el mercado. Las medidas también fueron hechas con el objetivo de intimidar al sector privado para mantener la producción y distribución en niveles normales.

Esta dinámica, que consiste en la intervención del gobierno para contrarrestar la resistencia de los adversarios en el plano económico, demuestra la complejidad de los acontecimientos políticos durante el gobierno de Chávez. El proceso de cambio se asemeja a una «guerra de posición» en la cual los revolucionarios avanzan paso a paso, no sólo como resultado de una correlación favorable de fuerzas y mejoras en las capacidades, sino también como una reacción a las iniciativas y tácticas empleadas por el enemigo.

En cambio, los adversarios del gobierno prevén una verdadera «guerra de maniobras» al ver las expropiaciones como equivalentes al socialismo por decreto o «socialismo por asalto». Los portavoces de la oposición subrayan tanto el objetivo económico de imponer el socialismo en la Nación como el objetivo político de asestar un duro golpe al bando enemigo. Teodoro Petkoff, por ejemplo, escribió en su periódico *Tal Cual*: «Chávez está intoxicado con el estatismo. Las tomas de empresas por parte del Estado no responden a criterios de eficiencia económica sino que son criterios absolutamente políticos; el objetivo es concentrar el máximo poder en el gobierno y su caudillo» y, al mismo tiempo, liquidar el movimiento sindical (Petkoff 2009; 2010, pp. 93-99). Alfredo Keller, jefe de una empresa encuestadora pro oposición, afirmó que al expropiar las empresas, el gobierno buscaba privar a los partidos de oposición de fuentes de financiamiento, así como «del control que pudiera ejercer la

oposición sobre la masa de trabajadores a través de las empresas privadas» (Unión Radio 2010). Otro encuestador importante identificado con la oposición, Luis Vicente León, aseguró que las expropiaciones eran una manera de «castigar» a los líderes de la oposición (Fernandes y Cruces 2010). Finalmente, el diario pro oposición *El Nacional* atribuyó las expropiaciones de las empresas extranjeras al «odio racista contra cualquier extranjero que se atreve a invertir en Venezuela en el campo de la distribución de alimentos» (EFE New Service 2010).

Más que estar motivadas por objetivos políticos e ideológicos (o étnicos), las expropiaciones después del 2007 fueron el resultado lógico de una serie de batallas entre el Estado y el sector privado que comenzaron con el decreto de regulación de precios sobre los productos básicos en el 2003. La medida fue diseñada para contrarrestar las subidas de precios desatadas por la huelga general de dos meses entre 2002 y 2003. Anteriormente, los controles de precios en Venezuela habían generado desinversión y acaparamiento que resultaban en escasez, como ocurrió en las semanas que condujeron a los disturbios de la semana del 27 de febrero de 1989. En esta oportunidad, sin embargo, la polarización intensa que enfrentó al gobierno contra el sector privado en el plano político, y la falta de disposición de los chavistas para hacer concesiones para aplacar a los empresarios, como había ocurrido en el pasado, condujeron a una intensificación de las tensiones y las tácticas.

Un factor que explicaba la escasez fue el político. La decisión del máximo grupo empresarial Fedecámaras, de liderar la huelga general contra Chávez, fue inédita; era la primera vez, en su historia de seis décadas, que la organización públicamente entraba en la arena política como un actor principal, más allá de la formulación de demandas corporativistas. Posteriormente, el período de mayor escasez fue en los meses anteriores al referéndum de diciembre del 2007 sobre la proposición de una reforma de 69 artículos de la Constitución, que los empresarios percibieron como una amenaza a sus intereses vitales, especialmente porque parecía socavar el sistema de la propiedad privada.

Además de la dimensión política, la acción organizada para obtener más ganancia a través de toda la cadena de distribución, en el contexto de los controles de precios, ha sido en gran parte responsable de la escasez, el mercado negro y la actividad de contrabando. Ciertamente, cuanto mayor es la disparidad entre el precio regulado y el valor en el mercado de un producto determinado, más complejos y extendidos son los mecanismos ilícitos que han surgido. Con los precios de la gasolina, quizás los más baratos del mundo, el gobierno tuvo que recurrir a medidas de racionamiento en las gasolineras en los estados fronterizos, para impedir el transporte ilegal hacia Colombia. De manera similar, en el 2010 la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) estableció reglas rígidas para la compra de dólares preferenciales para los turistas venezolanos en el extranjero, con el propósito de controlar las transacciones fraudulentas concebidas para aprovecharse de la tasa de cambio oficial, la cual era aproximadamente la mitad de la del mercado libre (hasta el 2012 cuando la diferencia entre los dos cambios llegó a ser mucho mayor). En la industria de la construcción, los mayoristas vendían cabillas de acero y cemento exclusivamente a los grandes constructores, ya que era menos probable que denunciaran la violación de los precios legales que en el caso de los albañiles independientes, quienes, por consiguiente, enfrentaban la escasez de materiales esenciales. Los mayoristas de alimentos, por su parte, vendían los productos a precios más elevados que los legalmente establecidos a los abastos, los cuales, a su vez, los vendían a vendedores ambulantes y otros cuya clientela consistía en contactos personales, tales como amigos y vecinos. En algún punto de la cadena los productos fueron acaparados para crear una escasez artificial que facilitaba la venta en el mercado negro. Los "revendedores", quienes compran a precio regulado y venden ilegalmente al precio del mercado, se han convertido en un componente fijo de la cadena de distribución.

En palabras de Arquímedes Barrios, coordinador regional de la oficina de Indepabis (Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, encargado de hacer

cumplir la regulación de precios) en el estado Anzoátegui: «Los grandes productores frecuentemente usan al pequeño comerciante para eludir los precios regulados. Tomaría un esfuerzo sobrehumano para que el Estado combatiera todas estas prácticas» (Arquímedes Barrios, entrevista personal, 24 de agosto del 2011). Barrios se lamentó de que su despacho no haya podido contar con la colaboración de las pequeñas empresas detallistas para documentar las prácticas ilícitas de los grandes productores y distribuidores con el fin de tomar medidas punitivas contra ellos.

El Gobierno, a través de Indepabis y un gran número de programas, intentó poner fin al mercado negro. Fueron bastante comunes los incidentes en los cuales ciudadanos frecuentes denunciaban ese tipo de actividad comercial ilícita, y luego el Gobierno confiscaba y distribuía los bienes regulados (Diario *Vea*, sin autor 2011). En otro intento por combatir la actividad del mercado negro, la compañía estatal del acero, Sidor, ayudó a establecer siete ferreterías llamadas Ferresidor que vendían cabillas y –durante un tiempo– cemento, exclusivamente a las personas certificadas por los respectivos consejos comunales para la construcción de sus casas. Además, en febrero del 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la cual autoriza a los comités de contraloría social para el abastecimiento a realizar inspecciones oficiales de la distribución y venta de los productos básicos. En noviembre del mismo año se tomaron medidas severas sobre la venta ilegal de productos regulados en la economía informal. Finalmente, en agosto del 2011, el gobierno aprobó la Ley de Costos y Precios Justos, la cual creó la Superintendencia de Precios Justos (Sundde, que reemplazó al Indepabis) para regular los precios y previó un estudio completo de la economía para expandir el sistema de controles de precios.

Las expropiaciones fueron diseñadas principalmente para contrarrestar la escasez, pero algunas de ellas cumplían otros objetivos también. La nacionalización de las industrias básicas –que incluyen el acero, las telecomunicaciones, la electricidad

y el petróleo– ejecutada en 2007-2008, había sido una meta de los movimientos nacionalistas que datan de la década de 1930 y había sido incorporado en la Constitución de 1961 (Artículo 96). Además, en el 2009 el gobierno expropió más de 75 empresas contratistas en Zulia que ejecutaban trabajos para PDVSA, así como otras asociadas con la Corporación Venezolana de Guayana, en un intento por garantizar la estabilidad laboral a los trabajadores y restringir la práctica de la tercerización laboral; una medida que se convirtió en una bandera chavista.

La expropiación de las multinacionales acusadas de especulación en los precios, contrabando y fallas en el suministro del mercado nacional concordaba con la retórica antiimperialista del gobierno de Chávez (Livingstone 2011, p. 31). Ejemplos incluían a Owens-Illinois Glass Company (con 52 años en Venezuela), Cargill (procesadora de alimentos), Monaca (una empresa mexicana procesadora de alimentos), Fertinitro (Fertilizantes Nitrogenados de Venezuela) y Agroisleña (una compañía agrícola española). En el caso de Fertinitro (una compañía petroquímica con un tercio de propiedad de Industrias Koch) y también Sidor, el gobierno ejerció acciones aduciendo que aun cuando se beneficiaban de las materias primas subsidiadas a precios artificialmente bajos, vendían los productos finales en el exterior mientras desatendían el mercado nacional. Chávez también denunció a la Owens-Illinois de destrucción ambiental en el estado Trujillo, al mismo tiempo que una empresa siderúrgica venezolana expropiada, Sidetur (Siderúrgica del Turbio, S.A.), fue acusada de especulación con los precios y violación de las normas de salud y seguridad laboral que contribuía a la perturbación laboral.

En resumen, la decisión de expropiar era básicamente una respuesta a las prácticas comerciales de un sector privado hostil. No obstante, otros asuntos estaban en juego y el plan de acción reflejó los intereses y posiciones específicas de las corrientes dentro del movimiento prochavista. En este sentido, los líderes sindicales habían presionado para eliminar la práctica de subcontratar, puesto que las expropiaciones estaban diseñadas para controlar dicha práctica, pero los gerentes estatales no estaban

tan comprometidos a cambiarla. Lo que es más, los chavistas radicales elogiaron las expropiaciones porque demostraban que el proceso revolucionario en Venezuela no se había estancado. Por otro lado, los líderes de un grupo menos radical que pertenecía a la coalición gobernante, el partido Patria Para Todos (PPT), criticaron la política de expropiaciones y en el 2010 algunos de ellos dejaron el campo chavista.

## El movimiento laboral chavista

Durante los catorce años del gobierno chavista, y particularmente después de las expropiaciones del 2007, se les recordó frecuentemente a los militantes de los sindicatos que el presidente Chávez apoyaba sus causas. Algunas decisiones gubernamentales, que fueron respuestas a las movilizaciones de los trabajadores, crearon expectativas y un sentido de empoderamiento por parte de los sindicalistas. En general, percibían que el presidente Chávez estaba comprometido a realzar el papel de los sindicatos y apoyar sus demandas. La primera acción en este sentido ocurrió en el 2005 cuando el Gobierno expropió la empresa de papel Invepal, la compañía de válvulas Inveval y varias otras empresas que habían sido tomadas por los trabajadores, varios años antes. Luego, en el 2008, el gobierno de Chávez nacionalizó Sidor en respuesta a un extenso y violento conflicto producido por el vencimiento del contrato colectivo, tiempo durante el cual el sindicato Sutiss (Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares) denunció prácticas contables falsas de la gerencia de la empresa que privaban a la Nación de considerables ingresos impositivos. Al año siguiente, el Ejecutivo Nacional organizó talleres en la región industrial de Guayana para elaborar el Plan Socialista de Guayana sobre la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, que condujeron al nombramiento de personas recomendadas por éstos para dirigir tanto Sidor como otras empresas estatales industriales en la región. Al mismo tiempo, Chávez, por primera vez, señaló a la clase obrera como agente clave en el

camino hacia el socialismo, una tesis que fue secundada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual la llamó la «fuerza motor y el sujeto (…) que está llamada a liderar la revolución en el contexto de la lucha de clase» (PSUV 2010, p. 85). Poco tiempo después, las acusaciones por parte de miembros de Sutiss contra Luis Velásquez, un influyente gerente de Sidor, condujeron a su encarcelamiento debido a que estaba implicado en el contrabando hacia Colombia de cabillas producidas por la empresa, las cuales eran escasas en Venezuela. Antes de la medida, los trabajadores de Sutiss habían protestado frente a los portones de la planta contra Velásquez, a quien ellos llamaron el "mafioso de las cabillas", y enviaron un informe a los ejecutivos de la compañía en el cual señalaban su exagerado estilo de vida, como evidencia de su comportamiento corrupto.

Los sindicalistas pro chavistas, desde la fundación de la Unión Nacional de Trabajadores en el 2003, han estado divididos en dos corrientes. Ambas son definidas por su concepto de clase y específicamente la relación que ellas prevén entre la clase obrera organizada y el gobierno y movimiento chavista. Un grupo, que puede llamarse los «autonomistas», insiste en que la lealtad a los partidos políticos y al gobierno tiene que estar subordinada a la lucha en favor de los intereses de los trabajadores. La segunda corriente, los «no autonomistas», acusan a los autonomistas de estar influenciados por el «factor extranjero» en el que los esquemas dogmáticos marxistas (algunas veces vinculados a ideas trotskistas) y los ataques continuos a la burocracia del Estado son considerados más importantes que la defensa del gobierno de Chávez. Los no autonomistas critican a los autonomistas por adherirse a un punto de vista «obrerista» que no toma en cuenta el escenario político en general, y conduce a demandas económicas excesivas o «economismo». Mientras que la mayoría de las exigencias de las dos corrientes convergen, los autonomistas son más combativos en sus tácticas y más vociferantes en sus críticas a las políticas y a la conducta del gobierno (Franklin Rondón, entrevista personal, 4 de octubre del 2011; Ellner 2007, pp. 89-95).

La influencia de los líderes no autonomistas (a diferencia de los autonomistas) era mayor en el sector estatal, indudablemente debido a sus vínculos con los gerentes estatales y el liderazgo del PSUV. Los no autonomistas eran dirigidos por Oswaldo Vera (portavoz del Frente Socialista de Trabajadores del PSUV) y eran guiados por Nicolás Maduro (ex dirigente sindical). Después de las elecciones del Congreso en 2010, Vera fue el único sindicalista activo y diputado nacional del PSUV, y su suplente fue el ex presidente de los trabajadores del metro Francisco Torrealba, quien también estaba identificado con los no autonomistas. En cambio, Marcela Máspero, quien junto con el antiguo líder trotskista Stalin Pérez Borges llegaron a ser los dirigentes más importantes de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), fue presidenta de la federación de trabajadores farmacéuticos, pertenecientes al sector privado.

Las diferencias entre las dos corrientes llegaron a un punto crítico en la convención nacional de la Unete en el 2006 cuando una confrontación física condujo al retiro de un grupo de los autonomistas de la organización. Posteriormente, los no autonomistas comenzaron a organizar una nueva confederación en un intento por aislar al resto de los autonomistas agrupados en la Unete. En su determinación de no sobredimensionar las demandas económicas, especialmente en el sector público, los no autonomistas resaltaron los objetivos políticos de la nueva confederación e insistían en su definición como explícitamente socialista. Así, por ejemplo, promovieron la idea de que la Cancillería debería establecer agregados laborales en las embajadas en todo el mundo en nombre del "internacionalismo", y que el movimiento sindical debería involucrarse con la integración latinoamericana y su impacto sobre los trabajadores.

La prolongada discusión sobre una propuesta de ley del trabajo para reemplazar la Ley Orgánica del Trabajo aprobada en 1990 puso en evidencia los deslindes entre los autonomistas, los no autonomistas y las diferentes corrientes políticas dentro del movimiento chavista. El asunto más polémico era el sistema de pago de las prestaciones sociales, cuya modificación, bajo la

influencia del neoliberalismo en 1997, fue inmediatamente rechazada por Chávez. En efecto, la reforma de 1997 facilitaba la práctica de cancelar anualmente a los trabajadores sus prestaciones, en lugar de pagar una gran suma de dinero al momento de dejar el empleo, que es cuando más lo necesitan. Los autonomistas apoyaron la restauración del antiguo sistema, que, según la corriente chavista moderada, representaba una carga demasiado pesada tanto para el gobierno como para el sector privado. Algunos de los sindicalistas no autonomistas estaban abiertos a la posibilidad de negociar un arreglo menos costoso con aquellos dirigentes políticos chavistas, que estaban resistentes al restablecimiento del viejo sistema de retroactividad.

Otro asunto de disputa fue el reconocimiento legal de la autoridad de los consejos de trabajadores que los autonomistas promueven activamente. Por otro lado, algunos no autonomistas temían que los consejos compitieran con los sindicatos y en el proceso los debilitaran; en algunas compañías denunciaron a los autonomistas por seguir una estrategia en este sentido. Otros no autonomistas, sin embargo, aceptan los consejos laborales pero en parte como un mecanismo para estimular la producción, que incluye el trabajo voluntario que ha sido promovido en la industria petrolera y en otras industrias.

La proposición de reducción de la semana de trabajo también divide las diferentes corrientes internas. Chávez incorporó la propuesta de semana laboral de 36 horas en la reforma constitucional que fue rechazada en el referéndum del 2007. En la alocución del 1º de mayo de 2011, sin embargo, el presidente cambió completamente su opinión aduciendo que la nación tenía que incrementar la producción nacional para superar el modelo petrolero rentista. Los autonomistas (y muchos no autonomistas en el movimiento sindical, pero no los políticos chavistas moderados) son críticos del cambio y han defendido el argumento de los chavistas radicales, quienes ven la reducción de la jornada de trabajo como una oportunidad para elevar la competencia cultural y educativa de los trabajadores, y específicamente sus habilidades administrativas, para facilitar su participación gerencial

(Lebowitz 2010, pp. 134, 156). Finalmente, el debate sobre la legislación laboral incluyó la propuesta de la eliminación de la tercerización, una práctica a la que Chávez se opuso frecuentemente, a diferencia de muchos de los gerentes de las empresas estatales. Estas diferencias sobre asuntos concretos muestran que los no autonomistas estaban más empeñados en evitar enfrentamientos con los chavistas políticos moderados que los sindicalistas autonomistas.

A pesar del apoyo del liderazgo del PSUV y de la burocracia gubernamental a los no autonomistas, las posiciones asumidas por el presidente Chávez y el Ejecutivo Nacional a veces animaban a los autonomistas. Por ejemplo, con la nacionalización de Sidor en el 2008, Chávez reemplazó al Ministro del Trabajo, José Ramón Rivero –quien abiertamente se puso de parte de los no autonomistas–, por Roberto Hernández, quien intentó reconciliar las tendencias sindicales chavistas.

Los autonomistas también estaban alentados por la iniciativa del gobierno de organizar talleres de trabajadores en la región industrial de Guayana con el propósito de diseñar el Plan Socialista de Guayana, que consistió en propuestas para promover el control obrero. Además, el presidente Chávez aceptó el planteamiento de que los trabajadores nombraran a los presidentes de las empresas estatales en la región. En el caso de Sidor, los trabajadores escogieron a Carlos D'Oliveira como presidente y, con su apoyo, hicieron seguimiento a la producción en los diferentes departamentos. En esta forma los trabajadores autonomistas intentaban poner coto a la influencia de los gerentes estatales y vencer el problema de la escasez de componentes y de la materia prima, debido –presuntamente– a la ineficiencia burocrática o al sabotaje.

El nuevo presidente de Alcasa, también escogido por los trabajadores, Elio Sayago, intentó cortar los vínculos de la empresa con las multinacionales (Sayago 2009). Los chavistas no autonomistas agrupados en el "Movimiento 21", que controlaba el sindicato de trabajadores de Alcasa, acusaron a Sayago de no cumplir los convenios contractuales y organizaron un referéndum

de trabajadores para destituirlo en un momento en que los conflictos habían paralizado gran parte de la planta. Los autonomistas afirmaron que lo que realmente estaba en juego eran los esfuerzos de Sayago para realizar una sacudida muy necesaria en la burocracia de la empresa. La división en las filas del chavismo facilitó el triunfo de una candidatura vinculada al partido de oposición, Causa R, en las elecciones sindicales realizadas en agosto del 2011. Los trotskistas y otros autonomistas sacaron la conclusión de que el control de los trabajadores en las empresas individuales estaba condenado al fracaso sin el compromiso incondicional por parte del Estado para garantizar la operatividad. Ellos pedían la expropiación de otras empresas, ubicadas aguas arriba y abajo en la cadena de producción, y (debido a las condiciones no favorables del mercado mundial del aluminio) la inyección de grandes sumas de capital en la industria.

La causa fundamental del conflicto entre los autonomistas y los no autonomistas en las industrias de Guayana y otros sectores estratégicos era el tema del tratamiento que los sindicalistas chavistas deberían conceder a las empresas del Estado, un debate que las expropiaciones masivas desde el 2007 habían hecho particularmente pertinente. El caso de PDVSA era de trascendencia particular debido a la importancia predominante del petróleo para el país. El presidente de la empresa, Rafael Ramírez, aclaró explícitamente que bajo ninguna circunstancia permitiría una repetición de la pérdida de control gubernamental de PDVSA, incluyendo el movimiento sindical petrolero, que hizo posible la huelga general del 2002-2003. Ramírez respaldó abiertamente al no autonomista Wills Rangel en las elecciones de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, en el 2009, sólo después de haber apoyado una candidatura alternativa que parecía ser aún menos independiente. Ramírez también tomó medidas para opacar la federación, al promover las asambleas de trabajadores y redactar un convenio de contratación colectiva sin la participación de los sindicatos. La intervención de Ramírez y la formulación de condiciones aceptables e inaceptables manifestaban el recelo hacia los sindicatos de algunos sectores

del chavismo, actitud rechazada por los sindicalistas chavistas, tanto los autonomistas como los no autonomistas.

La rivalidad entre las dos corrientes de trabajadores chavistas tiene implicaciones de clase y arroja luz sobre la estrategia política del movimiento chavista y las divisiones sociales. La corriente autonomista defendía la tesis de la condición vanguardista de la clase obrera y la subordinación de los otros sectores sociales y sus proyectos políticos respectivos en la construcción del socialismo. En cambio, los no autonomistas, aunque también se dedicaban a la defensa de los intereses de los trabajadores, prevén una alianza de clases más amplia, como la representada en el PSUV. Estas diferencias, lejos de estar limitadas al debate teórico, han producido confrontaciones agudas y a veces violentas, como ocurrió en la convención de la Unete en el 2006, en los días anteriores a la nacionalización de Sidor en el 2008 y después de los nombramientos pro obreros de los presidentes de Sidor y Alcasa en el 2010.

## Consejos comunales y los sectores no-incorporados

Los consejos comunales junto con los programas sociales, como Barrio Adentro, Mercal, la Misión Ribas, y la Misión Sucre, están ubicados predominantemente en las zonas no privilegiadas. Los consejos comunales, los cuales proliferaron en toda Venezuela después de la aprobación de la Ley de Consejos Comunales en el 2006, son históricamente originales por cuanto diseñan y solicitan fondos para los proyectos de obras públicas y a veces los ejecutan. La participación en las actividades de los consejos comunales ha tenido una influencia formativa marcada sobre los sectores no incorporados de la población, los cuales en su mayoría no tienen ninguna experiencia previa en la toma de decisiones de esta naturaleza. El impacto sobre los miembros de los consejos comunales de la clase obrera es menos marcado por cuanto previamente tenían experiencias organizativas, específicamente como militantes de los sindicatos,

los cuales están fundamentados en unidades de producción en vez de unidades geográficas[4].

La experiencia de la participación en los consejos comunales ha infundido, en muchos de sus miembros, desconfianza de los burócratas del gobierno, similar a la actitud de los líderes laborales autonomistas, quienes rechazan la intervención del Estado en los asuntos sindicales. Parte del problema es el resultado de la frustración y el malentendido que surgen de su interacción con los funcionarios públicos, cautelosos y escépticos de la viabilidad de los proyectos debido a la falta de experiencia organizativa de los líderes comunitarios[5]. Además, los miembros de los consejos comunales a menudo se resienten de las manipulaciones de los representantes del Estado al servicio de los políticos chavistas, que intentan controlar las organizaciones sociales con el propósito de favorecer sus ambiciones políticas. Esta actitud crítica converge con el dogma anti estatista de los radicales chavistas, que incluyen a trotskistas y libertarios, y caracterizan al «viejo Estado» de intrínsecamente contrarrevolucionario, así como piden una «revolución dentro de la revolución» (Webber y Spronk 2010b)[6].

A principios del 2010 habían ocurrido varios acontecimientos que aparentemente señalaban el debilitamiento o deterioro progresivo del programa, que consistía en un estimado de

4 La Misión Barrio Adentro también privilegia a los sectores no incorporados de la población. Por otro lado, un gran número de trabajadores sindicalizados y profesionales son cubiertos por planes privados de seguro, seguro social y servicios de salud financiados por la empresa, y por tanto se obtiene menos provecho de Barrio Adentro.

5 La posición rígida de algunos funcionarios del Estado a veces genera críticas, incluso dentro del gobierno, debido a que su supuesta «demagogia» va en contra de la política establecida de flexibilidad hacia las comunidades no privilegiadas (Dirección General de la Investigación y Desarrollo Legislativo 2010, p. 3).

6 El ex viceministro de Planificación y activista social, Roland Dennis, quien se hizo cada vez más crítico del gobierno de Chávez, puede ser clasificado como libertario. Dennis consideraba a todo el gobierno y la burocracia del PSUV como obstáculos al desarrollo de los consejos comunales y el movimiento popular en general (Ellner 2011, pp. 441-442).

30.000 consejos comunales. En primer lugar, el discurso chavista comenzó a poner de relieve el papel revolucionario de la clase obrera en respuesta a la necesidad de ganar la batalla de la producción en las empresas recientemente expropiadas. El cambio de retórica dejó abierta la posibilidad del abandono de los consejos comunales por parte del gobierno, similar a lo que sucedió con las millares de cooperativas de trabajadores que perdieron primacía después de la promulgación de la Ley de Consejos Comunales en el 2006. Además, la Ley Orgánica de Consejos Comunales aprobada en diciembre del 2009 (que reemplazó la ley del 2006) requería que los consejos comunales hicieran una serie de reajustes estructurales (un procedimiento conocido como "adecuación") con la finalidad de mantener su condición legal, un proceso que uno de los autores de la ley denominó «traumático» (Jesús Gerardo Rodríguez Rodríguez, entrevista personal, 14 de septiembre del 2011). La omisión de la Asamblea Nacional en aprobar un *Reglamento* para la nueva ley que especificara los pasos concretos a seguir, complicó la tarea de la "adecuación". Como resultado, un gran número de consejos comunales no reafirmó su estatus legal dentro del límite de 180 días establecido por la ley (Artículo 61).

No obstante, para el 2011 varios acontecimientos habían servido para revitalizar el movimiento de los consejos comunales y demostraron que el gobierno continuaba dando gran importancia a los programas para los sectores no incorporados de la población. En primer lugar, los organismos de financiamiento del Estado llegaron a convencerse cada vez más de que la asignación de dinero de manera directa a los consejos comunales para ejecutar proyectos de obras públicas (a menudo mediante la contratación de los residentes de la comunidad para hacer el trabajo), era preferible a los contratos gubernamentales con empresas de la construcción. El argumento a favor de este procedimiento era que el consejo comunal podía cumplir mejor su papel controlador para asegurar la alta calidad cuando manejara sus propios recursos. En segundo lugar, las políticas gubernamentales y la legislación incorporaron a los consejos comunales en varias

actividades patrocinadas por el Estado, que van desde la tarea de vigilar los precios regulados de los productos básicos hasta la selección de los beneficiarios del programa de la Gran Misión de Vivienda, lanzado en el 2011. Otro signo de estabilidad y consolidación fue el número significativo de consejos comunales que han completado exitosamente tres o cuatro proyectos y, en consecuencia, reciben un trato preferencial de los organismos de financiamiento del gobierno (Víctor Barraez, entrevista personal, 15 de septiembre del 2011).

Finalmente, el compromiso del gobierno con el programa de los consejos comunales fue demostrado por los esfuerzos de unificar grupos de consejos comunales en "comunas", las cuales ejecutarán proyectos más ambiciosos en un área geográfica más amplia y que están diseñadas para introducir una nueva etapa en el proceso de cambio de Venezuela. A diferencia de los consejos comunales, la Ley Orgánica de las Comunas (2010) prevé a las comunas como la representación de un cuarto nivel de gobierno (por debajo del gobierno central, estadal y municipal) que diseña proyectos en armonía con la planificación del Estado. En los meses posteriores a la aprobación de la ley, los consejos comunales en toda la nación habían creado aproximadamente 120 "comunas en transición" que esperaban la legalización, y diseñaron programas en sus correspondientes zonas, lo cual implicó un mayor financiamiento que el concedido a los consejos individuales para ámbitos más reducidos (Delgado 2010).

## Divergencia de visiones e intereses dentro del chavismo

A pesar de la retórica encendida del chavismo y su compromiso con el socialismo revolucionario después del 2005, la influencia de la corriente moderada del movimiento chavista, que refleja las actitudes e intereses de los sectores medios, no ha disminuido significativamente. Los chavistas moderados desconfían de las excesivas exigencias de los sindicalistas y de los programas sociales que carecen de controles efectivos. Disfrutan

de fuerte apoyo de los militares y articulan en gran parte los criterios más tecnocráticos de los gerentes estatales (Pedro Eusse citado en Webber y Spronk 2010a). Los moderados estaban dirigidos por Luis Miquilena, mano derecha de Chávez entre 1999 y 2001, y luego del oficial retirado de la Fuerza Aérea Luis Alfonso Dávila, quienes colocaron a sus seguidores en todos los niveles del Estado y del partido. Miquilena y Dávila rechazaron el socialismo cubano como un modelo para Venezuela y estaban a favor de la consolidación en vez de la radicalización (Ellner 2008, pp. 110-112, 165). Después de la derrota completa de Dávila en las elecciones internas del partido chavista Movimiento Quinta República (MVR) en el 2003, y su posterior salida del movimiento, otro oficial retirado, el ex vicepresidente Diosdado Cabello (quien había participado en el intento de golpe liderado por Chávez en 1992) encabezó a los moderados. Cabello (con considerable influencia sobre los ascensos de los oficiales militares) y Nicolás Maduro eran los dos líderes nacionales chavistas que más cultivaron partidarios en el gobierno y el partido, después de la salida de Dávila.

A diferencia de Cabello y Maduro, muchos militantes chavistas de la base son altamente críticos del gobierno chavista y de la burocracia partidista, y prefieren políticas más radicales (Hawkins 2010, pp. 181-184). Sus posiciones reflejan el pensamiento de los autonomistas de los sindicatos, quienes rechazan la interferencia del Estado en el movimiento laboral, y los habitantes de los barrios quienes atribuyen los problemas de sus consejos comunales a la excesiva interferencia estatal y a los obstáculos creados por los funcionarios públicos. El punto de vista antiburocrático está dirigido especialmente a Cabello y ha sido criticado duramente por Maduro, en público. Está articulado por un grupo de intelectuales chavistas afiliados al Centro Internacional Miranda (CIM), además de la publicación pro chavista en línea Aporrea (Monedero 2009, pp. 192-194). Los chavistas antiburocráticos aplaudieron varios nombramientos de Chávez, que incluían al excombatiente guerrillero Fernando Soto Rojas como presidente de la Asamblea Nacional en el 2010 e Iris

Valera como ministra del Servicio Penitenciario en el 2011. Estos nombramientos demostraron la habilidad del presidente Chávez en mantener la unidad de sus seguidores y disipar los temores de que el gobierno había sido tomado por los moderados y los «burócratas» (o por los militares), y en el proceso había abandonado su compromiso con el cambio de largo alcance.

La heterogeneidad y complejidad del chavismo descarta las correlaciones simples entre los grupos sociales y las corrientes políticas dentro del movimiento chavista. El movimiento laboral estaba altamente dividido y por tanto, carecía de una posición "coherente" de los trabajadores, al mismo tiempo que no todos los oficiales militares destacados seguían la línea moderada. En este sentido, por ejemplo, el vicepresidente del PSUV, Alberto Müller Rojas, y el director de la fuerza policial Disip, Eliézer Otaiza, asumieron posiciones radicales que contrastaban con las de sus contrapartes moderados en el gobierno y en el movimiento (Ellner 2008, pp. 167-168). No obstante, ciertas tendencias generales aclaran y definen las preferencias de los grupos chavistas, las relaciones entre los ámbitos sociales y políticos y las causas del conflicto interno. Dos ejemplos arrojarán luz sobre las tensiones internas del chavismo generadas por diferencias en intereses y visiones entre las corrientes chavistas y también entre los distintos sectores sociales.

El primer ejemplo se refiere a la percepción de los líderes laborales chavistas en general, de que el sentimiento antisindical se manifiesta en formas importantes en el movimiento y gobierno chavista. En este sentido, los sindicalistas atribuyen la negativa de los gerentes del Estado a permitir la sindicalización por razones de "seguridad" en sectores como los aeropuertos, y entre el personal administrativo de la rama ejecutiva, a una "mentalidad militarista". Además, muchos de los chavistas moderados sospechan que la consigna "control obrero", defendida por los sindicalistas, es en efecto una cortina de humo para exigir demandas económicas exageradas.

Finalmente, las actitudes antisindicales, presuntamente, encuentran expresión en los programas comunitarios patrocinados

por el gobierno. Los líderes de los consejos comunales, a menudo bajo la asesoría de funcionarios del Estado, prefieren contratar residentes de la comunidad directamente, en vez de otorgar contratos a las empresas privadas, por temor de que serían vulnerables a las amenazas de sindicatos de la construcción controlados por elementos criminales. Los funcionarios del Estado y los líderes vecinales piden a los obreros de obras públicas que lleven sus quejas a la comisión de empleo del consejo comunal en vez de los sindicatos, los cuales están empeñados evidentemente en usar los conflictos para afianzarse en la comunidad. Los líderes laborales chavistas reconocen la gravedad del peligro de la penetración del crimen organizado en algunos sindicatos de la construcción, posiblemente con el propósito de lavar dinero, e incluso se reunieron con el Ministro del Interior para discutir el problema. Sin embargo, ellos insisten en que los auténticos sindicatos y no los consejos comunales representan el vehículo apropiado para la resolución de las disputas laborales (Franklin Rondón, entrevista personal, 4 de octubre del 2011; Carlos Itriago, entrevista personal, 19 de junio del 2011).

El segundo ejemplo, expresión política de las divisiones sociales en el movimiento chavista, es la política gubernamental de gratuidad que beneficia a los sectores más desamparados, pero crea los temores entre los sectores medios de irresponsabilidad fiscal. Tradicionalmente, esta práctica estuvo asociada con el populismo puro, simbolizado por las láminas de los techos de zinc que los gobiernos daban a los habitantes de los barrios con el propósito de asegurar sus votos. Con Chávez, la retórica sobre algunos programas sociales ha mezclado dos temas distintos: la justicia social y la viabilidad económica de las políticas sociales en el socialismo. El gobierno justifica los bienes y servicios gratis o con subsidios elevados, como cuadernos, textos y computadoras para los estudiantes, casas y ciertas mercancías para las víctimas de desastres naturales, pasajes en el metro para las personas de la tercera edad y libros de literatura clásica para la población en general como expresiones del socialismo humanista. Además, los productos vendidos a precios por debajo de los del mercado

con términos blandos de crédito, particularmente para los pobres, que van desde artefactos eléctricos (sin intereses para los muy pobres) hasta la "arepa socialista" (alimento principal de Venezuela), sirven para exponer las injusticias económicas y las ganancias extraordinarias asociadas con el capitalismo "salvaje" o neoliberal. No obstante, el discurso de Chávez, el cual hacía hincapié en la "deuda social" del Estado con los desamparados, complicaba las intenciones del gobierno de evitar pérdidas en las empresas estatales y de cobrar las deudas de los beneficiarios de créditos blandos.

Las instituciones públicas han intentado crear mecanismos efectivos para garantizar la cancelación de préstamos e hipotecas (tales como descuentos automáticos del salario y análisis de la factibilidad de pago por parte de los solicitantes de crédito). Estos esfuerzos, sin embargo, no concuerdan con los comentarios ocasionales que hacía Chávez en los que atacaba las prácticas financieras del capitalismo por discriminar contra los pobres (tales como fianzas como requisitos para préstamos). La oposición sacaba provecho de la retórica del gobierno que pasaba por alto la diferencia entre los programas sociales que proveen bienes y servicios gratis a los no privilegiados, por una parte, y las estrategias comerciales aceptables que ofrecen descuentos a ciertos clientes, por la otra. En este sentido, los líderes antichavistas protestaron contra lo que consideraban «las limosnas populistas». Por cierto, la afirmación de los antichavistas de que el gobierno es demasiado generoso (Corrales 2011, pp. 33-35) tiene un grado de aceptación entre algunos chavistas, sobre todo de la clase media[7].

7 De igual manera, el programa Petrocaribe de Chávez para la exportación de petróleo a las naciones vecinas, que combina los objetivos de la solidaridad internacional y la diversificación comercial, ha creado confusión referente a sus verdaderas metas para provecho de la oposición, que erróneamente acusa al gobierno de regalar el petróleo.

## La estructura capitalista y la vía democrática al socialismo en Venezuela

Varias características notables del gobierno chavista aumentaron las posibilidades de lograr el socialismo democrático impulsado desde el Estado. En primer lugar, a partir de dos intentos fallidos de derrocar a Chávez entre el 2002 y 2003, el ejecutivo nacional ganó el control de las dos instituciones estatales más importantes: las Fuerzas Armadas y la empresa estatal petrolera PDVSA. En ambos casos, los simpatizantes chavistas reemplazaron a los miembros de alto rango de la institución que habían participado en el movimiento insurreccional. En segundo lugar, el ingreso petrolero abundante proveyó al gobierno con recursos para pagar las expropiaciones en industrias estratégicas e implementar los programas sociales que promovieron un sentido de empoderamiento a los sectores marginados de la población. Finalmente, los adversarios del gobierno estaban en una posición particularmente débil, como resultado de los golpes que recibieron durante el pasado reciente.

A pesar de estos factores favorables para el socialismo democrático, el Estado venezolano estaba muy lejos de ser divorciado de la estructura capitalista dominada por grupos económicos que estaban agresivamente opuestos al gobierno de Chávez. La intentona de abril del 2002 y el paro petrolero (que fue, en efecto, un paro patronal) hicieron mucho para definir la relación entre el gobierno y el sector privado. Fedecámaras dirigió ambos intentos de cambio del régimen. Aunque los dos movimientos fueron derrotados como resultado de las movilizaciones populares, la colaboración de algunos empresarios, particularmente en el área del transporte, fue crítica en suministrar bienes básicos durante el conflicto. Este grupo de empresarios anti-huelgistas consistió en algunos que simpatizaban con el gobierno, unos que rechazaron el paro por razones profesionales y otros que fueron simplemente oportunistas. Independientemente de sus motivaciones, fueron considerados más confiables que los empresarios de Fedecámaras. Posteriormente, la dirigencia chavista siguió una política no oficial de ofrecer a los empresarios anti-huelgistas

un trato preferencial y así los privilegiaron en el otorgamiento de contratos de obras públicas y crédito del Estado. El 4 de febrero del 2003, poco después del paro petrolero, Chávez anunció: «Les trancamos la llave a los golpistas, ni un dólar más para ellos». Al mismo tiempo dio instrucciones a Cadivi (el recién creado organismo para la venta de «dólares preferenciales» para importaciones a un cambio artificialmente bajo) de rechazar las solicitudes de dólares a los empresarios comerciales que habían apoyado el paro (Ellner 2014).

La política de discriminación contra Fedecámaras fue una respuesta lógica a la actividad insurreccional que contrastó con la posición oficialmente "apolítica" de la organización empresarial desde su fundación en 1944 (Ellner 2008, p. 114). Sin embargo, al seguir esa estrategia la dirigencia chavista descartó el argumento de que el gobierno debe promover la transparencia por encima de toda otra consideración, y así abstenerse de dar preferencia a grupos económicos específicos. La estrategia del gobierno favoreció a pequeños y medianos empresarios, muchos de los cuales eran de origen árabe, a costa de la burguesía tradicional, que formaba la columna vertebral de Fedecámaras y que mantenía vinculaciones con los Estados Unidos y Europa a través de conexiones familiares y educativas. La nueva élite económica empezó con poco capital y en algunos casos amasó riqueza considerable bajo el gobierno chavista. Sus miembros entraron en la rama de importaciones y llevaron a cabo obras públicas con un desempeño mixto, pero no lograron desarrollar una capacidad financiera e industrial viable o la competencia para llevar a cabo mega proyectos. En algunos casos, el gobierno fue eventualmente obligado a re-establecer relaciones de trabajo con empresarios tradicionales.

La política de favorecer empresarios pro-chavistas no logró estimular altos niveles de producción y condujo a procedimientos éticamente cuestionables. Estas consecuencias decepcionantes abrieron el camino a la crisis financiera del 2009, cuando el gobierno expropió más de 13 bancos, encarceló a más de 16 banqueros y ordenó la detención de más de 40 otros que se fugaron

del país. Entre estos banqueros estaban varios que con muy poco capital llegaron a ser pudientes, al aprovecharse de la determinación del gobierno de apartarse de la burguesía tradicional. Uno de ellos fue Arné Chacón, hermano de Jesse Chacón (ministro y hombre de confianza de Chávez) –ambos inmediatamente renunciaron–. Otro fue Ricardo Fernández Barrueco, cuya fortuna fue estimada en más de mil millones de dólares. Tanto Fernández Barrueco como Arné Chacón fueron encarcelados por tres años a partir de diciembre del 2009. Un segundo escándalo que aparentemente también involucró a la burguesía emergente estalló en el 2013 cuando la presidenta del Banco Central, el Ministro de Planificación y luego Maduro, anunciaron que durante el año anterior Cadivi había vendido aproximadamente veinte mil millones de dólares a una tasa preferencial, con el fin de pagar importaciones ficticias.

La escasez aguda del 2013-2014 demostró que la estrategia del gobierno de estimular la producción no había obtenido los resultados esperados. Las cooperativas promovidas por el gobierno y las "Empresas de Producción Social" (EPS), así como también las empresas recién expropiadas, particularmente en el sector de alimentación, no lograron producir la cantidad de bienes para llenar el vacío generado por la escasez. Similarmente, la estrategia del gobierno de fomentar el crecimiento de nuevas empresas productivas creadas por una «burguesía productiva» tampoco llenó las expectativas. Además, miembros de la burguesía emergente, que recibieron el apoyo gubernamental, no siempre terminaron como aliados confiables. Un ejemplo fue Alberto Cudemus, quien salió de Fedecámaras en el 2007 después de dos candidaturas para ser presidente de esa organización, en base de una plataforma de mantener relaciones amistosas con el gobierno de Chávez. Como el productor más grande de la producción porcina y presidente de la Federación Venezolana de Porcicultura (Feporcina), Cudemus recibió contratos para suministrar a la entidad comercial estatal de alimentación Mercal como parte de la política de apoyar la burguesía "productiva" no-tradicional. Sin embargo, en el 2014 Cudemus criticó la polémica "Ley de

Precios Justos" como un retroceso a los conceptos de los años sesenta y atribuyó el déficit de la nación, en parte, a la recién promulgada Ley del Trabajo (LOTT), que fue redactada por una comisión dirigida por Maduro. El presidente Maduro reaccionó fuertemente en su respuesta a Cudemus, y al presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, los cuales convergieron en su análisis de la crisis y sus propuestas para superarla.

Las reuniones de alto nivel entre el ejecutivo nacional y miembros de la burguesía tradicional y no-tradicional en el comienzo del 2014, señalaron un cambio en las políticas tanto del gobierno como del sector privado. Las reuniones, que formaron parte de un "diálogo de paz" con sectores organizados de la población, fueron diseñadas para encontrar soluciones a los problemas de escasez, especulación y acaparamiento, y también poner fin a las protestas violentas promovidas por sectores de la oposición, que estallaron en febrero del 2014. La posición más conciliatoria del gobierno hacia los empresarios representó un reconocimiento de que la burguesía emergente no era capaz, o no tenía la voluntad, de transformarse en una fuerza dinámica en condición de reemplazar los grupos de la burguesía tradicional. Fedecámaras, por su parte, aceptó la participación en el diálogo a pesar de que los partidos opositores lo desdeñaron, en contraste con la alianza entre los dos, con fines insurreccionales entre 2002-2003. La decisión de Fedecámaras de aceptar la invitación del presidente Maduro fue un reconocimiento de que sus miembros habían sido seriamente afectados por la política del gobierno de apoyar la burguesía emergente.

La decisión del presidente Maduro de negociar con sectores de la burguesía tradicional, representados por Fedecámaras, también tiene que ser colocada en el contexto de los desafíos que el gobierno enfrentaba en el 2014. No solamente las protestas violentas amenazaron la estabilidad, sino la alta tasa de inflación y la escasez aguda demostraron que la alianza no oficial con la burguesía emergente había fracasado desde el punto de vista económico. Los chavistas moderados consideraron que las concesiones de Maduro al sector empresarial fueron un expediente

necesario, y las compararon con la Nueva Política Económica de la Unión Soviética de Lenin.

Esta discusión arroja luz sobre los vínculos que existen entre el Estado y la estructura capitalista en Venezuela, a pesar de la firmeza del compromiso socialista de los chavistas en el poder y la agudeza de la polarización entre el sector tradicional de la burguesía y el gobierno chavista. Por más honestos y comprometidos con el socialismo que estén los dirigentes chavistas, hay una realidad: la estructura de la economía sigue siendo capitalista, y esto es lo más fundamental de todo, más fundamental que el sistema político e inclusive los valores culturales dominantes. El marxismo enseña que la superestructura –en este caso el Estado– nunca puede estar completamente divorciada de la estructura, o sea el sistema capitalista. Mientras el movimiento chavista lucha contra la corrupción y otros abusos de los empresarios, algunos de los cuales están ligados al chavismo, hay que reconocer que esos fenómenos son inevitables cuando el proceso de cambio estructural es democrático y relativamente pacífico.

Dada esta vinculación del Estado con la estructura capitalista, el papel de los movimientos sociales y el partido, con un grado de autonomía, es fundamental. Marta Harnecker, quien era alumna del marxista estructuralista Louis Althusser, plantea que la vía democrática al socialismo tiene dos vertientes: los avances de los revolucionarios en el poder, por un lado, y las luchas sociales, por otro. De acuerdo con Harnecker, la esfera de las funciones administrativas del «Estado heredado (…) está tomada por los cuadros revolucionarios que la usan para profundizar el proceso de cambio» (2010, p. 62) y coexiste con un Estado nuevo que «empieza a nacer desde abajo, a través del ejercicio del poder popular en varias instituciones, incluyendo los consejos comunales» (íd.). Harnecker califica el proceso como novedoso por cuanto «el Estado heredado promueve el surgimiento del Estado que va a reemplazarlo» (íd.). En una refutación indirecta al concepto de «poder dual» de Lenin, llama la relación entre los dos estados «complementaria» en vez de una de confrontación. Un

aspecto fundamental de esta estrategia es que «el movimiento social organizado (…) tiene que ejercer presión sobre el Estado heredado» (íd.)[8].

Desde el comienzo de la primera presidencia de Chávez, en 1999, los chavistas tomaron ventaja de su control del poder político al decretar medidas desde arriba con el fin de profundizar el proceso de cambio. El gobierno chavista desempeñó un papel principal en varios frentes para organizar y movilizar los sectores populares, y proveerlos con un sentido de empoderamiento. Estos esfuerzos, sin embargo, no pueden ser considerados suficientes para lograr las metas a largo plazo que fueron formuladas a favor de la transformación estructural. Las lecciones de los últimos 16 años, en Venezuela, confirman lo que es implícito y en algunos casos explícito en la escritura sobre el Estado de marxistas teóricos como Louis Althusser, Nicos Poulantzas y Ralph Miliband. En un país capitalista, a pesar de las buenas intenciones de los revolucionarios en el poder, las movilizaciones desde fuera del Estado y relativamente independiente de él es una condición *sine qua non* para la profundización constante del proceso de cambio que apunta en la dirección del socialismo.

## Conclusiones

Durante los 14 años como presidente, Hugo Chávez actuó de manera consistente para retener el apoyo ferviente de los sectores diversos y, a menudo, conflictivos de su movimiento y evitar la fragmentación. Por una parte, fue severo con aquellos disidentes internos que rechazaban la línea oficial. En el año 2000, por ejemplo, arremetió contra su partido aliado el PPT (que incluía al ex alcalde de Caracas, Aristóbulo Istúriz, y otros partidarios fieles), quienes reaccionaron negando el apoyo a su candidatura para las elecciones presidenciales en julio de ese año. Cuando el Partido Comunista, otro socio de la coalición, lanzó planchas separadas en varios estados en las elecciones municipales y estadales

8 Ver también Harnecker 2012, pp. 166-167 y Bilbao 2008, p. 195.

del 2008, Chávez lo calificó de «contrarrevolucionario». Por otra parte, Chávez mantenía un equilibrio entre los moderados y los radicales dentro de su movimiento, al mismo tiempo que privilegiaba a los militares chavistas, quienes tendían a ser ubicados en el bando moderado (en cuanto a la política económica). Así, en el 2003 ignoró a William Lara (el rival de Dávila), de tendencia izquierdista, cuyos seguidores habían ganado las elecciones internas para el liderazgo del Movimiento V República e impuso a Francisco Ameliach, de la fracción militar, como director general del partido.

Además, ciertas consignas y posiciones asumidas por el liderazgo chavista representaban «significantes vacíos» (Laclau 2005), que fueron ampliamente elogiadas pero interpretadas de manera diferente por los distintos sectores políticos y sociales, de acuerdo con su orientación ideológica e intereses. De esta manera, por ejemplo, los chavistas de la base en general consideran la consigna muy repetida por Chávez «unidad, unidad y más unidad,» como un llamado a pasar por alto las diferencias de pensamiento y el estilo para enfrentar a un enemigo común. Quienes defienden el enfoque estatista invocaban la frase en un contexto más específico, para argumentar que los llamados de los radicales y los de la base, a purgar la burocracia del Estado de supuestos oportunistas, son divisorios y pueden ser usados por el enemigo. En cambio, cuando Chávez pidió la formación de una amplia coalición de partidos y movimientos en el 2010, llamada el Gran Polo Patriótico (como parte de la "quinta línea estratégica"), los chavistas radicales se acogieron a la consigna de la unidad para justificar el establecimiento de organizaciones pro-chavistas que están a la izquierda del PSUV.

Asimismo, las diversas corrientes chavistas han reaccionado de forma diferente al elogio incondicional de Chávez a Cuba y a sus líderes. Los chavistas moderados lo interpretan como nada más que una defensa de la soberanía nacional, mientras que las corrientes más radicales lo consideran como una defensa de las políticas socialistas, llevadas a cabo por el gobierno cubano. Aquellos chavistas que dan prioridad a una revolución de los

valores humanos lo ven como un llamado a la solidaridad internacional por encima de los intereses materiales de Venezuela.

Los incidentes en los que Chávez desafió de forma sorprendente a la estructura burocrática y al liderazgo partidista de su movimiento, al asumir posiciones a favor de las bases, convencieron a los que apoyaban un enfoque radical de abajo hacia arriba (como los autonomistas en el movimiento laboral) de que él estaba realmente de su lado. La decisión de expropiar Sidor, en medio de conflictos de calle sangrientos en el 2008, que enfrentaron al sindicato Sutiss contra importantes líderes chavistas, y la decisión de llamar a elecciones internas para la selección de los candidatos del PSUV a la Asamblea Nacional en el 2010 –en contra de la recomendación de algunos líderes nacionales y locales– fueron sólo dos ejemplos. Por otra parte, Chávez nombró a Diosdado Cabello, quien encabezaba la fracción moderada que estaba bien arraigada entre los militares, para ocupar cargos importantes en el partido y el gobierno, aún cuando estaba cuestionado por muchos chavistas de las bases.

Este capítulo ha examinado los retos que representan la heterogeneidad del movimiento chavista y las acciones del campo opositor ante el gobierno de Chávez. Todos los gobiernos comprometidos con el cambio radical confrontan situaciones difíciles en este sentido, pero el caso venezolano magnifica su impacto. El camino democrático al cambio de lejano alcance, en el contexto de la aguda polarización política y social, provee oportunidades especiales para los grupos sociales y políticos ubicados en ambos lados del campo de batalla. La vulnerabilidad del gobierno, como resultado de las tácticas agresivas empleadas por sus adversarios, lo obliga a responder efectivamente a las demandas y aspiraciones de los integrantes de la base de su movimiento, con el propósito de contar con su continuo apoyo y movilización. Además, la debilidad de la tradición del sindicalismo en Venezuela, en comparación con países como Chile y Bolivia, y la ausencia de un partido de la clase obrera que conduzca el proceso revolucionario, a diferencia de la Unión Soviética en

1917 y China en 1949, explica la mayor diversidad social y política, y la complejidad del movimiento chavista.

La respuesta favorable del gobierno a los sectores populares del movimiento chavista es incompatible con una política de concesiones y negociaciones con los grupos económicos poderosos, pero al mismo tiempo, su compromiso con la democracia descarta la represión contra la clase empresarial, en el contexto de las perturbaciones económicas. En este sentido, el gobierno reaccionó a la escasez mediante el diseño de un conjunto de medidas legales complejas que complicaron el problema y eventualmente condujeron a las expropiaciones. Esta secuencia de eventos se diferencia, de manera marcada, de la liquidación de la clase kulak (los propietarios rurales) por el gobierno soviético, en la década del treinta, debido a la escasez que ella creó. Las expropiaciones impactaron de distintas formas a las tres clases que representan las bases sociales de apoyo al chavismo.

Las diferencias en los intereses y puntos de vista de los grupos dentro del movimiento chavista estaban destinadas a generar tensiones internas. Así, por ejemplo, los líderes de la Unete levantaron las banderas del control obrero, la reducción de la semana de trabajo, inamovilidad laboral y la restauración del viejo sistema del pago de prestaciones sobre la base del último salario devengado por el trabajador. En un momento determinado, el presidente Chávez apoyó todas estas demandas. Él incluyó la semana de trabajo de 36 horas en la propuesta de la reforma constitucional del 2007, redujo la subcontratación en las industrias del petróleo, acero y electricidad para incorporar a los trabajadores en las nóminas del Estado, con la finalidad de asegurar mayor seguridad laboral (como después ordenó la Ley del Trabajo promulgada en el 2012), y lanzó el Plan Socialista de Guayana para promover la participación de los trabajadores en la toma de decisión. Muchos líderes del PSUV, sin embargo, tuvieron reservas serias sobre estas medidas porque temían que no fueran económicamente viables. Su desconfianza explica por qué la propuesta Ley del Trabajo –que incluía el reconocimiento de los consejos de trabajadores, una reducción en la

semana de trabajo, medidas severas contra los empleadores que violen la ley y la restauración del viejo sistema de prestaciones sociales–, fue retrasada en la Asamblea Nacional por un período de tiempo prolongado. La resistencia a las exigencias de los trabajadores chavistas también explica por qué el presidente de PDVSA, Ramírez, al principio intentó ignorar el liderazgo de la Federación de Trabajadores Unidos del Petróleo (FUTPV) a la cual etiquetó de adeca (seguidora de AD), aun cuando sus afiliados eran chavistas, e inclusive, habían sido escogidos por la dirigencia chavista.

Las distintas prioridades y puntos de vista que se manifiestan en el movimiento chavista tienen una explicación social. Muchos chavistas de la clase media y los sectores no incorporados, por ejemplo, tienen reservas respecto al papel de los sindicatos y apoyan las medidas para minimizar su papel. En este sentido, los funcionarios del gobierno a menudo tratan de convencer a los consejos comunales de emprender proyectos de obras públicas con trabajadores contratados directamente por ellos en lugar de las empresas privadas. Este procedimiento es considerado menos vulnerable a la presión de los seudo-sindicatos de los trabajadores de la construcción, que usan tácticas de coacción para implementar prácticas de contratación que socavan la productividad. También, la turbulencia laboral en la región industrial de Guayana ha contribuido a la escasez de los materiales de construcción en todo el país, que se añade a la actitud desfavorable o crítica de algunos chavistas hacia los sindicatos. Finalmente, los adversarios de Chávez han protestado la política gubernamental de distribuir ciertos bienes y servicios gratis o altamente subsidiados (aunque exageran el alcance de la práctica) que muchos miembros de la clase media, incluyendo algunos simpatizantes chavistas, critican por representar limosnas a los pobres.

La imagen de los actores políticos chavistas va de positiva a negativa a través del espectro político y social. Los burócratas estatales pertenecientes a la clase media son vistos como resistentes a los ideales participativos de la revolución bolivariana, o bien como decididos a frenar las demandas extremas y no realistas

de los sectores no privilegiados. Los sindicalistas radicales chavistas son vistos como ejecutores de tácticas obstructoras para conseguir beneficios materiales desmesurados y no viables, o bien como promotores del control obrero que representa la esencia de la democracia socialista. Y los integrantes de los sectores no incorporados, que formaban las cooperativas de trabajadores y posteriormente los consejos comunales, son vistos como derrochadores de inmensas sumas del dinero público debido a la falta de controles internos, o como confrontadores de los burócratas del Estado para lograr el ideal de la democracia participativa en el espíritu de la Constitución de 1999.

Durante la etapa actual de las expropiaciones, el liderazgo chavista y Chávez mismo han intentado mantener un equilibrio entre los tres sectores sociales discutidos en este capítulo, así como entre las diversas perspectivas y puntos de vista que coexisten en el movimiento chavista. En un momento dado parecía que el gobierno subordinaría los intereses y estrategias asociadas con los sectores no incorporados de la población (como los miembros de la economía informal). El discurso de Chávez comenzó a reconocer a la clase obrera como el agente fundamental del cambio revolucionario, al mismo tiempo que la necesidad de incrementar la producción para combatir la escasez centró la atención en la productividad por encima de los programas sociales. Lo que es más, la nueva Ley de Consejos Comunales aprobada, en diciembre del 2009, parecía impedir la creación de nuevos consejos y desanimar a los existentes. No obstante, la consolidación de muchos consejos comunales y su longevidad refutan la idea de que ellos perdieron impulso, como había perdido el movimiento de cooperativas varios años antes.

La fortaleza e importancia relativa de los tres grupos sociales no han cambiado significativamente en los últimos años, aun cuando cada uno tiene mayores expectativas y ha llegado a ser más enérgico en sus críticas al gobierno. Frente a un enemigo recalcitrante que se niega a reconocer la legitimidad del gobierno chavista, el chavismo depende del apoyo firme tanto de los sindicalistas como de los sectores no incorporados, que

a menudo enfrentan a los burócratas chavistas. Al mismo tiempo, las condiciones subjetivas y la consolidación política no son suficientemente desarrolladas para que los revolucionarios en el poder declaren la existencia de un estado obrero o promuevan una "revolución cultural" contra los valores de la clase media, o una "revolución dentro de la revolución" para purgar la burocracia. En resumen, a pesar de la profundización de los cambios en el pasado reciente, el movimiento chavista conserva su carácter de una alianza multiclasista e ideológicamente heterogénea, con todas las tensiones internas que tal diversidad implica.

## Referencias

BILBAO, Luis (2008). Venezuela en revolución: el renacimiento del socialismo. Buenos Aires: Le Monde.

CORRALES, Javier (2011). «Conflicting Goals in Venezuela's Foreign Policy». En Ralph S. Clem y Anthony P. Maingot (eds.), Venezuela's Petro-diplomacy, pp. 32-48. Gainesville: University Press of Florida.

DELGADO HERRERA, José Gregorio (2010). Comentarios a la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Valencia (Venezuela): Vadell Hermanos.

Dirección General de la Investigación y Desarrollo Legislativo (2010). «¿Papel de los consejos comunales?». Debatiendo las Políticas Sociales, 1 (1), pp. 2-4.

Efe News Service (2010, 18 de enero). «Venezuelan Takeover». Madrid: Autor.

ELLNER, Steve (2007). «Trade Union Autonomy and the Emergence of a New Labor Movement in Venezuela». En Steve Ellner y Miguel Tinker Salas (eds.), Venezuela: Hugo Chávez and the Decline of an "Exceptional Democracy, pp. 77-98. Lanham (Maryland): Rowman & Littlefield.

_____ (2008). Rethinking Venezuelan Politics: Class, Conflict, and the Chávez Phenomenon. Boulder (Colorado): Lynne Rienner.

_____(2011). «Venezuela's Social-Based Democratic Model: Innovations and Limitations». Journal of Latin American Studies, Cambridge, 43 (3), pp. 421-449.

_____ (2014). «Social and Political Diversity and the Democratic Road to Change in Venezuela». En Latin America's Radical Left: Challenges and Complexities of Political Power in the Twenty-First Century. Lanham (Maryland): Rowman and Littlefield.

FERNANDES, Carlos y Laura Cruces (conductores) (2010, 1 de noviembre). Entre periodistas (Entrevista a Luis Vicente León) [programa de TV]. Caracas: Televen.

FIGUERA, Óscar (2011, 19 de agosto al 15 de septiembre). «Discurso de Óscar Figuera en el Acto de Instalación del 14° Congreso del PCV». Tribuna Popular (Especial: Tribuna del Congreso), Caracas, LXIV, XI época (193), pp. 1-2.

HARNECKER, Marta (2010, julio-agosto). «Latin America and Twenty-First Century Socialism: Inventing to Avoid Mistakes». Monthly Review, Nueva York, 62 (3), pp. 3-83.

_____ (2012, abril). «Why Socialism». Science and Society, Brooklyn (Nueva York), 76 (2), pp. 163-167.

HAWKINS, Kirk A. (2010). Venezuela's Chavismo and Populism in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

International Labor Organization (ILO) (2011, junio). Statistical Update on Employment in the Informal Economy. Ginebra: Autor.

LACLAU, Ernesto (2005). On Populist Reason. Londres: Verso Books.

LEBOWITZ, Michael A. (2010). The Socialist Alternative: Real Human Development. Nueva York: Monthly Review Press.

LIVINGSTONE, Grace (2011). «The United States of America and the Latin American Right». En Francisco Dominguez, Geraldine Lievesley y Steve Ludlam (eds.), Right-Wing Politics in the New Latin America, pp. 26-43. Londres: Zed Books.

MONEDERO, Juan Carlos (2009, julio-septiembre). «La reinvención revolucionaria de Venezuela y los fantasmas del pasado». Comuna: Pensamiento Crítico en la Revolución, Caracas: Centro Internacional Miranda, 1, pp. 187-195.

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (2010, junio). Documentos fundamentales: Libro rojo. Caracas: Autor.

PETKOFF, Teodoro (2009, 15 de octubre). «Chávez está ebrio de estatismo y nos está llevando a la ruina económica». Noticias 24 [página en línea]. Recuperado de http://www.noticias24.com/actualidad/

noticia/100603/chavez-esta-ebrio-de-estatismo-y-nos-esta-llevando-a-la-ruina-economica/

_____ (2010). El chavismo como problema. Caracas: Libros Marcados.

SAYAGO, Elio (2009, octubre-diciembre). «El protagonismo de los trabajadores para lograr la transformación socialista de las empresas básicas de Guayana». Comuna: Pensamiento Crítico en la Revolución, Caracas: Centro Internacional Miranda, 1, pp. 94-113.

S/A (2011, 21 de junio). «Indepabis arrecia fiscalización en Río Chico». Diario Vea, Caracas, p. 8.

Unión Radio (2010). «Actualidad». En Unión Radio.net [página en línea]. Recuperado el 18 de abril del 2012 de http://www.unionradio.net/actualidadur/nota/visomota.aspx?id=58391&tpCont=1&idSec=3

WEBBER, Jeffery R. y Susan Spronk (2010a, 22 de julio). «The Labor Movement and Socialist Struggle in Venezuela Today». The Bullet (394). En Socialist Project [página en línea]. Recuperado el 2 de noviembre del 2011 de http://www.socialistproject.ca/bullet/394.php

_____ (2010b, septiembre-octubre). «Voices from Venezuela on Worker Control and Bureaucracy in the Bolivarian Revolution». Against the Current (148). En Solidarity [página en línea]. Recuperado el 12 de junio del 2012 de http://www.solidarity-us.org/site/node/3023

# ¿Gobiernos de la "mala izquierda" contra movimientos sociales "buenos"? Tensiones creativas dentro del proceso de cambio en Bolivia[1]

Federico Fuentes

Dependiendo de con quién se hubiese hablado en ese momento, el triunfo electoral de diciembre 2005 del líder sindical cocalero Evo Morales, que lo llevó a ser el primer presidente indígena de Bolivia, representó el ascenso al poder de un miembro con carnet de la "izquierda mala", o bien una iniciativa de la izquierda radical de formar un "gobierno de los movimientos sociales". Para Jorge Castañeda (2006b, p. 29), Morales representaba una izquierda mala que era «nacionalista, estridente y de mente cerrada». Antes de la inauguración de Morales, Castañeda (2006a) incluso predijo que éste iba a «hacer lo que los populistas de esta variedad siempre hacen: pegarle a Washington y congraciarse con su principal base de apoyo, los cultivadores de la hoja de coca del Chapare». Concluyó, sin embargo, que si Washington

1 Le agradezco a Kiraz Janicke y Richard Fidler por sus sugerencias durante la redacción de este capítulo.

jugaba bien sus cartas evitando caer en las trampas de Morales, el líder populista «haría noticia, pero no historia».

El marxista radical y recién electo vicepresidente Álvaro García Linera (2006) consideró que el triunfo de Morales representaba el surgimiento de un nuevo elemento dentro de la izquierda radical latinoamericana: *el evismo*. El ascenso del evismo representó algo más que la mera elección de una persona, era el resultado colectivo de los movimientos sociales bolivianos que habían girado desde posiciones de resistencia local en la década de los ochenta hacia la construcción de alianzas en los noventa, para luego emprender una lucha sin cuartel para tomar el poder al inicio del siglo, derribando varios presidentes en el proceso (ver Marta Harnecker y Federico Fuentes 2008). García Linera dijo que un componente central del evismo era su estrategia de luchar por un poder basado en los movimientos sociales combativos del país. Esto había dado lugar a un «gobierno de los movimientos sociales» (Marisela Svampa y Pablo Stefanoni 2007, p. 161). Un segundo elemento crucial fue el papel de la mayoría indígena. A diferencia de los experimentos nacionalistas del pasado, que fueron dirigidos por sectores mestizos y de clase media, este esfuerzo del siglo XXI tenía al «indio» como núcleo de su proyecto hacia una nueva Bolivia (García Linera, ob. cit., p. 31).

Durante el primer mandato de Morales, el gobierno nacionalizó las reservas de gas del país, concentró sus esfuerzos en la adopción de una nueva Constitución que consagró un estatus de iguales entre los pueblos indígenas y expulsó al embajador de Estados Unidos por su presunto papel en un intento de golpe derechista. Posteriormente, Morales fue reelegido en 2009 con un nivel de votación sin precedentes: el 64 % de los votos. La historia resultó no estar del lado de Castañeda.

Sin embargo, durante el segundo mandato de Morales se ha producido un debate sobre otra tesis que propone la idea de dos izquierdas, que no viene de la derecha (como fue el caso con Castañeda) sino de escritores izquierdistas. Esta tesis ha dominado gran parte del análisis sobre las recientes protestas realizadas por los movimientos sociales en Bolivia, particularmente el

conflicto que se suscitó por la carretera propuesta por el Gobierno, que iba a atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis)[2].

Los defensores de esta nueva tesis de dos izquierdas argumentan que las políticas económicas del gobierno son la explicación fundamental para entender los recientes conflictos en Bolivia. Así, defienden que a pesar de la retórica anticapitalista y ecologista de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) ha seguido el camino del «neoliberalismo reconstituido», intensificando de esta manera la dominación transnacional sobre los recursos naturales de Bolivia (Jeffery Webber 2012), o ha seguido el camino del neoextractivismo, que ha dejado el país aún más dependiente de la extracción de recursos naturales (Eduardo Gudynas 2013). Protestas de parte de los movimientos sociales son presentadas como ejemplo de una alternativa de la «izquierda buena» a las políticas de la «izquierda mala», representadas por el gobierno masista. En este contexto, también discuten que los activistas de solidaridad no se pueden limitar simplemente a oponerse a la intervención imperialista; es necesario también condenar la brecha entre la retórica y la práctica del gobierno (Webber 2011, p. 235).

El propósito de este capítulo es evaluar la utilidad de esta tesis de las dos izquierdas para analizar el «proceso de cambio» en Bolivia. En primer lugar, voy a dar una visión general del programa económico del gobierno y explicar en qué se diferencia de una orientación neoliberal o neoextractivista (tanto en su retórica como en la práctica). Voy a demostrar cómo, de hecho, la estrategia del MAS tiene sus raíces tanto en la realidad de la Bolivia que heredó como en las demandas de cambio que han brotado desde su diversa base social. En definitiva, su estrategia ha girado en torno a la implementación de las dos principales demandas planteadas por los movimientos sociales bolivianos: "refundar" un nuevo Estado plurinacional a través de una Asamblea Constituyente y la nacionalización e industrialización de los

2 Ver Federico Fuentes 2012.

recursos naturales (principalmente el gas). Estos dos pasos fueron vistos como fundamentales para garantizar que la mayoría de la riqueza natural del país se quedara en Bolivia, para ser redistribuida entre la mayoría indígena históricamente excluida, sea por la vía del aumento del mayor gasto social por propiciar el apoyo a las actividades económicas (predominantemente de gestión privada) de los diversos movimientos sociales, que incluyen campesinos, trabajadores informales, vendedores de calle, cooperativistas, transportistas, cocaleros, microempresarios, entre otros. Es precisamente esta visión consagrada en la nueva constitución y cuya influencia es claramente visible en la Agenda Patriótica 2025, que el MAS presentó como su programa para continuar y profundizar el proceso de cambio en las elecciones nacionales del 2014[3].

Luego examinaré ejemplos de cómo el gobierno ha implementado esta estrategia, con miras a las políticas del gobierno en un sector muy propenso a los conflictos –el sector minero–, dando especial atención a dos pugnas mayores que ocurrieron en el 2012: Mallku Khota y Colquiri. Sostengo que esta tesis alterna de dos izquierdas es inadecuada en cuanto a ayudarnos a comprender los desafíos y complejidades que enfrenta la izquierda latinoamericana del siglo XXI. Alternativamente, el concepto de «tensiones creativas dentro de la revolución» elaborado por García Linera (2011), nos da un marco de referencia mucho más útil. Por último, me referiré a lo que esto podría significar para los activistas solidarios con el proceso de cambio y, en particular, el por qué de la necesidad de un enfoque más matizado que vaya más allá de la dicotomía simplista de gobiernos malos/movimientos sociales buenos.

## Retórica de la estrategia económica del MAS

Ausente por mucho tiempo desde los análisis presentados por las críticas del MAS, corresponde la visión que los movimientos

3 Véase Evo Morales Ayma 2013.

sociales bolivianos tienen de la economía. En realidad, la estrategia económica del MAS, generalmente, refleja las demandas de la mayoría abrumadora de estos movimientos sociales. Si bien existen diferencias sobre el ritmo y el alcance de su aplicación, ninguna alternativa más radical (ya sea socialista o posextractivista) ha sido propuesta como alternativa a la del MAS (Clayton Mendonça Cunha Filho y Rodrigo Santaella Gonçalves 2010, p. 194).

La visión sobre la economía de Bolivia que proponen los movimientos sociales del país se puede encontrar en el anteproyecto de Constitución presentado a la Asamblea Constituyente por el Pacto de Unidad, que une a las principales organizaciones campesino e indígena de Bolivia[4]. El Pacto propuso una economía compuesta de seis sectores: pequeña producción urbana y rural, producción mixta y cooperativa, y agrupación empresarial capitalista, tanto pública como comunitaria. Dentro de este modelo, el Estado participaría activamente en la economía con el fin de promover al sector comunitario y la pequeña producción urbana y rural, aunque esto debería hacerse «sin afectar la economía empresarial privada» (Pacto de Unidad 2007, p. 70). Los recursos naturales pertenecerían al pueblo y serían administrados por el Estado. Ninguna prohibición fue impuesta para la contratación de transnacionales cuyo fin era extraer recursos, aunque «el Estado se reserva el derecho de declarar extinguidos los contratos de concesión de los recursos naturales» (íd.). También está ausente una oposición abierta a las industrias de extracción; lo que sí apoya es que:

4 Las organizaciones que participaron en la elaboración de la propuesta del Pacto de Unidad fueron el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias "Bartolina Sisa" (FNMCIOB "BS"), Movimiento Cultural Afrodescendiente, la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable (Anarescapys) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).

> … el Estado promueve la articulación económica de los sectores extractivos de la economía con el aparato productivo interno y el sector productivo industrial; su finalidad es garantizar mayor valor agregado a los recursos naturales y materias primas para beneficio de todos los bolivianos y bolivianas (ibíd., pp. 70-71).

Esta visión es muy similar a la contenida en la nueva Constitución[5] y la estrategia económica del gobierno[6]. Según Luis Arce Catacora (2011), Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el «nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo» propuesto por el Gobierno está compuesto por cuatro sectores –estatal, privado, familiar y comunitario–, donde el primero es considerado como el más importante. Este modelo se basa en dos pilares: los sectores estratégicos (como los hidrocarburos y la minería) que generan renta, y los sectores productivos (como la manufactura, el turismo, la construcción, la agricultura y otros) que generan beneficios y puestos de empleo. Con el fin de romper la dependencia de la economía en la exportación de materias primas, el Gobierno propone un modelo de transferencia de renta, generado en el primer sector hacia la industrialización de los recursos naturales, mayor gasto social, y la promoción de sectores productivos, con énfasis en empresas comunitarias, cooperativas y familiares.

Esta estrategia también está presente en la Agenda Patriótica 2025 (Morales Ayma, ob. cit., p. 7). Aunque toma nota del hecho de que Bolivia sigue dependiendo de la minería y el gas, la Agenda reconoce los avances realizados en términos de recuperación de la soberanía popular sobre estos recursos naturales y afirma: «Es nuestro desafío construir una economía plural y diversificada que recupere, fortalezca y promueva todo nuestro potencial, iniciativas y capacidades, [mientras que se respeten] plenamente los derechos de la Madre Tierra» (íd.). Esto se logrará mediante la promoción

5 Mientras que la versión aprobada de la Constitución expandió algunos de estos puntos y añadió otros nuevos, es evidente que la visión presentada en la propuesta del Pacto de Unidad fue en gran parte incorporada al texto final. Véanse en particular los artículos 306, 307, 309 y 311.

6 Ver Cunha Filho y Santaella Gonçalves 2010, p. 183.

estatal de la producción agrícola, industrias artesanales y manufactureras, sectores de servicios (comercio, turismo, transporte y comunicaciones) y por vía del impulso al «conjunto de los emprendimientos productivos y empresariales de pequeños y medianos productores y organizaciones económicas comunitarias» (íd.).

El objetivo general de esta estrategia, escribe Arce Catacora (ob. cit., p. 4), no es ir directamente a cambiar el modo de producción capitalista, más bien se trata de sentar las bases para la transición hacia el socialismo en el cual, «gradualmente se irán resolviendo muchos problemas sociales y se consolidará la base económica para una adecuada distribución de los excedentes económicos». García Linera (citado en Hernández Navarro 2012) proporciona un resumen sucinto de por qué estas medidas económicas pueden ser vistas no sólo como componentes de una estrategia integral «posneoliberal», sino que también constituyen pasos hacia una «transición poscapitalista»:

> Se ha recuperado el control de los recursos naturales que estaban en manos extranjeras, para colocarlos en manos del Estado, dirigido por el movimiento indígena (gas, petróleo, parte de los minerales, agua, energía eléctrica); en tanto que otros recursos, como la tierra fiscal, el latifundio y los bosques, han pasado a control de comunidades y pueblos indígenas-campesinos.
> Hoy el Estado es el principal generador de riqueza del país, y esa riqueza no es valorizada como capital; es redistribuida en la sociedad a través de bonos, rentas y beneficios sociales directos de la población, además del congelamiento de las tarifas de los servicios básicos, los combustibles y la subvención de la producción agraria. Intenta priorizar la riqueza como valor de uso, por encima del valor de cambio (pp. 2-3 ).

Agrega:

> En ese sentido, el Estado no se comporta como un "capitalista colectivo" propio del capitalismo de Estado, sino como un redistribuidor de riquezas colectivas entre las clases laboriosas y en

> un potenciador de las capacidades materiales, técnicas y asociativas de los modos de producción campesinos, comunitarios y artesanales urbanos. En esta expansión de lo comunitario agrario y urbano depositamos nuestra esperanza de transitar por el poscapitalismo, sabiendo que también esa es una obra universal y no de un solo país (íd.).

Como tal, la estrategia del MAS puede ser entendida como un intento de un sector de la izquierda radical latinoamericana al tomar en cuenta una de las cuestiones planteadas por Steve Ellner en el capítulo introductorio de este libro, el de la heterogeneidad social de su base. En lugar de una clase revolucionaria única, García Linera se refiere aquí a las *clases* trabajadoras, una posición que se relaciona con el punto de vista que ve a Bolivia como «una formación abigarrada en la cual diferentes formas de relaciones sociales y económicas coexisten de manera desigual y desarticulado» (Nancy Postero 2010, p. 23). Al reconocer simultáneamente la unidad y la diversidad que existe dentro de las clases trabajadoras bolivianas (urbana, rural, informal, por cuenta propia, etcétera), García Linera también nos permite ir más allá de la cierta homogeneidad política y social que George Ciccariello-Maher (en su capítulo) les impone a través de su énfasis en las «masas constituyentes revolucionarias». Este concepto no parece dejar espacio para la existencia de diferenciaciones internas e influencias conservadoras dentro de estas masas constituyentes, algo que Ellner observa en su capítulo sobre Venezuela, cuando analiza la presencia de sectores dentro del proceso venezolano que buscan priorizar la consolidación, sobre la radicalización.

En el contexto boliviano, yo diría que el concepto de «clases trabajadoras indígenas» es aún más apropiado. No sólo porque resume mejor la naturaleza racializada de la estructura de clases en Bolivia, sino porque también nos ayuda a desarrollar el argumento de Ellner al respecto del enfoque de la izquierda radical en los temas de «inclusión» e «incorporación». Aunque el MAS ciertamente ha dirigido más sus consignas a los trabajadores en el sector informal (que componen la mayoría de la fuerza laboral),

su énfasis primordial ha sido la incorporación de los que son históricamente marginalizados: «los indios».

Todo esto explica por qué el MAS defiende la propuesta de una «economía plural» que afirma la necesidad del dominio estatal sobre sectores estratégicos de la economía, y al mismo tiempo la de respetar, y en muchos casos promocionar elementos del sector privado. En contraste con la estrategia de la izquierda del siglo xx, que se basaba en la idea de una clase obrera revolucionaria y homogénea que iba a destruir al Estado capitalista y expropiar los medios de producción, el MAS reconoce que en la actualidad de Bolivia no existe una base social capaz de llevar a cabo un proyecto de este tipo. Se requiere una estrategia diferente dada la heterogeneidad de la clase obrera del siglo xxi, uno de los complejos desafíos teóricos y prácticos que la izquierda radical de hoy tiene que enfrentar. Sin embargo, esto no representa una visión estática en el sentido de que la estrategia del MAS tiene como objetivo promover el *statu quo*. Tampoco se basa, como argumenta Webber (2011, p. 64), en algún tipo de estrategia de revolución por etapas, que ve la creación de una burguesía nacional que pueda conducir a Bolivia hacia el desarrollo capitalista, como un requisito previo y necesario para el socialismo. Más bien, García Linera (2010, p. 15) deja claro que en esta fase de transición, la estrategia económica del gobierno, aunque no vaya directamente hacia la abolición de la propiedad privada, sí se centra en el fortalecimiento de las dos fuentes de «socialismo comunitario» boliviano: el proletariado urbano y el comunitarismo rural. Sobre esto último, García Linera (íd.) explica que en Bolivia «persisten estructuras agrarias campesinas que hacen que nuestra lucha por el socialismo [tenga] la particularidad de socialismo comunitario».

Por último, García Linera reconoce que el «socialismo comunitario» es un proyecto internacional, y por ende no se puede construir en un solo país. Este es un punto importante que generalmente está ausente en las críticas hechas desde la izquierda. Yendo más allá del capitalismo y el extractivismo, implica algo más que simplemente enfrentarse a la intervención imperialista,

sea en la forma de financiación a grupos de oposición o fomentando golpes (Roger Burbach, Michael Fox y Federico Fuentes 2013, pp. 88-89). Angélica Navarro, la jefa de la delegación boliviana en las negociaciones sobre el cambio climático en Copenhague, explicó esto cuando dijo:

> Millones de personas (…) están sufriendo los efectos de un problema al que no contribuyeron. Además de tener que enfrentar un clima cada vez más hostil, hay países como Bolivia que no pueden alimentar su crecimiento económico con energía barata y contaminante como hicieron los países ricos, ya que eso sólo empeoraría la crisis climática, y –al mismo tiempo–no pueden afrontar los costos anticipados de cambiar a energías renovables como la eólica y la solar (citado por Naomi Klein 2009 pp. 2-3).

La superación de esta situación desigual, provocada por el imperialismo, requerirá una transformación fundamental de las relaciones globales de poder, algo que una pequeña nación andina no podía hacer sola. En este sentido, el gobierno masista entendió que su capacidad para avanzar el proceso de cambio en su país se entrelazaba con la capacidad de unión con otros en la lucha para cambiar la correlación de fuerzas a nivel internacional.

## Realidades de la estrategia económica del MAS

¿Cómo se compara todo esto con la realidad de Bolivia hoy? Una demanda clave de los movimientos sociales, y el componente central de este nuevo modelo económico, fue la nacionalización de los hidrocarburos. Hablar de una «nacionalización neoliberal» y argumentar que las transnacionales continúan extrayendo la mayor parte de gas de Bolivia, tergiversa la realidad del proceso de nacionalización[7]. Dado el casi completo desmantelamiento de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante el periodo del neoliberalismo, el Estado

7 Véase, por ejemplo, Brent Z. Kaup 2010.

requirió de los servicios de empresas transnacionales para los efectos de extracción. Sin embargo, bajo los nuevos contratos y la Constitución que otorga al Estado la propiedad sobre las reservas de gas, las transnacionales no tienen poder de decisión en cuanto al gas una vez extraído, ya que deben entregar toda su producción a los YPFB. La renacionalización de los brazos de transporte y gasoductos de los YPFB ha permitido a la empresa estatal controlar y supervisar la distribución y comercialización del gas. El Estado ha utilizado esta posición para renegociar nuevos contratos de exportación con Argentina y Brasil (actualmente los únicos mercados de exportación de gas no-procesado boliviano), asegurando en el proceso un mejor precio para su gas. Al mismo tiempo, el Gobierno ha iniciado un proceso de reconstrucción de YPFB, empezando con la expropiación de refinerías previamente privatizadas para que pueda estar en la posición de asumir la responsabilidad total de extracción.

Es importante destacar que más del 80 % de toda la ganancia de la industria va ahora para al Estado a través de impuestos, regalías y otros medios (Raúl Velásquez y María del Carmen Inch 2012, p. 25). Esto ha constituido el factor clave detrás de la subida de impuestos y regalías recaudadas por el Estado, que pasó de representar el 28 % del PIB en el 2004 al 45 % del PIB en 2010 (Omar De León Naveiro 2011, p. 58). También facilitó la dramática disminución de la deuda pública, de un 90 % del PIB en el 2003 a 31,5 % en el 2012 (MEFP 2013a, p. 142). El gobierno de Morales también ha llevado a cabo nacionalizaciones en sectores estratégicos como la minería, telecomunicaciones y electricidad, y también ha creado nuevas empresas de propiedad estatal. Estos pasos han convertido al Estado en el actor más grande dentro de la economía, que pasó de un 18,6 % del PIB en el 2005 al 34 % en el 2011 (MEFP 2013b, p. 44). La trayectoria general se ha dirigido hacia un «aflojamiento general del control de las transnacionales» sobre el Estado boliviano y la economía, lo que le ha proporcionado al gobierno de Morales mayor «margen de maniobra que cualquier otro gobierno en la historia reciente» (Kohl 2010, p. 118).

La estrategia del gobierno ha facilitado un récord en cuanto al crecimiento económico, con un promedio de cerca del 5 % al año entre 2006 y 2012 (MEFP 2013b, p. 43). El hecho de que esto fue posible, a pesar de los impactos de la crisis económica mundial, refleja, en parte, la disminución de la dependencia de la economía en el mercado global. De hecho, la demanda externa tuvo un impacto negativo en las tasas de crecimiento, mientras que la demanda interna se elevó vertiginosamente, en un promedio de 5,2 % por año entre 2006 y 2012 (ibíd., pp. 42-43).

El aumento en la demanda interna ha sido el resultado de una redistribución drástica de la riqueza desde las transnacionales hacia la mayoría pobre. Mientras que el Gobierno todavía tiene mucho camino por recorrer para superar la deuda social heredada, hubo progreso. Una serie de medidas, como el aumento del gasto en salud y educación, la introducción de bonos sociales, aumentos salariales y controles sobre los precios de alimentos básicos, han contribuido a que los pobres sean más ricos y que la desigualdad en la distribución de riqueza sea menor. La tasa de pobreza se redujo de 60,6 % en el 2005 a 48,5 % en el 2011. La diferencia de ingresos entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre era de 128 a 1 en el 2005; para el año 2012 esta disparidad se había reducido a 60 a 1 (ibíd., pp. 65, 69).

Al mismo tiempo, el Gobierno ha utilizado esta nueva riqueza para promover la industrialización de los recursos naturales y fortalecer sectores productivos. Una planta de separación de líquidos ya está funcionando, y una segunda está casi por completarse. Combinadas, estas dos plantas estatales tendrán la capacidad para satisfacer todas las necesidades que Bolivia tiene en cuanto a gasolina y Gas Licuado del Petróleo (GLP), así como permitir al país exportar gas procesado (algo que ya está haciendo con Paraguay). También hay planes para una tercera planta que permitirá al país ser autosuficiente en diesel. En lo que representa el mayor proyecto de inversión estatal en la historia de Bolivia, el Gobierno también ha comenzado la construcción de una planta de urea y amoníaco. En cuanto a la manufactura, este sector ha tenido un impacto mayor que la minería o hidrocarburos

en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) (MEFP 2013a, p. 54). También se ha producido un salto espectacular en el número de empresas registradas, de menos de 20.000 en el 2005 a más de 96.000 para mediados del 2013 (Fundempresa 2013, p. 3). En general, ha habido una disminución en el desempleo y un aumento en el porcentaje de trabajadores empleados en el sector formal.

Para ayudar a fomentar el sector comunitario, el Gobierno ha iniciado algunos experimentos con pequeñas empresas de propiedad estatal en las áreas de procesamiento de alimentos y producción de cartón (Fernando Molina 2013, pp. 9-10). El plan es entregar estas empresas a las comunidades locales. Este sector también ha recibido prioridad en las políticas agrícolas del Gobierno: más de treinta y cinco millones de hectáreas de tierra han sido entregadas como propiedad comunitaria o colocadas bajo el control directo de los habitantes indígenas originarios. El Estado también se ha preocupado de asegurar que los pequeños productores tengan acceso preferencial a equipos, materiales, préstamos sin intereses y mercados subsidiados por el Estado.

Es cierto que las transnacionales siguen operando en Bolivia y que las industrias extractivas persisten; la economía de Bolivia sigue siendo capitalista y dependiente de la extracción de recursos naturales, y hay un debate legítimo que debe plantearse sobre los errores en los que ha incurrido en los intentos por establecer la estrategia económica del gobierno, así como sobre el ritmo y el alcance de su implementación. En general, sin embargo, la realidad de las medidas económicas del gobierno muestran que hay avances significativos que rompen con el marco neoliberal y extractivista heredado de gobiernos anteriores y reforzado por la relación mundial de fuerzas existentes.

Asimismo, el gobierno del MAS ha jugado un papel importante en el intento de cambiar las relaciones que Bolivia ha mantenido tradicionalmente con el capital internacional, empezando por sus esfuerzos para establecer una relación diferente con los Estados Unidos, esta vez sobre la base de «la soberanía, la dignidad y de la reciprocidad» (Martín Sivak 2010, p. 162). El

Gobierno también ha intentado establecer relaciones políticas y comerciales con nuevos aliados, el paso más importante lo constituye la integración de Bolivia a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Al incorporarse al ALBA en el 2006, Bolivia puso sobre la mesa la propuesta de establecer Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP) como una alternativa concreta a los Tratados de Libre Comercio (TLC) promocionados por los Estados Unidos. Bolivia también ha jugado un papel importante en la formación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y está a punto de entrar como miembro pleno al Mercado Común del Sur (Mercosur) (Burbach, Fox y Fuentes, ob. cit., p. 88).

Estas nuevas relaciones no se han limitado a la esfera gubernamental. El gobierno del MAS también ha llevado a cabo dos importantes campañas internacionales en estrecha colaboración con movimientos sociales de todo el mundo. Ha encabezado la lucha mundial contra el cambio climático, en particular a través de su papel en la convocatoria de la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, realizada en Cochabamba en el 2010 (Aguirre y Cooper 2010). Otra importante campaña internacional ha estado dedicada a la despenalización de la coca, en contraposición a la política estadounidense de la "guerra contra las drogas". Esta política de los Estados Unidos ha sido constantemente utilizada para socavar la soberanía de Bolivia y otros países.

Lo más importante de todo es que se evidencia que la estrategia política doméstica y exterior del MAS, constantemente, ha recibido el apoyo abrumador de las clases trabajadoras indígenas de Bolivia, y no sólo en época de elecciones. Para el MAS, ganar unas elecciones no era lo mismo que tomar el poder. En cambio, su victoria electoral fue el detonante de una intensificación de la lucha de clases que culminó en una lucha sin cuartel por el poder, cuyo resultado final fue determinado por la intervención decisiva de estas mismas clases. Al sentir la amenaza de que un gobierno masista representaba a su poder político y económico,

las élites capitalistas tradicionales de Bolivia respondieron con una ofensiva contrarrevolucionaria que intentó por todos medios posibles evitar la aprobación de la nueva Constitución. La ofensiva derechista alcanzó su punto máximo con el fallido intento de golpe en septiembre del 2008. Las profundas movilizaciones de clases de este período, en combinación con la capacidad del MAS de ampliar y unir a su base de apoyo entre las clases trabajadoras indígenas, dentro los militares y a nivel internacional, fue el factor clave para asegurar la derrota de la revuelta derechista (Moira Zuazo 2010, pp. 130-132 y Bret Gustafson 2010, p. 63). Hablando de estos eventos, García Linera señaló que:

> La contundencia y firmeza de la respuesta político-militar del gobierno contra el golpe, sumado a la estrategia de movilización social en Santa Cruz y hacia Santa Cruz, crearon una articulación virtuosa social-estatal pocas veces vista en la historia política de Bolivia (citado en Pablo Stefanoni, Franklin Ramírez y Maristella Svampa 2009, p. 98).

A raíz de esta confrontación de clases se aprobó la nueva Constitución, consolidando la creación de lo que se puede denominar un nuevo bloque hegemónico de las clases trabajadoras indígenas bajo la dirección del MAS. En vez de retirarse a sus casas, los movimientos sociales de Bolivia han seguido protestando, sobre todo para hacer escuchar sus reclamos sectoriales. El ascenso vertiginoso en el número de conflictos (2.421 entre 2009 y 2011, en comparación con 881 en los tres años anteriores), ha hecho de la era de Morales la más conflictiva de cualquier gobierno desde que se comenzó a mantener registros en la década del setenta (Carlos Moldiz 2012). Sin embargo, en octubre del 2014, Morales otra vez fue electo presidente, con más de 60 % de los votos y sin ninguna alternativa política viable y coherente, ya sea hacia la izquierda o a la derecha visibles en el horizonte.

## Novedades en el sector minero

El sector minero nos proporciona una ventana de la cual podemos ver más de cerca las complejidades y desafíos que el gobierno del MAS debe enfrentar. Bajo el neoliberalismo, la caída de los precios internacionales de minerales fue utilizada para justificar la privatización del sector minero en Bolivia. El mayor beneficiario de este proceso terminó siendo Comsur, una empresa minera en gran parte propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada, ex Ministro de Planificación y arquitecto clave de la política neoliberal en la década de los ochenta. Por otra parte, la privatización dejó cerca de treinta mil mineros sin trabajo y destruyó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la columna vertebral del históricamente militante movimiento sindical boliviano. Durante este proceso, los hidrocarburos vinieron a sustituir la minería como industria clave en cuanto a exportaciones para Bolivia[8]. Desde la elección de Morales, la contribución del sector minero a las exportaciones ha empezado a crecer una vez más, llegando a representar 31,5 % de todas las exportaciones en el 2012 (Aranibar Bacarreza 2013, p. 2). Para los críticos, esto es prueba de una supuesta orientación neoextractivista de parte de Morales. Sin embargo, paradójicamente, la inversión en el sector ha caído en picada y el volumen de las exportaciones de minerales, con la excepción del 2012, en gran parte se ha mantenido estable desde el año 2007. ¿Cómo se explica esto? En realidad, la estrategia económica del gobierno ha tenido poco que ver con la reemergencia del sector minero. Más bien, esto ha sido el resultado de una serie de factores, principalmente el auge en los precios mundiales de los minerales, el incremento en importancia de los cooperativistas mineros y la puesta en marcha del megaproyecto minero en San

8 Mientras que la contribución de la minería a las exportaciones fue del 38,1 % en 1999, llegando así a ser el sector exportador más importante de Bolivia, para el año 2005 su participación se había reducido a 19 %. En comparación, la contribución del gas a las exportaciones aumentó de 7,2 % a 50,3 % durante el mismo período (Enrique Aranibar Bacarreza 2013, p. 2).

Cristóbal[9] iniciada antes de la elección de Morales (ibíd., pp. 2-3; Fuentes 2013, pp. 7-8, 27).

Este es el contexto en el que el gobierno ha tratado de poner en práctica su visión de una economía plural dentro del sector minero. Una vez más, esta visión está presente en la nueva Constitución, cuando establece que los minerales son de propiedad del pueblo boliviano y deben ser administrados exclusivamente por el Estado «en función del interés colectivo» (CPE 2009, p. 137). El Estado también

> … asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas» (ibíd., p. 138).

En suma, mientras el Estado recupera su control sobre los depósitos de minerales, la cadena de producción y la renta minera, se respeta la continua presencia de empresas privadas y cooperativas, así como de nuevas empresas comunitarias. Este reconocimiento de las distintas formas de empresas productivas está relacionado directamente con las realidades existentes en el sector, es decir, el desmembramiento de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el rol cada vez más capital-intensivo de la industria y el papel que las cooperativas juegan dando empleo a unos 110.000 mineros, 85 % de la fuerza laboral minera (Kirsten Francescone y Vladimir Díaz 2013, p. 38).

El gobierno ha tratado de avanzar en la implementación de su política minera por varios medios:

- En mayo del 2007, Morales emitió un decreto que devolvió todos los recursos minerales a manos del Estado, excepto en los casos donde previamente se habían otorgado concesiones.

9 San Cristóbal representa alrededor del 45 % de la producción minera del país.

En virtud de la nueva Constitución, las empresas mineras privadas deben devolver estas concesiones al Estado y firmar nuevos contratos que reflejan el nuevo papel del Estado como único propietario de los yacimientos minerales. El Estado le entregó a Comibol control directo sobre la exploración y producción de los yacimientos minerales en Huanuni, Colquiri y Mallku Khota.

- Otras nacionalizaciones dirigidas hacia la recuperación del control sobre la producción en minas previamente entregadas a la Compañía Minera del Sur (Comsur), y posteriormente adquiridas por Glencore, fueron rechazadas por los sindicatos mineros presentes en esas operaciones. Más recientemente, el Gobierno ha comenzado a firmar nuevos contratos para sustituir las viejas concesiones, empezando con las concesiones mineras en manos de Glencore. Los nuevos términos significan que Comibol asume la propiedad sobre los depósitos de minerales y recibe 55 % de las ganancias; el resto irá a la empresa privada contratada para dirigir las operaciones en la mina. Después de tomar en cuenta los impuestos y regalías que las empresas pagan, se espera que el ingreso estatal sea alrededor de 90 % de la ganancia (Henry Oporto 2012, pp. 49-50).
- El Estado boliviano enfrenta importantes limitaciones financieras y tecnológicas en su intento de recuperar control total sobre el sector. Por eso, el Gobierno ha firmado contratos de riesgo compartido para extraer e industrializar cobre en la mina Corocoro, así como hierro en Mutún. Si bien el proyecto Corocoro ha avanzado, el Gobierno rescindió el contrato para Mutún en el 2012, después de que la empresa privada se negó a cumplir con sus acuerdos contractuales. El futuro del Mutún todavía no está claro, aunque el Gobierno ha dado a entender que, con el enorme aumento de las reservas monetarias internacionales en poder del Banco Central de Bolivia, posiblemente están en condiciones para avanzar solos con el proyecto.

- Como parte de su intento por aumentar la participación directa del Estado en el proceso de industrialización, el gobierno nacionalizó la fundición de estaño de Vinto, reactivó la planta de fundición de plata y plomo de Karachipampa, y ya cuenta con un proyecto piloto en marcha que puede producir carbonato de litio, el primer paso hacia la industrialización de lo que se estima es el depósito de litio más grande del mundo.
- El gobierno también ha prestado apoyo al sector cooperativo que ha sido una fuente vital de empleo, y con esto ha dado un impulso a las economías rurales locales mucho más allá de lo que los sectores privados y estatales podrían sostener. Esto ha incluido el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, la mitigación de impuestos y el acceso a préstamos preferenciales.

El resultado de todo esto es que Comibol ha sido resucitado «como un planificador clave en el sector, como el dueño de recursos del subsuelo importantes, como un socio del sector privado en una serie de proyectos, como promotor de la industrialización, y como un productor por derecho propio» (John Crabtree y Ann Chaplin 2013, p. 80).

## Colquiri y Mallku Khota

Todos estos avances se han producido en un contexto donde el número de protestas en el sector minero se ha ido intensificando exponencialmente, sobre todo desde 2008, y donde la tasa de conflictos ha superado el nivel de protestas bajo gobiernos neoliberales del pasado (Oporto, ob. cit., pp. 17, 31). En gran medida, estos conflictos han tomado la forma de ocupaciones de minas, con el pretexto de que «como originarios tenemos el derecho a explotar nuestras riquezas naturales y ningún empresario privado nos puede echar de nuestra tierra» (Fuentes 2013, p. 37), una justificación que contrasta con la de los sindicatos con sus huelgas en defensa de los salarios y condiciones de trabajo de sus miembros. Esto está relacionado directamente con los

complejos, o "plurales", modelos de propiedad existentes en el sector minero. Estas tensiones han sido exacerbadas por el creciente sentido de derecho creado por la nueva Constitución entre las comunidades indígenas rurales, quienes han estado detrás de la mayoría de las ocupaciones de minas.

Los críticos culpan al gobierno por estos conflictos, ya sea debido a la falta de una política y legislación minera clara (Achtenberg 2012) o debido a su falta de voluntad a intervenir militarmente en nombre de los trabajadores (Webber 2011, p. 108). Sin embargo, su acción ha sido en gran parte destinada a evitar el uso de la fuerza estatal y a priorizar el diálogo entre los mineros y las comunidades indígenas como una condición previa y necesaria para la superación de las tensiones existentes dentro y entre el gobierno y su base social, y desde allí avanzar en sus objetivos compartidos. Los ejemplos de Colquiri y Mallku Khota arrojan luz sobre este punto, así como las deficiencias del punto de vista que ve a estos conflictos como prueba de su tesis de las dos izquierdas, mencionada anteriormente.

Jeffery Webber (2011, p. 225) sostiene que las luchas de los trabajadores de la mina de estaño y zinc en Colquiri entre 2008 y 2009 evidenciaban que un «neoliberalismo reconstituido estaba generando sus propias contradicciones profundas», que inevitablemente conducirán a «la resistencia a su izquierda». Sin embargo, faltan algunos elementos cruciales en el recuento que Webber traza de los eventos en Colquiri, por ejemplo, el hecho de que el gobierno propuso nacionalizar la mina en octubre del 2006 (Agencia EFE 2006) y en varias otras ocasiones, más recientemente en abril del 2011 (Fuentes 2011)[10]. Sin embargo, cada vez el gobierno se vio en la obligación de retroceder, debido a la oposición del sindicato de trabajadores de la mina, argu-

10 Incluso la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que por lo general ha mantenido una posición firme en apoyo de la nacionalización, aprobó una resolución en una reunión nacional del 2012, un mes antes de la nacionalización, que pidió al gobierno a que rápidamente firme nuevos contratos con las transnacionales, a fin de «garantizar las operaciones mineras y la estabilidad laboral en los distritos mineros de Colquiri, Bolívar y Porco» (FSTMB 2012).

mentando que la nacionalización pondría en riesgo los salarios y condiciones de trabajo de sus afiliados.

La situación en Colquiri recibió un fuerte sacudón cuando la Cooperativa "26 de Febrero", cuyos mil doscientos afiliados habían estado operando en algunas de las vetas más sobreexplotadas en Colquiri, empezó una ocupación de la mina el 31 de mayo del 2012 para exigir la entrega de nuevas áreas para ellos. La respuesta inicial de los cuatrocientos trabajadores mineros empleados por Glencore fue exigir al gobierno el retiro de los ocupantes por la fuerza. El conflicto adquirió rápidamente una dimensión nacional cuando, tanto la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), como la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) hicieron suya la causa de sus respectivas afiliadas locales.

En un intento por resolver la situación, los representantes de la FSTMB, Comibol, y el Ministerio de Minería se reunieron el 5 de junio, y los representantes gubernamentales propusieron la nacionalización de la mina[11]. Mientras que la FSTMB estuvo de acuerdo, al igual que los trabajadores de Colquiri sindicalizados (después de un rechazo inicial a la propuesta), los sindicatos mineros dentro del sector privado anunciaron su rechazo categórico a «la actitud del Gobierno que utiliza al sector cooperativizado para avasallar la industria minera operada por los trabajadores de las empresas privadas, para luego nacionalizar la operación minera avasallada» (La Patria 2012). Declararon que la posición del gobierno iba en contra de su propia visión y apoyo a una "economía mixta". Fencomin y su afiliada local también se opusieron a la nacionalización. En un intento de conciliar estas diferencias, el gobierno anunció el día siguiente que, sin dejar de

11 En el caso de Colquiri, la "nacionalización" sólo tomó la forma de rescindir el contrato de riesgo compartido que le daba a Glencore una participación minoritaria (45 %) en la mina. El Estado ya controlaba el 55 % de las acciones y la propiedad en su totalidad de los depósitos minerales. Sin embargo, el término "nacionalización" fue utilizado por todos los actores en el conflicto, ya sea a favor o en contra de una propuesta de este tipo.

apoyar la nacionalización, estaba dispuesto a conceder acceso a ciertas vetas a la cooperativa, una oferta que Fencomin rechazó.

Dentro este contexto, Glencore intentó maniobrar para defender sus intereses y provocar nuevos enfrentamientos. El 7 de junio, al mismo tiempo que el gobierno, FSTMB y los trabajadores de Colquiri estaban en una reunión para negociar los detalles de la nacionalización, Glencore firmó un acuerdo con la Cooperativa "26 de Febrero" para darle acceso a la veta Rosario, una de las más ricas en Colquiri. A cambio, la cooperativa iba a vender lo que sacaba de allí a Glencore. El acuerdo fue validado por el viceministro para las Cooperativas Mineras, Isaac Meneses.

Este escenario contradictorio se explica mejor, no como el producto de la falta de una política clara, sino por el argumento hecho por Marcel Nelson en este libro (y basado en los escritos de Nicos Poulantzas) de que la política del Estado y su implementación deben ser vistas como «el resultado de interacciones complejas dentro del ámbito estratégico del Estado». Tanto la naturaleza fragmentada del Estado y la presencia de clases y fracciones de clase diferentes dentro de ella, son factores importantes a tener en cuenta al evaluar los resultados de ciertas políticas. Esto es evidente en términos de la política minera del gobierno, que ha sido fuertemente influenciada e impugnada por Fencomin y la FSTMB (que, a su vez, está divida internamente entre los mineros estatales y del sector privado). Esto ha ocurrido a través de su presencia directa en el Estado (en forma de representantes designados como ministros y viceministros), y sus movilizaciones para presionar al gobierno en torno a determinadas cuestiones que afectan a sus miembros. El hecho de que en todos los puestos ministeriales clave y las negociaciones, la única fuerza ausente ha sido Glencore (y cualquier otra transnacional), es una demostración de cuánto influyen estas diversas clases trabajadoras indígenas (con sus contradictorios intereses) sobre la política estatal.

Esto también ayudó a dar forma al resultado final del conflicto, donde Comibol tomó el control total sobre las operaciones en Colquiri, mientras que se cedió acceso a la veta Rosario a la

Cooperativa "26 de Febrero". El acuerdo, sin embargo, descartó cualquier posibilidad de la cooperativa de asociarse con transnacionales. Por otra parte, los miembros de la Cooperativa "26 de Febrero" ofrecieron oportunidad de empleo en la mina (una propuesta asumida por 800 cooperativistas). En este sentido, como resultado no sólo aumentó el nivel de control del Estado sobre el sector de la minería, sino también fortaleció los elementos proletarios dentro del sector minero[12].

Aproximadamente al mismo tiempo ocurrió algo similar en Mallku Khota, una comunidad ubicada 200 kilómetros al norte de Potosí y asentado sobre uno de los más grandes yacimientos de plata e indio en el mundo. El conflicto estalló allí en mayo del 2012 y rápidamente se salió de control del gobierno, resultando en enfrentamientos entre comunidades, la toma de varios rehenes, y una represión policial que dejó al menos un activista muerto. Los críticos alegan que a lo largo de este conflicto «el objetivo principal del Gobierno era proteger a las operaciones del SASC [South American Silver Corporation]» (Celia Garcés y Cedib 2012b) y violar el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas locales. A pesar de eso, argumentan, las comunidades indígenas lograron poner el tema de la extracción de recursos en la agenda pública, exponiendo así la políti-

12 Vale la pena señalar que las tensiones estallaron de nuevo en septiembre del 2012, cuando un decreto del Gobierno aclaró cuánto acceso tendrá la cooperativa a la veta Rosario. A pesar de haber dicho inicialmente que sería entregado en su totalidad, la cooperativa sólo tuvo acceso a 70 % de la veta. Sin embargo, esta vez aumentó la cantidad de trabajadores mineros que protestaron, exigiendo que Comibol fuera la única entidad autorizada a operar la mina. Una vez más se produjeron enfrentamientos y Fencomin cerró varias carreteras, afectando el comercio en todo el país. Un ex cooperativista de Colquiri, que había decidido aceptar un trabajo con Comibol, murió como resultado de una explosión de dinamita cuando los sectores se enfrentaron en La Paz. Al final, un nuevo acuerdo se firmó a finales de septiembre, por el que el acceso de la cooperativa a la veta Rosario se redujo aún más, esta vez al 45 % de la misma (ver Marco Octavio Ribera Arismendi 2012).

ca minera extractivista del gobierno y, finalmente, obligándolo a llevar a cabo una nacionalización (Garcés y Cedib 2012a)[13].

La realidad, sin embargo, fue algo más compleja. El tema de la consulta previa aparece fuertemente en el discurso de quienes se opusieron al contrato de exploración existente. Sin embargo, aunque estos sectores se sintieron fortalecidos por los derechos recientemente adquiridos, el propio contrato fue firmado antes de que entrara en vigencia la nueva Constitución, y aún antes de que Morales fuese electo Presidente. Frente a esta situación, el Gobierno sostuvo la opinión de que la comunidad fuera consultada antes de cualquier decisión tomada para explotar la mina, y el 10 de mayo anunció que había acordado crear una comisión para evaluar las posibilidades de rescindir el contrato. La única condición que puso el Gobierno para cualquier nacionalización fue que se llegara a un consenso al respecto entre la población local, dado el fuerte apoyo que había para que SASC se quedara[14].

Mientras que las preocupaciones ambientales graves en torno al proyecto eran una importante fuerza motriz detrás de las protestas, hay poca evidencia que apoye la afirmación de que los manifestantes propusieron algún tipo de alternativa posextractivista a la política minera del MAS. En lugar de ello, las protestas parecen haber sido motivadas tanto o más por la extrema pobreza en la zona y la posibilidad de aprovechamiento económico por parte de algunas comunidades, en el supuesto caso de que la mina fuese entregada a ellas. En realidad, los manifestantes querían sustituir al SASC por una cooperativa local, como posible medio para superar la pobreza (Federación de Ayllus Originacios Indígenas del Norte de Potosí 2012, Aline Quispe 2012, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina 2012)[15].

---

13 Como en el caso de Colquiri, la nacionalización también aceptó la anulación del contrato de exploración con SASC.

14 Garcés y Cedib (2012b) explican que la población local está compuesta por aproximadamente 46 comunidades indígenas, de las cuales 43 apoyaban la presencia de la compañía, aunque no hay indicios del tamaño de la población de cada comunidad.

15 Cuando los que se oponían a SASC marcharon en La Paz, a finales de mayo, su demanda no fue por la nacionalización, sino para «la adminis-

También fueron los temas de empleo, pobreza y las promesas de beneficios económicos que la SASC utilizó precisamente para manipular y dividir a las comunidades locales. El apoyo a la presencia de la SASC era mayor en aquellas comunidades donde vivían sus empleados. Un líder local, al comentar sobre el papel del SASC en la disputa, dijo: «They've played us against each other by putting money into our own social organizations»[16] («Mallku Lhota Mining Mess: Analysis» 2012).

Rápidamente los acontecimientos se escaparon del control del gobierno, que fue lento para responder, y cuando reaccionó lo hizo de una manera contradictoria. En el caso de Mallku Khota, estas contradicciones no eran simplemente el resultado de las diferentes fracciones de clases que ejercieron influencia sobre la política del Estado, también demostraron que aunque los «centros de poder» pueden estar en manos de las clases trabajadoras indígenas, las fuerzas de clase hostiles aún mantienen una fuerte presencia en los «focos de resistencia» no reformados dentro del Estado (siguiendo con el análisis de Marcel Nelson). Un ejemplo de esto es la fuerza policial, que ha sido históricamente muy politizada y militarizada, y que, a partir de la década de 1980, estuvo cada vez más bajo influencia de la Embajada de los Estados Unidos. Mientras que la penetración de influencia extranjera en

---

tración de nuestros recursos naturales como ayllus originarios del norte de Potosí, a través de nuestra principal organización, la Federación de Ayllus Originarios del norte de Potosí, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado» (FAOI-NP, ob. cit.). Damián Colque, un mallku (líder) de la federación, expresó lo que estaba detrás de esta demanda cuando dijo: «Queremos ser agromineros» (Quispe, ob. cit.). Incluso en diciembre del 2012, después de que ocurrió la nacionalización, la federación local estaba denunciando a la Comibol por no haber avanzado lo suficientemente rápido con el proyecto, y exigió que se ceda a una cooperativa el derecho a comenzar inmediatamente la explotación de la mina: «Pedimos la nacionalización para que nuestro pueblo pudiera tener empleos», dijo Virgilio Huanca, otro líder de la federación indígena local (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, ob. cit.).

16 N. del E.: «Han jugado a ponernos unos en contra de otros dando dinero a nuestras organizaciones sociales» (traducción nuestra).

la fuerza policial ha sido, en gran medida, detenida por el gobierno de Morales, una reforma interna aún está pendiente.

## "Tensiones creativas" dentro de la revolución

En general, ambos conflictos proporcionan una ventana de gran valor desde la cual podemos observar la existencia de lo que García Linera ha denominado «tensiones creativas dentro de la revolución» (2011). Argumenta que la constelación de fuerzas sociales a raíz de la victoria en los enfrentamientos contra la derecha en el 2008 abrió una nueva etapa en la época revolucionaria actual, uno:

> … que se caracterizará ya no por la presencia de contradicciones entre bloques de poder antagónicos, entre proyectos de sociedad irreconciliables como sucedía hasta aquí, sino que estará marcada por la presencia de contradicciones al interior del bloque nacional-popular, es decir, por tensiones entre los propios sectores que protagonizan el proceso de cambio (ibíd., 23).

Sin descartar la posibilidad de otro tipo de tensiones en el futuro, García Linera destaca cuatro tensiones clave que han surgido dentro del proceso de cambio en Bolivia: 1) entre el monopolio centralizado del poder por parte del Estado y el carácter democrático y descentralizado de toma de decisiones adoptadas por los movimientos sociales; 2) entre mantener simultáneamente las amplias alianzas de clases, necesarias para impulsar el proceso de cambio y la hegemonía de las clases trabajadoras indígenas dentro de ella; 3) entre los intereses particulares de sectores sociales específicos y las necesidades generales de la sociedad; y 4) entre la garantía de que las necesidades humanas básicas se cumplen, al mismo tiempo que se protege al medioambiente. Es importante destacar que García Linera afirma que estas tensiones no son «simplemente secundaria sino *creativas* porque tienen la potencialidad de ayudar a motorizar el curso de la propia revolución» (ibíd., pp. 23-24).

Tales tensiones estuvieron presentes en ambos casos estudiados. En Colquiri es evidente que convencer a los mineros y cooperativistas de la necesidad de apoyar la nacionalización era necesario para crear una base social suficientemente sólida que permitirá al gobierno ir en contra de Glencore. Mientras que esto implicaba un compromiso parcial con los cooperativistas mineros (un ala clave de la base social heterogénea del MAS), el resultado fue claramente uno que vio los intereses universales prevalecer sobre las demandas corporativas. Además, era uno que fortaleció la presencia de elementos proletarios en Colquiri (política y numéricamente). Lo mismo ocurrió en Mallku Khota. Mientras que cuestiones ambientales no se plantearon en Colquiri, el desafío de equilibrar aspectos ambientales y la satisfacción de las necesidades básicas estaba siempre presente en Mallku Khota, incluso dentro de las mismas comunidades que se opusieron a la presencia del SASC. Ambos conflictos también revelaron los desafíos que el gobierno enfrentaba, dado que a veces podía encontrarse en una posición en la que debía tomar acciones decisivas y, en algunos casos, rápidas, al mismo tiempo que había que tomar en cuenta los deseos de los movimientos sociales descentralizados que, como hemos visto, penetran profundamente y ejercen su control sobre el Estado.

Como señala García Linera, estas tensiones son una realidad inevitable y sólo pueden ser resueltas a través de la lucha y el conflicto permanente. En esto radica la verdadera importancia de la lucha desde abajo, que traslada este tipo de tensiones a un primer plano y permite la creación de una correlación de fuerzas mejor, que puede facilitar el avance del proceso de cambio. Desde esta perspectiva, el argumento de George Ciccariello-Maher en este libro que dice: «el apoyo de las masas constituyentes revolucionarias es la clave tanto para la supervivencia de estos procesos como para su radicalización», y tiene sentido. Sin embargo, no debemos restar importancia al papel potencialmente clave que el «poder constituido», o en el caso boliviano, el «gobierno de los movimientos sociales», puede jugar en el resultado de las luchas. En los casos de Colquiri y Mallku Khota, se hizo

así ayudando a facilitar el diálogo entre las diferentes partes que componen las "masas constituyentes", como también proporcionando liderazgo político y defendiendo la nacionalización como la mejor manera de afirmar el control popular y la redistribución democrática sobre la riqueza mineral, para el beneficio de todos. En lugar de centrarse en la ubicación del sujeto revolucionario en relación al Estado (es decir, "poder constituyente" frente al "poder constituido"), una mejor manera de comprender la dinámica del proceso boliviano se produce reinsertando el tema de clases en la ecuación. En este sentido, el camino tomado hasta la fecha ha sido uno en donde las clases trabajadoras indígenas del país han consolidado su hegemonía y ejercieron su poder de clases *dentro* y *fuera* del Estado, para defender y radicalizar el proceso de cambio. Dada la naturaleza de las clases trabajadoras indígenas bolivianas, no debería ser ninguna sorpresa que las "tensiones creativas" hayan surgido no sólo entre, sino también dentro de los movimientos sociales y el gobierno.

## Implicaciones para la solidaridad

¿Qué significa todo esto para la solidaridad? En primer lugar, comprendiendo el proceso de cambios, Bolivia requiere un enfoque mucho más matizado que la visión simplista empleada por Webber en la cual enfrenta un mal gobierno contra unos buenos movimientos sociales. Esta tesis alternativa de dos izquierdas, no sólo nos sitúa en una posición abiertamente hostil hacia el verdadero proceso en desarrollo; también conduce hacia un condicionamiento de la solidaridad con una sección selecta de las clases trabajadoras indígenas bolivianas, dando prioridad a aquellos cuyas luchas parecen encajar dentro de modelos preconcebidos (o las esperanzas) que otros tienen de Bolivia. En el caso de Webber, las protestas de los movimientos sociales contra el gobierno son exhibidas como prueba de una oposición al «neoliberalismo reconstituido» (independientemente de sus políticas). Cuando estas protestas se enfrentan a movimientos sociales que han sido fundamentales al proceso de cambio, los

movimientos son denunciados como enemigos de clase, por ejemplo, la «capa privilegiada de cooperativistas mineros» (Webber 2009, p. 106) o la «capa rica de cocaleros» (Webber 2012), y ya no son vistos más como aliados en la lucha.

Una trayectoria similar es evidente entre los que afirman que el MAS es neoextractivista. Bret Gustafson (2013, p. 62), por ejemplo, dice: «En un país marcado por la pobreza extrema en la que el gas se ha interpretado como un medio de salvación nacional, hay poca oposición popular a la extracción de gas natural». La conclusión extraída de esto es que las posibilidades para activistas en el Norte de forjar lazos de solidaridad en Bolivia se limitan en gran parte a «los sectores urbanos marginados, especialmente los jóvenes, y los pueblos rurales y comunidades afectadas por el extractivismo» (íd.).

Por lo tanto, ambos enfoques dan por alto la complejidad de estas luchas que implican conflicto de intereses entre sectores no-privilegiados, una simplicidad semejante a la de Castañeda. Estos puntos de vista, por otra parte, si se aplicaran por las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras que operan en Bolivia, podrían servir para fomentar divisiones entre las clases trabajadoras indígenas bolivianas, en última instancia debilitando su capacidad de implementar un cambio más radical. Como los dos ejemplos arriba muestran, el consenso entre los diferentes movimientos sociales que componen la base social del proceso de cambio (y no la imposición de uno sobre otro) fue un factor clave para la creación de las condiciones necesarias para seguir avanzando con la agenda del proceso.

El segundo problema de esta tesis alternativa de dos izquierdas es que nos desarma en nuestra tarea central de oponernos a la injerencia extranjera. Aunque repite constantemente la afirmación de que nuestra prioridad principal es oponerse a la «injerencia imperialista», Webber (2012) y otros argumentan que, al mismo tiempo, esto no debe significar que no condenemos la brecha entre la retórica y la práctica del gobierno de Morales. La aplicación de esta posición, en algunos casos, ha visto izquierdistas olvidándose de sus autoproclamadas prioridades.

En reacción a las advertencias de intervención imperialista durante la disputa del Tipnis, Webber (2012) optó no por investigar y denunciar tales acciones, sino por criticar estas declaraciones como intentos de Morales de usar la retórica anti-imperialista para difamar a los movimientos sociales disidentes (lo que Postero [2010, p. 29] llama «oppositionalismo») y buscar apoyo para sus políticas que buscan beneficiar a su base cocalera (una caracterización de la política de Morales que hace eco de los comentarios de Castañeda, citados anteriormente).

Más importante aún, esta posición desarma a los activistas porque pierde el enfoque en cuanto a la mejor forma de ayudar a cerrar la brecha entre la realidad de lo que Bolivia es hoy y lo que la mayoría de los bolivianos quieren. Los desafíos que enfrenta Bolivia no pueden ser simplemente reducidos a una cuestión de "injerencia imperialista", son el resultado directo de siglos de colonialismo y opresión imperialista que han atrincherado a Bolivia en su papel dependiente como exportador de materias primas dentro de la economía mundial. Cualquier posibilidad que Bolivia tiene de moverse en una dirección poscapitalista y posextractivista depende de la creación de un nuevo orden mundial, comenzando con la remodelación de las relaciones hemisféricas. Esto es precisamente lo que el Gobierno boliviano ha intentado hacer. En este sentido, no hay una brecha entre las iniciativas como la Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, en Cochabamba, que Webber (2009, p. 235) acepta que «fue una reunión importante en términos de construyendo conciencia ecológica y organización a nivel internacional», y comprendiendo que el socialismo no se puede construir en un solo país.

Esta es una premisa básica para la construcción de un movimiento de solidaridad enmarcado dentro una visión anti-imperialista. Esta visión no ignora las diferencias que existen entre los diversos movimientos sociales bolivianos y en sus relaciones con el Estado, pero entiende que en última instancia, sólo ellos pueden resolver estos problemas. Tampoco significa que no se puede

criticar (como Ciccariello-Maher dice en su capítulo); de hecho la solidaridad efectiva implica necesariamente explicaciones contextuales de los debates y conflictos dentro de Bolivia, y entre Bolivia y el imperialismo. Pero su punto de partida es claro: la mejor manera de ayudar a los movimientos sociales de Bolivia es mediante la formación de un frente único que junta todas las fuerzas sociales que participan en el proceso de cambio contra sus enemigos comunes. Es evidente que, hoy en día, esto incluye tanto al gobierno del MAS como a la mayoría de los movimientos sociales que siguen respaldándolo.

Sin embargo, independientemente de cómo uno ve al gobierno del MAS, la principal forma de ayudar a los movimientos sociales de Bolivia sigue siendo a través de una campaña de ganar a la gente trabajadora en el Norte a una posición de solidaridad con Bolivia. Y la mejor manera de hacer esto no es simplemente oponiéndose a la "injerencia imperialista", sino construyendo un movimiento internacional contra el sistema imperialista. Esto requiere pasar menos tiempo fijándose en la brecha entre la retórica y la práctica del gobierno masista (una brecha que siempre va a existir en cualquier lucha emancipadora incompleta), y más tiempo explicando por qué, mientras exista el imperialismo, el proceso de cambio de Bolivia seguirá indudablemente enfrentando enormes obstáculos y peligros. Es importante destacar que esto nos obliga a volver a centrarnos en la mayor brecha que enfrentamos todos, la que existe entre la realidad de una clase obrera muy debilitada en la mayoría de los países imperialistas, y la realidad de que:

> … sólo un levantamiento popular de escala sin precedentes forzará a las naciones del Norte a que asuman en serio su responsabilidad con el resto del mundo, y frenar las fuerzas coercitivas que limitan el accionar de Estados como el de Bolivia (Nicole Fabricant y Kathryn Hicks 2013, p. 31).

## Conclusión

Para los críticos de derecha, como Castañeda, o de izquierda, como Webber, el gobierno del MAS forma parte de una «izquierda mala». Mientras que otros capítulos de este libro se han enfocado en exponer la naturaleza simplista de la tesis de dos izquierdas de Castañeda, aquí he intentado (como Ciccariello-Maher también hace en su capítulo) analizar la tesis alternativa, pero igualmente simplista, de dos izquierdas expuesta por algunos en la izquierda que enfrentan a un supuesto gobierno malo contra movimientos sociales buenos. El problema con esta tesis es que es incapaz de reconocer la realidad de Bolivia que, bajo el gobierno del MAS, ha comenzado a alejarse del neoliberalismo y el extractivismo. Esto sólo ha sido posible con el apoyo constante y movilización de las clases trabajadoras indígenas del país, tanto fuera como dentro del Estado, y su capacidad para forjar alianzas internacionales con otros, luchando contra el imperialismo.

Que todavía hay mucho más para hacer es evidente, como también es el hecho de que existen conflictos o "tensiones creativas" dentro del proceso. Estos conflictos generalmente han involucrado distintos sectores de la base social heterogénea del gobierno masista, cada cual con sus visiones e intereses contrapuestos y, por lo general, se han llevado a cabo dentro del contexto de un debate en curso sobre la implementación de su visión compartida de una "economía plural". Este fue el caso tanto en Colquiri y Mallku Khota, como en la disputa sobre el Tipnis, que involucró la movilización de diferentes comunidades campesinas indígenas alrededor de demandas legítimas, pero contradictorias, y que hasta la fecha ha implicado una compleja serie de protestas, negociaciones, retrocesos y acuerdos parciales (Fuentes 2012).

La movilización de los movimientos sociales ha sido clave en los tres casos para encender importantes debates públicos. Sin embargo, el gobierno también jugó un papel positivo, abriendo espacios para el diálogo y proporcionando liderazgo, a pesar de las importantes dificultades que ha enfrentado en su

intento de utilizar el viejo Estado capitalista para implementar sus objetivos políticos. Obtener los mejores resultados posibles en estas situaciones complicadas ha requerido tanto de la obtención de un consenso entre los diferentes movimientos sociales, como el hacer frente a los intereses de las transnacionales y los gobiernos imperialistas. Comprender y aprender de estos debates y experiencias es vital para activistas en otros partes del mundo. Esto sólo será posible si vamos más allá de la simplicidad de la tesis de las dos izquierdas.

## Referencias

ACHTENBERG, Emily (2012, 1º de octubre). «Renegotiating Nationalization in Bolivia's Colquiri Mine». En *Nacla. Reporting on the Americas since 1967* [página en línea]. Recuperado el 16 de julio del 2013 de https://nacla.org/blog/2012/10/1/renegotiating- nationalization-bolivia's-colquiri-mine

Agencia EFE (2006, 23 de octubre). «Morales estudia expropiación de minas que eran de ex presidente». *El Economista* [periódico en línea]. Recuperado el 24 de julio del 2013 de http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/90339/10/06/Morales-estudia-expropiacion-de-minas-que-eran-de-ex-presidente.html

AGUIRRE, Jessica Camille y Elizabeth Sonia Cooper (2010, julio). «Evo Morales, Climate Change, and the Paradoxes of a Social-Movement Presidency». *Latin American Perspectives,* Riverside (California), *37* (4), pp. 238-244.

ARANIBAR BACARREZA, Enrique (2013). *Bolivia y el* boom *exportador*. La Paz: Fundación Milenio.

ARCE CATACORA, Luis (2011, septiembre). «El nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo». *Economía Plural, publicación mensual del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,* La Paz, *1* (1), pp. 3-7.

BURBACH, Roger, Michael Fox y Federico Fuentes (2013). *Latin America's Turbulent Transitions: The Future of Twenty-First-Century Socialism*. Londres: Zed Books.

CASTAÑEDA, Jorge (2006a, 18 de enero). «Bolivia's new president is no Che Guevara». *The New York Times* [periódico en línea]. Recuperado el 1 de agosto del 2013 de http://www.nytimes.com/2006/01/18/opinion/18iht-edjorge.html?_r=3&

_____ (2006b, mayo-junio). «Latin America's Left Turn». *Foreign Affairs*, Tampa (Florida), (85), pp. 24-43.

«Comunarios de Mallku Khota rechazan a Comibol para explotar mina» (2012, 18 de diciembre). En *Observatorio de conflictos mineros de América Latina* [página en línea]. Recuperado el 16 de julio del 2013 de http://www.conflictosmineros.net/contenidos/4-bolivia/11624-comunarios-de- mallku-khota-rechazan-a-comibol-para-explotar-mina

Constitución Política del Estado, CPE (2009, 25 de enero). *Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia*. El Alto, 7 de febrero del 2009.

CRABTREE, John y Ann Chaplin (2013). *Bolivia: Processes of Change.* Londres y Nueva York: Zed Books.

CUNHA FILHO, Clayton Mendonça y Rodrigo Santaella Gonçalves (2010, julio). «The National Development Plan as a Political Economic Strategy in Evo Morales's Bolivia: Accomplishments and Limitations». *Latin American Perspectives,* Riverside (California), *37* (4), pp. 177-196.

DE LEÓN NAVEIRO, Omar (2011). «Bolivia: La construcción participativa del desarrollo». En José Déniz, Omar De León Naveiro y Antonio Palazuelos, *Nuevas estrategias económicas en América Latina*, pp. 11-80. Madrid: Los Libros de la Catarata.

FABRICANT, Nicole y Kathryn Hicks (2013). «Bolivia vs. the Billionaires: Limitations of the "Climate Justice Movement" in International Negotiations». *Nacla: Report on the Americas*, Nueva York, *46* (1), pp. 27-31.

Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte Potosí (FAOI-NP) (2012). *Plataforma de lucha de los Suyus Charka Qhara Qhara FAOI-NP*. Volante impreso. Autor, Villa Imperial de Potosí.

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) (2012, 15 de mayo). «Resoluciones del Ampliado Nacional Minero». En *Ferreco. La Federación Regional de Cooperativas Mineras*

[blog]. Recuperado el 24 de julio del 2013 de http://ferreco.blogspot.com/2012/05/resoluciones-del-ampliado-nacional.html

FRANCESCONE, Kirsten y Vladimir Díaz (2013, enero). «Cooperativas mineras: entre socios, patrones y peones». *Petropress,* Cochabamba: Cedib, (30), pp. 32-41.

FUENTES, Federico (2011, 30 de abril). «Bolivia: Wage Disputes Pose Challenges». En *Green Left Weekly* [página en línea]. Recuperado el 24 de julio del 2013 de http://www.greenleft.org.au/node/47466

_____ (2012). «The Morales Government: Neoliberalism in Disguise?». *International Socialism,* Londres, *(*134).

_____ (2013). *Diagnóstico del sector minero 2012*. La Paz: Fundación Jubileo.

Fundempresa. Consesionaria del Registro de Comercio de Bolivia (2013). «Estadísticas del Registro de Comercio de Bolivia. Junio de 2013» [documento en línea]. Recuperado el 5 de agosto del 2013 de http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/junio_694.pdf

GARCÉS, Celia y Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) (2012a, 5 de junio). «Mallku Khota: A Briefing on South American Silver's Actions in Bolivia». *The Bullet* (646). En *Socialist Project* [página en línea]. Recuperado el 26 de julio del 2013 de http://www.socialistproject.ca/bullet/646.php

_____ (2012b, 17 de julio). «Bolivia's Mine Nationalization of South American Silver in Mallku Khota». *The Bullet* (666). En *Socialist Project* [página en línea]. Recuperado el 26 de julio del 2013 de http://www.socialistproject.ca/bullet/666.php

GARCÍA LINERA, Álvaro (2006, enero-abril). «El evismo: lo nacional popular en acción». *OSAL, Observatorio Social de América Latina,* Buenos Aires, *6* (19), pp. 25-32.

_____ (2010, febrero). «El Socialismo Comunitario, una aporte de Bolivia al mundo». *Revista de Análisis. Reflexiones sobre la coyuntura*, La Paz, *3* (5), pp. 7-18.

_____ (2011). *Las tensiones creativas de la revolución: La quinta fase del Proceso de Cambio*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

«Gobierno plantea nacionalizar Colquiri para poner fin al conflicto minero» (2012, 6 de junio). *La Patria. Periódico de circulación*

*nacional* [periódico en línea]. Recuperado el 24 de julio del 2013 de http://lapatriaenlinea.com/?t=gobierno-plantea-nacionalizar-colquiri-para-poner-fin-al-conflicto-minero&nota=109223

GUDYNAS, Eduardo (2013). «Development Alternatives in Bolivia: The Impulse, the Resistance, and the Restoration». *Nacla: Report on the Americas,* Nueva York, *46* (1), pp. 22-26.

GUSTAFSON, Bret (2010, julio). «When States Act Like Movements: Dismantling Local Power and Seating Sovereignty in Post-neoliberal Bolivia». *Latin American Perspectives,* Riverside (California), *37* (4), pp. 48-66.

_____ (2013). «Amid Gas, Where Is the Revolution?». *Nacla: Report on the Americas,* Nueva York, *46* (1), pp. 61-66.

HARNECKER, Marta y Federico Fuentes (2008). *MAS-IPSP de Bolivia: Instrumento político que surge de los movimientos sociales.* Caracas: Monte Ávila y Centro Internacional Miranda.

HERNÁNDEZ NAVARRO, Luis (2012, 7 de febrero). «El pueblo boliviano vive la mayor revolución social». *La Jornada*, México, D.F., p. 2.

KAUP, Brent Z. (2010, mayo). «A Neoliberal Nationalization? The Constraints on Natural-Gas-Led Development in Bolivia». *Latin American Perspectives,* Riverside (California), *37* (3), pp. 123-128.

KLEIN, Naomi (2009, 11 de noviembre). «Climate Rage». *Rolling Stone*, pp. 2-3. En *Naomi Klein* [página en línea]. Recuperado el 2 de agosto del 2013 de http://www.naomiklein.org/articles/2009/11/climate-rage

KOHL, Benjamin (2010, mayo). «Bolivia under Morales: A Work in Progress». *Latin American Perspectives,* Riverside (California), *37* (3), pp. 107-122.

«Mallku Khota Mining Mess: Analysis» (2012, 20 de julio). En *Andean Information Network* [página en línea]. Recuperado el 16 de julio del 2013 de ain-bolivia.org/2012/07/mallku-khota-mining-mess-analysis

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, MEFP (2013a). *Memoria de la economía boliviana 2012*. La Paz: Autor.

_____ (2013b). *El Nuevo Modelo Económico beneficia a Salud y Educación con más recursos. Respuestas del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, en la interpelación del 15 de diciembre de 2012 en la Asamblea Legislativa Plurinacional.* La Paz: Autor.

MOLDIZ, Carlos (2012, 12 de marzo). «De la democratización política a la democratización económica». *La Época* [semanario en línea]. Recuperado el 21 de julio del 2013 de http://www.la-epoca.com.bo/index.php?opt=front&mod=detalle&id=2200

MOLINA, Fernando (2013, mayo-junio). «¿Por qué Evo Morales sigue siendo popular? Las fortalezas del MAS en la construcción de un nuevo orden». *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, (245), pp. 4-14.

MORALES AYMA, Evo (2013). *Agenda patriótica 2025: 13 pilares de la Bolivia digna y soberana*. La Paz: Ministerio de Comunicación de Bolivia.

OPORTO, Henry (2012). «La minería en la encrucijada». En *Los dilemas de la minería.* La Paz: Fundación Vicente Pazos Kanki. *En Doc Player* [página en línea]. Recuperado de http://docplayer.es/36425124-Los-dilemas-de-la-mineria.html

Pacto de Unidad (2007). «Acta de acuerdo de las organizaciones del Pacto de Unidad: Constitución Política del Estado boliviano». En *Constituyente y soberana* [página en línea]. Recuperado el 30 de julio del 2013 de http://www.constituyentesoberana.org/3/ propuestas/osio/propuesta-cpe-pacto-unidad.pdf

POSTERO, Nancy (2010, mayo). «Morales's MAS Government: Building Indigenous Popular Hegemony in Bolivia». *Latin American Perspectives,* Riverside (California), *37* (3), pp. 18-34.

QUISPE, Aline (2012, 31 de julio). «Dan 72 horas para revertir concesión de Mallku Khota». *La Razón* [periódico en línea]. Recuperado el 16 de julio del 2013 de http://www.la-razon.com/economia/Dan-revertir-concesion-Mallku-Khota_0_ 1660633971.html

RIBERA ARISMENDI, Marco Octavio (2012). «El conflicto de Colquiri y las ambigüedades de la nacionalización». En *Lidema* [página en línea]. Recuperado el 24 de julio del 2012 de http://www.lidema.org.bo/documentosPIMA/CONFLICTO percent20Minero percent20de percent20 percent20COLQUIRI percent20y per-

cent20ambiguedades percent20de percent20al percent20nacionalizacion.pdf

SIVAK, Martin (2010). «The Bolivianisation of Washington-La Paz Relations: Evo Morales' Foreign Policy Agenda in Historical Context». En Adrian J. Pearce (ed.), *Evo Morales and the Movimiento al Socialismo in Bolivia: The First Term in Context, 2006-2010*, pp. 143-174. Londres: Institute for the Study of the Americas.

STEFANONI, Pablo, Franklin Ramírez y Maristella Svampa (2009). *Las vías de la emancipación: Conversaciones con Álvaro García Linera*. México, D.F.: Ocean Sur.

SVAMPA, Maristella y Pablo Stefanoni (2007, septiembre). «Entrevista a Álvaro García Linera: "Evo simboliza el quiebre de un imaginario restringido a la subalternidad de los indígenas"». *OSAL, Observatorio Social de América Latina,* Buenos Aires, *8* (22), pp. 143-164.

VELÁSQUEZ, Raúl y María del Carmen Inch (2012, octubre-diciembre). «Renta petrolera y estatal por las actividades de exploración y explotación». *Renta hidrocarburífera. Más allá de las regalías y del IDH*, (Serie: Debate Público), La Paz: Fundación Jubileo, (24), pp. 25-27.

WEBBER, Jeffery (2009). «From Naked Barbarism to Barbarism with Benefits». En Arne Ruckert y Laura Macdonald (eds.), *Post-Neoliberalism in the Americas*, pp. 105-119. Nueva York: Palgrave Macmillan.

_____ (2011). *From Rebellion to Reform in Bolivia: Class Struggle, Indigenous Liberation, and the Politics of Evo Morales*. Chicago: Haymarket Books.

_____ (2012, 9 de enero). «Revolution against "progress": the TIPNIS struggle and class contradictions in Bolivia». *International Socialism*, Londres, (133), pp. 1-22. En *International Socialism* [página en línea]. Recuperado de http://isj.org.uk/the-tipnis-struggle-and-class-contradictions-in-bolivia/

ZUAZO, Moira (2010, mayo-junio). «¿Los movimientos sociales en el poder? El gobierno del MAS en Bolivia». *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, (227), pp. 120-135.

# El paradójico camino hacia un nuevo socialismo en El Salvador y Nicaragua

Héctor Perla (hijo), Héctor Cruz-Feliciano
y Alejandro Artiga-Purcell

El triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, provocó un alto grado de efervescencia y optimismo entre sectores de la izquierda latinoamericana. Una expresión del estado de ánimo que prevalecía fue una consigna con tintes proféticos que se hizo popular en toda América Central: «*Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá*» (Perla 2008). La misma manifestaba la convicción de que ambos países tenían un destino revolucionario común, determinado por su lucha por la justicia social y los esfuerzos compartidos para ese propósito de dos figuras políticas icónicas: Augusto C. Sandino y Agustín Farabundo Martí.

Hoy en día, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) son las únicas dos ex organizaciones guerrilleras en América Latina que han tomado el poder a través de elecciones democráticas. En 2009, el FMLN ganó las elecciones con un candidato que no era ni siquiera un militante del partido, pero tuvo significativa aprobación entre los votantes de las

clases medias. Por lo tanto, el periodista Mauricio Funes asumió el poder ejecutivo sin tener una militancia con el partido farabundista, dando paso a una administración caracterizada por una mezcla de políticas sociales progresistas, confrontación ocasional con el FMLN, enfrentamiento y acomodación con las élites locales, y la busca de mejores relaciones con los Estados Unidos. Recientemente el FMLN ha tomado el control directo de la Presidencia, con la elección en junio del 2014 de Salvador Sánchez Cerén, un ex comandante guerrillero del FMLN durante la Guerra Civil. En contraste, los sandinistas recuperaron el poder en noviembre del 2006, 17 años después de perder las elecciones que pusieron fin a su gobierno revolucionario. A pesar de haber triunfado por un cómodo margen de votos, la victoria fue por una pluralidad y no por una mayoría de los sufragios emitidos. Sin abandonar su discurso revolucionario, el gobierno de Daniel Ortega se enrumbó en lo que el Frente Sandinista de Liberación Nacional denominó como *modelo del poder ciudadano*, uno que enfatiza la participación ciudadana a través de consejos en la implementación de políticas públicas. Aunque el gobierno mantenga su tradicional discurso anti-imperialista y a favor de los trabajadores, con frecuencia sus acciones parecieran contradecir sus declaraciones, lo que para algunos pone en duda su nivel de compromiso con una agenda de políticas izquierdistas.

Así, algunas de las posiciones de los gobiernos actuales de El Salvador y Nicaragua aparentan chocar con la imagen y los principios de las guerrillas míticas que lucharon por el poder o lo tomaron en Centroamérica durante la década de 1980; como ejemplos de estas contradicciones aparentes se incluye la adherencia continua de ambos países al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta, por sus siglas en inglés) y la penalización del aborto terapéutico (Martí i Puig 2009), el mantenimiento de la economía dolarizada en El Salvador y las reservas del FSLN sobre la observación electoral internacional.

Este artículo pretende arrojar luz sobre las circunstancias que guían la conducta y los posicionamientos de los gobiernos de El Salvador y Nicaragua sandinista, así como esclarecer lo anterior en contraposición a las aparentes contradicciones y las críticas que se han vertido a raíz de ello. En la primera sección se analizan los principales rasgos del proyecto sandinista, a la vez que se evalúa hasta qué punto representan avances o retrocesos desde una perspectiva de izquierda. En segundo lugar, buscando trascender la concepción analíticamente débil y políticamente sesgada de una izquierda "buena" y otra izquierda "mala", se propone un marco teórico alternativo para explicar por qué para los Estados Unidos algunos gobiernos de izquierda resultan preferibles a otros. En tercer lugar, explicamos por qué el FMLN y el FSLN pueden parecer ideológicamente inconsistentes. Por último, reflexionamos sobre si es posible hablar de gobiernos izquierdistas "revolucionarios" en estos dos países, en la coyuntura actual.

## Principales rasgos de los dos proyectos

Por primera vez en la historia, varios gobiernos latinoamericanos de izquierda se han unido en un esfuerzo regional institucional para alcanzar sus metas políticas y socioeconómicas. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), compuesta por países y actores subregionales que comparten la idea de un cambio radical en la distribución de la riqueza, la cooperación internacional y las relaciones Norte-Sur, se ha convertido en la punta de lanza de esta iniciativa (Muhr 2008). En este sentido, El Salvador y Nicaragua han tomado distintos caminos.

El FSLN comenzó a participar en las iniciativas del ALBA (a través de la venta preferencial de energía a las alcaldías sandinistas), aun antes de ganar las elecciones presidenciales. Tras el triunfo electoral del 2006, el primer acto oficial del presidente Ortega fue firmar la adhesión de Nicaragua como miembro pleno de la alianza.

## Política exterior

Aunque el ALBA es el principal referente del FSLN en materia de política exterior, el gobierno sandinista mantiene relaciones con muchos otros gobiernos que no pertenecen a la alianza, incluso con Estados Unidos. A la vez que ha mantenido su retórica antiimperialista contra Washington, Ortega ha tenido cuidado de articular un discurso relativamente moderado con respecto a Barack Obama. A su vez, la administración de Obama ha expresado preocupación sobre las acusaciones de la oposición nicaragüense contra el gobierno sandinista, pero exceptuando la cancelación de su ayuda a través de la Cuenta del Reto del Milenio, ha mantenido relaciones cordiales con Managua.

En contraste, hasta junio del 2014, la política exterior salvadoreña se guió por la actitud conciliadora de Funes hacia los Estados Unidos, como lo demuestra la posición de su gobierno respecto al golpe de Estado en Honduras y su decisión de mantener las tropas salvadoreñas en Afganistán contra los deseos del FMLN («El Salvador permanece en Afganistán», 8 de diciembre del 2011). Esta posición se ha visto recompensada por el gobierno de Obama a través de varios gestos, tales como el estatus de protección temporal aprobado de nuevo para unos 300.000 salvadoreños indocumentados en los Estados Unidos, apoyo a la petición de El Salvador para un préstamo atípico del Fondo Monetario Internacional (FMI) que clasificó al país por otros préstamos de gasto de estímulo inmediato (Perla 2011), y el aumento del financiamiento a través del Reto del Milenio, el Programa Bridge, y la Asociación para el Crecimiento (Partnership for Growth).

A través de su embajada, el gobierno de los Estados Unidos también presionó a la administración de Funes para aprobar lo que se conoce como la Ley de Asociación Público-Privada como parte de la Alianza para el Crecimiento, que Obama dio a conocer en el 2011 para aumentar la inversión extranjera. La ley abriría los servicios públicos para las concesiones de hasta 40 años. Esto equivale a una nueva ronda de privatización que, según la embajadora estadounidense Mari Carmen Aponte, era un

requisito previo para un segundo contacto con la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés). Cuando el FMLN se opuso a la aprobación de la ley, Funes rompió relaciones con éste y dijo que podía conseguir los votos de otros partidos. Al final, la ley fue aprobada, pero el FMLN fue capaz de incluir una disposición en el proyecto de ley que impide que la salud, la educación y el agua sean objeto de concesiones (Cispes 2012). A su favor, el gobierno del FMLN actual se ha mantenido firme en su postura e incluso llegó a un acuerdo con la embajadora Aponte en el que los Estados Unidos han aprobado el segundo contactoo con la MCC, sin someter a El Salvador a la privatización de su salud, educación y agua.

Sin embargo, la política exterior de El Salvador ha tenido algunos cambios importantes. Uno de los primeros actos de Funes como presidente fue normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba (Perla 2011). La Asamblea Nacional, encabezada por el FMLN, respondió a la visita de Obama al aprobar la Ley para la Protección de los Migrantes y sus Familias. Trabajando a través del Parlamento Centroamericano, el FMLN convocó a parlamentarios y líderes de la sociedad civil de Centro América, México y la diáspora salvadoreña para crear una posición regional unificada sobre derechos de los inmigrantes en los Estados Unidos. El documento resultante, titulado la *Declaración de San Salvador*, se presentó a Funes y Obama y se pidió a Washington respetar los derechos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Irónicamente, en respuesta al drástico aumento de la migración de los niños salvadoreños a los Estados Unidos, Sánchez Cerén, durante sus primeros meses como presidente y en coalición con sus homólogos de Honduras y Guatemala, ha llegado a un acuerdo con los Estados Unidos en un documento titulado *Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte*, que parece usar la crisis actual como una oportunidad para impulsar el libre comercio y la inversión económica en la región, sin tener en cuenta las raíces estructurales e históricas del problema («Tri-country plan aims to attract private investment in Central America» 2014 y Dan Beeton 2014). Sin embargo,

con poco tiempo en el cargo es prematuro determinar cuáles cambios en la política exterior distinguirán a Sánchez Cerén de su predecesor, especialmente teniendo en cuenta la relación compleja e histórica entre los Estados Unidos y El Salvador.

## Economía

Ser miembro integral del ALBA le ha permitido al gobierno sandinista dar pasos concretos para implementar su agenda política. En Nicaragua el ALBA funciona bajo la personería jurídica de una corporación privada llamada ALBA de Nicaragua, S.A. (Albanisa). El 51 % de la propiedad está en manos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y 49 % en las manos de Petronic, su contraparte nicaragüense. Nicaragua importa petróleo venezolano a través de Petronic, que paga la factura a Albanisa. Ésta, a su vez, paga el 50 % a PDVSA. El otro 50 % es invertido en los Fondos ALBA: la mitad al fondo social de los miembros del ALBA y la otra mitad en ALBA-Caruna, un banco paraestatal que distribuye y administra el financiamiento de proyectos gubernamentales (Luis Galeano, 28 de septiembre del 2009). En el 2013 el país recibió 559 millones de dólares a través de este mecanismo y otros 95 millones de dólares en financiamiento e inversión extranjera directa, haciendo de Venezuela la mayor fuente oficial de cooperación externa, con un 50 % del total (Banco Central de Nicaragua 2014a).

A pesar de su dependencia en la cooperación venezolana, el Gobierno mantiene importantes relaciones económicas con otros países. Estados Unidos continúa siendo el principal destino de exportación de Nicaragua con 606 millones de dólares, seguido de la región centroamericana con 496 millones de dólares y Venezuela con 384 millones de dólares (Banco Central de Nicaragua 2014b, p. 20). El crecimiento del producto interno bruto en el 2013 alcanzó 4,6 %, sobrepasando a todos los países de la región (ibíd., pp. 4-5). Finalmente, las economías emergentes están haciendo inversiones significativas en Nicaragua: por parte de Brasil y a un costo de 1.100 millones de dólares, la central

hidroeléctrica de Tumarín, por parte de Rusia, el suministro de buses públicos y el establecimiento del proveedor de internet Yota, y por otro lado, el desarrollo de un canal trans-ístmico por parte HK Nicaragua Canal Investment, propiedad del grupo chino Xinwei. La aprobación legislativa del proyecto canalero en junio del 2013 fue recibida inicialmente con escepticismo, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Sin embargo, tras el comienzo de las obras un año y medio después, la iniciativa de 40 billones de dólares constituye uno de los proyectos más populares del gobierno sandinista. De acuerdo a una encuesta de opinión independiente «un 81,9 % de la población aprueba total o parcialmente la construcción del Gran Canal de Nicaragua, que generará puestos de trabajo, incrementará los salarios y mejorará la economía familiar» («El 82% aprueba construir el canal», 2015).

Por el contrario, en El Salvador, Funes se comprometió a no integrarse al ALBA en caso de ganar las elecciones. Aceptar el ALBA hubiera implicado un gesto de simpatía hacia la Venezuela bolivariana. Aunque el FMLN oficialmente apoyó la idea de unirse al ALBA, tal medida habría alienado una parte importante de los partidarios electorales de Funes («El FMLN se suma a V Internacional Socialista en "exitosa" convención», 13 de diciembre del 2009, y Amílcar Mejía, 19 de abril del 2012). A pesar de lo anterior, la postura de Funes no impidió que el FMLN trabajara con el ALBA a través de los municipios que gobiernan. En el 2006, los alcaldes del FMLN se unieron para formar una corporación llamada Energía para El Salvador, y firmaron un acuerdo con la empresa estatal Petrocaribe, de Petróleos de Venezuela, para crear una sociedad mixta denominada ALBA Petróleos de El Salvador. El éxito de esta empresa se considera uno de los factores que han ayudado a superar el miedo que muchos salvadoreños tenían del ALBA y del socialismo (Ramón Suárez, entrevista personal, San Salvador, 24 de marzo del 2011). Funes llegó al punto de expresar que estaba de acuerdo con su vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, en que la adhesión a Petrocaribe de El Salvador sería económicamente beneficiosa para el país (Otto Morán 3 de septiembre del 2013). En línea con los deseos

del partido, Sánchez Cerén hizo campaña con la promesa de que una de sus primeras acciones como presidente sería ingresar al ALBA. Aunque sí han mejorado los lazos de El Salvador con Venezuela, vale la pena mencionar que aún tiene que cumplir esta promesa.

Aunque la administración de Funes no implementó cambios económicos radicales durante su régimen, el FMLN, a través de su control de la Asamblea Legislativa, sí hizo o intentó hacer varios cambios importantes para reducir la desigualdad. A veces, el partido y el Ejecutivo acordaron trabajar juntos, pero a menudo estaban en diferentes lados del debate. A los pocos días de llegar al poder, la administración anunció un plan anticrisis que consistió en

> … un fin inmediato de las tarifas en los hospitales públicos, uniformes y útiles escolares gratis para los estudiantes, una pensión básica para las personas mayores de 70 años de edad en las comunidades empobrecidas, un programa masivo de vivienda de interés social, y títulos de propiedad para miles de trabajadores agrícolas (Linda Garret 2010, p. 10).

Además, todos los niños comenzaron a recibir leche y almuerzos gratis en la escuela. Estos programas se han vuelto extremadamente populares y llevaron a los ministerios de Educación y Salud a recibir el nivel de aprobación más alto de todos los ministerios del gobierno entre la ciudadanía salvadoreña («Crece respaldo ciudadano a gestión social y programas del gobierno del cambio» 2011).

El FMLN también ha intentado hacer el sistema de impuestos más progresivo, al aumentar la tasa de impuestos para las corporaciones y los individuos ricos, así como los impuestos sobre el alcohol, tabaco y armas de fuego, y exigir la auditoría de los ingresos de más de 75.000 dólares al año y la propiedad de más de 300.000 dólares para combatir la evasión fiscal (Comisión Política FMLN, 18 de abril del 2012; Amílcar Mejía, 16 de noviembre del 2011; Karla Ramos y Kenny López, 22 de octubre del 2009).

Aunque se esperaba que estas reformas generaran nuevos ingresos significativos para financiar programas sociales y gastos del Estado en infraestructura, seguridad, educación y programas de salud, sólo la propuesta de la evasión de impuestos y el aumento de los impuestos sobre el tabaco y el alcohol se convirtió en ley (Loida Martínez Avelar, 11 de agosto del 2010; Ramos y López ob. cit.). Los demás fueron derrotados en la Asamblea Legislativa o vetados por el presidente. En consecuencia, el FMLN propuso un impuesto a los ciudadanos más ricos para financiar las medidas para reducir el crimen violento (Mejía, 25 de agosto del 2011).

## Políticas nacionales y políticas públicas

La implementación de un nuevo modelo de desarrollo económico, político y social conocido como poder ciudadano fue parte de las promesas del FSLN frente a un potencial triunfo electoral en el 2016. El componente político del poder ciudadano es la democracia directa fundamentada en la participación ciudadana. La participación se canaliza a través de una nueva estructura local, llamada *Gabinete del Poder Ciudadano* (GPC)[1], la cual personifica la noción de un *Pueblo Presidente*. Conforme a la nueva estructura, cada consejo comunitario elige coordinadores para representar las necesidades de la comunidad en dieciséis sectores y en la formulación de políticas públicas[2].

Esta estructura ha sido clave para la implementación efectiva de muchos de los programas sociales del gobierno. No solamente sirven los GPC como el principal vehículo para explicar los

1 El nombre original de los gabinetes era Consejos del Poder Ciudadano (CPC). A pesar del cambio, la mayoría de la gente sigue haciendo referencia a ellos por sus siglas originales.

2 Las dieciséis áreas de trabajo son: promoción de los derechos de los ciudadanos, comunicaciones y propaganda, seguridad pública, derechos de la mujer, derechos de los jóvenes y los niños, derechos de las personas mayores, salud, educación, medio ambiente, transporte e infraestructura, desarrollo, cultura, deportes, propuestas a los gobiernos locales, fomento de empleo, autoempleo y trabajo comunal, y coordinación general.

programas gubernamentales a la comunidad, sino que también seleccionan (mediante deliberación interna) a los beneficiarios de dichos programas. Entre los muchos programas que han sido desarrollados e implementados por el gobierno están el Plan Techo, orientado a la distribución de láminas de zinc en comunidades pobres; puestos de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), que ofrecen alimentos a precios subsidiados; el Bono Productivo Alimentario, que distribuye animales, semillas y educación técnica a mujeres en el sector rural; Usura Cero, que realiza préstamos de microcrédito para el desarrollo de pequeños negocios; y Operación Milagro, que ofrece operaciones gratuitas de la vista para pacientes con catarata.

Todas estas iniciativas se han dado en el marco de dos grandes reformas: la gratuidad del cuidado médico y la gratuidad de la educación. En el 2009 el Gobierno declaró al país libre de analfabetismo, habiendo alcanzado más del 95 % de alfabetización en estudios posteriores a la cruzada nacional de alfabetización (Radio La Primerísima y Agencias 2009). Analistas locales independientes estiman que la tasa de alfabetización se encuentra cerca de un 85 % («Representante Unesco en Nicaragua refuta cifras de Cepal sobre analfabetismo», 14 de abril del 2012), pero a pesar de ello reconocen la existencia de una mejoría significativa.

Dichos programas parecen estar contribuyendo a la reducción de la pobreza. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) en su Encuesta de Medición de Nivel de Vida del año 2009, encontró una reducción del 5,8 % con respecto al 2005, ubicando el número de pobres en 42,5 %. Aunque difiriendo de los estimados oficiales, informes independientes coinciden en mostrar una caída constante en el número de pobres a lo largo de la administración sandinista. Los resultados de tres estudios por parte de la organización no gubernamental nicaragüense Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg) –financiados por la Agencia Suiza de Cooperación y los Países Bajos con la asistencia técnica del Banco Mundial– muestran que la pobreza en Nicaragua bajó del 48,3 % en el 2005 a 44,7 % en el 2009, reflejando una disminución tanto en el

sector urbano como en el sector rural (Fideg 2010 y Ary Pantoja, 19 de agosto del 2010). Un segundo estudio (Fideg 2012) mostró que la tendencia continuó en el 2011, cuando la proporción fue de 44,1 %, con la mayor reducción concentrada en el sector rural. La última edición del estudio Fideg apunta a otra reducción en el número de pobres para el 2013, resultando en un 40,5 % a nivel nacional (Fideg 2014).

La situación salvadoreña tiene fuertes similitudes con la de Nicaragua. El ministro de Salud ha eliminado "cuotas voluntarias" para pacientes durante las visitas al hospital y aumentado las existencias de medicamentos disponibles, al mismo tiempo que se ha reducido su costo. El número de clínicas de salud en áreas remotas del país también ha aumentado. Durante sus dos primeros años en el cargo el ministerio abrió hospitales públicos en cuatro ciudades de tamaño medio (Usulután, Zacatecoluca, San Vicente y San Miguel) alrededor del país y contrató a 408 nuevos médicos para trabajar en ellos y proporcionar servicios a una población de cientos de miles de los alrededores que antes habían tenido un acceso muy limitado a la atención sanitaria (Cecilia Ortiz 2010).

Del mismo modo, el Ministerio de Educación ha eliminado "cuotas voluntarias" que se cobraban en las escuelas públicas a los padres de estudiantes, y esto ha llevado a un aumento en la matrícula de los que antes no podían pagar. Con el fin de fomentar la asistencia, todos los estudiantes de escuelas públicas están provistos con dos uniformes, un par de zapatos y útiles escolares cada año académico. En el primer año del programa se matricularon 22.000 estudiantes nuevos. Además, como estrategia para aumentar el rendimiento académico, reciben un vaso de leche, desayuno y almuerzo gratuitos. Estos programas también ofrecen empleo a las pequeñas y medianas empresas, y agricultores que suministran los uniformes y alimentos («Gracias al Plan Social Educativo se incrementa la matrícula», 2010). Por último, el Ministerio ha lanzado una campaña de alfabetización nacional con la meta de reducir el analfabetismo del 17,97 % al 4 % para el año 2014. El programa se lleva a cabo por maestros voluntarios,

quienes salen a las comunidades urbanas y rurales después de la escuela, en los fines de semana y durante las vacaciones, para que el programa sea flexible tanto para los voluntarios como para los participantes («Programa de alfabetización», 2010)[3].

Ciudad Mujer es otro de los programas más populares y exitosos del FMLN iniciado bajo la administración de Funes. Es un programa gubernamental fundado y dirigido por Vanda Guiomar Pignato, la ex primera dama y actual Secretaria de Inclusión Social (SIS). El programa promueve los derechos humanos fundamentales de la mujer, ofreciendo una variedad de servicios que incluyen «… la salud sexual y reproductiva, la atención integral a la violencia de género, el empoderamiento económico y la promoción de sus derechos», y el cuidado de niños (Ciudad Mujer 2015). Lanzado en el 2011, el programa cuenta con seis centros en seis diferentes departamentos del país, cada uno implica la participación de 14 instituciones estatales, incluyendo el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu), el Ministerio de Salud (Minsal), el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) y el Banco de Desarrollo Agrícola (Ciudad Mujer 2015). El programa ha tenido tanto éxito que no sólo ha ganado premios internacionales, sino que también se está emulando en Brasil, y hay gran interés en repetirlo en países como Costa Rica, México y Panamá (Eugenio J. Ríos 2015, p. 3).

A fines del 2011 Funes y el FMLN se enfrentaron abiertamente por la cuestión de quién dirigiría el Ministerio de Justicia y Seguridad. Mientras que el crimen violento sigue siendo un problema grave en el país, los homicidios y otros delitos violentos disminuyeron después de que Funes nombró al ex comandante guerrillero Manuel Melgar como su Ministro de Justicia y

3 Entre las organizaciones que trabajan con el Ministerio de Educación para organizar brigadas de alfabetización se encuentran la Asociación Salvadoreña Americana Nacional, la Fundación Ayuda Humanitaria, Investigación y Educación para El Salvador (SHARE El Salvador), el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador y la Unión Salvadoreña de Estudiantes Universitarios. El primer grupo de voluntarios participó durante el verano del 2012. Sobre la importancia de la solidaridad ver Héctor Perla (hijo) (2008).

Seguridad. Según fuentes del FMLN, el gobierno de los Estados Unidos le presionó para quitar a Melgar por su historia como líder del FMLN durante la guerra civil, y algunos dicen que su renuncia era condición previa para que el país recibiera dinero de la Asociación para el Crecimiento. En su lugar, Funes nombró al general retirado David Munguía Payés, violando de los acuerdos de paz al establecer la Policía Nacional Civil, que el ministro debía supervisar, como una institución completamente no militar. En respuesta, el FMLN aprobó un presupuesto nacional que redujo el porcentaje asignado a los Ministerios de Justicia y Seguridad y Defensa por alrededor de 10 millones de dólares para cada uno, y reasignó esos fondos a los Ministerios de Educación y Salud (Rafael López Mendoza, 23 de noviembre del 2011). Este incidente casi llevo a la coalición entre Funes y el FMLN a su fin. Eventualmente, Funes tuvo que aceptar la demanda del FMLN para una revisión progresiva de los impuestos como un gesto conciliador.

Desde su elección, el presidente Sánchez Cerén ha implementado la policía comunitaria como política nacional para combatir los altos niveles de delincuencia y violencia en El Salvador. Se trata de un enfoque descentralizado de seguridad que busca construir la confianza y la comunicación entre la policía y las comunidades a las que patrulla. No sólo requiere que la policía –en su mayoría miembros de la Policía Nacional Civil (PNC)– esté especialmente entrenada para cumplir con sus funciones habituales, como la investigación de delitos y arrestos, sino que también exige que se sumerjan en las comunidades y trabajen con los residentes para identificar los conductores de la inseguridad (entre otros problemas), y dar prioridad a las estrategias de prevención, en lugar de sólo acciones reaccionarias, como medio para el mejoramiento de los barrios («La Policía Comunitaria comienza su expansión a la zona sur de San Salvador», 2014). Este modelo ha tenido éxito en otros países y el mejor ejemplo es Nicaragua, la cual tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Centroamérica. La policía comunitaria es un contraste drástico con la política de militarización bajo la mano dura

promovida por el partido Arena, que ha sido ineficiente e incluso perjudicial, ya que ignora los problemas fundamentales de la violencia y la delincuencia, y recicla los jóvenes dentro y fuera de las cárceles, que se han convertido en centros de reclutamiento y campos de entrenamiento para las pandillas, aumentando el crimen en el largo plazo. Aunque esta política no es nueva en El Salvador –ya que se inició durante la administración de Funes– se le ha dado mayor énfasis durante la administración actual y se está aplicando en siete zonas y 42 sectores de San Salvador, con planes para expandir el programa a nivel nacional (Camilo Mejía Giraldo 2014).

## Política electoral

Más allá de las coaliciones electorales establecidas con los antiguos adversarios de la revolución, una de las alianzas más significativas del FSLN ha sido con el cardenal Miguel Obando y Bravo, ex Arzobispo de Managua y ferviente opositor anti-sandinista durante los años ochenta. Consciente del respeto que goza Obando y Bravo entre los católicos nicaragüenses, Ortega procuró obtener su apoyo. Pidió públicamente a Obando y Bravo que lo perdonase por «los errores del pasado», hizo que el cardenal oficiase su boda religiosa e instruyó a los diputados sandinistas para que votaran a favor de una ley que criminaliza el aborto terapéutico, todo esto justo antes de las elecciones del 2006.

Tras ganar la presidencia, Ortega designó a Obando y Bravo como encargado de la Comisión de Paz y Reconciliación, responsable de atender los reclamos de los veteranos de guerra. Aunque su rol en el gobierno no ha sido bien recibido por la jerarquía católica, muchos sacerdotes aún ven en Obando y Bravo a un líder y siguen su ejemplo. Lo anterior ha ocasionado una división moderada en las filas de la Iglesia, que ha servido para evitar que muchos católicos se unan a los ataques de la jerarquía contra el Gobierno. El efecto neto de esta dinámica ha sido el de neutralizar a la Iglesia como un poderoso y potencial adversario.

El 6 de noviembre del 2011, el FSLN concurrió a las urnas enfrentando una oposición dividida y gozando de una ventaja significativa en las encuestas de opinión (Feinberg 2011). Mientras muchos cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor del derecho de Ortega a reelegirse consecutivamente, fueron las acusaciones de fraude electoral las que presentaron un mayor desafío a la legitimidad presidencial (Pérez-Baltodano 2010, p. 398).

El asunto se remontaba a las elecciones municipales del 2008, cuando las encuestas pre-electorales anticipaban una victoria sandinista en la mayoría de los distritos. Entre las pocas alcaldías donde las encuestas anticipaban un revés, estaba Managua, donde el candidato opositor era el ex candidato presidencial Eduardo Montealegre. En los días que precedieron la elección, el Consejo Supremo Electoral (CSE) decidió no emitir credenciales de observación electoral a organizaciones no gubernamentales (ONG) nicaragüenses que se hacían eco de los reclamos opositores sobre posibles irregularidades. El CSE justificó su decisión alegando que darle credibilidad a las acusaciones de la oposición comprometía la objetividad de las ONG.

En medio de las acusaciones de las ONG y de la oposición, la decisión del CSE alimentó las sospechas de un fraude electoral. Cuando el FSLN ganó el 62 % de todas las alcaldías, Montealegre encabezó una campaña, llamando a que los países donantes se inhibieran de enviar cualquier tipo de cooperación internacional hasta que el CSE realizase un recuento de votos que reconociera el triunfo de los candidatos a quienes las elecciones les habían sido robadas. Aunque varios gobiernos expresaron preocupación sobre los resultados electorales, ninguno de ellos fue más beligerante que el gobierno de los Estados Unidos, el cual suspendió el desembolso de dinero de la Cuenta Reto del Milenio y posteriormente canceló todos sus proyectos de ayuda.

A la luz del argumento sandinista de que la observación electoral estaba siendo utilizada como vehículo de intervención extranjera, el CSE decidió permitir la observación nacional e internacional para las elecciones presidenciales y legislativas del 2011

bajo una nueva figura legal llamada "acompañamiento electoral". Tanto la oposición como las ONG nacionales tildaron las nuevas reglas de sumamente restrictivas. Dos de las ONG (el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, y Hagamos Democracia) que objetaron las reglas solicitaron credenciales de observación, pero las mismas les fueron denegadas. Al final, credenciales de observación les fueron emitidas a las delegaciones de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Sólo dos organizaciones nicaragüenses recibieron credenciales: el Consejo Nacional de Universidades y el Centro para el Desarrollo de la Costa Atlántica, ambas consideradas por la oposición como muy cercanas al FSLN.

Aunque las elecciones se llevaron a cabo en relativo orden, la oposición alegó que a algunos de sus representantes autorizados no les fue permitida la entrada en los centros de votación. El FSLN respondió que en ese caso la oposición tenía derecho a impugnar los resultados de las unidades de votación en disputa, pero, a fin de cuentas, los resultados de sólo 24 unidades (de un total de 12.960) fueron impugnados («Nicaragua circula informe del CSE sobre elecciones en seno de la OEA», 9 de diciembre del 2012; y «Especial elecciones 2011», 26 de abril del 2012).

Tanto las delegaciones de la Organización de Estados Americanos como de la Unión Europea expresaron preocupación respecto al proceso electoral (Carlos Salinas Maldonado, 22 de febrero del 2012), pero no presentaron evidencia de fraude. Más aún, declaraciones subsiguientes por parte del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, y del jefe de la Delegación de Observadores de la Unión Europea, Luis Yáñez, reconocieron un triunfo electoral aplastante e histórico para los sandinistas: 62 % de los votos a favor de Ortega y 62 de 90 escaños legislativos (69 %) a favor del FSLN, dándole al partido una supermayoría en la Asamblea Nacional («Insulza: resultado de elecciones fue claro», 9 de noviembre del 2011; y Arlen Pérez, 9 de noviembre del 2011).

Aunque la oposición se negó a reconocer los resultados electorales, la victoria de Ortega fue reconocida por varios países, incluyendo Brasil, Ecuador, Rusia, Uruguay, El Salvador, Cuba, Honduras, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile. A pesar de que la administración Obama no reconoció a Ortega oficialmente como Presidente, en abril del 2012 confirmó a Phyllis Powers como la nueva embajadora estadounidense en Nicaragua, dando seguimiento a las relaciones diplomáticas mantenidas, como hasta entonces.

En El Salvador se realizaron las elecciones legislativas y municipales en marzo del 2012. Con una baja participación electoral, la cuota de escaños en la Asamblea Legislativa del FMLN cayó de 35 a 31, mientras que la Alianza Republicana Socialista (Arena) ganó 33. A nivel municipal, la izquierda mantuvo más o menos el mismo número de los gobiernos locales, 95 en comparación con 96 en el periodo anterior. Sin embargo, el FMLN perdió muchos de los municipios de población de alta densidad en el área metropolitana de San Salvador, y ganó los gobiernos rurales de baja densidad de la zona, a la que la mayor parte de sus programas de alivio de la pobreza habían sido dirigidos («Resultados provisionales de las elecciones del 11 de marzo 2012», 2012).

Varios cambios en la política electoral salvadoreña se han producido a causa de los fallos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Primero, se modificó la ley electoral de El Salvador para que individuos puedan postularse sin el patrocinio del partido. Segundo, se dictaminó que los votantes deben tener el derecho a votar por candidatos individuales por separado, en lugar de escoger entre partidos. Estos dos cambios socavaron el sistema de partidos, que era históricamente fuerte en el país, fomentando potencialmente la ambición personal en lugar de la disciplina del partido. Por lo tanto, a partir de las elecciones del 2012 todas las boletas tenían que presentar votantes no sólo con la oportunidad de votar por las banderas del partido, que contara como un voto para toda la planilla, sino también la posibilidad de votar por separado para cualquier número de individuos inscritos en una planilla de partido o de forma independiente

(«El FMLN muestra fuerza ante sala», 1º de junio del 2011). Varios candidatos independientes, incluso algunos de la diáspora salvadoreña, se postularon para cargos legislativos aparentemente sin el apoyo de ningún partido, pero ninguno estuvo cerca de ser elegido («Salvadoreños en EE UU por candidaturas independientes», 19 de enero del 2011). Por último, en una decisión que enfureció a un sector de la derecha, los magistrados

> … cancelaron el estatus legal de dos partidos derechistas tradicionales –el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC)– por haber recibido menos del necesario 3 % de los votos en las elecciones presidenciales de 2004 y sacó sus magistrados fuera del Tribunal Supremo Electoral (Elaine Freedman, 2011).

Finalmente, después de diez años de debate, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una ley que permite a los salvadoreños residentes en el extranjero la oportunidad de votar en futuras elecciones presidenciales a partir del 2014. Si bien se estima que hasta 200.000 salvadoreños eran elegibles para votar, sólo alrededor de 10.000 recibieron su Documento Único de Identidad (DUI) salvadoreño y se registraron para votar antes de la fecha límite del 5 de agosto del 2013. El proceso fue empañado por la falta de suficientes recursos financieros y humanos en los centros de extensión del DUI, además de un atraso inicial. Este inicio tardío y falta de recursos se debió en gran parte a la oposición de Arena y GANA, que atrasaron el proceso bajo el argumento de que los costos para el voto en el extranjero eran demasiado altos. Aunque la ley fue aprobada el 24 de enero, el debate retrasó el desembolso de los recursos por varios meses y no se procesaron los DUI hasta finales de mayo. Dejando, en efecto, sólo dos meses para que la gente consiguiera sus documentos de identidad y se registraran para votar (Agencia EFE, 24 de enero del 2013 y Notimex, 24 de abril del 2013).

Antes de la elección presidencial del 2014, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE) cuadruplicó el número de

centros de votación y eliminó alrededor de 50.000 salvadoreños fallecidos del padrón, para aumentar el número de votantes y reducir la posibilidad de fraude. El Salvador también concedió a una amplia gama de delegaciones internacionales el estatus de observador oficial de las elecciones, para promover la transparencia. Aunque Sánchez Cerén y su vice-presidente, Óscar Ortiz, ganaron por un margen de mando en la primera ronda, no consiguieron el necesario 51 % de los votos para evitar una segunda vuelta. Sorprendentemente, la segunda vuelta electora contra el candidato del partido Arena, Norman Quijano, fue mucho más cercana. En un movimiento audaz, Quijano declaró la victoria con sólo el 70 % de los votos contados, y después del anuncio oficial de que el FMLN había ganado por apenas 6.300 votos, Quijano alegó que había habido fraude y pidió un recuento. También exigió que el ejército salvadoreño interviniera para «poner en práctica la democracia». Sin embargo, los militares se negaron a intervenir respetando el proceso del TSE, y Arena finalmente aceptó las elecciones como legítimas, llevando al poder al primer dúo de ex comandantes guerrilleros, para ser elegidos democráticamente como presidente y vice-presidente en América Latina (Madeleine Conway 2014).

## Más allá del socialismo "bueno" y el socialismo "malo"

Existe un amplio consenso en América Latina sobre algunas de las ideas que caracterizan el "nuevo" Socialismo del siglo xxi, pero esto no implica la existencia de un modelo socialista singular. Un punto principal del consenso es la oposición al neoliberalismo y el imperialismo (John French 2009). Otro es que el proyecto izquierdista emergente debe trascender la tendencia de centrarse exclusivamente en la concepción marxista de la lucha de clases –la clase trabajadora versus los capitalistas– a costa de otras formas de opresión. La nueva agenda socialista implica la democratización de la sociedad política, económica y civil, dando estatus elevado a la preservación del medio ambiente, los

derechos de las mujeres, la autonomía indígena, la diversidad sexual y los derechos humanos (Isabel Rauber 2012).

Sin embargo, hay circunstancias particulares en cada país que guían a partidos izquierdistas a enfatizar temas particulares debido al contexto nacional. Este es un desarrollo positivo que rompe con las concepciones monolíticas anteriores y sugiere una mayor flexibilidad y menos dogmatismo, que en algunos casos había impedido a la izquierda abordar eficazmente las aspiraciones populares. En el contexto centroamericano la lucha contra la pobreza y la inclusión social siguen estando entre las preocupaciones principales.

Por lo tanto, es entendible que el FSLN, y en menor grado el FMLN (aunque no la administración de Funes), den prioridad a la noción de una democracia socioeconómica en lugar de representativa. El FSLN aún sostiene que una democracia limitada a la institucionalización del proceso electoral no es una verdadera democracia. En lugar de ello, debe hacerse todo lo posible para garantizar que las personas satisfagan sus necesidades básicas, incluso si eso implica eludir algunos aspectos "sagrados" de la democracia representativa, según lo establecido por los parámetros occidentales. En contraste, el FMLN ha buscado aumentar el apoyo para su proyecto revolucionario dentro de las limitaciones de la democracia representativa liberal. Su estrategia refleja una visión de la construcción del socialismo basada en el concepto de Schafik Jorge Hándal de la revolución democrática, que sostiene que la democratización de la sociedad política, civil y económica salvadoreña es un prerrequisito para la revolución socialista (Hándal 1993 y 2006). Hándal explica:

> Para nosotros ha sido claro desde hace mucho tiempo que la revolución socialista, especialmente en los países subdesarrollados, ha tenido un preludio de revolución democrática (…) preludio que en algunos casos lleva un tiempo muy largo. Incluso cuando una revolución victoriosa está encabezada por fuerzas pro-socialistas, es indispensable para la transición al socialismo

> que este proceso de revolución democrática se realice primero (1993, p. 10, traducción nuestra).

Esta tesis hace eco de la *Crítica del Programa de Gotha* de Karl Marx, que sostiene que entre la sociedad capitalista y la sociedad socialista una república democrática debe ser forjada, y que «es precisamente en esta forma del estado final de la sociedad burguesa que la lucha de clases debe ser combatida hasta el final» (Marx 1977a, traducción nuestra).

En ello radica la esencia de lo que lleva a algunos pensadores a dividir la izquierda latinoamericana en dos grupos: la "buena izquierda" y la "mala izquierda". El segundo se refiere a la voluntad de los gobiernos, partidos o movimientos de izquierda a impugnar la santidad de los mercados, la propiedad privada y el privilegio de la democracia representativa sobre la democracia económica y participativa. Los que se atreven a cruzar ese Rubicón conforman la denominada izquierda "mala", y los que no lo hacen son retratados como moderados, razonables o "buenos". Sin justificar el desprecio frecuente por las normas democráticas liberales que es la tradición histórica de la clase política centroamericana, proponemos un marco alternativo para la comprensión de la diversidad dentro de la izquierda y sus posiciones políticas.

La clave para entender este debate es la siguiente pregunta: «¿Han madurado suficientemente las fuerzas productivas en América Latina para permitir la realización de la transformación socialista inmediatamente, o es una etapa capitalista progresista necesaria para iniciar un proceso socialista?» (Claudio Katz 2006). Las supuestas contradicciones en los modelos de Nicaragua y El Salvador pueden ser mejor entendidas revisitando este viejo debate. Los revolucionarios latinoamericanos que han respondido a esta pregunta afirmativamente y que, a su vez, han comenzado a cuestionar el modo dominante de producción (mediante la nacionalización de los recursos naturales estratégicos) son vistos como radicales, mientras que aquellos que abogan por una etapa progresista del capitalismo son vistos como

moderados, a pesar de que ambos todavía buscan el desarrollo socialista autónomo. Mientras los sandinistas y el FMLN no abogan por el salto inmediato al socialismo, ambos declaran abiertamente el socialismo como su objetivo. Como Hándal insiste,

> Para desarrollarse, los países del tercer mundo deben moverse en una dirección que va más allá que el capitalismo, es decir, hacia el socialismo (…) En los países subdesarrollados, las revoluciones políticas lideradas por fuerzas pro socialistas permiten la construcción de las bases materiales que todavía no existen, o sólo existen parcialmente, para la transición al socialismo –corto de completar o agotando la etapa capitalista (…) Conceptualmente, debemos tener claro que esta es una y la misma revolución, que cuando se desarrolla inicialmente cumplirá la tarea democrática históricamente no resuelta y de esta manera tomar la transición al socialismo (Perla y Cruz-Feliciano 2014, p. 164).

Describiendo esta visión en términos más concretos, el sociólogo Orlando Núñez Soto explica la actual noción sandinista de lo que implica el concepto de revolución:

> La victoria del Frente Sandinista significa en primer lugar, la contención del neoliberalismo y el fin de las medidas neoliberales. En segundo lugar, significa conquistar la soberanía frente a la injerencia estadounidense y europea, enrumbándolo por la senda de la unidad latinoamericana. En tercer lugar, la construcción del poder ciudadano, con el fin de que la ciudadanía pueda restituir sus derechos, precisamente conculcados por el neoliberalismo, como es el derecho a la educación, la salud, el crédito, entre otros; la construcción del poder ciudadano significa además la posibilidad de revolucionar la democracia representativa, superando sus limitaciones a través de la democracia directa. En cuarto lugar, pero no menos importante, significa la organización asociativa y autogestionaria de los trabajadores y de los pequeños y medianos productores, a través de cooperativas y federaciones de mayor envergadura, con el fin de recuperar

> los excedentes que el mercado les drena y de participar cada vez más en la gestión del Estado y de la economía. Creemos que estos cuatro elementos, entre otros, son suficientes para hablar de lucha revolucionaria en cualquier país de América Latina o del Tercer Mundo (2009, p. 242).

Desde el punto de vista sandinista no es suficiente reformar el sistema político y económico: es importante desarrollar los medios para romper los lazos de subordinación con respecto al norte. Como tal, el proyecto revolucionario en Nicaragua está enmarcado en un proceso de transformación regional que ha comenzado a materializarse a través de las iniciativas del ALBA[4]. El ALBA ha establecido los cimientos para llevar a cabo importantes proyectos y transformaciones en sus países miembro, proveyendo apoyo económico y promoviendo acuerdos preferenciales dentro de la alianza. Sin el apoyo de gobiernos afines de izquierda, hubiera sido difícil para Nicaragua implementar sus más importantes proyectos dirigidos a la transformación social.

El camino de El Salvador al socialismo ha sido más conciliador con los Estados Unidos y menos atado a los países del ALBA, pero esta situación se complicó por la alianza de poder compartido entre Funes y el FMLN. Mientras que la administración de Funes trató de construir una buena relación de trabajo con élites económicas locales, el FMLN tenía un plan económico claro que a menudo puso al partido en confrontación con estos mismos actores. Del mismo modo, en el ámbito de la política exterior, Funes trató de mantener su distancia de los gobiernos asociados a la revolución bolivariana, mientras que el FMLN trató de cultivar esa relación y asistió a la Quinta Conferencia Internacional en Venezuela («El FMLN se suma a V Internacional Socialista en "exitosa" convención», 13 de diciembre del 2009). Pero en

4 Al emplear el término "revolucionario" no pretendemos de juzgar si el gobierno sandinista se puede considerar verdaderamente revolucionario. En cambio, lo usamos para distinguir entre los gobiernos de izquierda que aseveran estar en un camino revolucionario (Venezuela, Bolivia y Ecuador) y los que no lo hacen (Uruguay, Brasil y Perú).

septiembre del 2013, parecía que Funes apoyó la propuesta del FMLN para unirse a Petrocaribe. Él declaró: «Nos parece que el ingreso a Petrocaribe no lesiona la soberanía nacional, no cambia el rumbo del país y puede tener ventajas asociadas al hecho (de) que la factura petrolera puede disminuir considerablemente» (Morán, 3 de septiembre del 2013).

## La apariencia de inconsistencia

La apariencia de inconsistencia entre las prácticas de los sandinistas y el FMLN y sus ideologías revolucionarias históricas tiene dos fuentes. Primero, los críticos de la izquierda, sobre todo los ex compañeros de armas, los juzgan en términos de sus orígenes en la lucha armada contra los regímenes dictatoriales que consideran la revolución como política más que social. Segundo, hay una tendencia para observadores políticos, especialmente los opositores internos de estos partidos, a combinar sus decisiones tácticas con sus objetivos estratégicos. Apuntan a las decisiones políticos-electorales de ambos partidos (las alianzas en que entran para ganar ventajas políticas tácticas) y su análisis de las estructuras socioeconómicas de su sociedad (sus relaciones con actores poderosos en un esfuerzo para crear un capitalismo no dependiente) con el fin de cuestionar su compromiso a sus principios revolucionarios.

## Definiendo revolución: política y social

Tanto el FSLN como el FMLN han sido objeto de críticas duras por la forma en que han gobernado. Sus orígenes guerrilleros y las imágenes heroicas que han cultivado como parte de sus luchas armadas afectan la forma en que se percibe y lo que se espera de ellos. Cuando la crítica ha venido de la izquierda, los ex comandantes de la guerrilla han sido sus portavoces más prominentes. En Nicaragua, Dora María Téllez ha argumentado que los sandinistas ya no son revolucionarios:

> Los gobiernos revolucionarios proceden de revoluciones, y las revoluciones implican que vos borrás el sistema jurídico vigente y establecés uno nuevo; y aquí no se está haciendo eso. Es decir, este gobierno opera con las reglas hasta un cierto punto, hay un cierto punto en que opera de facto. Este es un gobierno con vocación dictatorial, pero opera con las reglas. Es un gobierno que provino de unas elecciones, que tiene un plazo, que se tiene que ir al término de ese plazo, le guste o no. Eso no es ninguna revolución. Las revoluciones son borrar el pizarrón. No se puede hacer un gobierno revolucionario saliendo de una elección. Eso es imposible. Si querés hacer un gobierno revolucionario tenés que hacer una revolución. Y hacer una revolución es derrocar el gobierno vigente, cambiar las reglas del juego, poner el pizarrón en blanco… (Dora María Téllez, entrevista personal, Managua, 3 de agosto del 2010).

En el caso salvadoreño, Dagoberto Gutiérrez (2012) argumenta que los líderes del FMLN ya no son izquierdistas:

> No es la gente la que teme al FMLN, es el partido FMLN el que le tiene miedo al pueblo (…) Pensamos que el problema del país es el Estado (…) Además de ser una posición teórica, filosófica y política, [la izquierda] es una manera de ver el mundo y de interpretar la realidad, precisamente para subvertirla y para negarla. El sentido de la izquierda es la subversión de la realidad. La cúpula del FMLN no es izquierda, es de derecha.

Ambas críticas son problemáticas. Según Téllez, si un gobierno no está fundado a través del establecimiento de un nuevo sistema político-jurídico, no puede ser revolucionario. Del mismo modo, la noción de revolución de Gutiérrez se centra en el Estado como el problema y aboga por la creación de un nuevo Estado,porque el papel de la izquierda es subvertir la realidad política. En línea con sus orígenes como líderes guerrilleros que buscan derrocar regímenes dictatoriales, ambos pensadores equiparan revolución con la supresión o el derrocamiento del gobierno o el estado actual. En otras palabras, se equiparan con la revolución política.

Sin embargo, simplemente el derrocamiento del gobierno o Estado no puede ser el único criterio, porque lo que caracteriza a los revolucionarios es que ellos buscan cambiar (democratizar) no sólo el aparato del Estado y del gobierno sino, en última instancia, las relaciones de producción. En otras palabras, una revolución socialista es necesariamente una revolución social y no sólo una revolución política. Como dice Marx (1977b, p. 179) en *La ideología alemana*, «El comunismo se diferencia de todos los movimientos previos, en que se vuelca la base de todas las relaciones de producción anteriores». Tomar el control del gobierno es sólo el medio para un fin. El control del Estado es un mecanismo para la transformación de las relaciones sociales de producción. A medida que las relaciones sociales de producción se vuelven más democráticas, el Estado se volverá más democrático.

## Combinando tácticas con estrategia

La tendencia de los observadores políticos a combinar las decisiones tácticas de estos partidos con sus objetivos estratégicos está relacionada a la falacia lógica de atribuir intenciones a las acciones sobre la base de sus resultados. Como sugiere Ciccariello-Maher en su capítulo en este libro, en el caso de Venezuela los imperativos electorales a veces obligan a los líderes políticos a participar en una "danza intrincada" para enviar un mensaje fuerte que aparece como contraria a su esencia, sólo para abrir camino para cambios más profundos que están en línea con sus metas de largo plazo. Por lo tanto, algunos comentaristas políticos declaran que la razón por la que el FSLN y el FMLN están desarrollando buenas relaciones de trabajo con sectores del capital o de la clase media, es porque ellos ya no están comprometidos a la transformación socialista de la sociedad. Este cambio es más pronunciado en el ámbito económico, donde el FMLN y el FSLN han construido relaciones

con actores poderosos para promover el desarrollo a través de una etapa de capitalismo no dependiente[5].

El ejemplo más claro de esto es la disposición de los sandinistas a aceptar la supervisión del FMI sobre su desempeño económico. Con una economía pobre e impulsada por las exportaciones, Nicaragua es altamente dependiente de los recursos extranjeros, sin los cuales sería prácticamente imposible vencer muchas de las necesidades más apremiantes del país. Como mencionó el presidente Ortega en su discurso a los trabajadores el primero de mayo del 2013:

> … nosotros mismos hemos cuestionado tanto las políticas del Fondo Monetario Internacional. Pero es que no hay más camino que trabajar con el Fondo Monetario Internacional, en el caso nuestro, porque no somos autosuficientes, porque somos dependientes («Al oído», 2013).

Desde la perspectiva del FSLN, la supervisión del FMI garantiza el financiamiento continuo de una fuente confiable que puede generar recursos adicionales[6]. Además, la supervisión del FMI contribuye a reconstruir la reputación económica de Nicaragua. Años de guerra, expropiaciones y la falta de disciplina fiscal en los años ochenta minaron la confianza de los inversionistas en Nicaragua y particularmente en los sandinistas, quienes –como señala Young en su capítulo en este volumen– han sufrido una representación negativa en la prensa internacional. El informe anual de progreso y disciplina fiscal del FMI da credibilidad comercial y financiera al gobierno sandinista y sirve para promocionar al país como un destino de inversión segura. Los sandinistas

5 Para el caso de Nicaragua ver http://www.confidencial.com.ni/articulo/770/la-economia-politica-delorteguismo, y para El Salvador véase http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=5210692

6 El Servicio de Crédito Ampliado del FMI, en el que Nicaragua participa, menciona como parte de su propósito el «ayudar a catalizar ayuda externa adicional». Ver la Hoja de Datos del Fondo Monetario Internacional, «IMF Extended Credit Facility».

ven esto no sólo como un mal necesario, sino también como una simple etapa que apunta a que en el futuro Nicaragua se una a otros países –como Argentina, Brasil y Venezuela– que ya han roto con el financiamiento y las condiciones del FMI.

El caso salvadoreño tiene posturas contradictorias muy similares, entre ellas la decisión del FMLN a escoger a Mauricio Funes como su candidato presidencial, aunque era ideológicamente pragmático y no era miembro del partido. Una mayoría a favor de esa posición surgió dentro del partido a partir de un deseo de expulsar a Arena del poder (Damián Alegría, entrevista personal, Santa Cruz, California, 15 de enero del 2011). Dada su popularidad como periodista, Funes fue visto como el candidato ideal para atraer a los votantes centristas y aumentar las posibilidades del FMLN a ganar las elecciones (Cynthia Arnson y otros 2011). Sin embargo, esto requería dar a Funes y a sus aliados el control sobre ciertas instituciones y políticas gubernamentales, en particular las relacionadas a los asuntos económicos y extranjeros.

Este compromiso (entre otros factores) limitó la capacidad del FMLN para hacer profundas transformaciones estructurales en el modelo económico del país y para influir en la toma de decisiones sobre política exterior. En cuanto a este último, un ejemplo ocurrió después del golpe en Honduras en el 2009, cuando el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, comenzó a abogar por la normalización de las relaciones con el gobierno de facto, poco después de la primera reunión oficial de Funes con Obama («Presidente Funes se reune con Barack Obama», 8 de marzo del 2010, y René Serrano, 1º de febrero del 2010). Pocos días después de la reunión, Obama aprobó de nuevo el estatus de protección temporal para los salvadoreños en los Estados Unidos, y El Salvador recibió un préstamo del FMI que lo calificó para fondos de gasto de estímulo (Perla 2011). Es revelador que Funes se convirtió en uno de los primeros presidentes Centroamericanos para abogar por la reincorporación de Honduras en la Organización de los Estados Americanos, incluso con la oposición inquebrantable del FMLN.

Estas decisiones tácticas no significaron que el partido había cedido el control de su programa político a Funes o que había renunciado a sus aspiraciones socialistas. Cuando se le preguntó al comandante farabundista Ramón Suárez si el objetivo del FMLN era construir una sociedad socialista, respondió: «¡Por supuesto! Si nosotros (…) no cambiamos nuestros estatutos este será el caso». El artículo 1 dice que «El FMLN es un partido democrático, revolucionario y socialista». El compromiso del partido para un socialismo participativo del siglo xxi se corroboró todavía más no sólo por su participación en la convocatoria de Venezuela para una Quinta Internacional, sino también por su práctica política (13 de diciembre del 2009). Específicamente, el plan del gobierno al que Funes y el FMLN han acordado fue desarrollado a través de un proceso de diálogo social abierto, un ejercicio en democracia participativa que incluyó la contribución activa de salvadoreños de todas partes del país e incluso en la diáspora. El proceso a través del cual están construyendo el camino al socialismo salvadoreño intenta utilizar hoy el concepto de la revolución democrática de Hándal, pero al mismo tiempo subraya uno de los desafíos centrales del FMLN, derivado de su alianza con Funes: la inhabilidad o falta de voluntad del Presidente de hacer cambios profundos para resolver los problemas más urgentes de la población salvadoreña. Hándal resumió este desafío sucinta cuando escribió proféticamente:

> En otras palabras, el poder revolucionario debe llevar a cabo los cambios ineludibles, las tareas urgentes, los cambios históricos cuya demora frena el desarrollo, y de esta manera asegura el avance, paso a paso, hacia el socialismo (…) Uno de los grandes desafíos de la revolución es mantener a la mayoría del pueblo relacionada con el proyecto. Para hacer eso, será necesario probar su eficacia. Y la eficiencia del proyecto se demostrará cuando se mueva rápidamente para resolver los problemas más urgentes de la vida diaria de la gente: alimentación, salud, vivienda, y educación, con la participación de las propias personas (Perla, hijo, y Cruz-Feliziano 2014, p. 168, traducción nuestra).

La administración Funes-FMLN fue caracterizada precisamente por su fuerte énfasis en estas cinco áreas. La administración actual parece estar dedicada a ellas también, aunque es demasiado pronto para decir definitivamente.

## Otros temas relevantes

En Nicaragua aquellos que se denominan como *sandinistas* han estado divididos desde 1994, y nada indica que la situación vaya a cambiar en el futuro próximo. Después de una breve alianza con el FSLN para las elecciones del 2001, el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) postuló su propio candidato presidencial para las elecciones del 2006, entró en una alianza electoral con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán para las elecciones municipales del 2008, y se alió con el Partido Liberal Institucional (PLI) para las elecciones presidenciales del 2011. A través de los años, la portavoz del FSLN, Rosario Murillo, ha hecho algunos tímidos llamados instando a los disidentes a volver a la «familia sandinista» («Murillo aspira a unidad sandinista» 11 de julio 2006), pero la reacción ha sido responder que el FSLN de hoy día no representa la ideología sandinista, sino una nueva ideología denominada *orteguismo* («Ortega defensor de los ricos-Dora María Téllez, Daniel Ortega y la revolución en Nicaragua», 2012). Lo que comenzó como una división basada mayormente en diferencias ideológicas ha sido exacerbada por diferencias personales, lo que hace improbable la reconciliación, siempre que los que presidieron la división sigan dominando la escena política.

El FMLN también ha experimentado varios episodios de fragmentación desde 1994 pero, en contraste con el caso nicaragüense, ninguno de los grupos disidentes dicen que son los verdaderos "farabundistas". En lugar de eso, varios han tratado de empezar sus propios partidos social demócratas; el liderazgo del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) intentó crear el Partido Democrático en 1994, y una facción reformista intentó crear el Frente Democrático Revolucionario en el 2005 (Héctor Perla hijo, Marco Mojica y Jared Bibler 2013). En el otro extremo,

la facción Tendencia Revolucionaria se ha separado para crear el movimiento por la democracia participativa llamado Movimiento Nuevo País, que está en proceso de convertirse en un partido político (La Haine.org y *La Página* 2012).

Aunque la prohibición del aborto terapéutico continúa siendo una mancha indeleble en la caracterización del FMLN y el FSLN como partidos de izquierda, ambos también han adoptado políticas a favor de los derechos y la participación de la mujer. En el caso de Nicaragua, esto ha ocurrido a través de la Ley de Municipalidades del 2012, según la cual la mitad de los candidatos de cada partido que participa en las elecciones municipales tienen que ser mujeres. Aunque algunos grupos criticaron la iniciativa, por ser limitada al nivel municipal («Nicaragua: cuota electoral femenina no entusiasma a mujeres organizadas», 2012), fue aprobada sin oposición en la Asamblea Nacional y mejoró efectivamente las condiciones para una mayor participación política de las mujeres en Nicaragua, que se clasifica como el segundo país en América y noveno en el mundo en el ranking de esta categoría («América Latina: participación de las mujeres en la política», 2012). En El Salvador, mujeres y hombres de alto rango del FMLN han criticado la falta de voluntad de Funes, y ahora de Sánchez Cerén, para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, amenaza para la vida de la madre y malformación fetal, así como falta de voluntad de su propio partido para luchar por los derechos de las mujeres en la salud reproductiva (Valencia Caravantes, 29 de agosto del 2010). Sin embargo, el partido ha impulsado cambios legislativos para mejorar las condiciones materiales de la mujer, donde se incluyen la Ley de Equidad e Igualdad de Género y la Ley contra la Violencia Doméstica, así como la anteriormente mencionada Ciudad Mujer (Ley Contra la Violencia Intrafamiliar 1996, y «Aprueba El Salvador Ley de Igualdad de Género», 2011).

Con respecto al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, Cafta, el FSLN, quien se opuso al principio, ha optado por hacer lo mejor de la situación y usarlo para impulsar el empleo y la promoción

de relaciones laborales estables. Desde el 2010, el enfoque de los sandinistas ha sido introducir un "acuerdo tripartito" entre el gobierno, los sindicatos y los dueños de fábricas de las zonas francas. El acuerdo estipula:

> Un aumento salarial anual gradual promediando 9 % entre el 2011-2013, permitiendo a las empresas extranjeras proyectar con precisión los costos laborales sin tener que renegociar los aumentos de salario mínimo cada seis meses, como requiere la ley. A cambio de concesiones salariales, se les prometió a los sindicatos una serie de beneficios sociales en las áreas de salud, educación, transporte y subsidio de canastas de alimentos del banco de alimentos estatal Enabas («Are labor conditions improving under CAFTA?», 2012, traducción nuestra).

Aunque de ninguna manera es una panacea, el acuerdo sienta las bases de un modelo de mediación del gobierno que podría producir beneficios adicionales para todas las partes involucradas. La administración de Funes rechazó revisar Cafta a pesar de que el FMLN y las organizaciones laborales siguen pidiendo su revisión. Sin embargo, el FMLN y organizaciones laborales aliadas han presionado por una reforma de la Ley de Zona de Libre Comercio, que se está debatiendo actualmente en la Asamblea Nacional (María Cruz Tornay 2012). Si bien dudosa, queda por verse si Sánchez Cerén hará de este un tema central de su presidencia, ya que sigue siendo un tema muy polarizado en el país. Finalmente, planes para conseguir una reforma agraria agresiva del estilo de los años ochenta basada en expropiaciones, no son evidentes bajo la administración sandinista actual. En cambio, el gobierno se ha enfocado en la legalización y distribución de títulos de propiedad, muchos de los cuales han permanecido en un limbo legal desde la década de 1980. Las cifras oficiales indican que en el primer trimestre del 2013 los sandinistas han distribuido un total de 114.625 títulos de propiedad urbana y rural desde el 2007 (Intendencia de la Propiedad 2013).

## Conclusión

Al transitar por el camino al socialismo, tanto el FSLN como el FMLN se enfrentan a una serie de retos comunes que van desde el espectro de recrear la política de la Guerra Fría y los intentos de sus enemigos nacionales e internacionales para generar el miedo permanente a través de la guerra psicológica, a la necesidad electoral de establecer alianzas con actores que no se adhieren a una agenda revolucionaria. Otro desafío es la escasez de recursos económicos para transformar la matriz neoliberal que ha contribuido al empobrecimiento de sus respectivas sociedades.

Aunque hay diferencias significativas en la forma en que el FSLN y el FMLN están avanzando hacia el socialismo, las versiones de ambos comparten características en común. Primero, ambos partidos ven al Estado como un actor económico importante en términos de sus funciones reguladoras y administrativas, pero también como un participante activo en la economía. Segundo, ambos enfatizan la justicia económica a través de políticas que benefician a los sectores más pobres de la sociedad mediante la reducción de la pobreza y la desigualdad. Tercero, ambos buscan ampliar sus bases de apoyo internacional, a la vez que tratan de mantener buenas relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Cuarto, ambos están dispuestos a enfrentarse a la élite local y a fuerzas internacionales poderosas sobre asuntos importantes, como el golpe de Estado en Honduras y las políticas redistributivas.

Sin embargo, a la fecha la similitud entre ambos ha tenido sus límites, especialmente porque el FMLN apenas ha logrado tomar control directo sobre la oficina ejecutiva. Esta diferencia se ha manifestado en la voluntad de los sandinistas a desafiar a los Estados Unidos en las relaciones internacionales, como en las relaciones con Irán y siendo miembro del ALBA. Los recursos proporcionados por el ALBA le han permitido al FSLN financiar programas sociales sin aumentar los impuestos. En contraste, el FMLN empujó con éxito a la administración de Funes a aumentar los impuestos para financiar gastos sociales nuevos y mejorados, pero El Salvador no se ha unido al ALBA ni ha desafiado a los

Estados Unidos en los asuntos internacionales. Mientras los líderes en el FMLN están ideológicamente predispuestos a una política exterior más independiente que la de la administración de Funes, también han tratado de enviar señales diplomáticas para mostrar que no están buscando enfrentar a Washington. Esto incluyó varias visitas del entonces candidato presidencial, Sánchez Cerén, para reunirse con el Departamento de Estado, líderes del Congreso y otros funcionarios elegidos, que han sido promocionados en los sitios web oficiales del partido, anuncios de televisión y pronunciamientos.

Lo que parece ser una contradicción entre la ideología y la práctica en los dos partidos realmente es compatible con los objetivos revolucionarios estratégicos cuando entendemos que estas medidas se dan sobre la base de un compromiso revolucionario, y que las decisiones tácticas no se pueden confundir con visiones estratégicas. Tanto los sandinistas como el FMLN han instituido cambios positivos, especialmente en los ámbitos de la política distributiva en favor de las clases más pobres. Ambos gobiernos han implementado reformas que han aumentado los gastos en educación, salud y programas para aliviar la pobreza extrema. Nicaragua ha dependido en gran medida de los fondos del ALBA, mientras que El Salvador ha recibido financiamiento de los Estados Unidos, pero también ha comenzado a generar recursos a través de cambios progresivos en la estructura de impuestos del país. Al confrontar la hegemonía estadounidense en la región, ambos países se opusieron inicialmente al golpe de Estado en Honduras, pero la posición de El Salvador rápidamente comenzó a alinearse con Washington, a pesar de la oposición del FMLN.

Mientras tanto, dada la correlación internacional de fuerzas desplegada contra ellos, ambos están haciendo mejoras significativas en las vidas diarias de los ciudadanos. Ambos partidos defienden cambios que tienen el potencial de resultar en sociedades mucho más justas. Hasta el momento, no han implementado las transformaciones estructurales en sus economías, pero tampoco han renunciado a la intención de hacerlo, y ambos han continuado expresando sus aspiraciones socialistas.

## Referencias

Agencia EFE (2013, 24 de enero). «Parlamento salvadoreño aprueba voto en el exterior para elecciones de 2014». *Prensa Libre* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.prensalibre.com/internacional/Parlamento-salvadoreno-aprueba-exterior-elecciones_0_853114922.html

ARNSON, Cynthia y otros (2011, marzo). «The administration of President Mauricio Funes: a one-year assessment» [documento en línea]. *Update on the Americas*. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars Latin American Program. Recuperado de http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Funes_One_Year.pdf

Banco Central de Nicaragua, BCN (2014a). «Informe de cooperación oficial externa 2013». En *Banco Central de Nicaragua (BCN)* [página en línea]. Recuperado el 18 de enero del 2015 de http://www.bcn.gob.ni/

_____ (2014b). «Nicaragua en cifras 2013». En *Banco Central de Nicaragua (BCN)* [página en línea]. Recuperado el 21 de junio del 2013 de http://www.bcn.gob.ni/

BEETON, Dan (2014, 26 de noviembre). «Central America's "Alliance for Prosperity" Plan: Shock Doctrine for the Child Refugee Crisis?». En *Center for Economic and Policy Research (CEPR). The Americas Blog* [página en línea]. Recuperado de http://www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/central-americas-alliance-for-prosperity-plan-shock-doctrine-for-the-child-refugee-crisis

Ciudad Mujer, Secretaría de Inclusión Social. Gobierno de El Salvador (2015, 21 de septiembre). «Delegación de cooperación italiana visita Ciudad Mujer Usulután». *Ciudad Mujer* [página en línea]. Recuperado de http://www.ciudadmujer.gob.sv/delegacin-de-cooperacin-italiana-visita-ciudad-mujer-usulutn/

Comisión Política FMLN (CP-FMLN) (2012, 18 de abril). «Comunicado oficial Comisión Política FMLN». En *Diario Digital Contrapunto. El Salvador, Centroamérica* [página en línea]. Recuperado de http://www.contrapunto.com.sv/cparchivo/documentos/comunicado-oficial-comision-politica-fmln

Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (Cispes) (2012). «Public-Private Partnership Law. Fact Sheet» [documento en línea]. Recuperado el 17 de septiembre del 2013 de http://www.cispes.org/wp-content/uploads/2012/12/APPFactSheetfinal.pdf

CONWAY, Madeleine (2014, 18 de marzo). «A Precarious Victory in El Salvador». En *Foreign Policy In Focus* [página en línea]. Recuperado de http://fpif.org/precarious-victory-el-salvador/

CRUZ TORNAY, María (2012, 7 de noviembre). «El empoderamiento de las maquilas». En *Rebelión* [página en línea]. Recuperado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=158777.

FEINBERG, Richard (2011, 2 de noviembre). «Daniel Ortega and Nicaragua's Soft Authoritarianism». *Foreign Affairs* [revista en línea]. Recuperado de http://www.foreignaffairs.com/features/letters-from/daniel-ortega-and-nicaraguas-softauthoritarianism

FREEDMAN, Elaine (2011). «What's behind Decree 743?». *Envío digital,* Managua, (360) [revista en línea]. Recuperado de http://www.envio.org.ni/articulo/4376

FRENCH, John (2009). «Understanding the politics of Latin America's plural lefts (Chávez/Lula): social democracy, populism, and convergence on the path to a post-neoliberal world». *Third World Quarterly, 30* (2), pp. 349-370.

Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg) (2010, octubre). «Nicaragua logró reducir pobreza extrema en el período 2005-2009. El gran reto será sostener este logro social». *El Observador Económico*, Managua (207).

_____ (2012). «Resultados de la Encuesta de Hogares para la Medición de la Pobreza en Nicaragua, 2011». En *Fideg* [página en línea]. Recuperado el 31 de julio del 2012 de http://fideg.org/investigaciones-y-publicaciones/96-resultados-de-la-encuesta-para-medir-la-pobreza-en-nicaragua-2011/

_____ (2014). «Dinámicas de la pobreza en Nicaragua 2009-2013». En *Fideg* [página en línea]. Recuperado de http://fideg.org/investigaciones-y-publicaciones/117-2014-11-12-20-51-41

GALEANO, Luis (2009, 28 de septiembre). «Albanisa es un pulpo». *El Nuevo Diario* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/58180

GARRETT, Linda (2010). *El Salvador: Expectations for Change and the Challenges of Governance The First Year of President Mauricio Funes*. Washington, DC: Center for Democracy in the Americas.

GUTIÉRREZ, Dagoberto (2012, 15 de marzo). «El FMLN debería retirarse del gobierno de Mauricio Funes». En *Tendencia Revolucionaria* [página en línea]. Recuperado el 1º de mayo del 2012 de http://tr.org.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=176:el-fmlndeberia-retirarse-del-gobierno-de-mauricio-funes&catid=11:dagoberto-gutierrez&Itemid=12

HÁNDAL, Schafik Jorge (1993). «Socialism: an alternative for Latin America? Socialism in the underdeveloped countries and a proposal for El Salvador». En Schafik Jorge Hándal y Carlos M. Vilas (eds.), *The Socialist Option in Central America,* pp. 3-80. Nueva York: Monthly Review Press.

_____ (2006). *Una guerra para construir la paz*. Nueva York: Ocean Sur.

Intendencia de la Propiedad (2013). «Documentos de Propiedad Emitidos de 2007 a 2013» [documento en línea]. Recuperado de http://www.intendencia.gob.ni/images/stories/portada/documentosemitidos20072013.pdf

KATZ, Claudio (2006, 27 de noviembre). «Socialismo o neodesarrollismo». En *La Haine. Proyecto de desobediencia informativa* [página en línea]. Recuperado de http://www.lahaine.org/index.php?p=18867

La Haine.org y *La Página* (2012, 25 de marzo). «Desde El Salvador, Dagoberto Gutiérrez: "La cúpula del FMLN no es de izquierda"». En *Aporrea* [página en línea]. Recuperado de https://www.aporrea.org/actualidad/n201534.html

Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (1996, 28 de noviembre). *Diario Oficial Nº 241.* San Salvador, 20 de diciembre de 1996. En *Asamblea Legislativa de la República de El Salvador* [página en línea]. Recuperado de http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-legislativos/ley-contra-la-violencia-intrafamiliar

LÓPEZ MENDOZA, Rafael (2011, 23 de noviembre). «Asamblea avala $ 4.203 millones de presupuesto». *El Salvador.com* [diario en

línea]. Recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47673&idArt=6408944

MARTÍ I PUIG, Salvador (2009). «El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 1980-2006: análisis de una mutación». En Salvador Martí i Puig y David Close (eds.), *Nicaragua y el FSLN (1979–2009): ¿Qué queda de la revolución?*, pp. 33-58. Barcelona: Bellaterra.

MARTÍNEZ AVELAR, Loida (2010, 11 de agosto). «Aumenta recaudación en impuestos por alcohol y cigarros». *La Prensa Gráfica* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/136292-aumenta-recaudacion-en-impuestos-por-alcohol-y-cigarros

MARX, Karl (1977a). «Critique of the Gotha Program». En David McLellan (ed.), *Karl Marx Selected Writings*, pp. 10-38. Nueva York: Oxford University Press.

_____ (1977b). «The German Ideology». En David McLellan (ed.), *Karl Marx Selected Writings*, pp. 159-190. Nueva York: Oxford University Press.

MEJÍA, Amílcar (2011, 16 de noviembre). «FMLN pide reformar impuesto sobre renta». *La Prensa Gráfica* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/231106-fmln-pide-reformar-impuesto-sobrerenta.html

_____ (2011, 25 de agosto). «El FMLN prefiere un impuesto a la seguridad». *La Prensa Gráfica* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/213486--el-fmln-prefiere-un-impuesto-a-laseguridad.html

_____ (2012, 19 de abril). «González lamenta que país no ingrese a ALBA». *La Prensa Gráfica* [periódico en línea]. Recuperado el 1 de mayo del 2012 de http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/258780-gonzalez-lamenta-que-pais-no-ingrese-aalba.html

MEJÍA GIRALDO, Camilo (2014, 12 de agosto). «El Salvador Community Police Force: A Sign of What Is to Come?». En *InSight Crime. Investigation and Analysis of Organized Crime* [página en línea]. Recuperado de http://www.insightcrime.org/news-briefs/el-salvador-community-police-force-a-sign-of-what-is-to-come

MORÁN, Otto (2013, 3 de septiembre). «Funes avala futuros negocios con Petrocaribe». *La Prensa Gráfica* [periódico en línea]. Recuperado

de http://www.laprensagrafica.com/2013/09/03/funes-avala-futuros-negocios-con-petrocaribe

MUHR, Thomas (2008). «Nicaragua Re-visited: From Neo-liberal "Ungovernability" to the Bolivarian Alternative for the Peoples of Our America (ALBA)». *Globalisation, Societies and Education, 6* (2), pp. 147-161.

Notimex (2013, 24 de abril). «El Salvador inicia DUI en mayo para votar en el exterior». *La Opinión* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.laopinion.com/El-Salvador-emitira-DUI-mayo-votar-desde-exterior

NÚÑEZ SOTO, Orlando (2009). «El regreso del FSLN». En *La revolución rojinegra*. Managua: Cipres.

ORTIZ, Cecilia (2010, 10 de diciembre). «Inauguran el hospital de San Vicente: el remozado nosocomio es el principal de la zona paracentral». *La Prensa Gráfica* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/departamentos/157160-inauguran-el-hospital-de-san-vicente.html

PANTOJA, Ary (2010, 19 de agosto). «Gobierno reporta reducción de la pobreza». *El Nuevo Diario* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.elnuevodiario.com.ni/politica/81548

PÉREZ, Arlen (2011, 9 de noviembre). «Misión UE presenta informe preliminar: Faltó transparencia». *El Nuevo Diario* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/232718

PÉREZ-BALTODANO, Andrés (2010). «Nicaragua: se consolida el estado por derecho (y se debilita el estado de derecho)». *Revista de Ciencia Política*, Santiago de Chile (30), pp. 397-417.

PERLA, Héctor (hijo) (2008). «Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá: Central American Agency in the Creation of the U.S.-Central American Peace and Solidarity Movement». *Latin American Research Review*, Austin (Texas), *43* (2), pp. 136-158.

_____ (2011). «Monseñor Romero's Resurrection: Transnational Salvadoran Organizing». *North American Congress on Latin America (Nacla),* Nueva York, *43* (6), pp. 25-31.

PERLA, Héctor (hijo) y Héctor M. Cruz-Feliciano (2014). «The Twenty-First-Century Road to Socialism in El Salvador and Nicaragua».

En Steve Ellner (ed.), *Latin America's Radical Left: Challenges and Complexities of Political Power in the Twenty-First Century*, pp. 153-176. Maryland: Rowman and Littlefield.

PERLA, Héctor (hijo), Marco Mojica y Jared Bibler (2013). «From Guerrillas to Government: The Continued Relevance of the Central American Left». En Jeffery R. Webber y Barry Carr (eds.), *The New Latin American Left: Cracks in the Empire* , pp. 327-356. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

Radio La Primerísima y agencias (2009, 23 de agosto). «¡Libre de analfabetismo!». En *La Gente. Radio La Primerísima* [página en línea]. Recuperado de http://www.rlp.com.ni/noticias/59079/libre-de-analfabetismo

RAMOS, Karla y Kenny López (2009, 22 de octubre). «Impuesto a licor y tabaco recaudará $65 millones». *La Prensa Gráfica* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/67796-impuesto-a-licor-y-tabaco-recaudara-65-millones-.html

RAUBER, Isabel (2012). *Revoluciones desde abajo: Gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica*. Buenos Aires: Continente.

RÍOS, Eugenio J. (2015, 2 de febrero). «Inclusión y protección social». *El Siglo XXI*, San Salvador (124), p. 3.

SALINAS MALDONADO, Carlos (2012, 22 de febrero). «UE advierte "retroceso democrático" en Nicaragua». *Confidencial* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.confidencial.com.ni/articulo/5911/ue-advierte-quot-retroceso-democratico-quot-en-nicaragua

SERRANO, René (2010, 1º de febrero). «Lobo rechaza el Alba y se normalizará lazo con país». En *Elsalvador.com* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6351&idArt=4481972

VALENCIA CARAVANTES, Daniel (2010, 29 de agosto). «Funcionarias FMLN critican a Funes por cómo trató tema del aborto». En *El Faro* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.elfaro.net/es/201008/noticias/2356/

## Artículos o columnas sin firma*

«Al oído». (2013, 2 de mayo). En *Informe Pastrán* [página en línea]. Recuperado de www.informepastran.com

«América Latina: participación de las mujeres en la política» (2012, 9 de marzo). *Información y Análisis de América Latina*, *Infolatam* [página en línea]. Recuperado de http://www.infolatam.com/2012/03/09/america-latina-participacion-de-las-mujeres-en-lapolitica/

«Aprueba El Salvador Ley de Igualdad de Género» (2011, 22 de marzo). En *United Nations Population Fund, UNFPA América Latina y el Caribe* [página en línea]. Recuperado de http://lac.unfpa.org/public/news/pid/7401

«Are labor conditions improving under CAFTA?» *(*2012, 4 de mayo). En *Nicaragua Dispatch* [página en línea]. Recuperado de http://www.nicaraguadispatch.com/news/2012/05/are-labor-conditions-improving-under-cafta/3722

«Crece respaldo ciudadano a gestión social y programas del gobierno del cambio» (2011, 31 de agosto). En *Vicepresidencia de la República de El Salvador* [página en línea]. Recuperado de http://www.vicepresidencia.gob.sv/novedades/noticias/item/388-crece-respaldo-ciudadano-a-gesti%C3%B3n-social-y-programas-del-gobierno-del-cambio.html

«El FMLN muestra fuerza ante sala» (2011, 1º de junio). *La Prensa Gráfica* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/202333-el-fmln-muestra-fuerza-ante-sala.html

«El FMLN se suma a V Internacional Socialista en "exitosa" convención» (2009, 13 de diciembre). *Diario Digital Contrapunto. El Salvador, Centroamérica* [periódico en línea]. Recuperado el 18 de mayo del 2012 de http://www.contrapunto.com.sv/cparchivo/politica-partidos/el-fmln-se-suma-a-v-internacional-socialista-en-exitosa-convencion

* Las referencias citadas a continuación se presentan por orden cronológico.

«El Salvador permanece en Afganistán» (2011, 8 de diciembre). En *Voz de América, VOA* [página en línea]. Recuperado de http://www.voanoticias.com/content/salvador-militares-afganistan-funes-135326903/107184.html

«El 82% aprueba construir el canal» (2015, 15 de enero). En *La Gente. Radio La Primerísima* [página en línea]. Recuperado de http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/176800/el-82-aprueba-construir-el-canal

«Especial elecciones 2011» *(*2012, 26 de abril). *La Prensa* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.laprensa.com.ni/2012/04/26/elecciones

«Gracias al Plan Social Educativo se incrementa la matrícula» (2010, 11 de noviembre). En *Ministerio de Educación República de El Salvador* [página en línea]. Recuperado de http://www.mined.gob.sv/index.php/novedades/noticias/1-institucional/4665-gracias-al-plan-social-educativo-se-incrementa-la-matricula.html

«Insulza: resultado de elecciones fue claro» (2011, 9 de noviembre). *El 19 Digital* [periódico en línea]. Recuperado el 15 de mayo del 2012 de http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32189&Itemid=12

«La Policía Comunitaria comienza su expansión a la zona sur de San Salvador» (2014, 27 de agosto). En *Presidencia de la República de El Salvador* [página en línea]. Recuperado de http://www.presidencia.gob.sv/la-policia-comunitaria-comienza-su-expansion-a-la-zona-sur-de-san-salvador/

«Murillo aspira a unidad sandinista» *(*2006, 11 de julio). En *El Nuevo Diario* [página en línea]. Recuperado de http://archivo.elnuevodiario.com.ni/politica/185366-murillo-aspira-unidad-sandinista/

«Nicaragua circula informe del CSE sobre elecciones en seno de la OEA» (2012, 9 de diciembre). *El 19 Digital* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.el19digital.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=21:politica&id=33539:nicaragua-circula-informe-del-cse-sobre-elecciones-en-seno-de-la-oea&Itemid=14

«Nicaragua: cuota electoral femenina no entusiasma a mujeres organizadas» (2012, 6 de marzo). En *Social Watch. Erradicación de*

*la pobreza y justicia de género* [página en línea]. Recuperado de http://www.socialwatch.org/es/node/14398

«Ortega defensor de los ricos-Dora María Téllez, Daniel Ortega y la revolución en Nicaragua» (2012, 17 de enero). En *Puente Sur. Una ventana abierta a las izquierdas de la América del Siglo XXI* [blog]. Recuperado de http://puentesurarg.blogspot.com/2012/01/ortega-defensor-de-los-ricos-dora-maria.html

«Presidente Funes se reune con Barack Obama» (2010, 8 de marzo). *Diario Co Latino* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.diariocolatino.com/es/20100308/editorial/77591/

«Programa de alfabetización» (2010, 17 de mayo). En *Ministerio de Educación. República de El Salvador* [página en línea]. Recuperado de http://www.mined.gob.sv/index.php/temas/alfabetizacion.html

«Representante Unesco en Nicaragua refuta cifras de Cepal sobre analfabetismo». (2012, 14 de abril). *El 19 Digital* [periódico en línea]. Recuperado el 22 de junio del 2013 de http://www.el19digital.com/index.php/noticias/ver/1416/representante-unesco-en-nicaragua-refuta-cifras-de-cepal-sobre-analfabetismo

«Resultados provisionales de las elecciones del 11 de marzo 2012» (2012). En *Tribunal Supremo Electoral* [página en línea], San Salvador. Recuperado de http://www.tse.gob.sv/resultados2012/inicio.htm

«Salvadoreños en EE UU por candidaturas independientes» (2011, 19 de enero). *El Mundo* [periódico en línea]. Recuperado de http://elmundo.com.sv/salvadorenos-en-eeuu-por-candidaturas-independientes

«Tri-country plan aims to attract private investment in Central America» (2014, 15 de diciembre). En *Committee in Solidarity with the People of El Salvador* [página en línea]. Recuperado de http://www.cispes.org/blog/tri-country-plan-aims-attract-private-investment-central-america/

# Diferentes visiones sobre el socialismo que guían los cambios actuales en Cuba[1]

Camila Piñeiro Harnecker

La forma que tome el nuevo modelo cubano dependerá de la influencia relativa de maneras diferentes de entender el socialismo y visualizar el futuro de Cuba. Aunque estas posiciones o corrientes de pensamiento coinciden, por lo general, en que el principal objetivo a largo plazo debe ser una sociedad más justa y liberada de las dificultades económicas que hoy enfrentamos, difieren notablemente en su manera de entender la justicia y la libertad y, por lo tanto, el socialismo. Comparten en gran medida el diagnóstico sintomático de la situación actual, pero identifican distintas causas de fondo y soluciones para esos problemas. Asimismo, tienden a establecer disímiles metas a corto y mediano plazo y, más importante aún, a proponer diversos medios para alcanzar esos objetivos, por lo que –aunque no siempre se reconoce– nos conducen hacia diferentes estadios.

Este trabajo identifica las tres principales visiones del socialismo en Cuba o posiciones que están influyendo en los cambios

1 Esta es una versión más extensa y actualizada de un artículo publicado por la revista cubana *Temas* (2012).

actuales: la estatista, la economicista y la autogestionaria[2]. Estas no son más que herramientas de análisis para caracterizar, a grandes rasgos, los enfoques existentes en la Isla sobre lo que es necesario para salvar el proyecto socialista cubano. El único propósito de su uso en este ensayo es señalar las ideas que más las identifican, pues, en realidad, aún las personas que pueden decantarse más claramente por una de las posiciones, comparten algunos puntos de las otras. Los contrastes de las tres corrientes de pensamiento pueden observarse cuando se analizan los objetivos que persiguen sus visiones de socialismo. Ello se refleja en los problemas fundamentales que identifican en la sociedad cubana de hoy y en las soluciones que proponen, evidenciando sus disímiles estrategias para la construcción socialista[3].

Las observaciones expuestas aquí se basan en el análisis desprejuiciado del discurso público –declaraciones oficiales, debates formales e informales, afirmaciones en medios de comunicación– y publicaciones –académicas, periodísticas– de cubanos en los últimos años. El objetivo de este trabajo es contribuir al debate que se viene desarrollando desde hace varios años en Cuba sobre nuestro presente y futuro, esclareciendo las posiciones más importantes, para así facilitar consensos sobre cuestiones tan centrales

2 Estos nombres no han sido utilizados por personas o grupos para identificarse como tales. Los términos más utilizados han sido dogmatismo y pragmatismo. Por ejemplo, Óscar Fernández Estrada (2011) identifica dos formas «alternativas» de lidiar con el proceso de cambio actual en Cuba: el dogmatismo y el pragmatismo, que coinciden en gran medida con lo que identifico como estatismo y economicismo. Fernández Estrada también sugiere la existencia de una tercera posición, cuyos objetivos y propuestas parecen estar en consonancia con la tendencia que identifico como autogestionaria.

3 El término "construcción del socialismo" se entiende de manera diferente por las posiciones existentes, debido a que sus conceptualizaciones de "socialismo" o "sociedad socialista" son distintas. Se destaca que el avance hacia ese orden social "superior" es un proceso inevitablemente gradual y no lineal. Algunos consideran el "comunismo" (el concepto propuesto por Carlos Marx, no el asociado a países gobernados por partidos comunistas) como la etapa más avanzada del socialismo, mientras que otros lo ven como un horizonte al que nunca se puede llegar, pero que sirve para indicar la dirección deseada del proceso de transformación poscapitalista.

como cuáles son los objetivos de los cambios que se están experimentando y qué medios son más efectivos para lograrlos.

## Cambios recientes en Cuba

El origen de los cambios actuales se remonta a un discurso pronunciado por el ex presidente Fidel Castro el 17 de noviembre de 2005, en el que advirtió por primera vez públicamente que la Revolución podía ser revertida. En contraste con sus evaluaciones en el pasado, cuando las principales causas de la mayoría de los problemas en Cuba eran atribuidas a las sanciones económicas, comerciales y financieras estadounidenses y la guerra geopolítica contra Cuba[4], Castro dijo que los principales enemigos de la

4 Las sanciones económicas, comerciales y financieras de Washington contra Cuba acentúan sin dudas los problemas económicos de Cuba, pues logran evitar que ésta acceda con sus productos a los mercados y, en gran medida, a los productos estadounidenses, sobre todo, el acceso al sistema financiero internacional y la utilización del dólar. La economía cubana sufre también de la prohibición de Washington de las inversiones en Cuba, no sólo por parte de empresas estadounidenses sino por cualquier empresa con alguna participación estadounidense o presencia en los Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba estima que estas sanciones han dañado la economía cubana por más de 975.000 millones de dólares y afirma que el bloqueo «constituye el obstáculo más importante para el desarrollo de nuestro país» («Discurso íntegro de Bruno Rodríguez en la ONU», 2011).
Aunque el expresidente estadounidense Obama declaró el 17 de diciembre del 2014, como parte de sus declaraciones sobre su decisión de normalizar las relaciones con Cuba, que quiere trabajar con el Congreso para levantar el "embargo", no parece probable que el nuevo Congreso de mayoría Republicana colabore con él en este tema; y sólo el Congreso tiene potestad para derogar algunas de las legislaciones. Por tanto, las sanciones económicas, comerciales y financieras que aplica Estados Unidos contra Cuba –que en Cuba se conoce como "bloqueo" – se mantendrán en pie en gran medida.
En cuanto a la guerra geopolítica de Estados Unidos contra Cuba, esta pareciera que entraría en una nueva etapa, en la que –según las declaraciones de Obama– el objetivo ya no sería crear el caos en Cuba y aislarla del resto del mundo, sino una transición ordenada a una sociedad postsocialista, lo que para los funcionarios estadounidenses significa capitalista. Obama reconoció que se mantendrán los programas para promover la «sociedad civil independiente» cubana y se potenciará al sector privado.

Revolución eran nuestros propios errores, especialmente la injusta desigualdad de ingresos, los vicios tales como el robo, así como la falta de control y la mala gestión en los niveles de dirección del país (Fidel Catro Ruz 2005). Menos de un año después, en julio del 2006, se enfermó, y antes de someterse a una cirugía le cedió el poder a su sucesor legal y hermano, Raúl Castro. Poco después, Raúl Castro comenzó los preparativos para las profundas transformaciones que se necesitan para hacer frente a esos problemas.

En un discurso pronunciado el 26 de julio del 2007, Raúl Castro se refirió a la necesidad de «cambios conceptuales y estructurales», y propuso un debate nacional para identificar los principales problemas que aquejan a la sociedad cubana. Más de 5 millones de personas participaron en más de 215 mil reuniones entre septiembre y noviembre del 2007, y más de 1,6 millones criticaron las dificultades de la vida cotidiana, el desfavorable funcionamiento de las instituciones del Estado y el comportamiento de los funcionarios públicos en cargos burocráticos. No era la primera vez que este tipo de debate amplio a nivel nacional había tenido lugar en Cuba. Tras el colapso de la Unión Soviética, más de 80.000 "parlamentos obreros" se llevaron a cabo en los lugares de trabajo, escuelas y organizaciones de masas en 1993[5], y más de 3 millones de personas expresaron sus preocupaciones y presentaron propuestas sobre cómo hacer frente a la nueva coyuntura. Deliberaciones públicas similares habían ocurrido en los años ochenta y en décadas anteriores.

El debate de 2007 sirvió como preludio al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), pero la única información oficial que emergió de éste era lo que todos sabían: que los salarios bajos y la alimentación inadecuada, el transporte y la vivienda eran la principal fuente de preocupación de los cubanos, y que la gente estaba cansada de las prohibiciones relativas a su vida cotidiana. Sólo algunas de las medidas que se esperaban como resultado

5 Se supone que organizaciones sociales de alcance nacional como la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión de Jóvenes Comunistas representen esos intereses particulares y se les invita a la mayoría de los espacios de toma de decisiones.

se materializaron en 2008-2009: la capacidad de comprar ciertos bienes y servicios anteriormente limitadas a los extranjeros, la entrega de tierra agrícola ociosa a individuos y cooperativas, la eliminación de las comisiones encargadas de aprobar el uso de divisas por las instituciones del Estado (conocida como los Comités de Aprobación de Divisas), la creación de una institución nacional de control (Contraloría de la República), y los pasos iniciales hacia la reducción del tamaño de los ministerios.

Durante esos años, los esfuerzos se concentraron en hacer frente a la difícil situación financiera que resultó de una serie de huracanes que azotaron a la isla en el 2008 y generaron grandes pérdidas económicas, y de la crisis económica internacional, posponiéndose otras medidas que serían tomadas más adelante.

Desde 2010, Raúl Castro ha advertido con mayor énfasis sobre la importancia de superar graves obstáculos económicos. Lo que está en juego es «la supervivencia misma de la Revolución»[6]. Como reflejo de la necesidad de resolver problemas de larga data en la gestión de la economía cubana, se planificó el sexto congreso para abril del 2011 con el fin de aprobar los "lineamientos" o directrices generales para mejorar el desempeño económico, incluyendo algunas políticas sociales y otras estrechamente relacionadas con la esfera económica.

El congreso fue precedido de debates en los lugares de trabajo, barrios y organizaciones sociales sobre un documento titulado *Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social*[7]. Se alentó a las personas a proponer cambios, expresar inquietudes o simplemente hacer comentarios sobre el mismo. El documento se estructuró en capítulos que enumeran las expectativas de lo que debe ocurrir en áreas específicas, como la gestión económica, las políticas macroeconómicas, las relaciones económicas

6 Véase Raúl Castro (2010a) y su sentencia «O rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos…» en su discurso en la clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en La Habana (2010b).

7 Véase «Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución» (2011).

externas, las inversiones, la ciencia, la tecnología y la innovación, la política social, la agroindustria, la industria y la energía, el turismo, el transporte, la construcción, la vivienda, los recursos hídricos y el comercio. Muchos de los objetivos enumerados, tales como la sustitución de importaciones y el aumento de las exportaciones, habían sido trazados en anteriores congresos del PCC, pero aún no se han logrado.

Los cubanos fueron llamados a llegar a un consenso sobre el "qué hacer", no el "cómo hacerlo". Se sugirió que la más compleja discusión sobre cómo alcanzar los objetivos acordados ocurriría más tarde cuando se prepararan las políticas y legislaciones correspondientes. A excepción de las leyes relativas a la Seguridad Social de 2008 y el Código de Trabajo de 2014[8] que sí fueron sometidos a debate en los centros de trabajo, otras legislaciones que se han aprobado hasta la actualidad se han hecho con escaso debate público; inicialmente tal vez porque se referían a completar los derechos de propiedad personal[9] sobre el que parecía ser el consenso y, más recientemente, porque que se considera que son coherentes con los lineamientos aprobados.

Sin embargo, incluso antes de que los debates en preparación para el congreso comenzaran en diciembre del 2010, se adoptaron algunas medidas e iniciaron algunos experimentos (experiencias piloto con la idea de posteriormente generalizarlas en todo el país). La medida económica más significativa, que ha sido equiparada con otra reforma agraria, había estado en vigor desde 2008. De el año 2008 a mediados del 2011, casi el 15 % de las tierras agrícolas (1,13 millones de hectáreas) se habían dado en usufructo a 146 mil agricultores individuales (70 mil sin experiencia en trabajo agrícola) y, en menor grado, a cooperativas agropecuarias,

8 Véase la Ley Nº 116: Código del Trabajo, aprobada el 20 de diciembre del 2013 por la Asamblea Nacional del Poder Popular y en vigor desde el 18 de junio del 2014.

9 La nueva legislación permite a los cubanos vender sus automóviles y casas (Decreto Nº 292 y Decreto-Ley Nº 288), y facilita su acceso a créditos y subsidios para la construcción de viviendas (Decreto-Ley Nº 289 y Reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas naturales para realizar acciones constructivas en su vivienda, respectivamente).

al tiempo que se reconocía que ellos emplearían trabajo asalariado permanente (no sólo estacional)[10]. Este proceso de redistribución de tierra ociosa de granjas estatales y cooperativas ineficaces a agricultores privados y, en menor medida, a cooperativas (la mayoría han perdido fuerza de trabajo y no necesitan más tierra) continúa y aún queda tierra ociosa por redistribuir[11].

Similarmente, la Resolución Nº 9 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fue aprobada en 2008 –ya derogada en abril del 2014[12]– para vincular los salarios de los trabajadores estatales con la productividad de sus lugares de trabajo, siguiendo los criterios aprobados por el ministerio. Estas reglas eliminaban el tope a la cantidad que los trabajadores pueden ganar más allá de su salario base, lo que permite mayores diferencias salariales, sobre todo entre empresas y actividades económicas. Esta fue derogada como parte de un paquete legal para darle más autonomía a la empresa estatal, pues se consideró que aún ponía trabas en algunos aspectos y, en particular, en relación con la remuneración de los trabajadores "indirectos" o administrativos, además de ser fuente de confusiones. A principios de 2010, un experimento realizado en varios municipios permitió que algunos peluqueros o esteticistas y choferes arrendaran las sillas de salones de belleza y taxis, respectivamente, a las empresas estatales que los empleaban anteriormente. Los términos del arrendamiento establecen que los ex empleados estatales están obligados a cubrir todos los gastos de funcionamiento que el Estado antes asumía, mientras que ahora pueden fijar libremente los precios y mantener las utilidades después de los impuestos. En realidad, los precios que cobraron antes eran mayores a los

10 Véase Fernando Ravsberg 2011 y Lugo Fonte, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, citado por Ana Margarita González 2011.

11 De acuerdo con declaraciones de Pedro Olivera, director del Centro de Control de Tierras del Ministerio de Agricultura, durante el programa televisivo *La Mesa Redonda* del 16 de mayo del 2013, se habían entregado en usufructo 1.540.000 hectáreas aproximadamente a más de 170 mil personas, y calculaba que existen más de 4 millones de hectáreas de tierra agrícola sin cultivar.

12 Véase la Resolución Nº 17/2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

establecidos y se quedaban con la diferencia, además de sus salarios. Después de casi un año, este experimento se amplió con más actividades económicas y se extendió a otras provincias y, un año después, a toda la nación[13].

El 25 de octubre del 2010 se hizo pública una serie de normas en relación al proceso de "disponibilidad", mediante el cual las instituciones del Estado han estado y continúan gradualmente reubicando a los trabajadores "excedentes" que reducen los niveles de productividad, debido a que no existen las condiciones materiales para emplearles eficientemente, así como aquellos cuyas unidades de trabajo fueron cerradas y a los que se negaron a convertirse en arrendatarios (como se explicó en líneas anteriores). El exceso de trabajadores se estima en más de un millón o 20 % del total de fuerzas de trabajo del país, un promedio de 30 % de las nóminas de las empresas del Estado. A los trabajadores que se les declara "disponibles" se les debe ofrecer empleo estatal alternativo, y en caso de que decidan rechazar esas ofertas resultan despedidos con sueldo sólo por unos pocos meses, dependiendo de cuánto tiempo habían trabajado. El proceso, inicialmente planificado para ejecutarse a un paso mucho más rápido, fue suspendido porque al no contar con ofertas de empleos alternativos era imposible cumplir el compromiso de Raúl Castro: nadie sería «abandonado a su suerte» (Leticia Martínez Hernández y

13 El 1º de diciembre del 2011, estos experimentos se ampliaron para incluir a todos los salones con hasta tres sillas (*Reglamento para el funcionamiento de las barberías y peluquerías que aplicarán el arrendamiento de inmuebles a trabajadores por cuenta propia,* 2011), mientras que otros servicios tales como reparaciones, fotografía y lavandería se regirán por las disposiciones similares en seis provincias, para posteriormente ampliarse a toda la nación (Reglamento para el Sistema de Gestión Económica con arrendamiento de locales y áreas para el trabajo por cuenta propia en los Servicios Personales, Técnicos y del Hogar, 2011). Ya a partir del 2012, todas las barberías y salones de belleza estatales con hasta cinco trabajadores fueron arrendadas a los trabajadores, y los taxis estatales están siendo transferidos a los trabajadores en similares condiciones, aunque a un ritmo más lento.

Yaima Puig Meneses 2011), pero poco después de un ejercicio de evaluación fue retomado y se aplica a paso lento[14].

Asimismo, antes del congreso habían sido aprobadas otras normas que flexibilizaron el trabajo independiente (cuentapropismo), incluyendo la posibilidad de contratar a trabajadores asalariados de forma permanente. Los trabajadores independientes o "trabajadores por cuenta propia" tienen ahora la posibilidad de realizar un mayor número de actividades económicas, alquilar espacios (incluso del Estado), establecer transacciones económicas con instituciones del Estado y recibir créditos del sistema bancario nacional. El número de licencias para el trabajo independiente se duplicó en menos de un año[15], sobre todo porque muchas personas que ejercían el trabajo informal decidieron legalizar su estatus. A pesar de la alta carga impositiva, muchos han visto los beneficios de la legalización de sus actividades, como el acceso a la seguridad social con los mismos beneficios que los trabajadores estatales (cobertura para la jubilación, discapacidades y maternidad), el crédito bancario y los contratos estatales (Piñeiro Harnecker 2011, pp. 68-69). El número de trabajadores independientes ha seguido aumentando, aunque a un ritmo más lento.

Señalando que en años anteriores al congreso se habían aprobado medidas con tan grandes consecuencias para la vida de los cubanos (derecho a la tierra, los salarios, las relaciones laborales, etc.), algunos argumentaron que el Sexto Congreso del PCC fue sólo un *show* para ratificar decisiones ya tomadas. Sin embargo, hubo una participación masiva en la discusión del Proyecto

14 Estimaciones informales establecían en 2011 el número de trabajadores que habían sido declarados "disponibles" en torno a 150 mil (Marc Frank 2011). No existen datos más actualizados, pero sumando cifras dadas por distintos ministerios puede estimarse que ésta continúa aumentando y debe ser superior a los 200 mil. Lo más preocupante es que sí se sabe que a sólo 52 % de los declarados disponibles en 2013 se les había dado una ubicación definitiva (Manguela Díaz y otros 2014).

15 De unas 152 mil licencias en octubre del 2010 se pasó a más de 350 en octubre del 2011. En mayo de 2013 el número creció a más de 400 mil (Granma, 20 de Mayo de 2013).

de Lineamientos. Entre diciembre de 2010 y febrero de 2011, una parte significativa de la población cubana[16] discutió el documento en sus lugares de trabajo o estudio, sus barrios y sus organizaciones sociales. Alrededor del 68 % de los más de 200 lineamientos fueron modificados. Pero sólo unos pocos de los cambios, como los relacionados con la planificación, el mercado y los precios, fueron sustanciales.

Algunos han criticado el congreso por concentrarse en problemas "económicos" que en realidad no pueden separarse de los políticos, culturales y sociales en general[17]. Dada la complejidad del sistema económico cubano y los retos que enfrenta, la decisión de concentrar los esfuerzos en ese frente es comprensible. No obstante, uno de los objetivos más importantes incorporados en los lineamientos –además de la expansión de las empresas "no estatales" (privadas y cooperativas), una mayor autonomía de las empresas estatales y un mayor peso de las relaciones de mercado– es que los gobiernos locales deben desempeñar un papel rector en las actividades económicas estatales y no estatales en su territorio, la creación de nuevas empresas, la recaudación de impuestos y el manejo de los fondos destinados al desarrollo local.

Otras medidas políticas importantes se dieron a conocer en el Congreso del PCC. En su discurso de clausura, Raúl Castro propuso establecer un límite de dos mandatos consecutivos de cinco años para cargos políticos y estatales fundamentales, y subrayó el hecho de que la ley establece que ser miembro del partido no es un requisito para ocupar cargos públicos[18]. Sugirió que cambios sustanciales en el sistema político y un rejuvenecimiento de la dirección nacional del partido se llevarían a cabo en la Conferencia del PCC en enero del 2012[19]. Consideró como un "primer paso"

16 Algo menos de 9 millones, de una población total de alrededor de 11 millones. No se tienen los datos exactos porque la mayoría participó en más de una reunión y fueron contados más de una vez.

17 Véase, por ejemplo, Ovidio D'Angelo Hernández 2011b.

18 Véase el discurso en la clausura del VI Congreso del PPC de Raúl Castro Ruz (2011a).

19 Véanse Pérez y otros 2011b; Campos 2011b y D'Angelo Hernández 2011a.

el hecho de que los miembros recién elegidos al Comité Central del Partido incluyan una mayor representación en términos de género, color de piel y, en menor medida, edad[20]. Por el contrario, el Buró Político del PCC continuó siendo dominado por hombres de la llamada "generación histórica" (los que han liderado la Revolución desde la lucha armada y clandestina en la década de 1950). Pero la Conferencia del Partido resultó ser decepcionante, porque ocurrió un menor rejuvenecimiento del que se había anunciado y no se realizaron cambios realmente significativos en las normas y la organización interna del partido.

El cambio más importante en el sistema político, hasta ahora, ha sido que las dos nuevas provincias (Artemisa y Mayabeque, al oeste y al sur de La Habana) tienen más autonomía y se ha producido una separación entre el poder ejecutivo del gobierno provincial (Consejo de Administración) y los órganos legislativos (Asamblea del Poder Popular) para darle más poder de guía y supervisión a los últimos. También digna de mención es la creación de espacios públicos para la rendición de cuentas de los gobiernos provinciales directamente a la población, y en la presencia de medios de comunicación locales. Este experimento en estos gobiernos provinciales está previsto que se generalice, con correcciones, a todas las provincias del país.

El proceso de debate del congreso ha sido también criticado, por considerar que no incluyó valoraciones políticas, ideológicas o éticas[21]. Ilustrativo de esto es el hecho de que el concepto de socialismo, que fue mencionado sólo dos veces en el Proyecto de Lineamientos, se define en el documento final como «igualdad de derechos y oportunidades» («Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución» 2011, p. 5). Sin embargo, la comisión ejecutiva que supervisa la aplicación de los lineamientos (Comisión de Implementación y Desarrollo de

20 En el Comité Central de 115 miembros, la representación de las mujeres aumentó de 13 % a casi el 42 % y la representación de negros y mestizos aumentó de 21 % a 31 %. Al mismo tiempo, aunque se renovó en más de la mitad, la edad promedio de sus miembros no disminuyó significativamente.

21 Véase, por ejemplo, D'Angelo Hernández 2011b y Campos 2011a.

los Lineamientos), encabezada por Marino Murillo, ha dicho en reiteradas ocasiones que está trabajando en un primer borrador de una «conceptualización teórica integral de la economía socialista cubana» que será sometida a debate popular (Castro Ruz 2011b y Marino Murillo citado en Rodríguez, Barrios y Perera Robbio 2012). Ahora que Fidel y Raúl Castro han reconocido la insostenibilidad del actual «modelo socialista» de Cuba y de la necesidad de actualizar o cambiar, es importante llenar este «vacío ideológico» para que muchos cubanos estén menos temerosos sobre el futuro y se contribuya a definir el nuevo pacto social que regirá en Cuba.

También hay descontento con la forma en que las diversas declaraciones realizadas durante el proceso de debate fueron sintetizadas por funcionarios del PCC, y con que no se hayan establecido espacios de intercambio horizontal entre los núcleos del PCC, lugares de trabajo y comunidades[22]. A pesar de estas deficiencias, sin embargo, muchos han argumentado que el congreso ha servido para diagnosticar de forma más participativa problemas bien conocidos en la organización y administración del país, y para elaborar un consenso nacional a favor de reformar el socialismo cubano.

Aunque algunos sostienen que las causas de fondo de la ineficiencia e ineficacia del Estado cubano aún no han sido identificadas, este período de cambios se puede distinguir de los anteriores en que la autocrítica por los funcionarios del gobierno y del Estado es más directa, abierta y profunda. Hay un reconocimiento de que la generación histórica está obligada a rectificar sus errores y entregar un país en mejor forma a las siguientes generaciones. Al mismo tiempo, declaraciones hechas por Raúl Castro (2011a) y opiniones publicadas en *Granma* (Félix López 30 de agosto del 2011 y J. B. Tamargo Arenado 5 de agosto del 2011) han abordado las preocupaciones de que no es realista esperar que las mismas personas que establecieron las actuales reglas y prácticas sean las que las cambien; y han argumentado que los

22 Véase Campos 2011a.

burócratas que creen obstáculos al cambio deben ser forzados a dimitir. Poco a poco ha estado ocurriendo un traspaso de cargos de gobierno, de miembros de la generación histórica a personas más jóvenes.

Otra particularidad metodológica importante del actual proceso de reforma ha sido el reconocimiento de que los cambios deben estar guiados por la investigación científica y la evaluación continua de la forma en que ellos son percibidos por la población. Un comité técnico asesor, integrado por profesores de la enseñanza técnica y superior e investigadores, fue creado en agosto del 2012 para ayudar a la Cooperación Internacional para el Desarrollo Local (Cidel) en la elaboración de nuevas medidas y la evaluación de su impacto en la sociedad cubana.

A partir del 2013, el proceso de cambios ha iniciado una etapa más profunda y compleja con la creación de nuevas cooperativas "no agropecuarias" más allá del sector agropecuario (tanto a partir de unidades empresariales estatales, como de la iniciativa de los grupos)[23], el otorgamiento de una mayor autonomía a las empresas estatales (Decreto Nº 323, 2014), y cambios en las políticas monetarias y fiscales (en particular, los primeros pasos para la eliminación de la dualidad monetaria)[24]. Se mantiene una atención priorizada a la producción agropecuaria y su comercialización para que se logren los resultados productivos esperados, al mismo tiempo que los productos se hagan accesibles a la población. En este sentido, es importante el experimento que se realiza en el municipio especial Isla de la Juventud, en la comercialización liberada de insumos para la producción agropecuaria, así como experimentos en La Habana con distintos tipos de formas empresariales comercializadoras de la producción agropecuaria (aunque aún no se incluyen las cooperativas de segundo

23 En diciembre del 2012, el marco legal para la creación de cooperativas no agropecuarias (Decreto-Ley Nº 053, 2012), que había sido anunciado un año antes, fue finalmente aprobado.

24 Hasta 2015, cuatro grupos con un total de cuatro grupos con un total de casi 500 cooperativas había recibido la aprobación para comenzar a operar, y las primeras lo hicieron a partir del 1º de julio del 2013. Más de 300 cooperativas no agropecuarias ya estaban operando al cierre del 2014.

grado). En todas estas nuevas medidas y experimentos, la idea es que la comunidad científica e intelectual contribuya a diseñar los cambios y evaluar su impacto para corregir a tiempo sus efectos no deseados.

Este proceso de reforma que tiene lugar en Cuba se ha distinguido también por el amplio e incisivo debate que se ha promovido desde el gobierno, los medios de comunicación oficiales y espacios socioculturales, y se ha desarrollado no sólo en círculos académicos sino en la población en general, mediante cartas a los periódicos, ensayos en internet, blogs, comentarios en programas de radio y televisión, materiales audiovisuales o simplemente debates públicos organizados y espontáneos. Mientras las deliberaciones realizadas en períodos de cambio anteriores estaban limitadas por la preocupación de que éstas fueran utilizadas por el gobierno de Estados Unidos para adelantar sus programas de desestabilización en Cuba, esta vez se ha llamado a evaluar todos los problemas con total transparencia y plantear soluciones diversas, sin apego a dogmatismos. En estos debates se puede apreciar, fundamentalmente, la influencia variable de tres visiones de socialismo, las cuales serán analizadas a continuación.

## Visión estatista: perfeccionemos el socialismo de Estado

El principal objetivo del socialismo para la posición estatista es lograr un Estado representativo bien administrado que controle efectivamente la sociedad. Su énfasis está en lograr un Estado fuerte, no uno más grande sino uno que funcione correctamente y asegure que los subordinados cumplan con las tareas asignadas. Los representantes de esta corriente hacen hincapié en que el Estado es como un ciudadano cubano, distinto al de los países capitalistas: el Estado es "socialista" porque responde a los intereses de los trabajadores y no a los de los capitalistas.

Según la visión estatista, la forma más adecuada para proporcionar los bienes y servicios que todos los ciudadanos necesitan para satisfacer sus necesidades básicas es un Estado centralizado

a través de una estructura vertical. Para ellos, la coordinación horizontal de actores autónomos, individuales o colectivos no es posible y genera caos. Aunque ante las deficiencias de la planificación autoritaria, algunos han aceptado cierta presencia de las relaciones de mercado como algo inevitable. Las organizaciones autónomas –sobre todo gestionadas democráticamente– generan conflictos y promueven la desintegración social. Según esta vertiente del socialismo, los ciudadanos no están preparados para administrar sus propios asuntos, y si se les da la oportunidad de participar en la toma de decisiones, únicamente tendrán en cuenta sus intereses individuales estrechos y cortoplacistas, lo que resultaría en ineficiencia económica y desintegración social.

Al centro de los cambios propuestos por la visión estatista está llevar el control y la disciplina a la sociedad cubana y, en particular, a la economía. La reducción del déficit fiscal y comercial parece ser la prioridad número uno. Esto se ha traducido en la tendencia a establecer impuestos demasiado altos, tanto para las empresas estatales como no estatales, y a reducir gastos mediante el recorte de servicios sociales o el cierre de empresas sin considerar si las comunidades afectadas y los colectivos de trabajadores pueden asumir su gestión y, por lo tanto, disminuir su necesidad de subvenciones[25].

Esta corriente de pensamiento no considera necesario hacer cambios profundos: con mayor control y exigencia por los directivos y el partido[26], junto con cierta descentralización y consulta con las masas, las instituciones actuales pueden funcionar adecuadamente, sobre todo si el Estado se descarga de la gestión de pequeñas y medianas empresas y los gobiernos locales tienen

25 Véase Manguela Díaz (6 de junio del 2011) y D. Matías Luna (30 de septiembre del 2011).

26 Véase la carta de J. P. García Brigos del 8 de noviembre del 2011, donde sostiene que lo que hizo a una panadería ser mejor que otras en su municipio fue que los delegados del gobierno local y otros funcionarios «controlaron y exigieron» fuertemente a los trabajadores un buen producto. Similarmente, E. E. Broche Vidal (16 de septiembre del 2011) dice que «si los directores son mejores, entonces sus subordinados serán mejores». Véase también la carta de D. Borges Mujica del 8 de enero del 2010.

sus propios recursos para resolver problemas en sus territorios. En su opinión, si los salarios estatales pudieran satisfacer las necesidades básicas, la mayoría de los problemas estarían resueltos. Repiten el llamado del presidente Raúl Castro de «cambiar los métodos de trabajo», pero no incluyen en ello permitir a las instituciones ser más autónomas y democráticas, y ni siquiera establecer niveles mínimos de transparencia que posibiliten hacer público el presupuesto de los gobiernos locales y las empresas estatales.

Según la visión estatista, los principales problemas de la sociedad cubana son la indisciplina y la falta de exigencia por los administradores, funcionarios de ministerios y miembros del partido. Ello ha resultado en bajos niveles de productividad y calidad, descontrol y desorganización, lo que ha permitido que el desvío de recursos del Estado se haya hecho natural y que se haya expandido la corrupción. Ciertamente, el control, la disciplina y, más aún, la sistematicidad son realmente necesarios para que cualquier proyecto tenga éxito, y estas prácticas no han sido comunes en los trabajadores y administradores cubanos durante décadas.

Sin embargo, aunque las tres posiciones coinciden en lo dañino que es el descontrol en las instituciones estatales, difieren en cuáles son sus causas de fondo, así como en el tipo de métodos de control que consideran eficaz y justo y, por lo tanto, que debería ser implementado. La visión estatista insiste en el carácter cultural del problema, que podría ser resuelto con educación por medios tradicionales directos o indirectos. Un "cambio de mentalidad" es presentado como la solución de fondo, sin precisar cómo se va a llevar a cabo. Mientras que la visión economicista señala como causa del problema los bajos salarios y proponen instaurar incentivos materiales adecuados; para la visión autogestionaria se trata de la forma en que las instituciones cubanas están organizadas y propone establecer modelos de gestión con relaciones sociales menos alienantes, que permitan el sentido de pertenencia y liberen las capacidades creativas de las personas (Campos 2008 y J. Rodríguez Pérez 2010).

Es decir, la solución para la visión estatista es un mayor control y supervisión en la estructura vertical, y algo –tan poco como sea posible– de autonomía para los administradores[27]. Se piensa sólo en órganos de control externo al grupo que debe ser supervisado, como los directivos sobre los trabajadores, o la recién creada Contraloría General de la República sobre los directivos. Parecen no reconocerse los límites de la supervisión externa y vertical, ni las ventajas del control interno o auto-supervisión por parte de colectivos –de trabajadores o comunidades– que realmente se vean como dueños, y del control social de las personas sobre sus superiores mediante una real rendición de cuentas –transparente, directa y permanente– en las instituciones públicas.

Sería un error suponer que la mayoría de los funcionarios del aparato estatal se identifica con la posición estatista. En todos los niveles del Estado cubano, hay quienes están realmente interesados en reducir la intervención de éste en la vida de las personas[28]; acercándose más a la tendencia economicista o autogestionaria, en dependencia de su experiencia de vida y su exposición a ideas alternativas. Sin embargo, el estatismo tiene una buena representación en los administradores y funcionarios estatales de nivel medio que temen perder sus puestos de trabajo y por tanto su vida profesional (estatus, reconocimiento social, medios disponibles) y/o su capacidad de beneficiarse del Estado a través de la corrupción.

Esta posición es, además, respaldada por muchos cubanos que, cansados de burócratas incompetentes, quieren que regrese el orden, así como otros tantos preocupados por el descontrol social de las últimas décadas que se manifiesta en comportamientos

27 La carta a *Granma* de Fleites Rivero (13 de mayo del 2011) culpa a los administradores de no controlar y plantea que tienen que estar motivados por sus ingresos. Véase también la de Osorio Fernández, 30 de abril del 2010.

28 Raúl Castro, en el discurso de clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 18 de diciembre de 2010, expresó que «el Estado no se tiene que meter en nada que sea pretender regular las relaciones entre dos individuos».

antisociales dañinos económica y culturalmente. Algunos cubanos rechazan cambios más sustanciales por temor a perder los logros sociales de la Revolución. Además, hay unos cuantos intelectuales educados en el marxismo de tipo soviético que se oponen a cualquier tipo de descentralización y a la apertura hacia organizaciones que no estén directa y estrechamente controladas por el Estado, tanto privadas como colectivas. Aunque se podría pensar que los oficiales de las Fuerzas Armadas están más cerca del estatismo, algunos –en especial, gerentes de empresas militares– consideran la posición economicista como más pragmática, mientras que otros entienden las ventajas de la participación y los riesgos de promover lo privado y el mercado para la cohesión social.

## Visión economicista: el socialismo de mercado como único camino factible

De acuerdo con la visión economicista, el objetivo principal del socialismo debe ser el desarrollo de las fuerzas productivas, entendidas como la capacidad tecnológica para crear más riqueza material, es decir, crecimiento económico[29]. El socialismo es entendido como redistribución de la riqueza; por lo tanto, los representantes de la corriente economicista sostienen que la construcción de éste no es posible hasta que las fuerzas de producción se hayan desarrollado lo suficiente: si no hay riqueza no hay nada que distribuir[30]. De ahí que los actuales cambios en Cuba deban buscar, sobre todo, un mejor desempeño de la economía cubana con el fin de poner al país en una senda de desarrollo capaz de satisfacer las necesidades materiales crecientes de la población. Además, argumentan que con una redistribución efectiva de la

29 Véase Omar Everleny Pérez Villanueva 2010, p. 81.

30 Julio A. Díaz Vázquez (2011, p. 124) afirma que fue utópico intentar construir el «comunismo», entendiendo este último como la redistribución de acuerdo con las necesidades. Él sostiene que China y Vietnam, con su «puesta en práctica orgánica del mercado parecen confirmar que» no es posible construir el socialismo sin pasar por un «período mercantil». Véase también N. Labrada Fernández 2010 y Orlando Márquez 2011.

riqueza, todas las instituciones y modelos de gestión eficientes y productivos son útiles para la construcción del socialismo: "no importa el color del gato mientras que cace ratones"[31].

Según la visión economicista, la privatización y mercantilización son esenciales e imprescindibles para el desarrollo económico de cualquier sociedad, socialista o no. Mientras que para la visión estatista, las empresas privadas y las relaciones de mercado son males riesgosos pero necesarios que pueden ser domesticados por el Estado. Para la visión autogestionaria, éstos pueden ser superados gradualmente con la expansión de organizaciones alternativas que sinteticen objetivos económicos y sociales.

La visión economicista identifica las principales causas del bajo rendimiento de la economía cubana en la centralización, el monopolio estatal del comercio y la producción de bienes y servicios, las restricciones blandas de presupuesto y la ausencia de incentivos materiales, como los que resultan de la iniciativa privada y las relaciones de mercado. Aunque no siempre es reconocido públicamente, consideran que el modelo de gestión privada capitalista (empresa autónoma, autoritaria, guiada por intereses privados) es la forma más efectiva de dirigir una empresa, y que los mercados son la más eficaz de coordinar las actividades económicas y asignar recursos. Asimismo, subrayan la importancia de la eficiencia y argumentan, con razón, que la ineficiencia del sector empresarial estatal, al hacer insostenible las conquistas sociales alcanzadas por la Revolución, afecta a todos los cubanos.

Según esta postura, para que los agentes económicos se comporten de manera óptima –es decir, para que los gerentes tomen las decisiones correctas y los trabajadores aumenten la productividad– son ineludibles, y en gran medida suficientes, los incentivos materiales y la "disciplina del mercado"[32]. Los productores y los consumidores deben sufrir las consecuencias de

31 Véase la carta de Cruz Vento al diario *Granma* del 19 de febrero del 2010.

32 Pavel Vidal Alejandro sugiere emular a Vietnam, donde la expansión del sector privado y las relaciones de mercado han sido las dos medidas más importantes (citado por Lenier González Mederos 2011, pp. 48, 52).

sus acciones en la forma de mayores/menores ingresos, incluso si no tienen control sobre sus propias opciones. La visión economicista está en contra de las relaciones paternalistas entre los cubanos y las instituciones del Estado, las que han provocado que muchos esperen que sus problemas se los resuelvan otros. Pero esta posición parece olvidar que el papel del Estado –aun en una sociedad capitalista– es proteger a sus ciudadanos; no satisfacer directamente sus necesidades sino asegurar que cuenten con las condiciones y capacidades para hacerlo, si fuera posible, por sí mismos.

Esta posición resta importancia a las preocupaciones de que la privatización y mercantilización resultarán en mayores aumentos en la desigualdad, la marginación de grupos sociales, la explotación de los trabajadores asalariados y el deterioro del medio ambiente. Tales inquietudes sociales, se nos dice, deben dejarse para más adelante y no interferir en el avance de los cambios. Las consecuencias colaterales de las reformas son naturales y se pueden tomar algunas medidas para reducirlas, arguye. Además, hace un llamado a aceptar el hecho de que habrá "ganadores" y "perdedores" en función de sus capacidades de lidiar con las nuevas reglas del mercado[33]. La justicia social parece ser una expresión incómoda. Para esta posición, los objetivos sociales son demasiado abstractos, y será suficiente con un sistema de impuestos que controle la brecha de ingresos junto con legislaciones que protejan a los clientes, los trabajadores asalariados y el medio ambiente.

Buscando la manera de lograr un crecimiento económico acelerado, defienden la necesidad de insertar a Cuba en el mercado internacional y atraer la inversión extranjera. Insisten en

33 Félix López, periodista de *Granma*, sugiere que la justicia social puede ser «enemig[a] de la libertad y la eficacia» (2011a), y plantea que, aunque la apertura a la pequeña empresa privada ha sido una decisión correcta, sin medidas para socializarlas ello implica riesgos importantes sobre los cuales no se está actuando aún (2011b). Pérez Villanueva afirma que no debe haber «miedo a las distorsiones que necesariamente van a aparecer en la primera etapa de los cambios» (ob. cit., p. 81). Véase también Orlando Márquez, ob. cit., p. 6.

el hecho innegable de que Cuba no puede prescindir de financiación externa, y apuntan hacia el éxito de China y Vietnam en promover el crecimiento mediante la atracción de inversión extranjera directa. Pero no mencionan los efectos negativos de las reformas en esos países: la creciente desigualdad, el abuso de empresarios y gobiernos locales, el descontento social, la degradación ambiental y el vacío espiritual.

Influenciados por el pensamiento económico hegemónico neoclásico, la visión economicista ha aceptado muchos de sus reduccionismos y supuestos, así como su inclinación a ignorar las condiciones y demandas sociales, y a pasar por alto las ventajas de la asociación y la cooperación, sobre la privatización y la competencia de mercado. Al rechazar el argumento marxista central de que el trabajo asalariado es una relación donde hay explotación, evitan llamar como lo que son a los cuentapropistas que contratan mano de obra: empresas privadas, porque ello les permite ignorar también los efectos sociales de este tipo de empresas[34]. No teniendo en cuenta que las fallas de mercado no se deben a la falta de competencia, sino que son inherentes incluso a los mercados competitivos, esperan que una mayor competencia y una menor regulación solucionen el comportamiento cortoplacista, cuasi-cartel y antisocial que muchos cuentapropistas ya manifiestan.

Esta tendencia tiende a desestimar los argumentos que apuntan a la complejidad del comportamiento humano y los componentes sociales de la individualidad, que explican la eficacia y la viabilidad de las empresas gestionadas democráticamente. La democracia es buena, pero es un extra; no es realmente esencial

34 Incluso algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no han reconocido que los trabajadores contratados se encuentran en una posición de subordinación ante los que les contratan, aunque ellos también trabajen, situación que va a agudizarse según disminuya la oferta de empleo estatal (José Alejandro Rodríguez, 4 de marzo del 2011). Negar la relación desigual y, en gran medida, antagónica entre los propietarios de negocios y los trabajadores contratados, permite a los tecnócratas ignorar la necesidad de proteger a los últimos con un código del trabajo o algunas normas que garanticen sus derechos mínimos.

para una sociedad mejor: los expertos deben ser los que tomen las decisiones. Los llamados a utilizar otros instrumentos de realización humana además de los bienes materiales, como las relaciones armónicas con los demás, el desarrollo profesional o el reconocimiento social, y las advertencias sobre los peligros del consumo irresponsable y compulsivo, les parecen retrógradas, opresivas a la libertad individual y, por tanto, limitadoras del avance de la economía cubana.

Al igual que con la visión estatista, sería un error identificar como suscriptores de esta posición a todos los académicos o profesionales graduados de economía o que ejercen ocupaciones afines. Hay economistas que no subvaloran las metas sociales porque reconocen la necesidad de mirar integralmente todo el sistema social y ver las actividades económicas como interdependientes y, de esta forma, responsables de sus efectos sobre él[35]. Por otra parte, el economicismo tiene un terreno fértil en los tecnócratas estatales y burócratas a cargo de diseñar nuevas políticas, pues es más fácil para ellos asumir que los agentes privados se van a auto-regular a través del funcionamiento de las leyes del mercado y, por lo tanto, pueden pasar por alto las preocupaciones sociales. Los defensores más fervientes de esta posición seguramente son aquellos administradores de las empresas estatales que esperan que se les transfiera su gestión –saben que la propiedad legal, al menos inicialmente, seguirá en manos del Estado–[36]para finalmente poder administrarlas según sus intereses, así como evitar todos los obstáculos y el sinsentido que el sistema de "planificación" actual significa para ellos. Más autonomía y menos control, menos seguridad laboral y sólo participación formal de los trabajadores les parece una situación casi perfecta.

35 Véase Óscar Fernández Estrada, ob. cit.

36 Algunos gerentes de pequeñas unidades empresariales estatales están limitando su desempeño a propósito, con la esperanza de que las unidades les serán arrendadas a ellos en condiciones análogas a lo que ha sucedido con las unidades de peluquería y barbería.

Sin embargo, el economicismo no sólo está presente entre los economistas, tecnócratas y directivos estatales. Muchos cubanos, expuestos a la idea de que los objetivos sociales son irreconciliables con la eficiencia y la sostenibilidad económica, así como a que el crecimiento económico de China y Vietnam se basa en su amplia privatización y mercantilización, ven las propuestas economicistas como las únicas soluciones posibles a las deficiencias actuales de la economía cubana.

## Visión autogestionaria: sólo un socialismo democrático es verdadero y sustentable

Al igual que la visión estatista –y a diferencia del economicismo más puro– la visión autogestionaria defiende la necesidad de un orden social más justo y sustentable[37] que el capitalismo. Sin embargo, prevén un camino diferente del "socialismo estatista" que ha marcado fuertemente la versión cubana y que la visión estatista intenta renovar, y del "socialismo de mercado" que la visión economicista presenta como el único factible. La posición autogestionaria argumenta que no puede haber socialismo verdadero sin solidaridad, sin igualdad –no igualitarismo–, sin participación sustantiva de las personas en la toma de decisiones en todos los ámbitos de organización social –política, económica, cultural, etc.–. Para ellos, la esencia del socialismo es la autogestión o autogobierno reproducido por las personas en sus lugares de trabajo, sus comunidades y hasta a nivel nacional, y, eventualmente, hasta abarcar toda la humanidad. Es decir, socialismo es control social, de la sociedad, sobre el Estado, la economía, el sistema político y todas las instituciones sociales[38].

37 Mientras que "sostenible" implica que puede sostenerse a lo largo de cierto tiempo, el concepto de "sustentable" se refiere a la capacidad de tener en cuenta los intereses de las generaciones presentes y futuras.

38 Ricardo Ronquillo Bello (2011) afirma que el socialismo «sólo es posible donde prevalezca un transparente, democrático y real control obrero». Fernando Martínez Heredia (2009, p. 37) hace hincapié en que el socialismo es el proyecto de liberación humana que requiere la acción consciente del pueblo. Otros escritores coinciden con Martínez Heredia en que el

Inspirados en las conceptualizaciones del Socialismo del siglo XXI, y reafirmando los ideales humanistas, emancipadores e igualitarios que han marcado la revolución cubana desde sus inicios[39], la visión autogestionaria sostiene que el objetivo del socialismo debe ser el desarrollo humano integral de todas las personas[40]. Esta suprema felicidad, autorrealización, libertad plena, pueden lograrse, básicamente, permitiéndole a cada persona desarrollar todas sus capacidades mediante la participación efectiva en las actividades sociales cotidianas, sobre todo en la toma de decisiones que les afectan[41]. Construir el socialismo es, por tanto, democratizar o socializar los poderes; es liberar a los individuos de toda forma de opresión, subordinación, discriminación y exclusión que interfiera en la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales. La posición autogestionaria busca la emancipación tanto de un Estado opresivo como de instituciones económicas no democráticas que no satisfacen las necesidades de las mayorías, como las empresas privadas y estatales convencionales, y los mercados o mecanismos de distribución verticales[42].

Para ellos, el objetivo del socialismo cubano no debe ser cubrir las necesidades materiales crecientes de sus ciudadanos, sino también establecer las condiciones que les permitan desarrollar plenamente sus capacidades como seres humanos y así

socialismo no resulta automáticamente del desarrollo de las fuerzas productivas, y que la participación real es una de las «condiciones» para la aparición de la esperada «conciencia social». Véase también Julio César Guanche 2009, pp. 227-236.

39 Baste considerar el pensamiento humanista de José Martí, así como las obras de Raúl Roa y Fernando Martínez Heredia que subrayan la esencia emancipadora del socialismo.

40 Véase Julio Antonio Fernández Estrada y Julio César Guanche 2010, pp. 4 y 10-11.

41 La idea de Marx sobre el desarrollo humano a través de la práctica revolucionaria ha sido destacada por Michael Lebowitz (2009) y se evidencia en el análisis de cubanos como Pedro Campos (2006).

42 Algunos escritores se quejan en sus cartas de que los cuentapropistas compran en las tiendas estatales y acaparan, para luego vender a precios más altos.

satisfacer sus necesidades materiales y espirituales; y asumen que las primeras van a cambiar cuando la vida cotidiana sea más liberadora. Aunque las relaciones de trabajo asalariado y de mercado son también formas de opresión, la mayoría de los defensores de la visión autogestionaria concuerda en que no deben ser prohibidas, y que la sociedad puede avanzar hacia su gradual superación o eliminación –no absoluta– haciendo que las empresas gestionadas democráticamente y las relaciones horizontales socializadas (o "mercados socializados")[43] sean más efectivas y atractivas[44].

El principal problema del socialismo cubano no es que la política haya superado a la economía, como plantea la posición economicista, sino cómo esa "política" ha sido definida. La visión autogestionaria argumenta que las decisiones, a nivel central del Estado e incluso en los gobiernos locales y las empresas, han sido tomadas muy a menudo sin una verdadera participación del pueblo, y que por ello los beneficios de la participación han sido perdidos[45]. Las condiciones para el éxito de la actividad económica –o las "leyes económicas" que siempre nos recuerda la posición economicista– habrían sido tenidas en cuenta si la toma de decisiones hubiera permitido la participación de todos los grupos sociales afectados por éstas, y los criterios de los expertos hubieran sido escuchados. Es la escasa o nula participación democrática en las instituciones políticas y económicas, el insuficiente control democrático de los órganos ejecutivos y de dirección, lo que –además de los bajos ingresos– resulta en la poca motivación hacia el trabajo, las decisiones gerenciales equivocadas y la corrupción en todos los niveles del Estado.

---

43 Los "mercados socializados" son aquellos espacios de intercambio horizontal controlados por representantes de intereses sociales; promueven que los participantes autónomos (vendedores y compradores) internalicen esos intereses. Existen varios modelos de planificación democrática o participativa que permiten institucionalizarlos.

44 Véase Piñeiro Harnecker 2011, pp. 70-76.

45 Véase Mayra Espina 2008, p. 137 y Carlos Alzugaray (citado por Pérez y otros 2011a).

Aunque la visión autogestionaria concuerda con la estatista y la economicista sobre la necesidad de –respectivamente– ejercer un mayor control y establecer un sistema coherente de incentivos en las instituciones cubanas, ésta identifica diferentes causas de fondo de los problemas y propone soluciones diferentes. El magro desempeño de las instituciones del Estado es principalmente consecuencia del poco sentido de pertenencia de los trabajadores, e incluso de los directivos. A diferencia de las otras dos tendencias, ésta considera que los problemas en la realización del sentido de propiedad de las instituciones estatales se derivan, en esencia, de la naturaleza del proceso de toma de decisiones y de las relaciones sociales que se establecen dentro de ellos, y no fundamentalmente por la falta de formación[46] o la necesidad de incentivos privados estrechos[47]. Sin una verdadera propiedad –que no se equipara a la propiedad legal– de los trabajadores, no habrá motivación para asegurar que los recursos se utilicen correctamente[48].

La posición autogestionaria subraya la necesidad no sólo de redistribuir la riqueza, sino sobre todo de cambiar cómo ella se produce, de que las instituciones estén organizadas de modo

46 Para Fidel Vascós González (2009, p. 104), la conciencia socialista es resultado fundamentalmente de la educación.

47 Según José Ramón Fabelo Corzo (citado en Delia Reyes y Vladia Rubio 2010): «Si no tengo posibilidad de decidir sobre lo que produzco, ni sobre su destino, ni intervengo en la gestión, en la planificación y muchas veces tampoco gano en dependencia de lo que hago, ¿qué sentimiento de propietario voy a tener…?». Fabelo Corzo propone armonizar incentivos morales y materiales, y señala que los mecanismos económicos por sí solos no son adecuados.

48 Véase Rafael Hernández (Citado en «¿Dossier: Hacia dónde va el modelo cubano?», 2011, p. 19). José Antonio Fraga Castro, director de la empresa estatal Labiofam, «llamó a establecer mecanismos y métodos que motiven a los trabajadores a que sientan que sus empresas son realmente suyas y participen de manera sustantiva en el proceso de gestión» como la mejor manera de resolver los problemas actuales (2011). La carta de A. Manso Borges (23 de julio del 2010) advierte que la privatización no es la solución, y defiende socializar la propiedad con 1) la verdadera participación en la gestión de los trabajadores, 2) la educación económica y política, y 3) el desarrollo de sus capacidades, guiados por los intereses colectivos e individuales.

que permitan el ejercicio de verdaderas relaciones socialistas. Esto desarrollaría la productividad y creatividad de las personas, y la riqueza se generaría desde el comienzo de manera más equitativa y justa[49]. Para ellos, "democratizar" o "socializar" es establecer las relaciones sociales de trabajo asociado y asociación en general, es decir, la propiedad social que Marx identificó como la base sobre la que descansa una sociedad que se propone trascender el orden capitalista[50]. Además, señalan que dichas relaciones, y no sólo salarios más altos o mayor autonomía para los gerentes, son una fuente importante de incentivos para la productividad y la eficiencia, y que al mismo tiempo promueven el desarrollo de los hombres y mujeres "nuevos" sin los que la construcción socialista es impensable. La visión autogestionaria enfatiza la necesidad de promover una conciencia socialista, marcada por la solidaridad y el compromiso revolucionario con los históricamente marginalizados, y agrega que ello sólo se puede lograr como resultado de la práctica cotidiana bajo relaciones de asociación y cooperación[51].

Según las visiones estatista y economicista, la democracia en el lugar de trabajo es en esencia una utopía incómoda que desafía la superioridad de sus cuadros, expertos o empresarios, y resultaría en un caos que conduciría a la ineficiencia. Sin embargo, para la visión autogestionaria los niveles deseables de eficiencia y productividad (aunque no aquellos logrados mediante la sobrexplotación de los hombres y la naturaleza) se alcanzan precisamente democratizando la gestión de las empresas. Están convencidos de que la participación –aunque no es fácil de

49 Véanse Juan Luis Martín en Perera Robbio y Martín González, ob. cit.; Martínez Heredia, ob. cit., pp. 33-34; «¿Dossier: Hacia dónde va el modelo cubano?», ob. cit., p. 27; y Espina, ob. cit., pp. 134-135.

50 Véase Campos 2006.

51 Véase Carlos Tablada 2009, pp. 141-145 y 148-149; Espina, ob. cit., pp. 135-137. La carta de Aledo Roller (4 de septiembre del 2011) plantea que «es la forma en que organizamos nuestra vida económica y material lo que, en última instancia, determina la conciencia social» y, al defender el sistema de cooperativas, explica que en el socialismo no debe haber trabajo asalariado y que la competencia de mercado y la anarquía no deben «gobernar nuestras vidas».

lograr– constituye un medio indispensable para alcanzar mayores niveles de desarrollo de las capacidades, tanto de los trabajadores (manuales, intelectuales, espirituales) como de las fuerzas productivas en general, ya que el control social asegura el uso efectivo de los recursos y ofrece incentivos positivos para la productividad, no disponibles de otro modo. Rechaza la falsa dicotomía propuesta por el economicismo que plantea que hay que elegir entre la eficiencia con inevitable desigualdad y la justicia social con carencias materiales (Julio César Guanche 2010, Armando Chaguaceda y Ramón I. Centeno 2011).

Los que se identifican con esta posición advierten sobre los riesgos de la descentralización de los gobiernos locales y las empresas estatales sin democratización, es decir, que le permita a las nuevas autoridades utilizar recursos según sus criterios y sin el control de los supuestos beneficiarios[52]. Del mismo modo, llaman la atención sobre la liberalización de las muy necesarias relaciones horizontales entre agentes económicos, y sobre la necesidad de no reducir la coordinación a un conjunto de normas[53]. Algunos defienden la necesidad de establecer, además de un marco regulatorio bien diseñado, espacios de coordinación democrática entre productores, consumidores y otros grupos sociales (ecologistas, feministas, minorías, etc.) para que la economía local pueda ser orientada hacia intereses sociales en lugar de hacia la maximización de ganancias[54]. Mientras que otros reducen la coordinación macroeconómica a un mercado regulado

52 Véase D'Angelo 2011a y la carta de A. Martín 2010, que alerta que la incapacidad de los trabajadores de participar realmente en el proceso de disponibilidad, podría dar lugar a que los jefes abusen de su poder.

53 Arturo López-Levy alerta sobre las limitaciones objetivas inherentes a los mercados reales (no los descritos en los libros de texto). Se pronuncia en contra de «las concepciones economicistas», y que el objetivo no debe ser el crecimiento económico, sino un desarrollo sostenible con objetivos sociales y ambientales (en Pérez, Veiga, González y Pestano 2011a).

54 En su carta a *Granma*, O. Sandoval López (2011) se queja de que los nuevos taxis privados no se preocupan por la gente, y sugiere «incentivar la solidaridad», disminuyendo los impuestos para aquellos que cobren precios más asequibles, y efectuar la supervisión social de las personas.

y no explican cómo evitar el surgimiento de intereses grupales ajenos a los sociales.

Pero la visión autogestionaria es percibida como voluntarista cuando no tiene en cuenta que no todos los cubanos están interesados en asumir la responsabilidad de participar en la gestión de sus empresas y gobiernos locales. No ha argumentado claramente por qué y cómo la democratización es factible, y de qué manera ésta puede resultar en mayor eficiencia y productividad. No obstante, ello no niega la posibilidad de establecer políticas públicas que permitan un incremento gradual de la participación sustantiva en la toma de decisiones en esas organizaciones, y de educación sobre las ventajas de participar en la toma de esas decisiones que nos afectan.

Es difícil definir qué sectores de la sociedad cubana se identifican con esta tendencia. De hecho, ante los constantes mensajes en defensa de la privatización y la mercantilización a través de diversos medios nacionales y extranjeros, no es sorprendente que muchos cubanos vean la propuesta autogestionaria como utópica. En Cuba ha habido pocas experiencias de empresas y gobiernos locales gestionados democráticamente, antes y después de 1959. Además, la idea de la participación democrática puede haber perdido su significado entre los cubanos porque las autoridades han repetido que el sistema político cubano y las empresas estatales son lo más participativas posible, y también porque la autonomía de gestión, e incluso de operación de las "cooperativas" agropecuarias, han estado seriamente limitadas. De ahí que es comprensible que los defensores más convencidos de esta postura sean intelectuales y profesionales que se han familiarizado con formas "alternativas" de pensar y construir el socialismo, o que han estado expuestos a los discursos sobre el Socialismo del siglo XXI.

Sin embargo, la preferencia por la gestión democrática de organizaciones sociales es intuitiva (que resulta de la intuición o instinto humano) para todos los cubanos que perciben que la mejor manera de resolver algunos de sus problemas más apremiantes es mediante el trabajo colectivo o cooperando con

aquellos que sufren las consecuencias del autoritarismo en sus empleos y sus comunidades, o bien los que comienzan a sufrir las consecuencias negativas de la privatización y mercantilización, tales como el incremento de precios, evasión de impuestos, relación de subordinación de los trabajadores contratados, etc.[55]. Además, los trabajadores estatales, ante la vinculación de los salarios al desempeño de sus empresas, están cada vez más interesados en tener control sobre ellas, incluso han planteado poder elegir a sus directivos[56]. Algunos están llamando a crear cooperativas en las empresas estatales no estratégicas[57] y en determinadas localidades (Cárdenas,en Matanzas, y Santos Suárez en La Habana), los ciudadanos han intentado resolver de forma autónoma ciertos problemas de la comunidad.

## Consideraciones finales

En Cuba se define actualmente un nuevo camino para la nación. Se tratará de un socialismo estatista mejor organizado, uno de mercado, uno realmente democrático, o –más probablemente– una combinación de los tres. Predecir qué visión va a prevalecer en los cambios actuales es un mero ejercicio de especulación. Sin embargo, algunas evidencias permiten evaluar el peso que cada postura ha tenido, y las posibilidades de fluctuación de su influencia.

Sin dudas, el economicismo es lo que predomina tanto en el Estado como entre la mayoría de los cubanos. Al presentar a la empresa privada y el mercado como los más eficientes, ante el fracaso de las empresas estatales convencionales y la planificación autoritaria, y ante el desconocimiento de la factibilidad de otras formas de socialización de la economía, muchos no creen que existan mejores alternativas. Sin embargo, muchos cubanos no ven el

55 Véanse J. C. Fariñas Carmona 2011, Pastor Batista Valdés 2011 y Lenier González (citado por Pérez y otros 2011a).

56 Véase la carta a *Granma* de E. González Cruz 2011.

57 Véanse las cartas de J. Rodríguez Vega 2011, N. Paéz del Amo 2011 y A. Arteaga Pérez 2011.

funcionamiento de la empresa privada y los mercados como algo natural, y desean poder evitarse sus irracionalidades, como los precios diferenciados y variables, más beneficios para el comercio que la producción, explotación, etc., así como sus efectos negativos: desigualdades, contaminación, discriminación, etc.

El estatismo es abiertamente reconocido como la corriente de pensamiento que nos ha conducido a la situación actual y, por tanto, de la que tenemos que alejarnos. No obstante, sobre todo debido a un instinto de conservación, ésta todavía goza de importante apoyo dentro del Estado y entre aquellos que temen perder los logros sociales de la Revolución. De hecho, la versión final de los *Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución* es menos economicista y más estatista que la inicial[58]. Otra evidencia de la pérdida de influencia de la tendencia economicista es la moratoria en el plan que pretendía reubicar o despedir 10 % de la fuerza laboral cubana[59].

De la visión autogestionaria hay muy poco en los *Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución* y los cambios actuales. Éstos no reflejan los objetivos –satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de las personas, es decir, las relativas al desarrollo humano–, ni los medios –democracia participativa, control democrático de la sociedad, en particular, de la política y la economía– propuestos por la posición autogestionaria («¿Dossier: Hacia dónde va el modelo cubano?», ob. cit., p. 29.). Aunque el presidente Raúl Castro y otros altos funcionarios del Estado han mencionado varias veces la importancia de la "participación", el documento partidista sólo lo hace tres veces, y realmente en el sentido de consulta o

58 De combinar la planificación y el mercado, se pasó a mantener la planificación como herramienta central, «teniendo en cuenta el mercado» (Lineamiento Nº 1). De las empresas del Estado que fijaban precios libremente, se cambió a «revisar integralmente el Sistema de Precios» (Lineamiento Nº 67), aunque sin decir cómo se va a hacer («Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución» 2011).

59 El plan de reubicar mediante el proceso de disponibilidad a 500 mil trabajadores estatales fue abandonado y, aunque se continuaba aplicando, se hacía de forma mucho más lenta.

implementación de decisiones tomadas por otros («Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución», ob. cit., pp. 21, 22 y 38). El único acercamiento a la posición autogestionaria está en el reconocimiento de las cooperativas como una forma socialista de empresa, aunque no se declara una intención de darles prioridad sobre las empresas privadas. La decisión de otorgar una mayor autonomía a las empresas estatales y gobiernos municipales es un paso positivo, pero aún no se reconoce el imperativo de democratizarlos. Tal ausencia refleja el hecho de que la posición autogestionaria está en minoría, al menos en los actuales espacios de poder, lo cual, en gran medida, es resultado de la cultura verticalista, autoritaria y patriarcal que ha caracterizado a la sociedad cubana antes y después del triunfo revolucionario. Aunque esta posición dio pasos de avance con el comienzo del experimento con las cooperativas no agropecuarias, la manera en que estas formas empresariales han sido promovidas desde el Estado[60] y otras medidas relevantes también para el mundo del trabajo, sobre todo el Código de Trabajo y las nuevas regulaciones para la empresa estatal socialista, parecieran alejarnos aún más de la visión autogestionaria de socialismo, pues la participación de los trabajadores continúa siendo subvalorada y es reducida a la consulta e información sin hacerles partícipes de la toma de decisiones.

Sin embargo, el imaginario de justicia social y emancipación sigue presente en la identidad de muchos cubanos. Aunque los nietos de la "generación histórica" están menos familiarizados con los ideales socialistas y revolucionarios, muchos también valoran la dignidad y la justicia, e incluso rechazan posiciones de subordinación. La cultura de la solidaridad cultivada por la Revolución aún perdura, por lo que las diferencias sociales resultan

60 Investigaciones realizadas muestran que, entre otras dificultades, las nuevas cooperativas están surgiendo sin la capacitación necesaria, que se está subestimando la importancia de la educación cooperativa y su responsabilidad social, y que el principio de voluntariedad no se está respetando en toda su dimensión para el caso de un número significativo de cooperativas que surgen de empresas estatales. Véase Piñeiro Harnecker 2014.

incómodas e injustas para muchos. Algunas personas han advertido que sin participación o control social de empresas y de gobiernos locales autónomos, Cuba está allanando el camino hacia el capitalismo[61]. Recientemente han surgido ciertas señales sobre la creciente presencia de la posición autogestionaria, en artículos que defienden la necesidad de los trabajadores de participar realmente en las decisiones de gestión para poder asumir el papel de verdaderos dueños[62].

Las tres posiciones analizadas no pueden reducirse a opciones "buenas" o "malas". Todas plantean preocupaciones legítimas que deben ser consideradas en cualquier decisión estratégica. No obstante, la conveniencia de la democracia –no la representativa liberal, sino una "real" o "participativa"– es ampliamente aceptada en el mundo de hoy. De ahí que, desde una perspectiva normativa, la visión que busca mayores niveles de democracia debe ser más deseable. Parece más justo que la sociedad decida democráticamente su destino en lugar de colocar este poder en funcionarios estatales que se comprometan a representar los intereses de la sociedad, o –peor aún– en actores económicos bien dotados para dirigir desde las sombras "una mano invisible" que nos afecte a todos.

En el actual proceso de definición del tipo de socialismo que los cubanos estaremos construyendo por las próximas décadas, debemos saber que hay opciones entre el socialismo de Estado y el de mercado. Si nuestro objetivo continúa siendo alcanzar una sociedad lo más justa posible, debería abrirse más espacio a las ideas autogestionarias en los medios de comunicación, y los líderes deberían retomar el énfasis en el valor de la igualdad, la justicia y la solidaridad. También habría que tener en cuenta la importancia que otros procesos revolucionarios actuales en América Latina le han otorgado a la democracia participativa en

61 La carta de E. Regalado García (2010) alerta sobre el riesgo de «volver al pasado».

62 Muchas de las cartas a la dirección de *Granma* ya citadas que proponen la creación de cooperativas defienden que es la mejor manera de lograr el sentido de pertenencia. Isabel Damaris Castañeda Pérez y Gonzalo Rubio Mejías 2011 proponen la «co-propiedad» o cogestión en las empresas estatales.

todas las esferas de la sociedad. Debe avanzarse de forma más efectiva, mejor concebida, en la promoción de cooperativas en todos los sectores, de manera que más cubanos puedan experimentar con la autogestión. Ahora que los gobiernos locales y empresas estatales tendrán más autonomía, al menos se deben experimentar métodos más democráticos, como el presupuesto y la planificación participativos. Es necesario ser pragmáticos, pero desde una noción menos simplista de nuestra sociedad y desde una visión menos condescendiente de nosotros mismos. Los cubanos dispuestos a experimentar con la autogestión deberían poder hacerlo, para así decidir, a partir de su experiencia, si es un camino preferible o no.

Una estrategia centrada sólo en sostener un crecimiento económico y en mejorar el desempeño del Estado cubano puede mejorar las condiciones de vida de una parte de la población, y podría ayudar a mantener el apoyo al proyecto socialista cubano. Sin embargo, en la medida en que el crecimiento económico venga fundamentalmente de la privatización y la mercantilización –en lugar de la democratización o socialización de la economía–, los intereses de los nuevos empresarios inevitablemente se van a alejar de los sociales, y van a encontrar el modo de contribuir con menos impuestos, cobrar precios más altos, externalizar los costos a la sociedad, tanto como sea posible. No demasiado tarde, como ocurre en los países capitalistas y en aquellos con economías de mercado, ellos buscarán que el Estado responda a sus intereses privados. Del mismo modo, en la medida en que los administradores de los gobiernos locales y empresas estatales tengan más autonomía sin democratización, se harán comunes los abusos de poder y los trabajadores más capaces y revolucionarios se van a mover desilusionados hacia el sector privado u otros países.

Por lo tanto, si los cambios se concentran únicamente en "perfeccionar la economía", no sólo no se logrará el objetivo de mejorar las condiciones materiales de vida de la población cubana, sino que la cohesión social que ha sostenido a la Revolución se verá afectada. Sus principales defensores estarán menos inclinados

a apoyar un proyecto que no tiene en cuenta sus necesidades y expectativas de justicia y dignidad.

## Referencias

ALEDO ROLLER (2011, 4 de septiembre). «Cartas a la dirección». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion

ARTEAGA PÉREZ, A. (2011, 20 de mayo). «Cartas a la dirección: Llevar a la práctica los Lineamientos aprobados». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-151.html

BORGES MUJICA, D. (2010, 8 de enero). «Cartas a la dirección: No creo en la privatización». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-92.html

BROCHE VIDAL, E. E. (2011, 16 de septiembre). «Cartas a la dirección: Falta de sistematicidad y control: el factor común». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/cartas-direccion/cart-165.html

CAMPOS, Pedro (2006, 29 de septiembre). «¿Qué es el socialismo?». En *Selección de Información Referativa y Factográfica* [página en línea]. Recuperado de www.oocities.org/es/amigos_pedroc/Socialismo-1.htm

_____ (2008, 21 de julio). «Cooperativa, cooperativismo y autogestión socialista». *Kaos en la red* [periódico en línea]. Recuperado de www.kaosenlared.net/noticia/cooperativa-cooperativismo-autogestion-socialista

_____ (2011a, 10 de enero). «Convocatoria y Lineamientos del Congreso: insuficientes para el socialismo». *Observatorio Crítico Cubano. ¡Lucha tu yuca taíno!* [página en línea]. Recuperado el 15 de enero del 2012 de https://observatoriocriticocuba.org/2011/01/10/lineamientos-insuficientes-para-socialismo/

_____ (2011b, 30 de noviembre). «La Conferencia del PCC puede ser la última oportunidad: Hay que acabar de hacer la revolución social

pendiente». *Havana Times* [periódico en línea]. Recuperado el 15 de enero del 2011 de http://www.havanatimes.org/sp/?p=53606

CASTAÑEDA PÉREZ, Isabel Damaris y Gonzalo Rubio Mejías (2011, 2 de septiembre). «Mirar adelante con sentido crítico y con ciencia». *Diario Granma* [periódico en línea], La Habana, *15* (245). Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/2011/09/02/nacional/artic07.html

CASTRO RUZ, Fidel (2005). «Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente de la República de Cuba, en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, efectuado en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre de 2005» [documento en línea]. Recuperado el 15 de enero del 2012 de http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html

CASTRO RUZ, Raúl (2007, 26 de julio). «Trabajar con sentido crítico y creador, sin anquilosamiento ni esquematismos. Discurso pronunciado en el acto central con motivo del aniversario 54 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz de la ciudad de Camagüey, el 26 de julio del 2007, Año 49 de la Revolución». En *Diario Granma*, [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/raul26/

_____ (2010a). «Discurso pronunciado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en la clausura del IX Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. La Habana, 4 de abril de 2010, Año 52 de la Revolución» [documento en línea]. Recuperado el 15 de enero del 2012 de http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2010/esp/r030410e.html

_____ (2010b, 18 de diciembre). «Raúl Castro: "Las medidas que estamos aplicando están dirigidas a preservar el socialismo"». *Cubadebate. Contra el Terrorismo Mediático* [periódico en línea]. Recuperado el 15 de enero del 2012 de http://www.cubadebate.cu/raul-castro-ruz/2010/12/18/raul-castro-discurso-en-la-asamblea-nacional/

_____ (2011a, 19 de abril). «Discurso pronunciado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido, Raúl Castro Ruz, en la clausura del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en el Palacio de Convenciones. "Año 53 de la Revolución"» [documento en línea]. Recuperado el 15 de enero del 2012 de http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2011/esp/r190411e.html

_____ (2011b, 1 de agosto). «Discurso de Raúl en la Asamblea Nacional: "Limpiémonos la cabeza de tonterías de todo tipo" (+ Video y Fotos)». *Cubadebate. Contra el Terrorismo Mediático* [periódico en línea]. Recuperado el 15 de enero del 2012 de http://www.cubadebate.cu/especiales/2011/08/01/discurso-de-raul-en-la-asamblea-nacional/

CHAGUACEDA, Armando y Ramón I. Centeno (2011, enero-marzo). «Cuba: una mirada socialista de las reformas» [documento en línea]. En *Espacio Laical*, La Habana, *1* (25), pp. 50-53. Recuperado de http://www.espaciolaical.org/contens/25/5053.pdf

CRUZ VENTO, P. (2010, 19 de febrero). «Cartas a la dirección: ¿Qué es lo que tenemos?». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-100.html

D'ANGELO HERNÁNDEZ, Ovidio (2011a, 12 de julio). «¿Qué conferencia y lineamientos necesitamos?: Conferencia del pueblo para la nueva sociedad». En *Observatorio Crítico Cubano. ¡Lucha tu yuca taíno!* [página en línea]. Recuperado el 15 de enero del 2012 de http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com

_____ (2011b, 16 de julio). «De los lineamientos, claro-oscuros de la economía y la política». En *Observatorio Crítico Cubano. ¡Lucha tu yuca taíno!* [página en línea]. Recuperado el 15 de enero del 2012 de http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2011/07/16/de-los-lineamientos-claro-oscuros-de-la-economia-y-la-politica/

Decreto Nº 292 (2011, 20 de septiembre). *Gaceta Oficial Nº 31 Extraordinaria*. La Habana, 27 de septiembre del 2011.

Decreto Nº 323 (2014, 4 de marzo). *Gaceta Oficial Nº 21 Extraordinaria*. La Habana, 28 de abril del 2014.

Decreto-Ley Nº 053 "De las cooperativas no agropecuarias" (2012, 15 de noviembre). *Gaceta Oficial Nº 053*. La Habana, 11 de diciembre del 2012.

Decreto-Ley Nº 288 (2011, 28 de octubre). *Gaceta Oficial Nº 035 Extraordinaria*. La Habana, 2 de noviembre del 2011.

Decreto-Ley Nº 289 (2011, 16 de noviembre). *Gaceta Oficial Nº 040 Extraordinaria*. La Habana, 21 de noviembre del 2011.

DÍAZ VÁZQUEZ, Julio A. (2011, abril-junio). «Un balance crítico sobre la economía cubana. Notas sobre dirección y gestión». *Temas*, La Habana, (66), pp. 123-133.

«Discurso íntegro de Bruno Rodríguez en la ONU (+ Videos)» (2011, 25 de octubre). En *Juventud Rebelde. Diario de la juventud cubana* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2011-10-25/discurso-integro-de-bruno-rodriguez-en-la-onu/

«¿Dossier: Hacia dónde va el modelo cubano?» (2011, enero-marzo). [Documento en línea]. En *Espacio Laical*, La Habana, *VII* (25), pp. 24-47. Recuperado de http://www.espaciolaical.org/contens/25/2447.pdf

ESPINA, Mayra (2008, octubre-diciembre). «Mirar a Cuba hoy: cuatro supuestos para la observación y seis problemas-nudos». *Temas. Cultura, ideología, sociedad*, La Habana (56).

FARIÑAS CARMONA, J. C. (2011, 23 de septiembre). «Cartas a la dirección: Opinión de un trabajador de la salud». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-166.html

FERNÁNDEZ ESTRADA, Óscar (2011). «El modelo de funcionamiento económico en Cuba y sus transformaciones. Seis ejes articuladores para su análisis». *Observatorio de la Economía Latinoamericana*, La Habana (153). En *Edumed.net* [página en línea]. Recuperado de http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/ofe.html

FERNÁNDEZ ESTRADA, Julio Antonio y Julio César Guanche (2010). «Un socialismo de ley. En busca de un diálogo sobre el constitucionalismo socialista cubano en el 2010». *Caminos. Revista cubana de pensamiento sociológico*, La Habana, (57), pp. 4-11.

FLEITES RIVERO, L. (2011, 13 de mayo). «Cartas a la dirección: La Mesa Redonda debe ser más atractiva». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-150.html

FRAGA CASTRO, José Antonio (2011, 12 de julio). «Orden, disciplina y exigencia». *Tribuna de La Habana*, La Habana.

FRANK, Marc (2011, 5 de octubre). «Cubans look to private sector to make ends meet». *Reuters* [agencia de noticias en línea]. Recuperado de http://www.reuters.com/article/us-cuba-reform-idUSTRE7946OO20111005

GARCÍA BRIGOS, J. P. (2011, 8 de noviembre). «Propiedad y socialismo: un binomio inseparable». *Diario Granma*, La Habana.

GONZÁLEZ, Ana Margarita (2011, 16 de mayo). «Cincuenta razones para quitarnos el sombrero: 50 aniversario de la ANAP». *Trabajadores, ógano de la central de Trabajadores de Cuba*. La Habana.

GONZÁLEZ CRUZ, E. (2011, 7 de enero). «Cartas a la dirección: La empresa, los cuadros y los trabajadores». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-144.html

GONZÁLEZ MEDEROS, Lenier (2011, abril-junio). «Desarticular el monopolio de la centralización estatal. Entrevista a Pavel Vidal Alejandro». *Espacio Laical,* La Habana, *VII* (26), pp. 46-52.

GUANCHE, Julio César (2009). «Todo lo que existe merece perecer (o una pregunta distinta sobre la democracia)». En Julio César Guanche (coord.), *Autocríticas. Un diálogo al interior de la tradición socialista*, pp. 203-245. La Habana: Ruth Casa Editorial y Editorial de Ciencias Sociales.

_____ (2010, abril-junio). «Es rentable ser libres» [documento en línea]. En *Espacio Laical,* La Habana, (22), pp. 50-55. Recuperado de http://www.espaciolaical.org/contens/22/5055.pdf

LABRADA FERNÁNDEZ, N. (2010, 23 de julio). «Cartas a la dirección: ¿Estatal o no Estatal?». Diario Granma [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-121.html

LEBOWITZ, Michael (2009). *El socialismo no cae del cielo: un nuevo comienzo*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Ley Nº 116: Código del Trabajo (2013, 20 de diciembre). *Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 29*. La Habana, 17 de junio del 2014.

«Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución» (2011, 18 de abril). Aprobado en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba [documento en línea]. Recuperado de http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2011/05/folleto-lineamientos-vi-cong.pdf

LÓPEZ, Félix (2011a, 30 de agosto). «Burócratas vs. cambios». *Diario Granma*, La Habana, p. 3.

_____ (2011b, 23 de septiembre). «Paisaje urbano y desafíos futuros». *Diario Granma*, La Habana, p. 3.

MANGUELA DÍAZ, Gabino (2011, 6 de junio). «Peligra el verano en el CSO Marcelo Salado». *Trabajadores* [periódico en línea]. Recuperado de www.trabajadores.cu/news/2011/06/06/peligra-el-verano-en-el-cso-marcelo-salado

MANGUELA DÍAZ, Gabino, Juanita Perdomo, Manuel Valdés Paz y Gretel Díaz Montalvo (2014, 6 de abril). «Reordenamiento laboral: ¿quién se queda, quién se va?». *Trabajadores* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.trabajadores.cu/20140406/reordenamiento-laboral-quien-se-queda-quien-se-va/

MANSO BORGES, A. (2010, 23 de julio). «Cartas a la dirección: La realización económica de la propiedad social». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-121.html

MARICHAL CASTILLO, J. L. (2010, 14 de mayo). «Cartas a la dirección: La realización económica de la propiedad social». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-121.html

MÁRQUEZ, Orlando (2011, enero). «Opinión: Sin miedo a la riqueza». *Palabra Nueva*, La Habana, XIX (203), pp. 6-7.

MARTÍN, A. (2010, 22 de octubre). «Cartas a la dirección: Una opinión sobre el procedimiento». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-134.html

MARTÍNEZ HEREDIA, Fernando (2009). «Socialismo». En Julio César Guanche (coord.), *Autocríticas. Un diálogo al interior de la*

*tradición socialista*, pp. 15-41. La Habana: Ruth Casa Editorial y Editorial de Ciencias Sociales.

MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Leticia y Yaima Puig Meneses (2011, 1º de marzo). «Sesionó reunión ampliada del Consejo de Ministros». *Diario Gramma*, La Habana, p. 2.

MATÍAS LUNA, D. (2011, 30 de septiembre). «Cartas a la dirección: Yaguajay: aprovechar lo que tenemos con disciplina, organización y control». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-167.html

OSORIO FERNÁNDEZ, S. (2010, 30 de abril). «Cartas a la dirección: ¿Neoliberalidmo socialita?». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-110.html

PÁEZ DEL AMO, N. (2011, 9 de septiembre). «Cartas a la dirección: A grandes males, grandes remedios». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-164.html

PERERA ROBBIO, Alina y Marianela Martín González (2011, 25 de septiembre). «La fuerza invisible que modela el mundo». *Juventud rebelde*, La Habana p. 4.

PÉREZ, José Ramón y otros (2011a, abril). «Cuba: ¿hacia un nuevo pacto social?». *Espacio Laical* [suplemento en línea], La Habana, (125). Recuperado de http://espaciolaical.org/contens/esp/sd_125.pdf

_____ (2011b, noviembre). «Editorial. Rectificar el rumbo». *Espacio Laical* [suplemento en línea], La Habana, (153). Recuperado el 23 de enero del 2012 de http://www.espaciolaical.org/contens/esp/sd_153.pdf

PÉREZ VILLANUEVA, Omar Everleny (2010). «Notas recientes sobre la economía en Cuba». *Espacio Laical Laical* [suplemento en línea], La Habana (3). Recuperado de http://espaciolaical.org/contens/esp/semana_social/0015_economia_cuba.pdf

PIÑEIRO HARNECKER, Camila (2011, julio-septiembre). «Empresas no estatales en la economía cubana: ¿construyendo el socialismo?». *Temas. Cultura, ideología, sociedad*, La Habana (67), pp. 68-77.

_____ (2012, abril-junio). «Distintas visiones sobre el socialismo que guían los cambios actuales en Cuba». *Temas. Cultura, ideología, sociedad*, La Habana, (70), pp. 46-55.

_____ (2014). «Cooperativas no agropecuarias en La Habana. Diagnóstico preliminar». En *Economía cubana: Transformaciones y desafíos*, pp. 291-334. La Habana: Colectivo de autores.

REGALADO GARCÍA, E. (2010, 12 de marzo). «Cartas a la dirección: Defendamos el Socialismo por encima de todo». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-103.html

Reglamento para el funcionamiento de las barberías y peluquerías que aplicarán el arrendamiento de inmuebles a trabajadores por cuenta propia (2011, 19 de octubre). *Gaceta Oficial Nº 036 Ordinaria*. La Habana, 11 de noviembre del 2011.

Reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas naturales para realizar acciones constructivas en su vivienda (2011, 28 de diciembre). *Gaceta Oficial Nº 001 Ordinaria*. La Habana, 4 de enero del 2012.

Reglamento para el Sistema de Gestión Económica con arrendamiento de locales y áreas para el trabajo por cuenta propia en los Servicios Personales, Técnicos y del Hogar (2011, 16 de diciembre). *Gaceta Oficial Nº 046 Extraordinaria*. La Habana, 23 de diciembre del 2011.

Resolución Nº 17/2014. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2014, 23 de abril). *Gaceta Oficial Nº 21 Extraordinaria*. La Habana, 28 de abril del 2014.

REYES, Delia y Vladia Rubio (2010, 13 de octubre). «Llave maestra». *Bohemia*, La Habana.

RODRÍGUEZ, José Alejandro (2011, 4 de marzo). «Casi se duplican los trabajadores por cuenta propia». *Juventud Rebelde. Diario de la juventud cubana* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2011-03-04/casi-se-duplican-los-trabajadores-por-cuenta-propia/

RODRÍGUEZ, José Alejandro, Margarita Barrios y Alina Perera Robbio (2012, 14 de diciembre). «Lo más complejo está por delante». *Juventud Rebelde. Diario de la juventud cubana* [periódico en línea].

Recuperado de http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2012-12-14/lo-mas-complejo-esta-por-delante/

RODRÍGUEZ VEGA, J. (2011, 23 de septiembre). «Cartas a la dirección: ¿Cuándo resolveremos el problema del pan?». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-166.html

RODRÍGUEZ PÉREZ, J. (2010, 7 de mayo). «Cartas a la dirección: Trasformemos este bello país comenzando por la mentalidad de las personas». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-111.html

RONQUILLO BELLO, Ricardo (2011, 24 de septiembre). «Decido, luego existo». *Juventud Rebelde. Diario de la juventud cubana* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.juventudrebelde.cu/opinion/2011-09-24/decido-luego-existo/

SANDOVAL LÓPEZ, O. (2011, 30 de septiembre). «Cartas a la dirección: Con el transporte particular de pasajeros se puede hacer algo». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-167.html

TABLADA, Carlos (2009). «El socialismo del Che». En *Autocríticas: un diálogo interior de la tradición socialista*. La Habana: Ruth Casa Editorial, pp. 132-162.

TAMARGO ARENADO, J. B. (2011, 5 de agosto). «Cartas a la dirección: ¿Acabaremos las indisciplinas o no?». *Diario Granma* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.granma.cu/granmad/secciones/cartas-direccion/cart-159.html

VASCÓS GONZÁLEZ, Fidel (2009). *Socialismo y mercado*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

# Momentos constituyentes, procesos constitucionales, movimientos sociales y la nueva izquierda latinoamericana[1]

George Ciccariello-Maher

En los últimos años, por toda América Latina se ha visto un innegable renacimiento de los movimientos y el pensamiento de izquierda que ha encontrado su culminación institucional en la amplia gama de líderes izquierdistas electos en el continente. Pero esta ola de éxito tanto para gobiernos como movimientos de izquierda se ha enfrentado también con la resurrección de una vieja falacia en la insistencia por parte de Jorge Castañeda y otros que «no hay hoy una sola izquierda latinoamericana; hay dos» (Castañeda 2006, p. 29; Castañeda y Morales 2008). La «izquierda buena» es «moderna, abierta, reformista e internacionalista», al haber aceptado tanto el destino económico ineludible del neoliberalismo como el imperativo geopolítico de tener que quedar bien con el gran imperio del Norte (Castañeda, ob. cit., pp. 43, 29). Esta izquierda –que generalmente incluye Luiz Inácio

1 Esta es una versión más extensa y actualizada de un artículo publicado por la revista cubana *Temas* (2012).

Lula da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, y Tabaré Vázquez en Uruguay– ha tendido a reproducir las políticas económicas de sus precursores más conservadores, sea la austeridad fiscal o una limitada democracia representativa. Por el contrario, la izquierda "mala", en lugar de romper decididamente con los errores de las generaciones anteriores, se ha convertido en un "culto del pasado", recurriendo no sólo al ejemplo de los revolucionarios de la década de 1960 sino también a la «gran tradición del populismo latinoamericano». Como consecuencia, estos nuevos gobiernos –y en particular los de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y el fallecido Hugo Chávez en Venezuela– son «nacionalistas, estridentes y cerrados» (ibíd., pp. 34, 29). Con poco para ofrecer a sus pueblos aparte de la retórica vacía, esta izquierda opta por «regalar el dinero» mientras que «se burla de los Estados Unidos» para mantener su apoyo político (ibíd., pp. 34, 38).

Hay muchas buenas razones para resistir a un marco binario tan reductivo. Algunos recurren a las historias revisionistas del populismo que demuestran su complejidad y resonancia evidente con los sectores más pobres de la sociedad latinoamericana, debido en gran parte a una visión no lineal de la historia que no comparten los social demócratas (Ellner 2011). Otros están empeñados en evitar una simple inversión de esta oposición y en su lugar rechazan el binario social-democrática/populista completamenpte como uno que «sirve un propósito disciplinario» por «distraer atención de las faltas del neoliberalismo [y] el desempeño mediocre de los regímenes democráticos» (Cameron 2009, p. 345; vea también French 2009, p. 349 y Beasley-Murray, Cameron y Hershberg 2009, p. 324)[2]. Mientras muchos colaboradores a este tomo enfrentan a varios aspectos de la oposición

2 Según French (ob. cit., p. 350), la crítica al populismo se origina en una «noción empobrecida y anticuada de lo político. En postular una política de la glorificación de la pericia y la iluminación, la idea de la razón, la racionalidad, y la objetividad (lo "frío" y desinteresado) se yuxtapone en contra de una esfera inferior de la emoción, la pasión, y el "personalismo" (lo "caliente" y ciegamente partidista, si no atrasado y corrupto)».

entre buena y mala izquierda, aquí yo me enfoco centralmente en un elemento específico: la ceguera de Castañeda y otros hacia «la importancia de luchas sociales» y «la combatividad de los sectores populares», y su concomitante fetichización de las «instituciones establecidas» (Ellner, ob. cit.). Dicho de otra manera, si un gobierno de izquierda sea "bueno" o "malo" es más bien una cuestión de quién lo dirige y cómo.

Es esta negligencia sistemática del espacio extra-institucional, de los movimientos sociales con toda su potencial y su desordenación, que quiero rellenar, porque atención a este elemento tan ignorado por Castañeda puede aclarar los defectos de su marco como un todo. Diseccionando a esta perspectiva de arriba abajo, podemos mejor captar la complejidad de la izquierda como una relación dinámica y cambiante entre movimientos y Estado, entre lo de-arriba-abajo (el poder constituido) y lo de-abajo-arriba (el poder constituyente). Más específicamente, parto de una distinción entre lo que llamo los "momentos constituyentes" –de rebeliones repentinas y explosivas desde abajo– y los "procesos constitucionales" que de vez en cuando canalizan a la energía de tales momentos hacia la transformación de la estructura institucional. Al hacer eso, espero poder evitar fetichizar o al poder constituyente desde abajo o al poder constituido del Estado, enfocándome en cambio en la interacción dinámica entre los dos.

Esto lo voy a hacer en aproximadamente tres pasos. Primero, en un panorama demasiado breve, proporciono una reconsideración de la llamada izquierda buena que siembra alguna duda sobre lo "buena" que sea en verdad, pero que también, y de manera importante, empieza a minar la estabilidad del binario mismo. Segundo, y volviéndome más directamente hacia la "izquierda mala", rastreo la cadena de acontecimientos que ata los momentos constituyentes a los procesos constitucionales tanto en Ecuador como en Bolivia, demostrando que al localizar mejor el aspecto extra-institucional podemos llegar a una visión más enriquecida y compleja de las profundas *diferencias* que existen dentro de ese bloque, supuestamente singular, y los desafíos que enfrentan los gobiernos en consideración. Finalmente,

enfocamos en Venezuela, donde el gobierno ha caminado más exitosamente la delgada línea entre movimientos y Estado, poder constituyente y poder constituido, de una manera que ofrece unas lecciones importantes tanto para la izquierda "buena" como para la "mala". Es precisamente caminando esta delgada línea, afirmo en conclusión, que los revolucionarios pueden simultáneamente preservar y radicalizar a los procesos en marcha en la región.

## Momentos constituyentes, procesos constitucionales

Si el aparato institucional existente –al parecer, la única preocupación de los que sostienen la tesis de la izquierda buena versus izquierda mala– puede describirse como "poder constituido", lo que quiero resaltar en cambio son los *momentos* constituyentes, las irrupciones periódicas en la vida política de los movimientos y las masas desde abajo, y también los *procesos* de (re)constitución que frecuentemente siguen sus pasos, en los cuales se redactan nuevas constituciones para transformar el orden constituido. Mientras que el lenguaje del poder constituyente versus constituido se ha puesto de moda a través de pensadores como Antonio Negri (1999), aquí tanto el contexto como el contenido de los poderes constituyentes y constituidos son más parecidos a lo que el filósofo de la liberación Enrique Dussel llama *potentia* y *potestas* respectivamente. Para Dussel, el poder constituyente (*potentia*) es un poder que pertenece al pueblo como el bloque social, constando de los oprimidos por, y excluidos del, sistema político constituido (*potestas*) (2006, p. 94). Otorga así al pueblo un contenido específico de clase que frecuentemente falta (como los económicamente oprimidos), pero también y crucialmente abre el concepto para abarcar otras formas de exclusión y opresión (sea de raza, género, edad, discapacidad, etc.). Más específicamente, Dussel argumenta que cuando un arreglo específico del poder constituido pierde su función progresiva y se convierte en traba opresiva, vemos el surgimiento de

lo que él llama la *hiperpotentia*. Asumiendo la forma de un "estado de rebelión," la hiperpotentia es el momento en que el pueblo oprimido y excluido irrumpe en la historia, recordando al poder constituido de su fuente constituyente y desencadenando las transformaciones políticas (ibíd., p. 98). Cuando hablo de los momentos constituyentes me refiero a estas rebeliones, y cuando hablo de los procesos constitucionales me refiero al proceso de transformación que provocan en el orden constituido.

En el pasado, tanto la izquierda radical como los social-demócratas han compartido un énfasis exagerado en las alturas encumbradas del poder político: sea el imperativo a apoderarse del Estado a fuerza de las armas o la insistencia reformista que tal apoderamiento ocurra en las urnas, muchos ojos apuntaban hacia arriba. Hoy no es así. Como he demostrado en mi propia historia de los movimientos revolucionarios en Venezuela, las últimas cinco décadas han presenciado un proceso lento, y a veces doloroso, en que muchos en la izquierda radical se han visto obligados a través de sus fracasos a renunciar sus tendencias vanguardistas para abrazar procesos desde abajo y estructuras de gobierno directamente democráticas (Ciccariello-Maher, 2013). Más allá de las imprecisiones del "semi-Estado" proletario de Lenin, algunos entienden estos procesos constitucionales radicales como una forma de poner en marcha el "desvanecimiento" del Estado del que él hablaba. Más que la simple captura del Estado, pues, esta nueva izquierda latinoamericana enfrenta un desafío más dialéctico en que las fuerzas, desde arriba y desde abajo, se confrontan en un esfuerzo para «renovar el orden constitucional sosteniendo también un proceso constituyente creativo de la experimentación e innovación democrática» (Beasley-Murray, Cameron y Hershberg, ob. cit., p. 321).

Esta relación entre momentos constituyentes y procesos constitucionales, sin embargo, no carece de complejidad e incluso contradicciones, dado que los procesos constitucionales tienden necesariamente hacia una declive o dilución de la rebeldía explosiva que fue su *raison d'être*: «Si los movimientos encarnan al poder constituyente que los partidos posteriormente canalizan

y representan como poder constituido, lo que está en juego es hasta qué punto esta representación es una negación de las energías que impulsan los giros hacia la izquierda» (ibíd., p. 328). Esta tensión, no obstante, no es suficiente como para rechazar la transición del momento explosivo al proceso transformador, rehuyendo del Estado totalmente y fetichizando al surgimiento esporádico del poder constituyente. Como bien nos recuerda Dussel: El proceso de pasaje de un momento fundamental (*potentia*) a su constitución como poder organizado (*potestas*)», a pesar de representar un «peligro supremo como origen de todas las injusticias y dominaciones», es indispensable en cualquier caso (ob. cit., pp. 29-30). Contra ellos que, como John Holloway (2002), insistirían en cambiar al mundo «sin tomar el poder», el objetivo es más bien someter el poder constituido a la presión constituyente constante, atando los dos dentro de una cadena dialéctica que envuelve hacia la representación cada vez más radical y directa[3].

Una vez reenfocada nuestra atención en los momentos constituyentes y los procesos constitucionales, parecería que la distinción entre izquierda buena y mala tendría cierto sentido, pues tales momentos han ocurrido generalmente dentro de la izquierda mala. Estos momentos incluyen las rebeliones masivas y en gran parte indígenas en Ecuador (1990, 2000, 2005) y Bolivia (2000-2003, 2005), el Caracazo venezolano (1989) y la respuesta popular al breve golpe contra Chávez (2002), y las rebeliones anti-neoliberales en Argentina (finales de 2001-2002) que dieron origen a la consigna "¡Que se vayan todos!"[4]. Sin embargo, en Venezuela, Ecuador, y Bolivia la presión constituyente no se detuvo después de haber derrocado a los líderes políticos tradicionales en las urnas (1998 en Venezuela, 2006 en Bolivia,

3 A diferencia de Holloway (2002), para Dussel el poder reside en el pueblo y no es un objeto para tomar (2006, p. 29); esta *potentia* se ve obligada a buscar concretización como *potestas*.

4 Sobre Ecuador, vea Becker 2011. Sobre Bolivia, vea Webber 2011a y 2011b, Dangl 2007, Fuentes 2011a y 2011b, y Harnecker y Fuentes 2008. Sobre Venezuela, vea Ciccariello-Maher 2013. Sobre Argentina, vea Jordan y Whitney 2003.

2007 en Ecuador), sino que seguía adelante hacia la reconstitución parcial de la esfera institucional, a través de la redacción y aprobación de nuevas constituciones (en Venezuela en 2000, en Bolivia y Ecuador en 2008)[5]. Pero en lugar de mantener este binario con una simple inversión de la polaridad entre lo que Castañeda considera "bueno" y "malo," si ponemos más atención a la distinción constituyente-constituido, podemos observar los inicios de la descomposición de ese esquema.

## ¿Qué tiene de bueno la "buena izquierda"?

Las contradicciones del binario buena-versus-mala-izquierda se ven claramente cuando nos enfocamos en la izquierda supuestamente buena. Cuando prestamos atención al poder constituyente y los movimientos sociales, en lugar de una clara oposición encontramos un espectro en el cual las relaciones con los movimientos van de mal en peor, con la presidenta chilena Michelle Bachelet ocupando la segunda columna. Después de la dictadura de Pinochet, los movimientos casi exterminados bajo el régimen militar enfrentaron otro desafío más en las políticas verticalistas de la coalición predominante de la Concertación, y como consecuencia la influencia de los movimientos fue en declive a pesar de la apertura nominalmente democrática (Carruthers y Rodríguez 2009, Petras y Leiva 1994). No obstante esta relativa debilidad de los movimientos sociales, el gobierno de Bachelet fue afligido desde varias direcciones: de los obreros por su apoyo tibio a los mineros de La Escondida; de los estudiantes por el empeoramiento continuo de la educación pública y el "movimiento de los pingüinos" contra las estructuras constituidas del sistema educativo de la época Pinochet; y sobre todo de los movimientos indígenas Mapuche, que acusaron a Bachelet de continuar el racismo y terrorismo de Estado de las administraciones anteriores

5 Mientras que las asambleas autorizadas para redactar estas constituciones se llaman "asambleas constituyentes", nuestro enfoque es más bien los momentos verdaderamente constituyentes que generan la fuerza para tales asambleas.

(Carruthers y Rodríguez 2009, Acuña 2007). En cada uno de estos casos, la denuncia fue esencialmente lo mismo: que a pesar de la presión del poder constituyente dese abajo, Bachelet fue poco dispuesta a enfrentar al poder constituido arraigado, y así decepcionó tanto a la derecha como a la izquierda.

En Brasil, en cambio, Lula llegó al poder con la fuerza –no la debilidad– de movimientos como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Pero a diferencia de muchos movimientos, el MST no sería fácilmente derrotado o cooptado, y sus tensiones con el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula fueron evidentes, aún antes de su elección en 2002. De hecho, fue precisamente el esfuerzo de Lula de cultivar un imagen pragmática lo que le llevó a condenar las tácticas radicales del movimiento en plena campaña electoral (*Folha de S. Paulo*, 2002). Pero fue solamente después de su elección que su pragmatismo asumió la forma de políticas moderadas y centristas como la limitación fiscal, un modelo de desarrollo orientado hacia las exportaciones y una resistencia a la reforma agraria. Este giro pragmático hacia la "izquierda buena" representó un claro abandono del poder constituyente encarnado por el MST y otros movimientos de base. En consecuencia, varios críticos de la izquierda fueron expulsados del PT a finales de 2003, y el MST incrementó las ocupaciones de tierras y edificios en 2004 (Branford 2009).

Más allá de simplemente plantear la pregunta de qué tiene de bueno una "izquierda buena" que abandona su base organizada, el caso de Lula socava totalmente al binario. Mientras la "izquierda mala" de Castañeda supuestamente mantiene su poder a través de un sistema de apoyo clientelar, tal descripción se puede aplicar mucho más fácilmente al programa Hambre Cero de Lula que a su equivalente en las misiones venezolanas, que combinan el apoyo social con la formación política, adiestramiento laboral, y el empoderamiento de las mujeres y grupos étnicos infrarrepresentados (Raby 2006, p. 52). La lógica de los movimientos radicalmente constituyentes resiste directamente a los esfuerzos para aplacar a las masas con limosnas populistas.

Notablemente, sin embargo, Castañeda interpreta a Hambre Cero y su programa de estipendio Bolsa Familia como "innovador", a pesar de críticas de los programas por un funcionario del Banco Mundial (Castañeda 2006, p. 36; Duquette et al. 2005, p. 194).

Es más, dadas la críticas agudas de Castañeda hacia los populistas por entrar en conflictos simbólicos con el gobierno estadounidense, vale la pena recordar la disputa ojo-por-ojo sobre la reciprocidad diplomática respecto a los visados turísticos y revisión de seguridad para viajeros llegando en Brasil desde Estados Unidos. No se trata simplemente de una lectura selectiva de los casos: quiero insistir en que es algo mucho más sistemático, en que el mismo Castañeda también perdona «cierto descuido de las prácticas democráticas» bajo Lula en Brasil, así como el hecho de que Vázquez en Uruguay «despotrica contra el neoliberalismo y Bush» de una manera sugerente del mismo populismo que tanto desprecia en Chávez y Morales (Castañeda, ob. cit., p. 38). Mientras estos últimos son condenados porque, para ellos, «la retórica es más importante que la sustancia», Castañeda incluso *celebra* el señuelo de Vázquez (atacando al imperio públicamente, mientras se negocian acuerdos de libre comercio privadamente). Al fin y al cabo, los "populistas" se ridiculizan por sus promesas vacías, la "izquierda buena" celebrada cuando consigue engañar al pueblo[6].

La diferencia entre izquierda buena e izquierda mala llega al punto de colapso en el caso del ex-presidente argentino Néstor Kirchner, quien Castañeda describe –aparentemente sin ironía alguna– como un «caso clásico (aunque un poco ambiguo)» del populismo de la mala izquierda (ibíd., p. 39). Mientras que nos preguntemos cómo es que en un solo caso puede servir como un tipo ideal y su contrario, resulta evidente que la dificultad de Castañeda no es categórica sino una cuestión del contenido de esas categorías. A pesar del éxito macroeconómico a la par de

6 Castañeda también es extrañamente callado respeto a Alan García en Perú quien, a pesar de venir de un partido clásicamente populista –la APRA– por casualidad se comportaba de una manera que le pareció aceptable (Cameron, ob. cit., p. 335).

la izquierda buena, Castañeda simplemente no puede felicitar a un peronista, y entonces se revierte a especular sobre qué haría Kirchner si siguiera a sus «cromosomas peronistas» (ibíd., p. 40). Una vez descartadas tales conjeturas sobre lo que pueda producir el ADN político, si nos enfocamos en cambio en el conflicto dinámico entre poderes constituyentes y constituidos, otra imagen entra a la vista. Kirchner llegó al poder en gran parte como el resultado casi accidental del masivo terremoto constituyente de diciembre del 2001, y de una manera más inesperada: pocos habrían previsto que un candidato *insider* del sistema político se volviera hacia los movimientos en la manera que hizo, ganando así el desprecio de Castañeda y otros. En cambio, candidatos *outsider* como Lula, y en menor grado Bachelet, sólo ganaron sus posiciones dentro de la "izquierda buena" o dando la espalda a los movimientos que los llevaron al poder (en el caso de Lula) o rompiendo sus promesas a esos movimientos (en el caso de Bachelet).

Lo que unifica esta izquierda buena con su homólogo malo es el hecho de que ningún líder tiene el lujo de ignorar al espacio extra-institucional del poder constituyente y los movimientos sociales. Sean los estudiantes y mapuches chilenos, piqueteros y trabajadores que ocuparon fábricas en Argentina, o el MST brasileño, el desafío es el mismo, pues no nos debe sorprender que, al mirar más cercanamente cómo estos gobiernos enfrentan desde arriba a los desafíos desde abajo, el marco de Castañeda se desintegra totalmente. Y cabe agregar que si un elemento clave de la distinción entre buena y mala izquierda tiene que ver con las promesas vacías, ciertamente no hay peor izquierda que la que abandona o traiciona a su base una vez llegado al poder, pero este tipo de traición cínica pareciera ser el *sine qua non* para entrar en la llamada "izquierda buena"[7].

7 Ciertamente, resta el asunto de la factibilidad dada la constelación particular de los poderes constituyentes y constituidos, particularmente con respecto a la herencia de las dictaduras del Cono Sur. No obstante, esto no determina la decisión entre: rendirse a los imperativos del poder arraigado o buscar un contrapeso en el apoyo de los movimientos sociales desde abajo.

## Diseccionando a la "izquierda mala": Ecuador y Bolivia

Si se puede decir que la oposición entre buena y mala izquierda se invierte en la traición de los movimientos sociales, se puede decir lo mismo respecto a los momentos constituyentes y los procesos constitucionales. Fue generalmente entre los países gobernados por la izquierda mala que el pueblo se levantó más recientemente y espectacularmente, y fue dentro de la izquierda mala que aquellos estallidos rebeldes alimentaron a procesos dirigidos a la transformación del aparato del Estado. Mientras puede ser justificado tener reservas sobre la eficacia de este cambio y hasta qué nivel ha fortalecido o debilitado a los movimientos, es incuestionable que es en la mala izquierda –parafraseando a C.L.R. James (2003, pp. 138-139)– que las masas latinoamericanas se han acercado más al poder. Pero una vez colapsada la distinción de las dos izquierdas con las rebeliones constituyentes de Argentina en 2001, las cuales no llevaron a una transformación constitucional sustancial, podríamos preguntar cuánta luz proporciona la lente de momentos constituyentes y procesos constitucionales cuando la enfocamos en la misma izquierda mala. Más específicamente, cuál ha sido la relación entre los gobiernos y los movimientos sociales revolucionarios desde las elecciones de Chávez en 1998, Morales en 2005 y Correa en 2006. Cuando hacemos eso, al investigar la relación intricada y dialéctica entre los movimientos y el Estado, encontramos no simplemente una homogeneidad a lo Castañeda, sino una constelación compleja de luchas desde abajo y estrategias de gobierno desde arriba, y la dinámica impredecible tanto entre los dos, así como en contra de las fuerzas de la reacción que los enfrenta simultáneamente a ambos.

Pocos negarían que, si hablamos de la relación entre los gobiernos y los movimientos radicales de la izquierda mala, al expresidente ecuatoriano Rafael Correa le ha ido peor. En Ecuador la crisis macroeconómica y social impuesta desde arriba por el giro neoliberal en la década de 1980 dio lugar al florecimiento de movimientos sociales construyendo movimientos alternativos

desde abajo. En Ecuador también el final de esta "década perdida" correspondía a un momento de ruptura constituyente radical, en la forma del levantamiento de Inti Raymi en junio de 1990, que siguió al Caracazo venezolano por apenas un año. A diferencia del Caracazo, esta rebelión y las siguientes eran principalmente indígenas en su composición y reivindicaciones: mientras los líderes indígenas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y otros grupos indígenas hicieron una serie de exigencias culturales, económicas y políticas –entre ellas, la designación de Ecuador como estado "plurinacional"– la base actuaba directamente de acuerdo con el dicho de José Carlos Mariátegui (2007, p. 26), en que «el problema del indio» es un problema de la tierra, exigiendo la reforma agraria radical y el apoderamiento de las haciendas.

El "giro sísmico en la consciencia" que marcó esta irrupción de los pueblos indígenas a la previamente inaccesible vida pública de la nación, fue seguido por una marcha de protesta conocida como "La Caminata" desde los llanos orientales y por las luchas que coincidieron en su momento, y sus preocupaciones con la insurrección zapatista en México. Después de esta reacción en cadena de las rebeliones constituyentes, Ecuador gozaba de lo que se podía considerar como el movimiento indígena más poderoso de toda América Latina, con Conaie en su cabeza (Becker, ob. cit., pp. 34-37). Sin embargo, proyectar estas victorias constituyentes hacia el terreno del poder constituido sería más difícil, y plantea preguntas sobre cómo los movimientos desde abajo se relacionan con el poder del Estado desde arriba, preguntas que siguen acosando a los movimientos en Ecuador y más allá. La respuesta inmediata de los movimientos a su éxito recién descubierto fue revocar la antigua prohibición de Conaie en contra de la participación política con el establecimiento en 1995 del movimiento Pachakutik como su brazo político. Pero lo que parecía a muchos como un paso lógico en medio del auge popular, les llevo rápidamente a la desilusión con líderes elegidos quienes –haciendo eco de la izquierda buena– abandonaron a sus constituyentes radicales inmediatamente tras acceder al poder.

En otro lado esta desilusión podría haber sido el fin de la historia, pero en Ecuador el poder cosechado de los movimientos indígenas en las movilizaciones de calle de principios de 1990 se traducía en otra serie de momentos constituyentes, en los cuales la acción masiva en las calles derrocó a una sucesión de líderes. De Abdalá Bucaram (1996-1997) a Jamil Mahuad (1998-2000), a las movilizaciones de calle infructuosas contra Gustavo Noboa en 2001 y la destitución de Lucio Gutiérrez en mayo del 2005 por el movimiento de los "forajidos" (aunque sin mucha participación indígena), los movimientos continuaban demostrando su fuerza desde abajo[8]. A pesar de las rebeliones callejeras continuas, sin embargo, no estaba todo bien en el ámbito del poder constituyente, pues estas muestras de la fuerza ocurrieron en un fondo de desilusión hacia los movimientos y las organizaciones políticas que habían apoyado a Gutiérrez, con Conaie y Pachakutik pagando caro su alianza con el poder constituido.

Esta serie de rebeliones y acciones directas radicales era constituyente no solamente en su forma sino también en sus objetivos, con la demanda de reescribir la constitución del país como su hilo ocasionalmente invisible. Pero también en esto los activistas sólo encontraron un éxito parcial en la reforma constitucional de 1998, que se quedó al nivel superficial e incluso facilitaba más reformas neoliberales. Mientras la campaña electoral de Rafael Correa tomaba velocidad en 2006, la llamada para reescribir de manera fundamental la Carta Magna de la nación representaba un punto de coalescencia para los movimientos desde abajo. Correa sólo adoptó lentamente las demandas de los movimientos sociales, y muchos dirían que aún cuando lo hizo sus métodos eran oportunistas y sus objetivos de cooptación en lugar del empoderamiento. Esto se puede decir de la asamblea constituyente, donde Correa rápidamente y de manera oportunista

8 Provenientes de la clase media urbana y en gran parte mestizo, el movimiento de los forajidos (que ganó su nombre de la descripción peyorativa de Gutiérrez) tenía más en común con las rebeliones argentinas de 2001-2002, e incluso adoptó el lema de este último, "¡Que se vayan todos!" (Becker, ob. cit., p. 94).

cambió su retórica de una «revolución ciudadana» por la bandera de la «revolución constituyente» (ibíd., pp. 59-60, 108).

Mientras los movimientos sociales continuaban presionando para una nueva constitución después de la elección de Correa, sin embargo, la experiencia de 1998 ya había demostrado que lo que importaba más fue el *contenido* del documento resultante y el *proceso* constituyente que lo generó. Ya en febrero de 2007, CONAIE y decenas de otras organizaciones marcharon para exigir que Correa cumpla con su promesa de convocar una asamblea constituyente, insistiendo que circunvale al congreso existente si fuera necesario, una actuación que repitieron en octubre con la apuesta aumentada para exigir el cierre inmediato del congreso (ibíd., pp. 128, 136)[9]. Mientras Susan Spronk (2008) sostiene que la decisión de Correa para cortar al nudo gordiano del poder oligárquico desde arriba con la disolución del congreso y otorgando la plena autoridad legislativa a la asamblea constituyente demostró una firmeza "estratégica" que faltaba a su homólogo boliviano, ignora el hecho de que Correa sólo parece haberlo hecho en parte como resultado de la presión radical y, de hecho, amenazas tangibles desde abajo.

Esta presión constituyente, además, no desapareció una vez instalada la asamblea constituyente y disuelto el congreso, pues Conaie convocó a unas veinte mil personas a las calles para exigir que Correa tome en serio sus exigencias para la nueva constitución (Becker, ob.cit, pp. 138-139). Esta presión sólo encontró un éxito parcial, sin embargo, y cuando el kichwa fue rechazado como lengua oficial (según ordenes de Correa), los delegados indígenas abandonaron la asamblea constituyente (una referencia más débil al kichwa fue insertada después) (ibíd., p. 147). Dada la hostilidad demostrada de Correa hacia los movimientos indígenas, su éxito en lograr la inclusión de varias demandas (como la denominación de Ecuador como estado "plurinacional" y los derechos colectivos para grupos étnicos) es testamento de su

9 La crítica de Cameron (2009: 342) a la disolución del congreso no compagina con su reconocimiento de los defectos retumbantes del orden democrático existente.

fuerza organizada. Junto e incluso antes de la redacción de la nueva Constitución, no obstante, los choques entre Correa y los movimientos indígenas continuaron sin cesar, particularmente cuando fue una cuestión de la extracción de recursos naturales.

A pesar del reconocimiento constitucional para el *sumak kawsay* (buen vivir) como forma de desarrollo humano compasivo, mutuo y sostenible, para muchos había una contradicción entre esta garantía constitucional y el énfasis de Correa en la extracción a gran escala, y cuando estallaron las luchas él no dudaba en optar por la represión. «Después de la elección de Correa», escribe Spronk (ob. cit.):

> anunció que iba a invertir más poderes en la policía y las fuerzas armadas para reprimir las protestas populares. En abril del 2007 cumplió con esa promesa, mandando las tropas para someter de manera violenta una protesta en contra de las actividades mineras de la empresa Iamgold, de Toronto.

A finales del 2007, grupos indígenas tomaron los pozos petroleros en el Parque Nacional Yasuní. El presidente Correa les tildó de "infantiles" y les acusó bajo unas leyes controversiales contra el terrorismo, y cuando Conaie y otros criticaron la Ley de Minería de enero del 2009, amenazando de oponerse a Correa en las próximas elecciones, les llamó «criminales y terroristas subversivos» (Becker, ob. cit., pp. 177, 181).

Cuando llegaron las elecciones del 2009, Correa había destruido su relación con los movimientos sociales, tan totalmente que Pachakutik optó por no apoyar a nadie, y una resolución de Conaie calificó a este líder "revolucionario" en los siguientes términos: «El gobierno de Correa nació de la derecha, gobierna de la derecha, y continuará haciéndolo hasta su final» (ibíd., p. 183). Mientras esta condena representa una clara simplificación, en tanto que ignora el balance general del gobierno, hay buenas razones para estar de acuerdo con que el proceso constitucional en Ecuador «fue a expensas de la marginalización de los movimientos sociales», que «Correa había robado el show de militantes

indígenas» y que «tenía secuestrado a los que estaban a su izquierda» (ibíd., pp. 127, 159). Esta tendencia de movilizar a las masas para fines electorales, minando mientras el poder de los movimientos en las calles, refleja una distinción fundamental entre el populismo tradicional y el populismo radical, y socava más aún la tesis de la izquierda mala de Castañeda por ubicar a Correa más cerca de Bachelet y Lula de lo que a él le gustaría aceptar (Collier y Collier 2002).

Pero si es verdad que Correa, como Lucio Gutiérrez «contó con que la masa bajara sus armas», esta estrategia de desarmar a los movimientos populares tendría sus consecuencias, como pronto él aprendería (Becker 2011, p. 202). Mientras subieron las tensiones sobre lo que los movimientos interpretaron como un esfuerzo para privatizar al agua, a principios del 2010 se observó un movimiento indígena nuevamente unido –a pesar de los esfuerzos de Correa, pero como resultado de sus políticas–. Y esto no fue todo: como consecuencia de los recortes al sector público en octubre del 2010 que amenazaron las prestaciones de la policía, Correa fue atacado con gas lacrimógeno y brevemente secuestrado por oficiales decepcionados, algunos de los cuales gritaban el nombre del ex-presidente Lucio Gutiérrez. Por algunas horas, por lo menos, Ecuador parecía experimentar un golpe reaccionario, pero quizás más importante que los esfuerzos de los mismos golpistas fue la distancia que este acontecimiento reveló entre Correa y las masas constituyentes, cuya protección necesitaría. Durante la crisis, el diputado de Pachakutik, Cléver Jiménez, llamó a la destitución de Correa por la Asamblea Nacional, mientras Conaie rechazó tanto a los golpistas de la derecha como al gobierno supuestamente izquierdista (Ciccariello-Maher 2010). Fue preocupante el hecho de que algunos movimientos sociales, al rechazar ambos lados, le hicieron el juego a la derecha. Sin embargo, nuestra preocupación apunta al hecho de cómo Correa y los movimientos habían llegado a tal punto muerto en primer lugar.

Las credenciales progresistas de Correa son indisputables y sus políticas son fundamentalmente incomparables con las de

Gutiérrez: rechazó la deuda extranjera "ilegítima" en el 2008, cerró la base de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Manta en el 2009 e incrementó la presión contra el capitalismo doméstico a través de las expropiaciones. Pero dejando al lado estos cambios políticos a nivel macro, su relación con los movimientos constituyentes ha sido preocupante, y es sobre todo esta relación que va a determinar el radicalismo de su gobierno en el futuro. En sus relaciones con los movimientos, Correa ha repetido las estrategias y tácticas desacreditadas de sus antecesores: fundando su propio movimiento y rechazando los movimientos ya existentes, cooptando a las exigencias desde abajo y diluyéndolas desde arriba, y recayendo frecuentemente en los insultos antagónicos. Esta repetición de errores, además, ha llevado a un escenario muy parecido al que enfrentó Gutiérrez: «Después de brillar por dividir a los movimientos indígenas», observa Becker, las políticas de Correa eventualmente «facilitaron su convergencia» (2011, p. 187). Mientras todavía falta el veredicto sobre si Correa gobernó *para* el pueblo, desde el principio negó permitir que su gobierno fuera *por* las masas constituyentes, como fuera expresado por los movimientos sociales. Pero las lecciones de la rebelión constituyente y los peligros del poder constituido no fueron ignorados por Conaie, quienes volvieron progresivamente a las tácticas callejeras de la confrontación, demostrando su fuerza desde el principio.

Comparando a Correa con el presidente boliviano Evo Morales en el 2008, la evaluación de Spronk parece irreconocible: Correa aparece como estratégico y decisivo, mientras Morales queda empantanado en una Asamblea Constituyente bloqueada. En los últimos años, tal valoración se ha puesto patas arriba, en particular con respeto a la relación que mantienen los gobiernos con los movimientos sociales. Mientras que Correa fue progresivamente socavando a su propia izquierda en un intento mal concebido para cooptar a la energía radical constituyente, Morales ha podido hasta muy recientemente integrar a los movimientos de manera más eficaz ante el fondo de una derecha debilitada. Esto no significa para nada que todo haya sido tranquilo,

sin embargo, ya en 2008 Spronk se preocupaba de una tendencia hacia una suerte de "desmovilización" de los movimientos bajo Morales parecido a lo que había pasado con Correa, y estallaron debates ácidos respecto al estatus de la Revolución Boliviana frente a sus constituyentes más radicales. Lo que está en juego en estos debates se puede plantear sencillamente: ¿Es el proceso en camino bajo Evo Morales una apertura revolucionaria hacia un futuro posiblemente socialista? O, en cambio, ¿es un "neoliberalismo reconstituido"? (Webber 2010). Esta pregunta inicial es, sin embargo, engañosa. A partir de la perspectiva del poder constituyente y los movimientos sociales no hace falta que preguntemos qué *es* Bolivia, más bien cuál es la dinámica que ha llevado al proceso hasta donde está hoy, y qué constelación de fuerzas o amenazas favorece su radicalización.

Tal como en Ecuador, una cadena de irrupciones constituyentes en Bolivia generaron el proceso actual. Empezando de manera más explosiva con la guerra del agua de Cochabamba en el 2000, contra un plan de privatización apoyado por el Banco Mundial y la multinacional norteamericana Bechtel, los movimientos constituyentes empezaban un largo contraataque contra el neoliberalismo que generaría una capacidad cada vez mayor para las luchas callejeras coordinadas. Fue directamente de estas «victorias forjadas en las movilizaciones en las calles» que Evo Morales –a diferencia de su homólogo ecuatoriano– surgió, creando un instrumento político, el Movimiento al Socialismo (MAS), que algunos han bautizado un «partido-movimiento social» (Dangl, ob. cit., p. 10; Harnecker y Fuentes, ob. cit.; Spronk, ob. cit.)[10]. Como el caso del levantamiento ecuatoriano, la guerra del agua puso en marcha lo que Jeffery Webber ha llamado un «ciclo insurreccionario izquierdista-indigenista (que) creó la base para un radicalismo en incremento», en lo cual «las exigencias anticapitalistas y para la liberación indígena de los manifestantes se ampliaron, y los repertorios de lucha se volvieron más combativos con el paso del tiempo» (2011a, p. 147). Como en Ecuador,

10 Vea también Cameron 2009, p. 334.

este ciclo se expandió por todo el país, primero a las luchas indígenas aymaras en el altiplano occidental, y luego en las ciudades con las rebeliones anti-impositivas de 2003, conocidas como el "impuestazo", prefigurando a la rebelión de los forajidos de Ecuador en su espontaneidad, ubicación y composición de clases (Webber 2011a, pp. 162-181).

Eventualmente –y aquí otra vez llaman la atención las semejanzas con Ecuador– este ciclo de luchas giraba su atención hacia el Estado en una doble moción, primero negativamente, durante las guerras del gas en El Alto, en las cuales destituyeron a una serie de presidentes (Sánchez de Lozada en 2003 y Carlos Mesa en el 2005), y luego positivamente en contribuir de manera decisiva a la elección de Morales en el 2005. Mientras muchos con razón se inspiraron en la victoria electoral, no obstante, Webber escribe que los acontecimientos desde aquel entonces han presenciado un giro «de la rebelión a la reforma» (2010 y 2011a, p. 319) ya previsible en las dinámicas anteriores a las elecciones: «el MAS jugaba un papel en las movilizaciones masivas de mayo y junio [que destituyeron a Mesa] pero al final funcionaba como un dique que ayudaba a evitar que una inundación potencialmente revolucionaria destruyera todas las estructuras reinantes del poder en la sociedad boliviana» (2011a, p. 259). Concretamente, esto significaba una ambivalencia hacia la nacionalización del gas natural, rechazando la llamada para cerrar al Congreso (una exigencia constituyente en Bolivia como en Ecuador), e insistiendo en la necesidad de ganar al poder a través de la ruta institucional existente (y presuntamente, con el apoyo de elementos de la clase media).

Si fuera todo esto simplemente una estratagema transitoria, no habría razón para la preocupación, pero según Hylton (2011, p. 245), a pesar de haber sido elegido en contra de una derecha debilitada y fragmentada, el gobierno de Morales «demostraba su reticencia a apoyarse en la acción directa desde abajo y su voluntad de hacer concesiones a la derecha a puertas cerradas». Para Webber (2012), tales "concesiones" indican la continuidad neoliberal de Bolivia, elementos de la cual incluyen centralmente

el mantenimiento de una economía orientada hacia las exportaciones, el papel importante de capitales extranjeros (particularmente los hidrocarburos), la reforma agraria limitada, la responsabilidad fiscal y la protección de la propiedad privada. Además, Webber interpreta la controversia reciente sobre el plan de construir una carretera por el Tipnis, un parque nacional bajo control indígena, que ha empeorado las relaciones ya tensas entre el gobierno de Morales y los movimientos, y produjo el derrumbe del Pacto de la Unidad, otro síntoma de la continuidad neoliberal del gobierno de Morales.

Federico Fuentes rechaza este argumento que la energía radical del reciente ciclo insurreccional ha sido desarmado por el MAS una vez en el poder. «El gobierno de Morales», insiste, «respondió a los defectos de los momentos insurreccionales anteriores por buscar ganar el poder a través de elecciones, [y así] representa una profundización, no una ruptura, del proceso que empezó en el 2000». Correctamente girando nuestra atención a la dinámica y compleja «interacción de factores» involucrada en este proceso, Fuentes concluye que, en lugar de criticar desde lejos, tenemos que «defender los logros del proceso boliviano» a través de un enfoque en la lucha solidaria antiimperialista (Fuentes 2011a; vea también la contribución de Fuentes a este libro). Mientras que Webber y Fuentes llevan detalles minuciosos al análisis, frecuentemente interpretando el mismo evento de manera distinta, quiero enfocarme en los trazos más amplios de la relación dinámica entre los poderes constituyentes y constituidos, y su interacción.

Primero, hay que reconocer que el proceso en camino en Bolivia es precisamente eso: un proceso. Decir, como hace Webber en su respuesta a Fuentes (Fuentes 2011a y 2011b), que «fantasías aparte, es el neoliberalismo reconstituido» (reforzando a su afirmación anterior de que esto representa «una tendencia, no una ley»), me parece demasiado simplista porque en Bolivia, como en Venezuela y Ecuador, los procesos tan complejos y las oposiciones dinámicas no se pueden captar precisamente en términos tan estáticos como o el «socialismo» o el «neoliberalismo

reconstituido». Entender al proceso boliviano como algo en movimiento, significa que debemos tener cuidado, por ejemplo, de no interpretar al masacre de veinte partidarios del gobierno en Pando en el 2008, y el subsiguiente fallado golpe de Estado como simplemente *efectos* de la timidez de Morales (como hacen Webber y Hylton), sino también como causas en sí mismas de la implosión de la alianza de derecha, la aprobación de la Constitución y una consolidación institucional sin precedentes en las elecciones del 2009[11]. Sería difícil prever el despliegue de tal transformación desde la perspectiva estática de un «neoliberalismo reconstituido».

Entender al proceso boliviano como algo en movimiento también significa no asumir que cualquier pronunciamiento de líderes elegidos revele el alma escondida del proceso. De hecho, hacer eso es privilegiar el poder constituido por encima del poder constituyente. Por eso no encuentro convincente la insistencia repetida de Webber en las posiciones conservadoras y etapistas del vicepresidente boliviano (vea Webber 2010, 2011a, 2012 y Fuentes 2011a y 2011b)[12]. Cuando fue elegido Chávez en Venezuela, por ejemplo, fue con la plataforma moderada de la "Tercera Vía", que buscaba explícitamente atraer el apoyo de la clase media venezolana y, como García Linera, Chávez explícitamente

11 Mientras Hylton reconoce los efectos causales de estos momentos, al observar que «la furia de la derecha pueda haber apurado al fallido plan de golpe de octubre 2008 y la aprobación popular de la nueva Constitución en enero de 2009», él no persigue las implicaciones de tal reconocimiento para nuestra interpretación del proceso boliviano (2011, p. 245).

12 Webber (2012), por ejemplo, cuenta fuertemente con la formulación de García Linera de un «capitalismo andino-amazónico» de 2006, para tratar de demostrar que para el gobierno la revolución está fuera de discusión. La idea no es ignorar tales formulaciones, sino cambiar de énfasis de líderes a movimientos, reconociendo que los oficiales elegidos sólo se pondrán tan radicales como los movimientos les obligen a ser. La pregunta fundamental no es qué creen los líderes, sino qué es lo que los movimientos les obligan a ser. De hecho, las afirmaciones más incriminatorias de Webber, centran en las políticas fiscales conservadoras de Morales y su fidelidad, a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, pero otra vez, Chávez se comportaba de manera semejante durante su primer mandato.

defendió la propiedad privada en muchas ocasiones. Sería imposible, no obstante, explicar el despliegue subsiguiente del proceso venezolano en base a tales posiciones.

La radicalización del proceso venezolano ha coincido con un cambio en su composición de clase, y aquí Webber –quizás sin quererlo– nos da alguna razón para ser optimistas hacia el caso boliviano. En gran parte como resultado de su discurso y programa centristas, Chávez fue elegido al principio como un moderado con importante apoyo de la clase media, pero las dinámicas subsiguientes le catapultaron tanto a él, como al proceso, mucho más allá de lo que pueda haber sido previsible desde ese panorama de 1998[13]. El mismo Webber observa que gran parte de la clase media boliviana optó por apoyar a Carlos Mesa en lugar de a Morales (2011a, p. 231). Pues cuando critica a los esfuerzos posteriores de Morales para buscar el apoyo de la clase media, esa opción de clase no ha sido tan evidente para Morales como era para Correa en Ecuador, quien ha buscado refugio allí en vez de en los movimientos.

Queda la cuestión de cómo nos relacionamos con estos procesos. Mientras Fuentes enfatiza a la lucha solidaria antiimperialista internacional, Webber es abiertamente crítico hacia el proceso boliviano y afirma que es por apoyar a «la auto-actividad de los mismos oprimidos y explotados» que podemos construir un «antiimperialismo más fuerte» (Fuentes 2011a y 2011b). Interpretando al proceso boliviano como uno que consta tanto del Estado como de los movimientos, no obstante, nos permite entender nuestro papel de manera distinta. Aquí Hylton y Webber nos apuntan en la dirección correcta, observando que la timidez de Morales durante los primeros años de su gobierno no llevó a la timidez de las fuerzas de la reacción, quienes atacaron con una ferocidad desenfrenada y racista en 2008. De manera semejante, en Ecuador en 2010, Rafael Correa descubrió que, contra la arremetida de la derecha, había desperdiciado su base de apoyo en la izquierda. Y en Venezuela en 2002, Chávez aprendió

13 Vea Wilpert 2007, pp. 268-269, n.n. 19-20.

esta lección mejor que muchos cuando su base revolucionaria y organizada le regresó al poder a través de las movilizaciones masivas. Una parte de nuestro papel es asegurar que las lecciones de estos momentos se aprenden plenamente, lo que significa no posicionarnos fuera de los procesos con nuestras críticas ni retener esas críticas a favor de una respuesta puramente antiimperialista. Es en la relación entre el poder constituyente y constituido que podemos responder más fuertemente a ambas preocupaciones, pues en la defensa de estas revoluciones desde adentro –la defensa que más importa– que el apoyo de las masas constituyentes revolucionarias representa la clave, tanto para la supervivencia de estos procesos como para su radicalización[14].

## Caminando la delgada línea: Venezuela

Castañeda mantiene sus flechas retóricas más afiladas para el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, quien –insiste– «está hundiendo su país hasta el suelo»" (2006, p. 40)[15]. Cameron (2009, p. 334) cede demasiado terreno a Castañeda por

14 Aunque Webber (2010) espera un «ímpetu virtuoso» desde abajo, centra su análisis de manera demasiado inflexible hacia la exclusión de elementos de la estructura constituida. Por ejemplo, cuando las masas bolivianas lucharon exitosamente a favor de la nacionalización de Huanuni, Webber interpreta la situación no como parte del despliegue de un proceso sino como prueba de la vacilación del gobierno (así tácitamente privilegiando la retórica del gobierno por encima de la acción desde abajo). Mientras ciertamente tiene razón de que no podemos esperar que el gobierno iniciara la apertura de tal ciclo, tanto en Bolivia como en Venezuela, no obstante, ha jugado un papel importante.

15 Como prueba de esto, Castañeda menciona al cierre "tragicómico" y ya totalmente olvidado del puente a Maiquetía en 2006 (olvidado en parte porque fue reemplazado rápidamente con una estructura superior), así como datos macroeconómicos selectivos y engañosos, para afirmar que «Chávez hace muy poco para los pobres de su propio país" en términos de la reducción de la pobreza, y que su gobierno está destinado al derrumbe económico. La manipulación común, que afortunadamente está perdiendo su eficacia con el paso del tiempo, es ignorar la devastación macroeconómica del paro petrolero del 2002-2003 encabezado por la oposición venezolana. El Center for Economic and Policy Research ha consistentemente desacreditado a estos argumentos, tanto en el campo

distinguir de manera demasiado fuerte entre Morales y Chávez: el primero, para Cameron, llegó al poder a través de la movilización desde abajo, mientras el segundo es un "populista" sin ambigüedad alguna, divorciado de los movimientos sociales[16]. Mientras Chávez pareciera el populista perfecto –con uniforme incluso– es fundamental que entendamos sus orígenes y llegada al poder como resultado directo de la rebelión constituyente de los movimientos revolucionarios venezolanos. Es precisamente la historia simplista que he buscado acomplejar y reescribir desde la perspectiva de los mismos movimientos (Ciccariello-Maher 2013).

Ya en 1958, la "democracia" venezolana enfrentaba a una versión más radical y más directamente democrática expresada en parte por los movimientos revolucionarios. Durante la lucha guerrillera de los años 60 y el florecimiento de los movimientos semi-clandestinos de las décadas de los 70 y 80, podemos vislumbrar el desarrollo y la consolidación de un poder constituyente desde abajo que progresivamente tenía como blanco un sistema bipartidista que era corrupto, no democrático y más tarde neoliberal. Cuando Chávez y los radicales dentro de las fuerzas armadas comenzaron su conspiración en los años 80, ya estaban en contacto clandestino con estos movimientos; la explosión de la indignación popular a la vida pública durante la rebelión del Caracazo en 1989, fue el *sine qua non* para el ascenso de Chávez al poder. En 1992, Chávez y sus compatriotas intentaron tomar al poder constituido directamente, pero los movimientos sociales dieron apoyo logístico y espiritual al golpe, lo cual Chávez afirmó como respuesta directa al Caracazo (Chávez y Harnecker 2002).

Como resultado de esta larga historia, y a pesar del origen de Chávez formalmente fuera de los movimientos sociales, la relación

macroeconómico como con respeto a la pobreza (Weisbrot y Ray 2010 y Weisbrot 2011).

16 Beasley-Murray, Cameron y Hershberg (2009) afirman además que el gobierno chavista es esencialmente una coalición multiclasista, y en el proceso ignora el cambio importante de su composición de clase desde 1998.

entre el poder constituyente y el gobierno bolivariano ha sido más estrecha y no ha visto las rupturas fuertes de Ecuador y Bolivia. Mientras algunos podrían atribuir esta diferencia a la prevalencia de luchas indígenas y sobre los recursos naturales en estos últimos países, contra una situación menos conflictiva en Venezuela respecto a la extracción de recursos, lo contrario parece ser el caso. Al argumento de que la población indígena relativamente pequeña y el alto nivel de homogeneidad en Venezuela ha reducido cualquier tendencia hacia el conflicto Estado-movimiento, la militancia de los mapuches chilenos sirve como contraejemplo poderoso (Carruthers y Rodríguez 2009). Por otro lado, al argumento de que los movimientos indígenas en Venezuela son mas débiles que los de Ecuador y Bolivia, lo cual tiene cierta verdad, la firmeza y el éxito relativo del movimiento indígena en la Asamblea Constituyente sugeriría otra conclusión (Ciccariello-Maher 2013).

Finalmente, se podría argumentar que la prevalencia del petróleo ha llevado a los venezolanos e incluso a los movimientos sociales a aceptar al «estado mágico» y la economía petrolera que lo apuntala (Coronil 2013). Los pocos revolucionarios que se han excluido del movimiento bolivariano –tanto anarquistas como eco-comunistas– sí tienden a enfatizar la cuestión del petróleo[17]. La realidad, sin embargo, es que los análisis heterodoxos de la economía petrolera de los años 70 que generaron estas críticas contemporáneas, también han jugado un papel importante en la transformación de la política de los recursos bajo el chavismo, y que la economía petrolera que sostiene el «estado mágico» también es un arma de doble filo que ha contribuido a la caída de gobiernos[18]. Mientras que las luchas en contra de

17 Para declaraciones contra la economía petrolera, vea la tendencia Tercer Camino alrededor de Douglas Bravo y las críticas anarquistas más recientes (Uzcátegui 2011).

18 Desde el mismo Partido de la Revolución Venezolana (PRV) de Bravo, provinieron los textos más importantes (Comisión Ideológica de Ruptura 1975-1979), para luego entrar al gobierno chavista a través de figuras como el ex-comandante Alí Rodríguez Araque, secretario general de la OPEP, y economista petrolero Bernard Mommer (vea Mommer 2003).

aspectos y formas específicas de la extracción de los recursos naturales continúan hasta hoy, no cabe duda de que tanto la política petrolera heterodoxa del gobierno como un consenso relativo en Venezuela sobre la necesidad de invertir los ingresos petroleros en el desarrollo social, ha suavizado su relación con los movimientos sociales. Como están las cosas hoy, la mayoría abrumadora de los militantes, revolucionarios y movimientos reconocen y apoyan al gobierno bolivariano de manera más o menos crítica.

Pero nada de lo dicho significa que las masas constituyentes hayan voluntariamente bajado las armas –literalmente o figurativamente– a los pies del presidente de turno. Todo lo contrario: las masas constituyentes y sus organizaciones han mantenido una ferocidad igual a la de sus contrapartes ecuatorianos y bolivianos, quienes han forzado primero al mismo Chávez, y hoy a su sucesor, Nicolás Maduro, a caminar una delgada línea entre lo constituyente y lo constituido, los movimientos y el Estado. Mientras que estos movimientos son muchos y diversos, podemos aprender mucho siguiendo de cerca a los que hacen vida a las márgenes del movimiento bolivariano, los que se denominarían más frecuentemente como "revolucionarios", como "chavistas", pero que no obstante reconocen la importancia de mantener una relación con el liderazgo chavista nacional. Estos movimientos –de las milicias populares armadas liberalmente conocidas como Tupamaros, al brazo militante del movimiento de autodefensas campesinas, a los que ha forzado la mano del gobierno a ocupar tierras y viviendas, a los y las estudiantes, mujeres, afrovenezolanos y pueblos indígenas militantes– se han lanzado a la lucha no contra Chávez y el proceso bolivariano, sino contra el Estado que heredó. Como bien lo pone un graffiti que vi una vez en El Valle, "Viva Chávez, No el Gobierno!"

No obstante el apoyo amplio del que goza el chavismo, la relación entre este sector y el gobierno a veces parece más como un

Sobre la relación entre las expectativas generadas por una economía petrolera y la rebelión popular, vea Coronil y Skurski (2004).

enfrentamiento armado que un debate entre camaradas. Antes de su muerte, Chávez frecuentemente excoriaría y expulsaría a las voces más radicales, las que empujan demasiado fuertemente, para luego reincorporarlos discretamente y muchas veces cediendo a sus demandas. En un caso notable, Chávez incluso ordenó la detención del líder militante del Colectivo La Piedrita, quien había públicamente amenazado la vida de un magnate de los medios opositores, pero ese mismo líder nos explicó luego en entrevista personal que a veces el Presidente tiene que decir ese tipo de cosas. Este baile intrincado entre poderes constituidos y constituyentes ha permitido que los movimientos se visibilicen más allá de las fronteras de la mera aceptabilidad, mientras los líderes gubernamentales sigan jugando su juego electoral.

Como ya he sugerido, el derrotado golpe contra Chávez en 2002 constituyó un punto de inflexión fundamental en el proceso bolivariano, cuyas lecciones son múltiples y de las cuales hoy, no sólo Maduro sino también Morales y Correa deben hacer caso. Cuando Chávez fue derrocado por la oposición venezolana con apoyo de Estados Unidos, lo que quedó absolutamente claro fue cuánto dependía de las masas constituyentes, y solamente la movilización multitudinaria de esas masas en la calle y las intervenciones de sus elementos más organizados fueron los que aseguraron su retorno al poder. Durante un tiempo, por lo menos, Chávez aprendió la lección de aquel momento, y la Revolución Bolivariana experimentó un proceso fundamental de radicalización que nos lleva hasta la actualidad: de un gobierno de "tercera vía" caracterizado por la moderación, a uno que es abiertamente socialista y antiimperialista y está empezando a experimentar con toda seriedad con la democracia directa y las relaciones, la propiedad y la producción no-capitalista.

Pero si esta relación íntima entre el poder constituyente y constituido marca un avance innegable, la atadura del poder desde abajo (lo que Dussel llama la *potentia*) al Estado desde

arriba (*potestas*) contiene ciertos riesgos[19]. Mientras que la Revolución Bolivariana ha buscado incorporar la energía rebelde de la base constituyente al funcionamiento del poder constituido –sometiendo al Estado a la voluntad popular desde debajo, de una manera quizás inédita– esta relación no falta sus propios peligros. Los últimos años han visto el desarrollo desde abajo, tanto de asambleas populares como sus homólogos armados, las milicias populares, encontrándose con la institucionalización desde arriba tanto de los consejos comunales como las milicias bolivarianas. Cuando murió Chávez a principios del 2013, dejó la aspiración no cumplida de construir lo que el ex-guerrillero y teórico temprano del bolivarianismo, Kléber Ramírez Rojas, llamaba el «estado comunero» o –más provocador aún– un «gobierno de insurgencia popular» (2006, p. 207). Este estado comunal, como lo llamaba Chávez, implicaría el reforzamiento de los consejos comunales a nivel local y también la proliferación de estructuras consejistas parecidas por todas las esferas de la sociedad venezolana, y la integración de estas unidades locales dentro de una estructura más amplia que podría eventualmente desplazar al estado liberal-burgués existente.

Sin embargo, existen voces que apuntan hacia la contradicción evidente y los peligros de construir el poder popular desde arriba. Roland Denis (2010), por ejemplo, cita a Ramírez también, pero lo hace para apoyar la construcción de "comunas sin ley" como expresión sin mediación del poder constituyente. Mientras que se debe dar la bienvenida a la transformación de las estructuras existentes y entender la creación de nuevas instituciones, como ejemplo del reemplazamiento final del Estado capitalista, no podemos negar su tendencia de debilitar a la fuerza constituyente, desmovilizar al pueblo, y robar al proceso de su fuerza motor en el mismo intento de reforzarla. Desde la muerte

19 En su celebración de la incorporación del poder participativo en la Constitución Bolivariana, Dussel (2006, pp. 147-148) no presta suficiente atención a los peligros consiguientes, y en particular la manera en que el poder constituyente se transforma e incluso se debilita, una vez institucionalizado desde arriba.

de Chávez y la debilidad de Maduro en las urnas, han estallado fuertes debates entre sectores radicales y moderados dentro del chavismo, al lado de una resurgencia de luchas abiertas por parte de los movimientos indígenas. Por cierto, un importante cacique de esos movimientos –Sabino Romero– fue asesinado a unos pocos días de la muerte de Chávez (vea Denis 2013). Romero, quien citaba la Constitución Bolivariana del 2000 en defensa de la autonomía radical de las comunidades indígenas contra los ricos terratenientes, ha llegado a ejemplificar para muchos tanto las posibilidades radicales de la dialéctica venezolana de poderes constituyentes y constituidos, como también los intereses arraigados que no dudarán en defender sus privilegios.

## Conclusión

Como bien hacen claro los otros contribuidores a este tomo, la binaria ofrecida por Jorge Castañeda, que hace una distinción entre una izquierda "buena" y una izquierda "mala" en la América Latina contemporánea, es menos que insuficiente: es internamente contradictoria e incluso engañosa. Entendida desde la perspectiva del poder constituyente de las masas revolucionarias y sus movimientos sociales, los momentos constituyentes que marcan su intervención explosiva en la historia y los procesos constitucionales que ponen en marcha, la distinción de Castañeda desintegra, pero solamente después de sugerirnos que pueda haber más malo de los buenos y más bueno de los malos. Las tensiones intrínsecas entre los movimientos y el Estado son más evidentes entre gobiernos en los cuales el poder constituyente juega un papel menos mediado y más revolucionario, pero enfocar nuestra atención en el poder constituyente y los movimientos sociales desarma aún la uniformidad aparente entre la llamada izquierda mala, y nos provee una imagen mucho más compleja.

Mientras que los gobiernos actuales de Ecuador, Bolivia y Venezuela han construido sobre la base de momentos constituyentes explosivos para impulsar procesos constitucionales dirigidos a transformar la estructura del Estado, parece que Rafael Correa

solamente lo hizo como resultado de presiones de los movimientos desde abajo, y además como una estrategia peligrosa para flanquear aquellos movimientos cuya protección necesitaría. El caso de Evo Morales es más ambiguo, y queda por ver si tomará en serio las lecciones estratégicas de los últimos años. Central entre estas lecciones es la necesidad fundamental para el apoyo de las masas, tanto para proteger como para profundizar el proceso revolucionario, una lección visible en los conflictos bolivianos del 2008, el golpe ecuatoriano del 2010 y, en particular, el breve golpe contra Chávez en Venezuela en el 2002. Los que ocupan posiciones tenues dentro del poder constituido, tienen a darse cuenta de que su mejor defensa está en la rebeldía organizada de las masas populares. Y si no, puede que su destino compartiera más con el de Robespierre en Francia, y Toussaint en Haití, quienes, según James, destruyeron «su propia ala izquierda y con ello había[n] sellado su propia perdición» (2003, p. 266). Buscar refugio en los movimientos, además, lleva una doble promesa: salvaguardar los procesos revolucionarios mientras aportan la mejor garantía para que se aceleren, se radicalicen y profundicen.

## Referencias

ACUÑA, Rodrigo (2007, 20 de junio). «Chile or Venezuela - Which Is the Good Democracy?». *Red Pepper* [revista en línea]. Recuperado en junio del 2015 de http://www.redpepper.org.uk/Chile-or-Venezuela-Which-is-the/

BEASLEY-MURRAY, John, Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (2009). «Latin America's Left Turns: An Introduction». *Third World Quarterly,* Abingdon, *30* (2), pp. 319-330.

BECKER, Marc (2011). *¡Pachakutik! Indigenous Movements and Electoral Politics in Ecuador*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

BRANFORD, Sue (2009). «An Exception to Lula's Rule». *Red Pepper Pepper* [revista en línea]. Recuperado en junio del 2015 de http://www.redpepper.org.uk/An-exception-to-Lula-s-rule/

CAMERON, Maxwell A. (2009). «Latin America's Left Turns: Beyond Good and Bad». *Third World Quarterly*, Abingdon, *30* (2), pp. 331-348.

CARRUTHERS, David y Patricia Rodríguez (2009). «Mapuche Protest, Environmental Conflict and Social Movement Linkage in Chile». *Third World Quarterly*, Abingdon, *30* (4), pp. 743-760.

CASTAÑEDA, Jorge (2006). «Latin America's Left Turn». *Foreign Affairs*, Tampa (Florida), *85* (3), pp. 28-43.

CASTAÑEDA, Jorge G. y Marco A. Morales (eds.) (2008). *Leftovers: Tales of the Latin American Left*. Nueva York: Routledge.

CHÁVEZ, Hugo y Marta Harnecker (2002). *Un Hombre, Un Pueblo*. San Sebastián: Tercera Prensa.

CICCARIELLO-MAHER, George (2010, 1º de octubre). «Ecuador Between Three Wagers». *Counter Punch* [revista en línea]. Recuperado en octubre del 2015 de http://www.counterpunch.org/2010/10/01/ecuador-between-three-wagers/

_____ (2013). *We Created Chávez: A People's History of the Venezuelan Revolution*. Durham, NC: Duke University Press.

COLLIER, Ruth Berins y David Collier (2002). *Shaping the Political Arena*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

MÁRQUEZ, Ángel J. y Comisión Ideológica de Ruptura (1977). *El imperialismo petrolero y la Revolución Venezolana*. Caracas: Ruptura.

CORONIL, Fernando (2013). *El Estado Mágico: Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*. Caracas: Alfadil.

CORONIL, Fernando y Julie Skurski (2004). «Dismembering and Remembering the Nation: The Semantics of Political Violence in Venezuela». En Jo Marie Burt y Philip Mauceri (eds.), *Politics in the Andes*, pp. 81-106. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

DANGL, Benjamin (2007). *The Price of Fire*. Oakland (California): AK Press.

DENIS, Roland (2010). «Por unas Comunas "sin ley"». *Aporrea* [página en línea]. Recuperado el 19 de octubre del 2015 de http://www.aporrea.org/ideologia/a110539.html

_____ (2013). «Ha muerto el más grande de los maestros libertarios de Venezuela y dos días antes, otro maestro por igual». *Aporrea* [página en línea]. Recuperado el 7 de marzo del 2015 de http://www.aporrea.org/actualidad/a160660.html

DUQUETTE, Michel y otros (2005). *Collective Action and Radicalism in Brazil*. Toronto: University of Toronto Press.

DUSSEL, Enrique (2006). *20 Tesis de Política*. México, DF: Siglo XXI.

ELLNER, Steve (2011). «The Rightward Drift of a Latin American Social Democrat». *Science and Society,* Brooklyn (Nueva York), 75, pp. 419-428.

Folha de S. Paulo (2002, 11 de abril). «MST deve seguir lei, diz Lula». Autor [periódico en línea]. Recuperado de http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u31238.shtml

FRENCH, John D. (2009). «Understanding the Politics of Latin America's Plural Lefts (Chávez/Lula): Social Democracy, Populism, and Convergence on the Path to a Post-neoliberal World». *Third World Quarterly*, Abingdon, *30* (2), pp. 349-370.

FUENTES, Federico (2011a, marzo). «Government, social movements, and revolution in Bolivia today». *International Socialist Review*, Chicago (76) [revista en línea]. Recuperado el 7 de noviembre del 2012 de http://www.isreview.org/issues/76/debate-bolivia.shtml

_____ (2011b, 19 de agosto). «Book Review: From Rebellion to Reform in Bolivia». *Alborada* [página en línea]. Recuperado de http://www.alborada.net/fuentes-webber-book-review-bolivia

HARNECKER, Marta y Federico Fuentes (2008). *MAS-IPSP de Bolivia: Instrumento político que surge de los movimientos sociales*. Caracas: Centro Internacional Miranda.

HOLLOWAY, John (2002). *Change the World without Taking Power*. Londres: Pluto Press.

HYLTON, Forrest (2011, septiembre). «Old Wine, New Bottles: In Search of Dialectics». *Dialectical Anthropology,* Nueva York, *35* (3), pp. 243-247.

JAMES, C. L. R. (2003). *Los jacobinos negros*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

JORDAN, John y Jennifer Whitney (2003). *Que se vayan todos: Argentina's Popular Rebellion*. Montreal: Kersplebedeb.

MARIÁTEGUI, José Carlos (2007). *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.

MOMMER, Bernard (2003). «Subversive oil». En Steve Ellner y Daniel Hellinger (eds.), *Venezuelan Politics in the Chávez Era: Class, Polarization, and Conflict,* pp. 131-146. Nueva York: Lynne Rienner.

NEGRI, Antonio (1999). *Insurgencies: Constituent Power and the Modern State*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

PETRAS, James y Fernando Ignacio Leiva (1994). *Democracy and Poverty in Chile: The Limits to Electoral Politics*. Boulder: Westview Press.

RABY, D. L. (2006). *Democracy and Revolution: Latin America and Socialism Today*. Londres: Pluto Press.

RAMÍREZ ROJAS, Kléber (2006). *Historia documental del 4 de febrero*. Caracas: El Perro y la Rana.

SPRONK, Susan (2008, julio-septiembre). «Mapping Regional Tensions in Correa's Ecuador and Evo's Bolivia». *Relay* (23), pp. 39-43.

UZCÁTEGUI, Rafael (2011). *Revolution as Spectacle*. Tucson: See Sharp Press.

WEBBER, Jeffery (2010, septiembre). «From rebellion to reform». *International Socialist Review,* Chicago (73) [periódico en línea]. Recuperado de http://www.isreview.org/issues/73/feat-bolivia.shtml

_____ (2011a). *Red October: Left-Indigenous Struggles in Modern Bolivia*. Leiden: Brill.

_____ (2011b). *From Rebellion to Reform in Bolivia*. Chicago: Haymarket Books.

_____ (2012). «Revolution against "Progress": The TIPNIS Struggle and Class Contradictions in Bolivia». *International Socialism* (133) [periódico en línea]. Recuperado el 7 de noviembre del 2012 de http://www.isj.org.uk/?id=780

WEISBROT, Mark (2011, 18 de mayo). «Latin America's Growth Picks Up after Decades of Failure». *Foreign Policy Digest* [página en línea]. Recuperado de http://www.foreignpolicydigest.org/latin-america%E2%80%99s-growth-picks-up-after-decades-of-failure/

WEISBROT, Mark, y Rebecca Ray (2010, 6 de septiembre). «Update on the Venezuelan Economy» [documento en línea]. Washington: Center for Economic and Policy Research. Recuperado de http://www.cepr.net/documents/publications/venezuela-2010-09.pdf

WILPERT, Gregory (2007). *Changing Venezuela by Taking Power*. Londres: Verso Books.

# Buena izquierda, mala izquierda e intervenciones benevolentes: periodismo al servicio de una agenda neocolonial

Kevin A. Young

Desde 1998, en Latinoamérica se ha visto la elección de una ola de presidentes de izquierda o centro-izquierda de varias ideologías, cuyos triunfos han sido producto de movimientos sociales y un fuerte desencanto del electorado frente a las políticas neoliberales de sus predecesores. Ante tal desafío en su "traspatio", el gobierno estadounidense naturalmente ha tratado de limitar sus pérdidas. Una de sus estrategias ha consistido en promover lo que considera la "buena" izquierda, representada por gobiernos en Brasil, Uruguay y otros países, mientras combate a la "mala" izquierda en países como Venezuela, Bolivia y Cuba. Dividir la izquierda "moderada" de la "radical", se ha convertido en un fin explícito de la política norteamericana en la última década. Portavoces del Departamento de Estado han enfatizado la necesidad de fortalecer al bloque de gobiernos más amistosos para servir como un «contrapeso a gobiernos como los que actualmente están en poder en Venezuela y Bolivia, quienes persiguen políticas que no responden a los intereses de sus pueblos

ni de la región» (Secretario de Estado adjunto James Steinberg, citado en Weisbrot 18 de febrero del 2009). Tanto Obama como Bush han perseguido una estrategia paralela dentro de los mismos países de mala izquierda, dirigiendo cientos de millones de dólares a grupos de oposición derechistas bajo el pretexto de "promoción de la democracia".

Los intelectuales y medios dominantes, incluyendo a muchos de los más liberales, han contribuido a la popularización de esta imagen binaria de la izquierda latinoamericana al apuntar a una "mala" izquierda que es autoritaria políticamente y errática económicamente, y una "buena" izquierda que es democrática y dedicada a una economía de libre mercado. Entre los pioneros de esta tesis se encuentra a intelectuales latinoamericanos como Teodoro Petkoff y Jorge Castañeda (Petkoff 2005, Castañeda 2006, Castañeda y Morales 2008). De alguna forma u otra –sea por transmisión o innovación independiente– sus ideas han encontrado eco en los mundos de prensa y de academia, especialmente en los Estados Unidos. El *New York Times*, que frecuentemente ha citado a Castañeda, ha distinguido entre aquellos gobiernos que «avanzan agresivamente una agenda izquierdista» y la «estrategia izquierdista más moderada de Brasil»; mientras que los primeros «mezclan el populismo económico con el autoritarismo», Brasil adopta «políticas amables a los inversores» y respeta las instituciones democráticas (Barrionuevo 19 de noviembre del 2007, Schmidt y Malkin 17 de marzo del 2009). Reporteros del *Washington Post* han contrastado a «la izquierda populista, intransigente y nacionalista, que es antagónica hacia los Estados Unidos» –grupo que consiste en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba y, a veces, Argentina– con el camino «pragmático» y «completamente diferente» de los gobiernos «social demócratas, globalizados y pro-mercados» en Brasil y otros países (Booth 9 de marzo del 2009, Forero 20 de febrero del 2008)[1].

Una muestra cuantitativa de la cobertura de algunos medios estadounidenses demuestra que el concepto de buena-izquierda/

1 Con respecto a Argentina, véase Forero 22 de abril del 2012.

mala-izquierda está frecuentemente empleado. Del 2009 al 2011, el *New York Times* publicó 38 artículos noticiarios que hacían una distinción, más o menos explícita, entre el gobierno venezolano de Hugo Chávez y los gobiernos brasileños de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) y Dilma Rousseff; sólo 12 artículos hicieron referencia a las similitudes o la colaboración entre los dos gobiernos y/o la oposición brasileña a las políticas estadounidenses. La distinción casi siempre llevaba un tono normativo, aunque sin utilizar los adjetivos "bueno" y "malo". Es más, los regímenes de "mala izquierda" de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Daniel Ortega (Nicaragua), fueron frecuentemente vinculados a Chávez y contrastados con los gobiernos de Brasil, Uruguay, Chile y El Salvador: durante esos tres años, 53% de los artículos y columnas de opinión que mencionaban a Evo Morales, lo asociaban con el gobierno venezolano; los porcentajes correspondientes a Correa y Ortega eran 43 y 52, respectivamente.

Cabe notar que la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda parece menos común en el extremo derecho del espectro mediático dominante. Los medios más derechistas compartían la antipatía del *New York Times* hacia Hugo Chávez, pero tendían a criticar al gobierno de Brasil también. De 2009 a 2011 el *Washington Times* –un periódico a la derecha ideológica del *New York Times*– publicó solamente cuatro artículos noticiarios y dos de opinión que implicaban una distinción entre las políticas venezolanas y brasileñas. Fue mucho más común que el periódico enfatizara (y denunciara) la percibida colaboración entre los dos gobiernos: 14 artículos noticiarios, columnas y cartas señalaban las similitudes o colaboración de Brasil con Venezuela y/o su oposición a la política de los Estados Unidos. El *Washington Post*, ideológicamente un poco a la derecha del *New York Times*, publicó una mezcla de artículos que reflejaban la tesis de las dos izquierdas y otros que sí notaban similitudes o colaboración entre Venezuela y Brasil. La cobertura de National Public Radio (un medio políticamente moderado) y el Fox News Network

(un canal televisivo de extrema derecha) coincidía con este patrón (véase Cuadro 1)[2].

**Cuadro 1**
**Frecuencia de la tesis de "dos izquierdas" en reportajes noticiarios (2009 al 2011)**

| | Reportajes que distinguieron entre políticas de Venezuela y Brasil | Reportajes que notaron similitudes/ colaboración/ oposición brasileña a políticas de EE UU | Artículos que hacían distinción (primera fila como porcentaje de la combinación de las dos filas) |
|---|---|---|---|
| ***New York Times*** | 38 | 12 | 76 % |
| ***National Public Radio*** | 5 | 3 | 63 % |
| ***Washington Post*** | 18 | 14 | 56 % |
| ***Washington Times*** | 4 | 7 | 36 % |
| **Fox News**[3] | 4 | 12 | 25 % |

Este capítulo comienza con un resumen de la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda en la cobertura de Latinoamérica en los medios dominantes estadounidenses. Luego resalta cuatro maneras en que este discurso obscurece la realidad: 1) al exagerar el contraste entre lo que se alega sean los dos campos; 2) al ignorar las complejidades dentro de cada campo; 3) al ignorar

2 Según una búsqueda de la base de datos LexisNexis, por ítems que mencionaran Brasil y Venezuela, y por artículos del *New York Times* que mencionaran a los demás presidentes de mala izquierda. Por razones de espacio no analizo a los gobiernos de los Kirchner en Argentina, pero a veces son incluidos con la mala izquierda (Castañeda 2006, Forero 22 de abril de 2012).

3 Números incluyen toda su cobertura, no sólo reportajes noticiarios.

cómo las circunstancias domésticas en cada país, y no sólo los presidentes, determinan las políticas; y 4) al exagerar las fallas de los gobiernos de la llamada mala izquierda. En conclusión propongo que el imaginario binario de la izquierda latinoamericana refleja mucho más los objetivos neoliberales e imperialistas, y la dependencia de la prensa dominante de los intereses del Estado y las corporaciones, que la realidad empírica. Tal discurso se debe comprender en el contexto de una tradición histórica de «narrativa contrainsurgente» (Guha 1988). Las caracterizaciones binarias de los pueblos subordinados reflejan una respuesta discursiva común de parte de los intereses élites e imperiales a la resistencia popular, y uno con muchos precedentes históricos en cuanto a las relaciones entre los EE UU y Latinoamérica.

## Demócratas y dictadores

El punto más común de contraste entre los regímenes de buena y mala izquierda es su nivel de respeto por la democracia y los derechos humanos. El reportero Simon Romero (29 de junio del 2009) del *New York Times* tipifica la narrativa estándar:

> Por un lado están los países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde los votantes han dado mucho más poder a sus presidentes populistas, en parte al permitirles extender su tiempo en poder y a veces erosionando el poder del Congreso y la Corte Suprema, instituciones retratadas como aliadas de la antigua oligarquía. Por el otro lado hay naciones de diversos matices políticos, incluyendo Brasil, el poder ascendente de Latinoamérica, donde instituciones elásticas han permitido más diversidad de los participantes en la política, descartando la llamada democracia participativa que el señor Chávez, el presidente venezolano, ha estado ansioso por promover en la región.

De manera similar, Juan Forero (28 de noviembre del 2009) del *Washington Post* contrasta a «Brasil democrático» con los «líderes fervientemente anti-americanos» de la región. Mientras

que los regímenes de la buena izquierda respetan a las leyes e instituciones existentes en sus países, los de mala izquierda pretenden enmendar a sus constituciones para extender límites de término y aumentar el poder ejecutivo. A diferencia de los gobiernos de la buena izquierda que respetan a la prensa privada, los de la mala izquierda reprimen sistemáticamente toda crítica mediática. Y mientras que los primeros permiten que sus ciudadanos protesten, los segundos emplean una represión reminiscente de Mussolini, Franco y Hitler[4].

La izquierda agresiva y autoritaria es personificada por el difunto Chávez, el «caudillo revolucionario y narcoterrorista» que presidía «un Estado hinchado y represivo» (editoriales del *Daily News*, 28 de noviembre del 2009, y del *Washington Post*, 17 de agosto del 2007). Según la narrativa convencional, fue el propio Chávez quien generó sin ayuda la gira regional hacia la izquierda, de manera similar a la Unión Soviética y Cuba, que antes fueron los titiriteros detrás de todo movimiento de resistencia de izquierda durante la Guerra Fría. Las elecciones de líderes izquierdistas no tienen nada que ver con la extrema desigualdad que existe en la región, con la dominación que históricamente ha ejercido Estados Unidos y las oligarquías nacionales, ni con el hecho de que la gran mayoría de latinoamericanos esté en desacuerdo con las políticas neoliberales promovidas por Washington. Con la ayuda de unos «satélites» cuyos líderes han renunciado a «una política exterior independiente» y ahora están «alineados esclavamente» a Venezuela, Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, han engañado a decenas de millones de personas para que apoyen su agenda nefasta. Chávez combinaba clientelismo político con plena represión, «comprando apoyo» entre las multitudes irracionales que son «en gran parte, ciegas a resultados», mientras silenciaba a los venezolanos que lo retaban (editorial del *Washington Post*, 29 de noviembre de 2009; Richard Feinberg citado por Rogers 23 de marzo 2011; editorial

4 Por ejemplo, Rowan y Schoen 13 de noviembre del 2007.

del *Daily News*, 28 de noviembre de 2009; Diehl 26 de septiembre del 2005).

Un ejemplo de las maniobras descaradas de Chávez fue su apoyo al derrotado presidente hondureño Manuel Zelaya. Sostenían los editores del *Washington Post* (30 de junio de 2009), que el golpe militar de junio de 2009 ocurrió en parte porque «el presidente hondureño recién había quedado hechizado por el presidente venezolano», quien presumiblemente hechizó a Zelaya para que aumentara el sueldo mínimo en el país, en conjunto con otras medidas que beneficiaban a los pobres y la clase obrera. La cobertura de prensa tendía a ignorar las políticas socioeconómicas de Zelaya, pero casi nunca olvidó mencionar sus relaciones amistosas con Chávez: en los primeros dos meses después del golpe, el *Washington Post* mencionó su relación estrecha con Chávez 13 veces y publicó varios artículos que se enfocaban en el tema. El otro énfasis en la cobertura sobre Zelaya fue su supuesto intento de modificar los límites en cuanto a la reelección presidencial, acusación engañosa pero que ayudaba a definirlo como autoritario (Young 2010a).

Un enfoque clave en los ataques hacia la mala izquierda ha sido lo que se alega sea el control estatal de los medios, sobre todo en Venezuela. Dichos ataques se intensificaron después de mayo del 2007, cuando el gobierno se negó a renovar la licencia pública de la estación televisiva RCTV, la cual había apoyado abiertamente un golpe militar contra Chávez en 2002. Un informe típico, de Simon Romero (5 de febrero del 2011), da la impresión que la mayoría de los medios son controlados por el Estado: "librerías estatales", "periódicos estatales", "televisión estatal" y "radio estatal" –nos dice– forman parte del «complejo propagandístico estatal en expansión». Romero y sus colegas han lanzado semejantes acusaciones hacia gobiernos en Ecuador y Bolivia (Romero y Caselli 8 de mayo del 2011). Como explico más abajo, tales acusaciones exageran el nivel del control estatal en estos países e ignoran la represión estatal de los medios opositores en países alineados con los Estados Unidos (Young 2008).

Otros signos del autoritarismo represivo de los gobiernos de mala izquierda son su intento por militarizar sus sociedades y su antisemitismo. Editores indignados muchas veces han alegado que el gobierno venezolano está «armándose hasta los dientes» para reprimir la disidencia doméstica, y tal vez provocar «una Guerra Fría reconstituida al sur de la frontera» (editorial de *Investor's Business Daily*, 28 de julio de 2008)[5]. También se acusa a Chávez de promover una especie de *pogrom* moderno en contra de los judíos venezolanos, a quienes él supuestamente culpaba por la desigualdad y otros problemas en el país. Ninguna de las dos acusaciones tiene fundamento: el gasto militar bajo Chávez fue sólo ligeramente más alto que en los años noventa, y en el año 2012 fue apenas el 0,4 % del gasto militar estadounidense (cálculos del Stockholm International Peace Research Institute, Sipri 2013); las acusaciones de antisemitismo oficial se basaban en citas muy selectivas de los comentarios públicos de Chávez e interpretaciones deshonestas de eventos por parte de la prensa (Stoneman 2008, pp. 101-103; Wingerter y Delacour 2009). Sin embargo, no se permite que la realidad interfiera con el dogma bien practicado, casi todo lo cual coincide con la retórica del gobierno norteamericano.

## Libremercadistas racionales y populistas radicales

Mucha cobertura mediática y análisis intelectual también sugiere un marcado contraste entre las políticas económicas de los dos campos. Hugo Chávez personifica un énfasis en el nacionalismo económico y el gasto social que sacrifica el verdadero desarrollo económico. La «nacionalización de las industrias» y el «gastar estatal libertino» de su gobierno indicaban una estrategia cínica para «comprar el apoyo –o la tranquilidad– popular» (Forero 29 de abril del 2010; editorial del *Washington Post*, 17 de agosto del 2007). Por eso la inflación –el pecado supremo según

5 Véanse también editoriales del *Washington Post*, 14 de enero del 2005, 17 de agosto del 2007 y 8 de abril del 2010.

los economistas monetaristas y neoliberales– se ha puesto por las nubes, el resultado del ansia de Chávez por el poder a costa de la sostenibilidad y el desarrollo económico.

«Brasil y Chile representan lo contrario de Venezuela», con Lula liderando la «nueva izquierda pragmática», ese grupo «económicamente y políticamente moderado» que «abraza la globalización» y se adhiere a «políticas centristas» y «responsables» (Sabatini y Marczak 2010, Forero 17 de enero 2010 y 29 de abril del 2010). A diferencia de la mala izquierda, los «gobiernos en Brasil y Chile han adoptado políticas amigables a las inversiones» (Schmidt y Malkin 17 de marzo del 2009). Muchos medios empresariales están de acuerdo: Brasil «está asegurando su futuro en la forma correcta», escriben los editores de *Investor's Business Daily* (24 de noviembre de 2009), al «reducir los impuestos, hacer perforaciones en búsqueda de petróleo, pagar sus cuentas y vivir dentro de su capacidad». Una versión académica de esta distinción sostiene que el surgimiento de la mala izquierda es producto de la riqueza subterránea de esos países, la cual los conduce a perseguir un desarrollo insostenible basado en la renta (Weyland 2009).

En este discurso, las "economías de mercado" y la "racionalidad" son lógicamente inseparables. Hablando de Bolivia, el analista Kurt Weyland lamenta que las políticas neoliberales sean «racionales económicamente pero suicidas políticamente» debido a la «resistencia furiosa» de las masas apasionadas. Éstas sufren de una «profunda aversión de pérdida» y una paranoia extrema sobre los «extranjeros codiciosos» (2009, p. 156). Pero lo escrito no está del todo pesimista: Juan Forero (17 de enero del 2010) del *Washington Post* cita con aprobación a un representante de un tanque de pensamiento norteamericano (Christopher Sabatini) que dice que «los votantes son más calculadores y racionales de lo que creemos (…) Los pueblos están decidiendo apoyar las economías de mercado y a los líderes racionales». Forero, en efecto, celebraba el triunfo electoral del presidente de la derecha chileno, Sebastián Piñera, al cual interpretó –con demasiado optimismo, al parecer– como un signo de un «patrón

amplio regional» de una «preferencia creciente por los centristas libremercadistas».

Las diferentes políticas económicas de las izquierdas buena y mala han generado resultados completamente diferentes, según periodistas y comentaristas: mientras que los países de buena izquierda han disfrutado tanto de un crecimiento económico formidable como de reducciones impresionantes de la pobreza y la desigualdad, el «mal manejo patológico» de Chávez «ha conducido la economía al desastre» (Pérez-Stable 23 de mayo del 2010). Casi todos niegan por completo las mejoras sociales en Venezuela de los últimos quince años, implicando que las únicas consecuencias para los venezolanos han sido una pobreza creciente, una afirmación con muchos precedentes históricos en la cobertura de la prensa sobre las revoluciones cubana, sandinista y otras (Johnson 1980, p. 241; Young 2010b, p. 48). Afortunadamente para esos regímenes, las masas son «en gran parte ciegas a resultados» y fáciles de engañar, como lamenta Jackson Diehl (ob. cit.) en el *Washington Post*.

De nuevo, este discurso es muy parecido al de funcionarios estadounidenses. Durante una visita a Brasil en marzo del 2010, la entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton (2010), exigió que el gobierno venezolano «restaure la propiedad privada (y) vuelva a una economía de libre mercado». Clinton distinguió a Venezuela de la buena izquierda, comentando que «deseamos que Venezuela mirara más al sur, específicamente a Brasil y a Chile». Informes recientes del Director de Inteligencia Nacional de EE UU, tanto bajo Obama como bajo Bush, advierten que «un grupo pequeño de gobiernos populistas radicales (está) enfatizando el nacionalismo económico a costa de estrategias de mercado», de ese modo «chocando directamente con las iniciativas estadounidenses» y sus «intereses en la región» (McConnell 2008, p. 34; Blair 2010, p. 30).

La selección de adjetivos en estas descripciones es reveladora: la mala izquierda es "radical", "errática", "libertina", "esclava" y "patológica", mientras que la buena izquierda es "moderada", "responsable", "pragmática", "independiente" y "racional". La mala

izquierda es impulsivamente nacionalista en su política económica, al rechazar la globalización corporativa que es sinónimo de la civilización y el progreso; la buena izquierda ansiosamente "abraza" aquellos conceptos, mostrando así su madurez y su capacidad para gobernarse. Este lenguaje forma eco del retrato de Castañeda, que contrasta una mala izquierda que «es nacionalista, estridente y de mente cerrada» con una buena izquierda «moderna» y «de mente abierta» (2006, p. 29).

## El que interviene benevolentemente

Estos tropos tienen raíces profundas en la historia del discurso imperial. A primera vista la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda tal vez parezca más ilustrada que la clásica retórica imperialista, puesto que no tacha a todos los latinoamericanos de inferiores. Pero el colonizador listo siempre ha distinguido entre los sujetos "buenos" y "malos". Cristóbal Colón, en su diario, contrastaba a los pueblos arahuacos –pacíficos, según decía él– y los caribes, quienes supuestamente eran agresivos, militaristas y caníbales (Hulme 1994, pp. 169-171). Imperialistas europeos y estadounidenses, así como las élites latinoamericanas, utilizarían similares estrategias discursivas a lo largo de los siglos[6]. A principios del siglo xx, tanto los jingoístas –representados por Theodore Roosevelt–, como los "idealistas" –entre ellos Woodrow Wilson–, distinguían entre los niños traviesos de Centroamérica y el Caribe, por un lado, y los líderes más responsables al sur, por otro. Wilson y sus colegas prometieron que iban a «enseñar a las repúblicas sudamericanas a elegir» a «los buenos hombres»,

6 Muchos políticos y medios latinoamericanos coinciden con el discurso aquí analizado (ver capítulo de Lupien). Por ejemplo, desde los años 1980 la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han reconocido oficialmente a los pueblos originarios de sus países, pero en la forma de un "multiculturalismo neoliberal" empobrecido, lo cual distingue implícitamente entre el que Hale (2004) designa el "indio permitido" y el no permitido. El primero pide cortésmente el reconocimiento cultural y lingüístico, mientras que el segundo exige no sólo eso sino también cambios socioeconómicos y el poder político real.

para reemplazar a los «niños malcriados» (Schoultz 1998, pp. 244, 272, 192–197; Kenworthy 1995, p. 30). Más adelante, después de la revolución cubana de 1959, la política estadounidense enfocaba en ayudar a los latinoamericanos buenos y aislar –y muchas veces, exterminar– a los malos; muchos de los tropos utilizados para caracterizar a Hugo Chávez tienen precedentes en los retratos hacia Fidel Castro (Platt y otros 1987; Johnson 1980, pp. 113, 241). Binarias semejantes son comunes en las descripciones de pueblos asiáticos y africanos, especialmente de musulmanes (Mamdani 2004).

Muchas veces, tales distinciones han servido para justificar la intervención exterior, en nombre de "proteger" a los buenos de los malos. Incluso hoy en día, el discurso de la "intervención benevolente" acompaña seguidamente al discurso de buena-izquierda/mala-izquierda. Si bien Colón protegía a los arahuacos pacíficos de los caribes salvajes, el gobierno de los Estados Unidos promueve la democracia a través de sus relaciones con la buena izquierda, protegiendo a esos países de la mala izquierda. Tales intervenciones siempre –por definición– son llevadas a cabo con intenciones nobles. Este discurso paternalista no ha cambiado dramáticamente a lo largo de la historia del imperialismo y del colonialismo interno, aunque los demonios varían según la época: la corrupción, los golpes y la intervención europea en el tiempo de Wilson, el comunismo durante la Guerra Fría y los autócratas, populistas, terroristas y narcotraficantes desde el fin de la Guerra Fría. Los demonios principales normalmente vienen desde el exterior –de Europa, de la Unión Soviética o de diversos países del Medio Oriente o Asia– pero típicamente hay demonios internos también (Kenworthy 1995, pp. 18-37).

Dos ejemplos sirven para mostrar el apoyo de la prensa (sea abierto o tácito) prestado al intervencionismo estadounidense: el golpe militar contra Hugo Chávez en 2002, y el que derrotó a Manuel Zelaya en 2009. En ambos casos, los reportajes y comentarios enfatizaban el anhelo democrático del gobierno estadounidense y sus legítimas preocupaciones de seguridad. Más allá de glorificar los motivos de los Estados Unidos, la cobertura

de prensa también tendía a dar la impresión que los latinoamericanos necesitaban y deseaban la intervención estadounidense.

El golpe del 2002 en Venezuela y la respuesta estadounidense de apoyo a los golpistas generalmente fueron recibidos con alegría o ambivalencia entre los editores de los periódicos más grandes. El *Washington Post* fue prácticamente el único que condenó al golpe de forma inmediata (aunque criticó fuertemente a Chávez a la vez); el *New York Times*, el *Chicago Tribune* y otros lo apoyaron abiertamente (Coen 2002). Muchos editores y reporteros alabaron las acciones estadounidenses o desmintieron el papel estadounidense en el golpe: los editores del *Times* (13 de abril de 2002) afirmaron falsamente que el golpe fue «un suceso puramente venezolano». Reportajes posteriores seguían ignorando evidencias del papel norteamericano, por ejemplo al repetir sin cuestionar las afirmaciones dudosas de una investigación oficial, según las cuales el Departamento de Estado había «enviado un mensaje consistente de apoyo a la democracia en Venezuela» (citado en Friel y Falk 2004, p. 180).

Semejante patrón caracterizó la cobertura de la prensa después del golpe militar en Honduras en junio del 2009. En los dos meses posteriores al golpe, sólo el 10 % de los reportajes del *New York Times* y el *Washington Post* mencionaron el asesinato de manifestantes por parte del régimen golpista (Young 2010a). Los editores del *Post* prestaban su fuerte apoyo al golpe y recomendaban una decidida acción norteamericana para contrarrestar «la facción, encabezada por el mentor del señor Zelaya, Hugo Chávez, que está intentando derrotar las instituciones democráticas por toda la región». Chávez, advertían sin ironía, «sueña con un *putsch* en Tegucigalpa que resultaría en otra autocracia sin leyes como la suya»/ El periódico aplaudía la respuesta de la administración de Obama, cuya participación en los diálogos posteriores se había «convertido en una oportunidad para dar un golpe al autoritarismo populista que representan los señores Chávez y Zelaya». Dos semanas después del golpe, Obama y Clinton estaban «al punto de lograr su propio golpe en Honduras y avanzar los intereses americanos con una destreza no

vista en muchos años de parte de Washington» (editoriales del *Washington Post*, 30 de junio y 9 de julio de 2009; Schumacher-Matos 12 de julio 2009).

Esta afirmación quizás parezca una confesión honesta de que Estados Unidos actúa según sus propios intereses egoístas. Sin embargo, dentro de la lógica imperial no hay ninguna contradicción entre "los intereses [norte]americanos" y el "apoyo a la democracia"; se define "la democracia" como lo que apoye el gobierno estadounidense. La palabra "imperio" sólo aparece entre comillas irónicas, siendo un ejemplo de la hipérbole de los anti-americanos paranoides en vez de algo que realmente exista (por ejemplo Romero 5 de febrero del 2011). "Anti-americano", término que se usa para referirse a quienes se oponen a las políticas estadounidenses, se entiende como sinónimo de "no democrático", y viceversa: esas políticas avanzan la democracia, y por eso uno no puede oponerse a ellas y al mismo tiempo calificarse como demócrata (en la misma forma, periodistas contrastan el "Brasil democrático" y la mala izquierda "anti-americana", Forero 28 de noviembre del 2009).

Cinco meses después, en noviembre de 2009, Estados Unidos quedó prácticamente solo al aceptar la legitimidad de la elección que trajo al ranchero Porfirio Lobo al poder. La elección fue llevada a cabo en un ambiente de intensa represión de la disidencia, incluyendo un asalto físico al candidato opositor Carlos Reyes, quien retiró su candidatura para no legitimar los resultados (Corcoran 2010, Young 2010a). Pero Estados Unidos perdonó tantas trivialidades, avalando los resultados y así «encabezando el apoyo para la opción democrática», según los editores del *Washington Post*. Si bien el multilateralismo sería preferible, «la lección de la crisis hondureña es que Estados Unidos no siempre puede perseguir tal multilateralismo y también apoyar la democracia» (29 de noviembre de 2009). El *Washington Post* no fue el único medio estadounidense que aplaudía los motivos nobles de su gobierno: los editores del *New York Times* (7 de noviembre de 2009) afirmaron que «la administración Obama ha trabajado duro, si algo esporádicamente, para tratar de resolver la crisis

política en Honduras». Un vistazo a la verdadera trayectoria de apoyo prestado a los regímenes golpistas represivos de Roberto Micheletti y Porfirio Lobo (y ahora, Juan Orlando Hernández) tal vez produzca otras conclusiones (Weisbrot 2009, Frank 12 de febrero del 2013).

Más allá de los tropos de buena y mala izquierda, las descripciones de la izquierda latinoamericana retoman otros elementos de discursos históricos que retratan a los latinoamericanos como infantiles, femeninos, irracionales y en necesidad de un maestro. La desobediencia de las ordenanzas de ese maestro refleja la «inmadurez política» por parte de líderes «impetuosos e irresponsables» (Secretario de Estado adjunto Bernard Aronson, citado por Brice 24 de noviembre del 2009; Schumacher-Matos 27 de noviembre del 2009). Los pueblos que siguen votando por políticos de la mala izquierda no lo hacen por razones racionales sino porque son cautivados por demagogos y «en gran parte ciegos a resultados», un retrato despectivo con raíces profundas entre oficiales e intelectuales estadounidenses (Diehl, ob. cit.; Schoultz 1998, pp. esp. 341–342; Johnson 1980; Black 1988; Pike 1992; Kenworthy 1995)[7].

Un aspecto relacionado al discurso intervencionista es la noción de que los latinoamericanos buenos "necesitan" y "desean" la intervención. La historia del imperialismo occidental está llena de esta idea, y sigue en vigencia hoy en día. Según el Papa Benedicto XVI (2007), los pueblos nativos de las Américas, aniquilados en gran parte por las conquistas europeas, «anhelaban silenciosamente» el cristianismo antes de 1492. Los latinoamericanos buenos ahora anhelan la intervención de los Estados Unidos, el cual debe seguir "encabezando el apoyo para la opción democrática", en palabras del *Washington Post* («Editorial», 29 de noviembre del 2009). Refiriéndose a la crisis hondureña como ejemplo, los intelectuales Christopher Sabatini y Jason Marczak (2010) afirman que los países latinoamericanos «claramente» están «esperando el liderazgo» estadounidense, y que ellos han

7 Ver capítulo de Lupien.

estado «despegados de las responsabilidades» de una asociación verdadera de naciones. Como señalaré más adelante, los gobiernos latinoamericanos de los últimos años han demostrado un nivel de liderazgo y cooperación sin precedentes en la historia de la región. Pero ese liderazgo ha sido en gran parte independiente de los Estados Unidos, hecho que lo descalifica automáticamente. El remedio para los problemas de Latinoamérica, según Sabatini y Marczak, es un «liderazgo firme y fuerte» de parte de los Estados Unidos. Partiendo de esta realidad, los reportajes periodísticos de la última década a veces han presentado críticas al gobierno norteamericano «por ignorar a Latinoamérica» (Constable 21 de febrero del 2006).

Tales reportajes cuentan muy poco de las consecuencias históricas del liderazgo estadounidense para los pueblos de Latinoamérica, y ofrecen muy poca evidencia concreta de que los latinoamericanos realmente estén anhelando ese liderazgo de nuevo (aunque quizás el anhelo sea "silencioso", como diría el Papa Benedicto). De todos modos, el "rechazo" del liderazgo estadounidense muchas veces es un prerrequisito del éxito político para los candidatos en la época actual. Una de las explicaciones por la debilidad de los partidos derechistas en países como Venezuela o Bolivia, es que no repudian el imperialismo y las políticas económicas neoliberales asociadas con ello[8].

## Retórica y realidad

Los demás capítulos en este libro presentan análisis profundos de las realidades de la izquierda latinoamericana, pero aquí cabe hacer unas breves observaciones al respecto para demostrar mejor la deshonestidad sistemática de la cobertura mediática. Por lo primero, hay que reconocer que la tesis de buena-izquierda/

8 En este sentido, llama la atención el hecho de que, en las elecciones presidenciales en Venezuela de 2012 y 2013, el candidato de la oposición Henrique Capriles rompió con las plataformas opositoras del pasado y prometió mantener ciertos programas chavistas si fuera elegido, promesa que indudablemente lo ayudó en las urnas.

mala-izquierda sí contiene algunos fragmentos de la verdad. El gobierno venezolano, junto al de Cuba, ha sido el más anti-imperialista y ha tomado pasos significantes por romper con la doctrina neoliberal al nacionalizar ciertas empresas grandes y al aumentar dramáticamente el gasto social. El boliviano ha sido un poco más tímido, pero igual ha tomado algunas acciones que lo distinguen de la llamada buena izquierda, por ejemplo al aumentar sustancialmente los impuestos que pagan las empresas multinacionales. Venezuela, Bolivia y Ecuador han aprobado nuevas constituciones con la intención de democratizar sus países y reducir el poder de las oligarquías tradicionales. Los gobiernos de buena izquierda han sido menos abiertamente anti-imperialistas, han amenazado menos a las multinacionales y no han perseguido grandes reformas al sistema político. Estos contrastes resultan de diferencias ideológicas y de contextos políticos y económicos distintos en los países de cada campo.

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda se equivoca en cuatro formas: exagera el contraste entre los dos campos, ignora realidades complejas dentro de cada campo, ignora el papel de las circunstancias sociales domésticas en determinar las políticas y exagera las fallas de los gobiernos de la mala izquierda en cuanto a la democracia, los derechos humanos y el desempeño económico.

El contraste fuerte que se pinta entre los dos campos, ignora las semejanzas importantes entre todos los países de izquierda. Si bien Chávez, Maduro y Morales son los que más resaltan por su retórica anti-imperialista, otros países se han unido a la "mala izquierda" para oponerse al imperialismo estadounidense (French 2010, Cameron 2009). Tal colaboración se puede ver en los esfuerzos de integración regional independientes de los Estados Unidos, a través de organizaciones como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Alianza Bolivariana de los Pueblos de las Américas (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En tiempos de crisis, los dos campos se han unido para oponerse a actores favorecidos por los Estados Unidos: en 2008 cuando

una ola de violencia derechista amenazaba al gobierno de Morales, en 2009 después del golpe hondureño y en 2012 después del "golpe parlamentario" en Paraguay, que derrotó al gobierno elegido de Fernando Lugo. El líder de la llamada buena izquierda, los gobiernos brasileños de Lula y Dilma Rousseff, a veces ha desafiado abiertamente la política exterior estadounidense. En 2005 se opuso, junto con Argentina, Chile y la mala izquierda, al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovida por los Estados Unidos, contribuyendo así a su fracaso. En 2010, Lula ayudó a negociar una solución diplomática en la cual Irán transferiría la mayoría de su uranio enriquecido a Turquía, y de esta forma aumentó las posibilidades de paz, así como también la hostilidad de comentaristas, quienes lamentaron el autoritarismo creciente en un Brasil anteriormente democrático (editoriales de *Investor's Business Daily*, 24 de noviembre de 2009, *Daily News*, 28 de noviembre de 2009 y *Washington Post*, 15 de mayo de 2010; Friedman 26 de mayo del 2010). Lula también se desvió de la ruta democrática al apoyar a *Wikileaks,* cuando la organización empezó a divulgar evidencias masivas de los crímenes de guerra y maniobras diplomáticas de los Estados Unidos. El reconocimiento por la mayoría de gobiernos latinoamericanos de un estado palestino independiente, es otro signo de la oposición a políticas imperialistas por parte de países fuera de la mala izquierda.

En cuanto a la política económica, los dos campos también tienen más en común de lo que normalmente se afirma. A pesar del discurso socialista, las economías de mala izquierda siguen siendo capitalistas en su mayor parte y hasta retienen rasgos del capitalismo neoliberal. En Bolivia se han visto cambios importantes, como la subida de impuestos a las corporaciones, nuevas medidas de bienestar social y un gasto social elevado, pero la mayor parte de la economía queda en manos privadas y dependiente de la industria extractiva, y no ha habido un esfuerzo de escala grande por redistribuir la riqueza (Webber 2011)[9]. En

9 Obviamente las políticas económicas no son la única medida de un régimen. Por ejemplo, el gobierno de Morales ha ayudado a revalorizar las culturas e identidades indígenas en el contexto de una cultura dominante

Ecuador y Nicaragua el rechazo concreto del neoliberalismo ha sido aun más tentativo, aunque cabe mencionar que ha habido unas mejoras importantes en cuanto a los programas sociales (véase el capítulo de Perla y Cruz-Feliciano). Venezuela ha ido más allá de los demás al confrontar el neoliberalismo de una forma bastante directa: ha nacionalizado muchas compañías privadas, ha reducido significativamente la pobreza y la desigualdad, y ha promovido cierta medida de democracia participativa a través de los consejos comunales, las cooperativas y otras instituciones (Ellner 2010, 2011). Pero incluso allí, la persistencia de la gran propiedad privada sugiere que Venezuela es una economía "mixta", no una socialista. Lo que es más, su economía retiene muchos de los rasgos más negativos del capitalismo, tales como la dependencia en la extracción de hidrocarburos y el patrón rentista estructural (Moreno-Brid y Paunovic 2010, p. 205). En resumen, Venezuela ha tomado decididas acciones anticapitalistas, pero hasta allí queda muy lejos el socialismo.

Al mismo tiempo, la excepción parcial de Venezuela indica que la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda oculta la variación "dentro" de cada campo, así como "las razones" por tal variación. Las diferentes políticas no sólo reflejan las diferencias ideológicas, sino también –y tal vez más importantemente– resultan de las circunstancias diferentes dentro de cada país. El radicalismo relativo de Chávez y Maduro ha sido resultado, en parte, de la hostilidad feroz del sector privado y de la derecha, la cual incentivó al gobierno a nacionalizar la producción e implementar otras políticas para cultivar el apoyo y el entusiasmo de los sectores de base (véase capítulo de Ellner). De ahí, el control estatal de sectores importantes de producción, en conjunto con la riqueza petrolera, reorientó las políticas fiscales hacia la redistribución. En Bolivia y Ecuador, poderosos movimientos sociales ejercen una influencia más grande que en otros países, y en ciertos casos han desempeñado un papel fundamental a favor de las nacionalizaciones, entre otros

profundamente racista. Sin embargo, tales dimensiones quedan fuera del alcance de este capítulo.

cambios (Webber 2011, pp. 105-110)[10]. Ese rol de los movimientos sociales ha sido usualmente ignorado por los medios comerciales (Stahler-Sholk, Vanden y Becker 2014, Ciccariello-Maher 2013 y en este volumen). Al enfocar la discusión en los caudillos o las ideologías de los distintos regímenes como los factores más importantes, como típicamente hace la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda, se pierden de vista factores causales.

Ante el alegato de que los regímenes de mala izquierda están destruyendo la democracia, las encuestas de opinión pública ofrecen contrapunteos importantes. En las encuestas de la entidad chilena Latinobarómetro, las cuales miden la satisfacción ciudadana como sus democracias, Venezuela ha ganado habitualmente a la mayoría de los demás. El gobierno venezolano –el más satanizado por la prensa norteamericana– también ha recibido notas mejores que los más "blandos" gobiernos de mala izquierda. Regímenes aliados con los Estados Unidos han recibido notas muy inferiores, como muestran los resultados de países como Colombia, México, Perú y Honduras, los cuales, por cierto, tienden a ser los líderes regionales en violaciones de los derechos humanos de sus ciudadanos. Obviamente las encuestas no pueden ser el "único" indicador del nivel de democracia en un país, pero seguramente uno de los más importantes, y casi siempre ignorado por los partidarios de la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda (Young 2014)[11].

Las acusaciones de que los gobiernos de mala izquierda controlan la prensa o que reprimen sistemáticamente a los medios privados en sus países, también encuentran muy poco sustento

10 Para el caso de Venezuela véase Ellner 2008.

11 Ninguno de los países de mala izquierda puede ser considerado una democracia ideal, y podríamos mencionar inquietudes legítimas con respecto a ciertas acciones del gobierno en cada uno. Por ejemplo, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha pactado con la derecha y controla de una forma bastante arbitraria su propio partido). Aquí argumentamos primero que el retrato que se presenta en los medios estadounidenses contiene un sesgo innegable en contra de los que desafían la política estadounidense, y segundo, que el gobierno y la prensa estadounidenses odian a la mala izquierda, no por sus vicios sino por sus virtudes.

en la realidad. En el reportaje de Simon Romero en el *New York Times* del 5 de febrero del 2011, citado anteriormente, el autor olvida mencionar que la mayoría de los medios venezolanos son propiedad de grandes intereses privados que son firmemente opuestos al gobierno (ver Lupien en este libro). En 2013, un estudio comisionado por uno de esos intereses, Venevisión, determinó que el canal estatal VTV contaba con sólo 8,4 % de la audiencia televisiva (citado en Carter Center 2013, p. 47)[12]. Romero también olvida que muchos de esos medios privados apoyaron abiertamente el golpe militar de 2002, hecho por el que se les encarcelaría en otros países. Los que leyeron el reportaje de Romero tampoco supieron que los medios que desafían a los gobiernos en países como Colombia muchas veces sufren la represión (Young 2008).

La trayectoria económica de la mala izquierda también refuta la imputación de que los líderes como Chávez descuidan el crecimiento económico y la redistribución social genuina. La economía venezolana creció el 95 % entre 2003 y 2008, y el mismo periodo vio la reducción de la pobreza en un 50 % y la baja de la extrema pobreza por en 72 %, además de mejoras impresionantes en el acceso a la salud y la educación (Weisbrot, Ray y Sandoval 2009, pp. 5-14). Aunque la economía redujo la marcha en los dos años siguientes, gran parte del problema fue que el gobierno se adhería a la doctrina de austeridad de los economistas neoliberales cuando debía haber utilizado un estímulo fiscal contra-cíclico para confrontar la recesión global, como hizo el gobierno de Morales en Bolivia, país que lideró el hemisferio en el crecimiento en el 2009 (Weisbrot y Ray 2010, Young 2010b, p. 46)[13]. Mientras que la economía venezolana ciertamente tiene sus problemas, la acusación de que la mala izquierda es temeraria o que no le importa la inflación no refleja la realidad (Moreno-Brid y Paunovic 2010, p. 199).

12 Véase también Weisbrot 2014 y Weisbrot y Ruttenberg 2010, p. 4.

13 En los años 2011 y 2012 volvieron a registrarse reducciones significantes de la pobreza venezolana. Véase Cepal 2014, pp. 53, 56.

Todas estas consideraciones ponen en duda la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda. Aunque hay diferencias importantes entre, por ejemplo, Venezuela y Brasil, la tesis ignora tanto las similitudes entre la buena izquierda y mala izquierda como las diferencias dentro de cada campo. Además, se enfoca en los líderes individuales e ignora el rol de las fuerzas y las circunstancias sociales que determinan las políticas de esos líderes. Finalmente, sus críticas a los gobiernos de mala izquierda son desproporcionadas, y en muchos casos simplemente falsos.

## Estrategia imperial y dependencia mediática

Sólo se puede comprender la persistencia de la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda en la cobertura de prensa, al tomar en cuenta la estrategia imperial estadounidense y la economía política de los medios dominantes. La razón por la cual tantos medios se adhieren a la tesis tiene que ver primero con los esfuerzos del imperio político y económico estadounidense por contrarrestar el declive de su influencia en la región, y segundo, por la dependencia sistemática de los medios dominantes estadounidenses en los intereses del gobierno y de las corporaciones multinacionales. Ante la decadencia de la hegemonía de esos intereses en Latinoamérica, la mejor estrategia imperial para recuperar la influencia, en palabras de Jorge Castañeda, es «separar» a los buenos de los malos, al «apoyar a los primeros y contener a los segundos» (2006, p. 43). Así, el discurso y la política de buena-izquierda/mala-izquierda representan una respuesta imperial bastante lógica, y una con muchos precedentes históricos.

De ahí, el uso que hacen los medios estadounidenses de la tesis de la buena-izquierda/mala-izquierda y su corolario, el concepto de la "intervención benevolente", es comprensible dada la relación entre los medios y el poder gubernamental y empresarial. Numerosos estudios han demostrado la correlación estrecha entre las opiniones élites y la cobertura de prensa sobre una amplia variedad de temas políticos (Hallin 1986, Herman y Chomsky 1988, Bennett 1990, Mermin 1999 y Kennis 2010). Los

analistas que estudian los medios han señalado varios mecanismos que contribuyen a esta dependencia, entre ellos la dependencia de los editores y periodistas del acceso a fuentes oficiales, la estructura de propiedad cada vez más concentrada de los medios, la importancia de los ingresos publicitarios y las ideologías compartidas por élites, editores y periodistas (Bagdikian 1983, Herman y Chomsky 1988 y Bennett 1990). Algunos plantean que estos mecanismos son aún más importantes cuando se trata de la cobertura de la política exterior de los Estados Unidos (Bennett 1990, pp. 106-107; Kennis 2010, pp. 50-59).

En el caso de la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda, dos modelos teóricos ayudan a explicar el patrón: el "modelo propaganda" y el "modelo índice". Pruebas empíricas repetidas de estos modelos han confirmado sus premisas, incluso en el caso de la cobertura hacia Latinoamérica (Chomsky 1989, Bennett 1990, Mermin 1999, Rendall, Ward y Hall 2009, Young 2008 y 2010[a], Corcoran 2010 y Kennis 2010). A la vez, han cuestionado las afirmaciones de que la prensa es más variada desde el fin de la Guerra Fría (Entman 2004, pp. 3-4).

El modelo propaganda propuesto por Edward Herman y Noam Chomsky (1988), sostiene que la cobertura de asuntos extranjeros tiende a favorecer a los regímenes alineados con los intereses élites de los Estados Unidos, mientras que reserva la mayoría de sus críticas por los regímenes no vistos como amistosos a esos intereses. Mucha de la evidencia cuantitativa que presentaron Herman y Chomsky provenía de estudios de caso de la cobertura de la política estadounidense en Centroamérica en los años 80, y muchos estudios posteriores sugieren que el modelo propaganda sigue siendo una caracterización fiel de cómo la prensa dominante cubre a Latinoamérica y la política estadounidense en la región. Kennis (2010) demuestra que los movimientos sociales que se han opuesto a esa política reciben una cobertura mucho menos favorable que los movimientos que la apoyan. Otros estudios han demostrado agudos contrastes entre la cobertura hacia los regímenes colombianos y venezolanos, y hacia la represión en Honduras después del golpe de 2009

versus Irán, después de las elecciones controvertidas de 2009 (Rendall, Ward y Hall 2009; Corcoran 2010; Young 2008 y 2010a). El marco de buena-izquierda/mala-izquierda constituye una variación en el modelo de propaganda: la categoría de regímenes "amistosos a los EE UU" ahora incorpora a ciertos regímenes identificados como izquierdistas, pero el patrón de distinciones binarias sigue básicamente igual.

El modelo índice predice que la gama de opiniones expresadas en la prensa dominante tenderá a reflejar la gama de opiniones dentro de los círculos élites, especialmente los círculos de gobierno (Bennett 1990, Mermin 1999, Hallin 1986 y Chomsky 1989). El modelo ayuda a explicar las diferencias en cobertura mencionadas al inicio de este artículo, las cuales indican que el tratamiento binario de la izquierda latinoamericana es especialmente común en el campo moderado o liberal asociado con el Partido Demócrata. La mayoría de los partidarios de la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda son más o menos liberales por los estándares dominantes. Tanto como los colonizadores ilustrados siempre han reconocido distinciones entre los grupos subordinados, así lo hacen los políticos y los medios relativamente liberales hoy en día. Los políticos y los medios de plena derecha tienden a ser más escépticos hacia la buena izquierda tanto como la mala. Si bien existe una antipatía casi universal hacia la mala izquierda, hay menos consenso acerca de la buena.

## Conclusiones

Mientras que los gobiernos de izquierda en Latinoamérica han perseguido más soberanía política y económica, el gobierno estadounidense ha pretendido limitar sus pérdidas al recompensar el cumplimiento relativo con sus objetivos y castigar a quienes desafían esos objetivos más explícitamente. Una parte importante de la respuesta de Washington ha sido la distinción, tanto en el discurso como en la política concreta, entre una "buena" izquierda representada por los gobiernos de Brasil y una "mala" izquierda personificada por los de Venezuela. Mientras que la

administración de Bush elaboró esta estrategia, la de Obama la ha mantenido y en algunos aspectos la ha intensificado.

Aunque la distinción entre dos izquierdas no es del todo equivocada, la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda da una imagen falsa de la izquierda latinoamericana en cuatro formas principales. Primero, exagera el contraste entre los dos campos, ignorando las semejanzas y la cooperación entre los gobiernos de izquierda. Al mismo tiempo, ignora la complejidad y las variaciones dentro de cada campo. El gobierno venezolano, por ejemplo, ha sido más agresivo en su rechazo al neoliberalismo que los demás gobiernos de "mala izquierda". Tercero, la tesis tiende a ignorar cómo los movimientos sociales y otros factores domésticos, y no sólo los presidentes, determinan las políticas. Y finalmente, los partidarios de la tesis casi siempre exageran las fallas de los gobiernos de la llamada mala izquierda en las áreas de democracia, derechos humanos y rendimiento económico (si bien hay bastante variación entre los gobiernos en estos sentidos).

Pese a que la tesis de buena-izquierda/mala-izquierda no refleja fielmente las realidades, constituye una respuesta más o menos lógica a la nueva autoafirmación de los gobiernos en una región que los oficiales norteamericanos siguen considerando "nuestro traspatio" (Secretario de Estado John Kerry, citado por Neuman 2 de mayo del 2013). La tesis retoma elementos de un guión imperial bien practicado. Las caracterizaciones binarias de los pueblos subordinados reflejan una respuesta discursiva común de parte de intereses élites e imperiales a la resistencia popular, y uno con muchos precedentes históricos en las relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamérica. Los medios estadounidenses han jugado un papel importante en la popularización de este discurso, confirmando así los modelos teóricos que enfatizan la dependencia mediática de los intereses gubernamentales y empresariales. Dicha dependencia no es absoluta, y el nivel de dependencia puede variar bastante de un tema a otro. Pero la cobertura de prensa hacia la izquierda latinoamericana es muy poco alentadora para quienes desean una prensa

independiente y crítica, requisito imprescindible de una democracia real.

## Referencias

BAGDIKIAN, Ben (1983). *The Media Monopoly*. Boston: Beacon Press.

BARRIONUEVO, Alexei (2007, 19 de noviembre). «Brazil Discovers an Oil Field Can Be a Political Tool». *The New York Times* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.nytimes.com/2007/11/19/world/americas/19braziloil.html

BENEDICTO XVI, Papa (2007, 13 de mayo). «Inaugural Session of the Fifth General Conference of the Bishops of Latin America and the Caribbean. Address of His Holiness Benedict XVI» [documento en línea]. *Libreria Editrice Vaticana*. Recuperado el 21 de abril del 2011 de http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-aparecida_en.html

BENNETT, W. Lance (1990). «Toward a Theory of Press-State Relations in the United States». *Journal of Communication,* Norwood (Nueva Jersey), *40* (2), pp. 103-125.

BLACK, George (1988). *The Good Neighbor: How the United States Wrote the History of Central America and the Caribbean*. Nueva York: Pantheon Books.

BLAIR, Dennis C. (2010, 3 de febrero). «Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community for the House Permanent Select Committee on Intelligence» [documento en línea]. Recuperado el 21 de abril del 2011 de http://www.dni.gov/testimonies/20100203_testimony.pdf

BOOTH, William (2009, 9 de marzo). «In El Salvador vote, big opportunity for leftists». *Washington Post,* Washington, D. C., p. A-9.

BRICE, Arthur (2009, 24 de noviembre). «Iranian leader continues South American trip with Bolivia stop». *CNN.com* [página en línea]. Recuperado el 5 de diciembre del 2011 de http://edition.cnn.com/2009/WORLD/americas/11/24/iran.bolivia.visit/index.html

CAMERON, Maxwell A. (2009). «Latin America's left turns: beyond good and bad». *Third World Quarterly,* Abingdon, *30* (2), pp. 331-348.

CASTAÑEDA, Jorge G. (2006). «Latin America's Left Turn». *Foreign Affairs*, Tampa (Florida), *85* (3), pp. 28-43.

CASTAÑEDA, Jorge G. y Marco A. Morales (edit.) (2008). *Leftovers: Tales of the Two Latin American Lefts*. Nueva York: Routledge.

Centro Carter (2013). *Preliminary Report: Study Mission of the Carter Center: Presidential Elections in Venezuela, April 14, 2013*. Atlanta: Autor.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal (2014). *Panorama social de América Latina, 2013*. Santiago de Chile: Autor.

CHOMSKY, Noam (1989). *Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies*. Boston: South End Press.

CICCARIELLO-MAHER, George (2013). *We Created Chávez: A People's History of the Venezuelan Revolution*. Durham (Carolina del Norte): Duke University Press.

CLINTON, Hillary (2010, 3 de marzo). «Remarks by Secretary Clinton, Brazilian Foreign Minister Amorim». Recuperado el 27 de diciembre del 2010 de http://www.america.gov/st/texttransenglish/2010/March/20100304101858eaifas0.5902478.html

COEN, Rachel (2002, 1 de junio). «U.S. papers hail Venezuelan coup as pro-democracy move». *Extra!* [página en línea] Recuperado el 13 de junio del 2013 de http://fair.org/extra-online-articles/u-s-papers-hail-venezuelan-coup-as-pro-democracy-move/

CONSTABLE, Pamela (2006, 21 de febrero). «U.S. officials soften stance toward Bolivia's new leftist president». *Washington Post*, Washington, D. C.

CORCORAN, Michael (2010). «A tale of two elections: Iran and Honduras». *NACLA: Report on the Americas,* Nueva York, *43* (1), pp. 46-48.

DIEHL, Jackson (2005, 26 de septiembre). «Buying support in Latin America». *Washington Post,* pp. A-23.

ELLNER, Steve (2008). «The Hugo Chávez phenomenon: anti-imperialism from above or radical democracy from below?». En Fred Rosen (editor), *Empire and Dissent: The United States and Latin America*, pp. 205-228. Durham (Carolina del Norte): Duke University Press.

_____ (2010). «Hugo Chávez's first decade in office: breakthroughs and shortcomings». *Latin American Perspectives*, Riverside (California), *37* (1), pp. 77-96.

_____ (2011). «Venezuela's social-based democratic model: innovations and limitations». *Journal of Latin American Studies,* Cambridge, *43* (3), pp. 421-449.

ENTMAN, Robert M. (2004). *Projections of Power: Framing News, Public Opinion and U.S. Foreign Policy*. Chicago: University of Chicago Press.

FORERO, Juan (2008, 20 de febrero). «The two paths of Castro's legacy in Latin America». *Washington Post* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/02/19/AR2008021902934.html

_____ (2009, 28 de noviembre). «Ahmadinejad boosts Latin America ties». *Washington Post* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/11/27/AR2009112703130.html

_____ (2010, 17 de enero). «Chilean race reflects broad regional trend». *Washington Post* [periódico en línea]. Recuperado de https://www.highbeam.com/doc/1P2-21132910.html

_____ (2010, 29 de abril). «Hard times, dark days in oil-rich Venezuela». *Washington Post*, Washington, D. C.

_____ (2012, 22 de abril). «In Latin America, radical left at crossroads at a critical time». *Washington Post*, Washington, D. C.

FRANK, Dana (2013, 12 de febrero). «Memo to Secretary Kerry: Stop funding the bad guys in Honduras». *Los Angeles Times* [periódico en línea]. Recuperado de http://articles.latimes.com/2013/feb/12/opinion/la-oe-frank-honduras-drug-war-20130212

FRENCH, John D. (2010). «Many lefts, one path? Chávez and Lula». En Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (eds), *Latin America's Left Turns: Politics, Policies, and Trajectories of Change*, pp. 41-60. Boulder: Lynne Rienner.

FRIEDMAN, Thomas (2010, 26 de mayo). «As ugly as it gets». *New York Times* [periódico en línea]. Recuperado de https://www.nytimes.com/2010/05/26/opinion/26friedman.html

FRIEL, Howard y Richard Falk (2004). *The Record of the Paper: How the* New York Times *Misreports US Foreign Policy*. Londres: Verso.

GUHA, Ranajit (1988). «The prose of counter-insurgency». En Ranajit Guha y Gayatri Chakravorty Spivak (eds.), *Selected Subaltern Studies*, pp. 45-87. Nueva York: Oxford University Press.

HALE, Charles R. (2004). «Rethinking Indigenous Politics in the Era of the "Indio Permitido"». *NACLA Report on the Americas,* Nueva York, *38* (2), pp. 16-21.

HALLIN, Daniel C. (1986). *The "Uncensored War": The Media and Vietnam*. Nueva York: Oxford University Press.

HERMAN, Edward S. y Noam Chomsky (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. Nueva York: Pantheon.

HULME, Peter (1994). «Tales of distinction: European ethnography and the Caribbean». En Stuart B. Schwartz (comp.), *Implicit Understandings: Observing, Reporting and Reflecting on the Encounters between Europeans and Other Peoples in the Early Modern Era*, pp. 157-197. Cambridge y Nueva York: Cambridge University Press.

JOHNSON, John J. (1980). *Latin America in Caricature*. Austin: University of Texas Press.

KENNIS, Andrew (2010). *The media dependence model: an analysis of the performance and structure of U.S. and global news*. Tesis doctoral no publicada. Urbana (Champaign): University of Illinois.

KENWORTHY, Eldon (1995). *America/Américas: Myth in the Making of U.S. Policy toward Latin America*. University Park: Pennsylvania State University Press.

MCCONNELL, J. Michael (2008, 5 de febrero). «Annual world threat assessment» [documento en línea]. Informe al Comité de Inteligencia del Senado, recuperado el 21 de abril del 2011 de http://www.dni.gov/testimonies/20080205_transcript.pdf

MAMDANI, Mahmood (2004). *Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror*. Nueva York: Pantheon.

MERMIN, Jonathan (1999). *Debating War and Peace: Media Coverage of U.S. Intervention in the Post-Vietnam Era*. Princeton: Princeton University Press.

MORENO-BRID, Juan Carlos e Igor Paunovic (2010). «Macroeconomic policies of the new left: rhetoric and reality». En Maxwell A. Cameron y Eric Hershberg (eds.), *Latin America's Left Turns:*

*Politics, Policies, and Trajectories of Change*, pp. 193-208. Boulder: Lynne Rienner.

NEUMAN, William (2013, 2 de mayo). «Bolivia: U.S. Agency is Expelled». *New York Times* [periódico en línea]. Recuperado de https://www.nytimes.com/2013/05/02/world/americas/bolivian-president-expels-us-aid-agency.html

PÉREZ-STABLE, Marifeli (2010, 23 de mayo). «Chávez snubs Colombia». *Miami Herald* [periódico en línea]. Recuperado de http://gulftoday.ae/portal/29ba07d6-d5ba-4c9e-bd13-ab63e297000c.aspx

PETKOFF, Teodoro (2005, mayo-junio). «Las dos izquierdas». *Nueva Sociedad,* Buenos Aires (197), pp. 114-128.

PIKE, Fredrick B. (1992). *The United States and Latin America: Myths and Stereotypes of Civilization and Nature*. Austin: University of Texas Press.

PLATT, Tony y otros (1987). *Tropical Gulag: The Construction of Cold War Images of Cuba in the United States*. San Francisco: Global Options.

RENDALL, Steve, Daniel Ward y Tess Hall (2009, febrero). «Human rights coverage serving Washington's needs: FAIR finds editors downplaying Colombia's abuses, amplifying Venezuela's». *Fairness & Accuracy in Reporting* [periódico en línea] Recuperado el 21 de noviembre del 2012 de http://www.fair.org/index.php?page=3699

ROGERS, Tim (2011, 23 de marzo). «In El Salvador, Obama lauds Funes as a model Central American leader». *Christian Science Monitor* [periódico en línea]. Recuperado de https://www.csmonitor.com/World/Americas/2011/0323/In-El-Salvador-Obama-lauds-Funes-as-a-model-Central-American-leader

ROMERO, Simon (2009, 29 de junio). «Rare hemisphere unity in assailing Honduran coup». *New York Times,* Nueva York.

_____ (2010, 1º de julio). «Latin economies racing forward as others creep». *New York Times* [periódico en línea]. Recuperado de https://www.nytimes.com/2010/07/01/world/americas/01peru.html

_____ (2011, 5 de febrero). «In Venezuela, an American has the president's ear». *New York Times* [periódico en línea]. Recuperado de https://www.nytimes.com/2011/02/05/world/americas/05venezuela.html

ROMERO, Simon e Irene Caselli (2011, 8 de mayo). «Ecuador votes on plan to give more control to the president». *New York Times Times* [periódico en línea]. Recuperado de https://www.nytimes.com/2011/05/08/world/americas/08ecuador.html?mtrref=www.google.com&gwh=A77AE20060139A2AA12006C227EDB972&gwt=pay

ROWAN, Michael y Douglas Schoen (2007, 13 de noviembre). «Does Hugo Chávez have us over a barrel?». *Los Angeles Times Times* [periódico en línea]. Recuperado de http://articles.latimes.com/2007/nov/13/opinion/oe-schoen13

SABATINI, Christopher y Jason Marczak (2010, 13 de enero). «Obama's tango: restoring U.S. leadership in Latin America». *Foreign Affairs* [revista en línea]. Recuperado el 30 de enero del 2010 de http://www.foreignaffairs.com/articles/65923/christopher-sabatini-and-jason-marczak/obamas-tango

SCHMIDT, Blake y Elisabeth Malkin (2009, 17 de marzo). «In Salvadoran leftist's victory, a pledge to govern as a moderate». *New York Times,* Nueva York.

SCHOULTZ, Lars (1998). *Beneath the United States: A History of U.S. Policy toward Latin America*. Cambridge: Harvard University Press.

SCHUMACHER-MATOS, Edward (2009, 12 de julio). «A dose of realism in Honduras». *Washington Post* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/10/AR2009071002937.html

_____ (2009, 27 de noviembre). «Alone, and right, on Honduras». *Washington Post*, Washington, D. C.

STAHLER-SHOLK, Richard, Harry E. Vanden y Marc Becker (eds.) (2014). *Rethinking Latin American Social Movements: Radical Action from Below*. Lanham: Rowman and Littlefield.

Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI (2013). *SIPRI Military Expenditure Database* [documento en línea]. Recuperado el 14 de junio del 2013 de http://milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+military+expenditure+database+1988-2012.xlsx

STONEMAN, Rod (2008). *Chávez: The Revolution will not be Televised: A Case Study of Politics and the Media*. Londres y Nueva York: Wallflower Press.

WEBBER, Jeffery R. (2011). *From Rebellion to Reform in Bolivia: Class Struggle, Indigenous Liberation, and the Politics of Evo Morales*. Chicago: Haymarket Books.

WEISBROT, Mark (2009a, 18 de febrero). «Venezuela, an imaginary threat». *The Guardian* [periódico en línea]. Recuperado de https://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2009/feb/17/barack-obama-venezuela-hugo-chavez

_____ (2009b, 16 de diciembre). «Top ten Ways You Can Tell Which Side the United States Government Is on With Regard to the Military Coup in Honduras». *Common Dreams* [página en línea]. Recuperado el 14 de junio del 2010 de http://www.commondreams.org/view/2009/12/16

_____ (2014, 24 de febrero). «Does Venezuelan Television Provide Coverage That Opposes the Government?». *Center for Economic and Policy Research* [página en línea]. Recuperado el 26 de febrero del 2014 de http://www.cepr.net/index.php/blogs/the-americas-blog/does-venezuelan-television-provide-coverage-that-opposes-the-government

WEISBROT, Mark y Rebecca Ray (2010, 6 de septiembre). «Update on the Venezuelan Economy» [documento en línea]. Washington, D.C.: Center for Economic and Policy Research, CEPR. Recuperado de http://www.cepr.net/documents/publications/venezuela-2010-09.pdf

WEISBROT, Mark, Rebecca Ray y Luis Sandoval (2009, febrero). *The Chávez Administration at 10 years: The Economy and Social Indicators*. Washington: CEPR.

WEISBROT, Mark y Tara Ruttenberg (2010, diciembre). «Television in Venezuela: who dominates the media?» [documento en línea]. Washington, D.C.: Center for Economic and Policy Research, CEPR. Recuperado el 21 de abril del 2011 de http://www.cepr.net/documents/publications/2010_12_venezuela_media.pdf

WEYLAND, Kurt (2009). «The rise of Latin America's two lefts: insights from rentier state theory». *Comparative Politics*, Nueva York, *41* (2), pp. 145-164.

WINGERTER, Eric y Justin Delacour (2009). «Playing the "anti-Semitism" card against Venezuela». *NACLA Report on the Americas*, Nueva York, *42* (5), pp. 49-52.

YOUNG, Kevin (2008, noviembre-diciembre). «Colombia and Venezuela: testing the propaganda model». *NACLA Report on the Americas*, Nueva York, *41* (6), pp. 50-52.

_____ (2010a, 4 de julio). «Honduras, Iran, and the Propaganda Model». *ZNet* [página en línea]. Recuperado de http://www.zcomm.org/znetarticle/honduras-iran-and-the-propaganda-model-by-kevin-young

_____ (2010b). «Discrediting alternatives to neoliberalism». *NACLA Report on the Americas*, Nueva York, *43* (5), pp. 45-48.

_____ (2014, 2 de enero). «Democracy in Latin America: The Results of the 2013 Latinobarómetro Public Opinion Poll». *Venezuelanalysis.com* [página en línea]. Recuperado de http://venezuelanalysis.com/analysis/10262

Artículos o columnas sin firma[14]

«Editorial» (2005, 14 de enero). *Washington Post*, Washington, D. C., p. A-18.

«Editorial» (2007, 17 de agosto). *Washington Post*, Washington, D. C.

«Editorial» (2008, 28 de julio). *Investor's Business Daily*, Los Ángeles.

«Editorial» (2009, 30 de junio). *Washington Post*, Washington, D. C.

«Editorial» (2009, 9 de julio). *Washington Post*, Washington, D. C.

«Editorial» (2009, 24 de noviembre). *Investor's Business Daily*, Los Ángeles.

«Editorial» (2009, 29 de noviembre). *Washington Post*, Washington, D. C.

«Editorial» (2010, 8 de abril). *Washington Post*, Washington, D. C.

«Editorial» (2010, 15 de mayo). *Washington Post*, Washington, D. C.

«Editorial: Jobless Recovery» (2009, 7 de noviembre). *New York Times*, Nueva York, pp. WK7.

«Editorial: The South Takes Off» (2009, 28 de noviembre). *Daily News* [periódico en línea]. Recuperado de http://archives.dailynews.lk/2009/11/28/main_Editorial.asp

14 Las referencias citadas a continuación se presentan por orden cronológico.

# La comunicación como herramienta de poder: los casos de Venezuela y Bolivia

Pascal Lupien

Los defensores de la tesis de las "dos izquierdas" dividen a la izquierda latinoamericana en dos grandes categorías: la "izquierda buena", caracterizada por una conducta "responsable" (políticas favorables a la economía de mercado y un compromiso con las instituciones de la democracia "representativa") y la "izquierda mala", representada como peligrosa, iliberal y temeraria (Castañeda y Morales 2008, Sánchez 2008, Castañeda 2006, Corrales 2006b, Corrales y Penfold 2007, Petkoff 2005). Gran parte de su atención se ha centrado en los líderes de los movimientos de la "mala izquierda", frecuentemente representados como populistas que amenazan los valores democráticos y la estabilidad económica. Sin embargo, hay otro tema que merece nuestra atención: la representación de los partidarios de los gobiernos progresistas como ignorantes, ilegítimos y potencialmente peligrosos. Según varios autores, los partidarios de líderes como Hugo Chávez (Venezuela) y Evo Morales (Bolivia) están mal informados, actúan impulsados por lo emocional

en lugar de pensar de manera racional y son propensos a participar en actos violentos (Petkoff 2005, Castañeda 2006, Castañeda y Morales 2008, Laserna 2011). Estas actitudes se han reproducido en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales.

Los medios de comunicación de América Latina se caracterizan por un nivel extremadamente alto de concentración de mercado, lo que resulta en la representación de un conjunto limitado de perspectivas impulsadas por los intereses de los propietarios de los medios y sus aliados nacionales y extranjeros (Becerra y Mastirni 2009, Fox y Waisbord 2002). Los medios de comunicación utilizan su capacidad para mediar en la circulación de las ideas, tratando de moldear la percepción pública de los actores que ponen en peligro los privilegios de clase de los propietarios de dichos medios y sus aliados. Lo hacen mediante el desarrollo y la reproducción de esquemas que se basan en varias generalizaciones iguales a las producidas por los defensores de la tesis de las "dos izquierdas". Los gobiernos de Chávez (1999-2013) y Morales (2005-actualidad) han sido objeto de ataques ideológicos implacables por parte de los medios nacionales e internacionales, en un esfuerzo por desacreditar el desafío que estas administraciones han presentado contra el *statu quo*. En el caso de Venezuela, estos ataques han persistido durante la administración del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. Sin embargo, esta postura pone a sus defensores en una disyuntiva incómoda. Estos líderes fueron electos con mayorías fuertes (en más de una ocasión) a través de las mismas instituciones representativas que los medios supuestamente defienden. Este capítulo contribuye a la bibliografía existente sobre el tema, centrándose en cómo los medios abordan este dilema. Al enmarcar las actividades y posiciones de los partidarios de la "izquierda mala" como ilegítimas, los grupos dominantes y sus voceros en los medios intentan desacreditar a los gobiernos de izquierda desde abajo.

## Concentración de los medios, propaganda tendenciosa y el derecho a la información

En gran parte de América Latina, no es inusual que dos o tres familias o conglomerados tengan el monopolio de los medios de comunicación de un país (Becerra y Mastrini 2009, Fox y Waisbord 2002). Venezuela tuvo cuatro redes nacionales privadas principales en el período de 2002-2009 (RCTV, Venevisión, Televen y Globovisión). También hay más de 25 estaciones privadas regionales y un número similar de estaciones comunitarias, a cargo de ONG locales y organizaciones comunitarias. La televisión nacional estatal incluye a Venezolana de Televisión, Tves, Vive, así como TV Asamblea, que transmite desde la Asamblea Nacional. Mientras que el número de canales estatales ha pasado de uno en el año 2000 a seis en el año 2010, la cuota en la pantalla se ha mantenido baja. Contrariamente a lo que sostienen las declaraciones comunes (y generalmente no impugnadas) de los que sugieren que el Estado controla las estaciones de televisión venezolanas, los canales estatales sólo tuvieron una cuota de audiencia del 5,4 % a partir del 2010, mientras que más del 94 % del contenido televisivo visto por los venezolanos es controlado por intereses privados que no son simpatizantes del gobierno (Weisbrot y Ruttenberg, 2010). Un impresionante 86 % de la audiencia es capturado por las cuatro principales redes nacionales privadas (Becerra y Mastrini 2009). La prensa escrita está dominada por cuatro periódicos principales: *El Nacional, El Universal, Meridiano* y *Últimas Noticias,* que en conjunto controlan el 86 % de la circulación de la información (íd.). Si bien estos no alcanzan a tantas personas como las estaciones de televisión, desempeñan un papel importante en el establecimiento periodístico de los temas de discusión (Cañizález y Lugo 2008). Los medios de comunicación están dominados por grandes conglomerados. Grupo Cisneros, propietario de Venevisión, también está asociado con la red más grande de estaciones de radio de Venezuela (Circuito FM Center), mientras que Empresas

1BC controlaba RCTV, así como también una importante red de estaciones de radio privadas. Las empresas propietarias de estos medios de comunicación privados también tienen intereses en otros sectores, en particular en los sectores petrolífero y minero (Mayobre 2002).

En Bolivia, las principales cadenas de televisión y periódicos pertenecen a las familias más ricas del país, que tienen fuertes vínculos con los partidos políticos tradicionales (Villanueva 2008). Los cinco canales privados principales (Unitel, ATB, PAT, Bolivisión y Red Uno) captan a más del 70 % de la audiencia (Becerra y Mastrini, 2009). El resto se compone de estaciones locales más pequeñas y Bolivia TV, la cadena estatal. La concentración de los medios de prensa escrita es también alta, con los principales periódicos (*El Deber, La Razón, Los Tiempos, La Prensa* y *El Diario*) que controlan alrededor del 64 % de la circulación de la información en todo el país (ibíd.). La mayoría de las principales cadenas y periódicos del país tienen vínculos con uno de los partidos políticos neoliberales que ha gobernado Bolivia desde mediados del siglo xx (Apaza 2008, Estructura Bolivia 2006). Unitel, la cadena más importante de Bolivia en términos de audiencia, pertenece a la familia Monasterios, afiliada con el partido MNR que gobernó Bolivia durante gran parte de la segunda mitad del siglo xx. Esta familia también es propietaria de importantes latifundios en Santa Cruz, el bastión de la oposición de derecha al gobierno de Morales. La familia Rivero (Grupo Líder), propietaria de *El Deber*, también tiene intereses en PAT, *Los Tiempos, La Prensa*, así como también en una serie de estaciones de radio y mantiene vínculos con los tres partidos tradicionales: MNR, MIR y ADN (Apaza 2008). La familia Daher es propietaria, entre otras cosas, de Red PAT, la compañía aérea nacional, y de 280 mil hectáreas de tierra en el este de Bolivia. También está afiliada con el Grupo Líder. Esta familia, con sede en Santa Cruz, mantiene estrechos vínculos con Gonzalo Sánchez de Lozada, el expresidente neoliberal conocido por sus políticas de «terapia de choque» (ibíd.). El conglomerado español Grupo Prisa dirige *La Razón*, así como también la cadena de

televisión ATB. Si bien la mayoría de estos conglomerados también dirige estaciones de radio, cabe señalar que Bolivia cuenta con una amplia red de estaciones de radio comunitarias, aunque existen pocos datos disponibles sobre su audiencia.

Los pensadores coinciden en que el acceso a diversas fuentes de información es una de las condiciones que capturan la esencia de la democracia moderna (Dahl 1982 Schmitter y Karl 1991). Los modelos liberales de la democracia tienden a interpretar el derecho a la información como la libertad que tienen los medios de comunicación privados de difundir la información según los principios del mercado (Gunaratne 2002, Asante 1997). En las décadas de 1970 y 1980, los teóricos latinoamericanos afiliados al movimiento del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic) observaron que el control de los «instrumentos de la información» fue monopolizado por un sector social: los poderosos intereses económicos y financieros privados que dominaban la estructura de poder trasnacional (Somavía 1979 y 1981a, Reyes Matta 1978 y 1984). Ellos argumentaron que, a pesar de existir una pluralidad de fuentes, había uniformidad en cuanto a los mensajes reproducidos por dichas fuentes. Este monopolio social lleva a una estructura autoritaria de las comunicaciones, dominada por la «censura privada» y que resulta en el silenciamiento de las voces de la mayoría de los latinoamericanos (Somavía 1981a).

Los académicos continuaron criticando el modelo liberal, como aquel en el que la prensa tiene derechos ilimitados, pero ninguna responsabilidad para con la sociedad. Adheridos al pensamiento de Somavía y Reyes Matta, que concibieron la información como un bien social y no como un producto de consumo, estos pensadores argumentan a favor de un derecho social y colectivo de los ciudadanos a producir y acceder a diversas fuentes de información y perspectivas, lo que es necesario a fin de participar en un sistema democrático (Norris 2010, Hughes 2006 y 2012, Lawson 2002, Gunaratne 2002, Curran 2000, McChesney 1999, McQuail 1992). Este «derecho a la información» colectivo o derecho a la «pluralidad de la información» impugna la interpretación

liberal tradicional de la libertad de los medios de comunicación, a través del argumento de que la difusión de la información puede verse amenazada tanto por intereses estatales como privados. Como sostiene McChesney (1999), la libertad de expresión se equipara con demasiada frecuencia a la libertad de los medios de comunicación comerciales, sin embargo, estos últimos están dominados por una pequeña élite que posee los recursos como para filtrar el flujo de información, confiriendo así privilegios especiales a algunos ciudadanos, quienes pueden dominar la opinión pública. Aun cuando aquellos que controlen los medios estén en desacuerdo, las visiones que desafíen las «premisas fundamentales» o las relaciones de poder existentes serán excluidas (Herman y Chomsky 1988).

Cerciorarse de que las noticias reflejen la visión del mundo de los propietarios de los medios implica el uso de encuadres específicos. Los encuadres utilizados en los medios de comunicación son «patrones persistentes de cognición, interpretación y presentación, de selección, énfasis y exclusión», a través de los cuales los creadores de significados organizan el discurso con regularidad. Estos esquemas, en gran medida tácitos y no reconocidos, organizan el mundo, tanto para los periodistas como para el público (Gitlin 1980, p.7). La construcción de encuadres a menudo se utiliza estratégicamente para reproducir la visión de una realidad que respalde el poder social y económico existente de una clase (Parenti 1986). El marco conceptual de Herman y Chomsky (1988) nos ayuda a entender por qué se eligen ciertos encuadres para presentar la información al público, y por qué otros son rechazados. Según ellos, los medios están en el centro de un modelo de propaganda en el que las noticias deben pasar a través de una serie de filtros antes de presentarlas al público. Estos filtros garantizan que los medios actúen como guardianes de la información, de modo que las historias elegidas y los esquemas de las historias consideradas «de interés periodístico» cumplan con el criterio de la «capacidad de servir» a los intereses del poder (1988, p. 35).

Por lo tanto, los encuadres se seleccionan de manera tal de dar una imagen positiva de los grupos que representan el orden establecido y una imagen negativa de los rivales, mediante el desarrollo de una narrativa que genere hostilidad hacia las aspiraciones y actividades de los grupos marginados (Parenti 1986, Entman 1992). Los actores y sus reclamos se dividen en las categorías de legítimos e ilegítimos (Meneses 2008). La cobertura de los medios retrata a los movimientos que buscan el cambio social, como protestas irracionales contra el orden establecido que deben ser temidas y eliminadas (Campbell y otros 2004). Esto se inscribe en una tradición bien establecida en las obras escritas que vincula a la movilización de las clases más bajas con el autoritarismo y argumenta que «las masas» apoyan ciegamente a los líderes populistas sin incursionar en una deliberación racional sobre sus propios intereses (Germani 1978). Estos esquemas no incluyen interpretaciones alternativas desarrolladas en estudios más recientes, las que sugieren que estos movimientos no están desprovistos de contenido ideológico y que los partidarios son, de hecho, actores racionales (Ellner 1999, James 2000, Lupien 2015). La raza también es un factor; algunos autores han demostrado que los individuos que no son de raza blanca y buscan desafiar el *statu quo* son representados como particularmente peligrosos (Fernandes 2011, Campbell y otros 2004, Duno 2004 y 2011, Hernández 2004).

Entre las técnicas utilizadas para generar y reproducir encuadres que sean favorables a la estructura de poder internacional está la limitación de los criterios de selección de fuentes para las noticias, el uso de etiquetas para estigmatizar a aquellos que desafían el *statu quo* (es decir, "terroristas", "maleantes", etc.) y la distorsión de la información con el fin de centrar la atención en algunos acontecimientos y restar importancia a otros (Somavia 1981b, Cáceres-Pefaur 2005). Otra técnica utilizada por los medios consiste en la jerarquización de fuentes, la práctica por medio de la cual los periodistas determinan de qué individuos y organizaciones obtendrán la información. La relación de poder inherente a la jerarquización de fuentes tiende a manifestarse a

través del papel de determinados "expertos" que hacen eco de la opinión de las fuerzas dominantes a las que representan o a las que están subordinados. A menudo financiados por poderosos intereses, estos "expertos" dominan los espacios mediáticos y a sus opiniones se les da prioridad por encima de las voces de aquellos que desafían el discurso hegemónico (Herman y Chomsky 1988).

## Medios de comunicación y estereotipos de los partidarios de la "izquierda mala"

Aunque se ha prestado mucha atención a la ofensiva ideológica llevada a cabo por los medios de comunicación contra los líderes de la "izquierda mala" en sí mismos, ha habido menos atención a cómo se utilizan los encuadres y la construcción de una imagen negativa de los partidarios como una estrategia para deslegitimar a los gobiernos elegidos democráticamente. Chávez fue electo por un margen significativo en cuatro ocasiones (1998, 2000, 2006 y 2012); en ellas los observadores internacionales concluyeron que las elecciones fueron justas, transparentes y sin mayores irregularidades (Centro Carter 2006). La elección de 2013 vio a Maduro electo por un margen mucho más estrecho contra el candidato opositor, Henrique Capriles. Si bien el resultado fue más cuestionado que en elecciones anteriores, los datos de los observadores internacionales y la auditoría llevada a cabo en el 53 % de las máquinas de votación apuntan a la integridad de los resultados (Rosnick y Weisbrot 2013). Morales fue elegido en 2005 y nuevamente en 2009 y en 2014 en un proceso que fue descrito como transparente, eficiente y neutral por los observadores extranjeros (Misión de Observación Electoral de la Unión Europea 2009). Es difícil, pues, que las fuerzas de la oposición reclamen con éxito que las elecciones en estos países no son libres y justas. Al no poder hablar mal de las instituciones representativas que dicen defender, los críticos deben encontrar otra línea de ataque.

Impulsados por su desconfianza y desprecio por los partidarios de estos movimientos y el recelo de que estos alcancen una mayor participación en la adopción de decisiones, que una vez estuvo reservada a una élite, los ataques de los medios toman el ejemplo de algunos de los autores asociados con la tesis de las "dos izquierdas". Estos ataques son, a menudo, redactados en un lenguaje que asegura tratar de proteger a la democracia contra las usurpaciones de estos líderes y sus seguidores. Los partidarios de Chávez, por ejemplo, no están guiados por un interés propio racional, sino que están vinculados al presidente por «lazos emocionales y afectivos que rozan lo mágico y religioso» (Petkoff 2005, p. 124). Las políticas de Chávez se representan como generadoras de pocos resultados positivos para los pobres, sin embargo, estos siguen apoyándolo de todos modos, lo que sugiere una vez más que estos individuos son irracionales y acríticos (Castañeda 2006, Rodríguez 2008, Hausmann 2013). Los partidarios de Morales se describen como individuos con un bajo nivel de educación y que están mal informados, lo que conduce a un apoyo político basado en reacciones emocionales en lugar de la reflexión racional (Laserna 2011, p. 38). Los argumentos utilizados para apoyar este último punto incluyen la afirmación de que los votantes bolivianos estaban mal informados sobre la Constitución del 2009 y entonces no entendían acerca de qué estaban votando (ibíd., pp. 38-39). Tal posición parece sugerir que los votantes bolivianos, engañados por el gobierno del MAS (Movimiento al Socialismo), están de alguna manera menos informados que los votantes de otros lugares, sin embargo, uno se puede preguntar qué tan bien informados están los ciudadanos de otros países con respecto a sus propias constituciones[1].

1 Por ejemplo, estudios realizados en los EE UU han demostrado que si bien «los estadounidenses tienden a enorgullecerse enormemente de su Constitución, esta veneración no viene aparejada con un amplio conocimiento ni un entendimiento profundo de ella» (Patrick 1987). La oposición de derecha en Bolivia participó en una campaña mediática en contra de la Constitución argumentando, entre otras cosas, que dos tercios de los bolivianos no habían leído el documento (esta afirmación se basa en una encuesta realizada por una encuestadora de Santa Cruz, en nombre del

En este apartado se tendrán en cuenta varios ejemplos para demostrar cómo se construyen las representaciones, a fin de desacreditar a los movimientos progresistas. Estos ejemplos incluyen una serie de casos seleccionados de trabajos cualitativos, aunque estos volverán a ser examinados dentro del marco teórico presentado aquí. A fin de ampliar el estudio, se realizaron investigaciones originales en torno a varios acontecimientos o instituciones clave que han recibido atención de los medios desde la elección de los gobiernos progresistas de Venezuela y Bolivia. Para Venezuela, las búsquedas se centraron en el intento de golpe de Estado del 2002, las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, el referéndum de 2009 y los mecanismos participativos. Para Bolivia, las búsquedas se dirigieron a las elecciones de 2005 y 2009, el referéndum constitucional de 2009 y el concepto de la justicia indígena. Las búsquedas también incluyeron términos como "chavista" y "masista" para examinar la enmarcación de las referencias a estos grupos, en particular cuando estuvieran relacionadas con los eventos mencionados anteriormente. Las búsquedas se realizaron utilizando los sitios web de los periódicos de mayor circulación de cada país, *El Nacional* y *El Universal* de Venezuela y *El Deber, Los Tiempos* y *La Razón* de Bolivia. Estos fueron seleccionados debido a su amplia circulación, vínculos con otros medios nacionales y la relativa facilidad de acceso a sus archivos en línea. Si bien los archivos de televisión son de más difícil acceso, también se llevaron a cabo búsquedas en Internet para conocer la posición de las cadenas de televisión privadas en torno a estos acontecimientos. Los ejemplos obtenidos de estas búsquedas se combinan con casos extraídos de textos especializados para ilustrar los tipos de encuadres utilizados por los medios de comunicación privados, a fin de deslegitimar a los partidarios del gobierno. Si bien

conglomerado de medios del Grupo Líder). Sin embargo, esto no tiene en cuenta los talleres, folletos y programas de radio que se ofrecieron durante la campaña del referéndum para informar a los ciudadanos sobre el contenido de la Constitución, por lo que es mucho más difícil argumentar con precisión que los bolivianos estaban desinformados.

no es un análisis de contenido cuantitativo, se ha hecho todo lo posible para seleccionar ejemplos que demuestren las formas prevalecientes en la cobertura mediática.

## Venezuela

Varios estudios han analizado el papel de los medios de comunicación durante el intento de golpe de Estado del 2002 contra Chávez (Cañizález y Lugo 2008, Duno 2003, Hernández 2003, Castillo 2003). La idea central de la mayoría de los informes de los principales medios creó dos grupos distintos: los sujetos políticos racionales y organizados que apoyan a la oposición "cívica" por un lado y la masa peligrosa conformada por los partidarios de Chávez por el otro. Estos mensajes «refuerzan un imaginario social que buscaba legitimar a algunos sujetos y descalificar a otros» (Duno 2004). Hay un artículo editorial frecuentemente citado en *El Nacional* (14 de octubre de 2002) que representa un ejemplo típico del mensaje presentado por los medios impresos y electrónicos. En él se desestima a estos individuos como «el mismo lumpen de siempre», traído del interior del país y «convertidos en sempiternos pasajeros de autobuses, con un bollo de pan y una carterita de ron».

Las clases populares, de las que surgen los partidarios de Chávez, fueron en general representadas como irracionales, peligrosas e ingenuas. Los medios impresos y audiovisuales utilizan habitualmente etiquetas como "malandraje", "marginales" y "hordas" para describirlos (Hernández 2004). Otro editorial de *El Nacional* llegó a sugerir incluso que se tendría que haber recurrido a la violencia para «silenciar a los pobres» y restaurar la estabilidad (ibíd). Las cuatro cadenas de televisión principales en Venezuela en el año 2002 se describieron como actuando en bloque y promoviendo un único mensaje (Cáceres-Pefaur 2005, Castillo 2003). Esto incluyó la atribución de etiquetas despectivas a los partidarios de Chávez, la adquisición selectiva de fuentes para entrevistas televisivas con "expertos" de la oposición y el enfoque en actividades de los integrantes de los partidos

de la oposición. Los miles de individuos que marcharon por Caracas para mostrar su apoyo al gobierno electo y la Constitución fueron tachados de maleantes irracionales; los principales medios de comunicación utilizaron términos como «chusmas», «satánicos» y «talibanes» (Castillo 2003). En un nuevo intento por relacionar las fuerzas a favor del gobierno con la violencia, las cadenas privadas de televisión transmitieron imágenes de hombres armados identificados por los presentadores como "chavistas" disparando desde el Puente Llaguno, en Caracas, supuestamente contra los manifestantes pacíficos que se encontraban en la calle de abajo. Las cadenas televisivas atribuyeron una serie de muertes de partidarios de la oposición a estos hombres armados, pero más adelante se presentaron pruebas sólidas que demostraron que en este incidente la escena fue manipulada por un periodista de Venevisión. Estas pruebas sugieren que los «manifestantes pacíficos de la oposición» ni siquiera habían pasado por debajo del puente, y que los «chavistas» en el puente estaban disparando a los oficiales armados que apoyaban el golpe de Estado (Bartley y Ó Briain 2003, Palacios 2004).

Por otra parte, los medios de comunicación recurrieron a la imaginería y el lenguaje no tan sutil de describir a los partidarios de Chávez como individuos no pertenecientes a la raza blanca, una caracterización que parece apuntar a hacerlos menos legítimos. Hay dibujos animados en las publicaciones más importantes, por ejemplo, que utilizan imágenes para sugerir que las turbas chavistas eran de tez oscura, en lugar de ser parte de la «sociedad civil» y «decente» de tez más clara (Duno 2004 y 2011). Del mismo modo, las principales cadenas de televisión de Caracas volvieron a reproducir varias veces la misma imagen de un individuo afrovenezolano (supuestamente un seguidor de Chávez) gritando airadamente consignas que, junto a los comentarios adicionales, tenían la clara intención de sugerir un comportamiento violento e impulsivo (ibíd.). Los que han estudiado la representación mediática de los acontecimientos señalan la clara diferencia en términos de lenguaje e imaginería utilizados para retratar a los «maleantes» de tez oscura (partidarios

de Chávez) y a los ciudadanos de tez clara, representados como racionales, educados y con «valores» (Cáceres-Péfaur 2005).

El racismo en los medios de comunicación venezolanos continuó más allá de los acontecimientos del 2002. Tanto los observadores nacionales como los extranjeros han señalado el uso frecuente de insultos raciales, tales como «mono», «labios gruesos» y «chimpancé» para atacar al presidente y otros funcionarios del gobierno de tez oscura (Herrera Salas 2006). Globovisión ha sido denunciado por grupos que representan a los afrovenezolanos en numerosas ocasiones por su contenido racista (Jóvenes Afrovenezolanos 2011). Como señaló un comentarista, «muchos venezolanos poseen las características físicas que son denigradas por este tipo de comentarios. Por tanto, estos comentarios están insultando a un gran segmento de la población, sobre todo a los estratos más bajos» (citado en Herrera Salas 2006).

Los medios de comunicación también han expresado su desprecio por las iniciativas de democracia participativa, como los Círculos Bolivarianos[2]. Algunos comentaristas comparan los Círculos Bolivarianos con los comités de defensa revolucionarios en Cuba y la Unión Soviética, sin embargo, sugieren que los chavistas son de alguna manera más primitivos y carecen de la organización de estos grupos (*El Universal*, 17 de marzo de 2002; 21 de enero 2007). *El Universal* (13 de enero de 2002, 17 de marzo de 2002, 21 enero de 2007) recurrió a la jerarquización de fuentes para dar voz a una serie de «expertos», todos con opiniones bastante similares, destinados a sembrar el miedo en los lectores mediante la comparación de los grupos chavistas con instituciones «amenazantes» de otras partes del mundo, mientras que, al mismo tiempo, los representaban como inferiores a estos ejemplos.

2 Los Círculos Bolivarianos se establecieron poco después de que se adoptara la Constitución de 1999, como instituciones populares basadas en los vecindarios que les permitían a los ciudadanos llevar adelante proyectos e iniciativas locales en materia de educación, brindar alimentos a las familias pobres, desarrollar programas de capacitación y talleres, etc. Los miembros del Círculo estaban al frente del movimiento para restaurar a Chávez y la Constitución durante el golpe de Estado ilegítimo del 2002, un esfuerzo que les valió la ira de los medios privados.

Los artículos comparaban a los partidarios de Chávez con algunos de los movimientos más violentos e infames del siglo xx. Un comentarista afirmó que tenían cierta semejanza con los grupos fascistas italianos o de las SA nazis, pero luego sugirió que los chavistas, en última instancia, carecían de la sofisticación de los grupos mencionados y que, de hecho, se asemejaban más a la milicia tonton macoute del dictador haitiano François Duvalier, conocido por perpetrar asesinatos despiadados y mutilaciones. Este «malandraje» carece de la «elegante uniformidad sartorial» de los fascistas italianos y de la disciplina de los nazis, son simplemente brutos maleantes (*El Universal*, 13 de enero de 2002). Otros comentaristas de los medios comparan los Círculos Bolivarianos con algunos de los grupos milicianos más crueles de la historia, como en el siguiente ejemplo:

> En Francia, durante el llamado Reino del Terror, se crearon comités (sic) de seguridad pública. En la antigua Unión Soviética también se crearon instituciones similares. Lo mismo sucedió en Camboya, donde se establecieron tribunales populares en las décadas de 1970 y 1980 bajo el régimen de los Jemeres Rojos. En Zimbabue, el presidente Robert Mugabe instigó a los grupos populares a actuar en contra de las personas que no compartieran el pensamiento del presidente (*El Universal*, 17 de marzo del 2002).

El hecho de que Chávez haya sido reelecto más de una vez, se ha enmarcado como resultado de la falta de comprensión de sus seguidores. Los mismos "expertos" vuelven a aparecer con frecuencia en los medios de comunicación privados del país, sugiriendo que los votantes no saben realmente lo que están votando. Poco después de la elección presidencial del 2006, un experto citado con frecuencia[3] insiste en que los partidarios de

3 Manuel Caballero, historiador y periodista venezolano, fue uno de los críticos más vehementes de Chávez y también uno de los expertos más comúnmente citados en los dos principales periódicos de Venezuela. Si bien sus evaluaciones de los partidarios de Chávez aparecían con frecuencia

Chávez no votaron «por el Socialismo del siglo xxi», ya que, en todo caso, no podían entender lo que esto significa, sino por el propio Chávez. La gente no es capaz de comprender el programa político del gobierno, sino que es embaucada por medio de una retórica simplista. Los partidarios del gobierno no son más que una ficción teatral y su único fin es aplaudir (*El Universal*, 21 de enero del 2007). Otro "experto" argumenta que los que votan a Chávez no lo hacen porque creen en un buen gobierno, sino porque «querían una dictadura», lo que el comentarista califica como una desgracia nacional (*El Universal*, 21 de enero del 2007a y 21 de enero del 2007b). Si bien hay pruebas de que, por ejemplo, los venezolanos afrodescendientes e indígenas experimentaron cambios positivos durante el gobierno de Chávez (Ellner 2010, Weisbrot 2008, Herrera Salas 2006), los informes de los medios, tales como los mencionados anteriormente, no mencionan estos cambios. Hay trabajos empíricos recientes que sugieren que, para muchos votantes venezolanos, el desempeño que ellos perciben del gobierno es el que determina sus decisiones, en lugar del «mesianismo acrítico presentado tan a menudo en la prensa» (Smilde 2011, Lupien 2015).

Días antes del referéndum del 2009 para aprobar los cambios propuestos a la Constitución presentados por el gobierno, *El Nacional* (6 de febrero del 2009) representó un marcado contraste entre los partidarios y opositores de Chávez. Al informar sobre un evento no político (el linchamiento de un presunto pederasta), el periódico atribuye este tipo de comportamiento a los chavistas, declarando que estos actos son el resultado directo de la predicación del odio, expresada en una política enraizada en el resentimiento y la venganza de los mediocres. No existen pruebas que demuestren que el linchamiento fuera impulsado por motivos políticos o que sólo hubieran participado chavistas en este acto. El artículo pasa a proclamar que, en los diez años desde que Chávez llegara al poder, muchos venezolanos (entendidos

en estos periódicos, estas nunca se vinieron acompañadas de artículos escritos por expertos con opiniones contrarias.

como los partidarios de Chávez) se convirtieron en «bestias salvajes, fanáticos acérrimos y paranoicos». El artículo hace una distinción muy clara entre dos clases de venezolanos, los que sirven al gobierno actual, que se describen como resentidos sociales, los miserables (intelectual y políticamente), los peores alumnos por un lado y la «oposición civil» por el otro, cuyos integrantes son víctimas de un asedio permanente. El artículo deslegitima aún más a los chavistas al referirse a los opositores del gobierno como «nosotros, los ciudadanos», lo que implica que los seguidores no lo son.

Los mismos encuadres se siguen desplegando en las campañas presidenciales más recientes. En otro editorial de *El Nacional* (5 de marzo del 2012), los partidarios del gobierno se enmarcan como escuadrones de maleantes bolivarianos que una vez más recurren a sus «viejas tácticas fascistas» contra los partidarios del candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles. En el mismo artículo, los partidarios del gobierno se describen como «el lumpen que compone la base del chavismo en los barrios». En contraste, el editorial insiste en que «los partidarios de la oposición se componen de gente pacífica, honesta, trabajadora y madres, tanto mujeres profesionales como amas de casa. Estas personas no quieren hacer daño a nadie, no son maleantes. Representan una Venezuela diferente, una que no desea cultivar el odio sino buscar oportunidades».

Este patrón se ha mantenido durante el gobierno de Maduro. De febrero a junio del 2014, tuvo lugar una serie de motines antigubernamentales violentos en todo el país. En los principales medios de comunicación privados, se da una atención considerable a la violencia supuestamente perpetrada por la Guardia Nacional Bolivariana (una fuerza encargada de mantener el orden cuyos miembros proceden principalmente de los grupos socioeconómicos más bajos) y por grupos etiquetados como "colectivos", supuestos partidarios armados del gobierno. Los medios se refieren a actos de violencia sin sentido contra los "estudiantes", los manifestantes "pacíficos" y contra la propiedad, ilustrando la situación como turbas barbáricas contra

estudiantes civilizados. Los estudiantes generalmente se retratan a sí mismos como un grupo homogéneo con una sola voz y objetivos comunes (la lucha por la democracia y contra el gobierno) y se asume generalmente que son opositores racionales, en contraste con las turbas violentas que claramente no estudian. Los partidarios del gobierno se etiquetan como agresores, cuyo único objetivo es herir y matar a cualquiera que se oponga a ellos[4]. Por otro lado, se asume que los partidarios de la oposición no tienen intenciones mortales. Si bien no hay duda de que muchas protestas se tornaron violentas, con estos relatos se proporcionan pocas pruebas que respalden la afirmación de que esta violencia siempre haya sido iniciada por los partidarios del gobierno; simplemente se asume que así es. Estas historias suelen ir acompañadas de fotografías que representan comportamientos violentos y caos.

Sin embargo, hay mucho menos contenido dedicado a los actos de violencia cometidos por las fuerzas de la oposición (lo que incluye a los grupos estudiantiles) contra los partidarios del gobierno y la propiedad estatal. Por ejemplo, las representaciones de los medios en manifestaciones en apoyo a Leopoldo López (una figura de la oposición que ha pedido "la salida" o la sustitución del gobierno a través de medios extrainstitucionales) se enmarcan en una luz muy diferente. Estas tienden a ser representadas como pacíficas y razonables y las imágenes adjuntas retratan a los partidarios como disciplinados y de buen comportamiento[5].

## Bolivia

Los medios de comunicación bolivianos tienen un historial, anterior a la elección de Morales, de retratar a los que participan en movimientos de resistencia social como peligrosos. Uno de los ejemplos recientes más infames tuvo lugar durante la llamada

4 Véase, por ejemplo, *El Nacional*, 25 de febrero del 2014; *El Nacional*, 15 de marzo del 2014; *El Universal*, 9 de mayo del 2014.

5 Véase, por ejemplo, *El Universal*, 22 de marzo del 2014; *El Nacional*, 16 de febrero del 2014; *El Nacional*, 19 de marzo del 2014.

"Guerra del Gas" del 2003[6]. Los medios de difusión optaron por centrarse en las actividades "perturbadoras" de los manifestantes (en su mayoría indígenas) pero se negaron a televisar la represión del gobierno neoliberal que dejó 63 manifestantes muertos, una omisión que ha disminuido gravemente la legitimidad de los medios de comunicación a los ojos del público (Gómez Vella 2006). Sin embargo, desde la elección del MAS, los medios de comunicación han tendido a enmarcar a los simpatizantes de este partido como menos legítimos que otros actores (Meneses 2008).

Después de la victoria de Morales en 2005, Unitel, la cadena televisiva que se opone al MAS de forma más acérrima (y la más importante de Bolivia), informó que, si bien el MAS ganó con más del 60 % de los votos, «la democracia perdió» (Richards 2009). La red no pone en tela de juicio la legitimidad de la elección, sino que el mensaje parece ser que los que votaron a favor del MAS no son dignos de tomar decisiones sobre quién debe gobernar su país. El uso de etiquetas para identificar a los partidarios del gobierno es una parte esencial de los esquemas utilizados en los medios de comunicación bolivianos. Las victorias electorales no se atribuyen a la voluntad de los votantes bolivianos, sino más bien a «las masas» y «el voto rural» (*El Deber,* 25 de diciembre del 2005; 8 de enero del 2006; *Los Tiempos,* 7 de enero del 2009; *La Razón*, 26 de enero del 2009). El uso de estas etiquetas para identificar a los partidarios del MAS, generalmente acompañadas de términos como «manipulación», trata de contrastarlos con los ciudadanos educados y urbanos que supuestamente no votan por el partido.

6 Las protestas, encabezadas por grupos indígenas y otros movimientos sociales populares, se llevaron a cabo en respuesta a la decisión del gobierno de Sánchez de Lozada de vender gas natural del país a los EE UU a través de un oleoducto, por medio de Chile. Ellos argumentaron que esto significaría enviar las ganancias de las enormes reservas de gas natural de Bolivia fuera del país, y exigieron que éstas fueran nacionalizadas y que los ingresos obtenidos por medio del gas fueran utilizados para promover el desarrollo social. El descontento llevó finalmente a la renuncia de Sánchez de Lozada. Las reservas de gas natural de Bolivia fueron posteriormente nacionalizadas por el gobierno de Morales, lo que produjo fuertes críticas por parte de los medios.

Al igual que en Venezuela, los medios de comunicación han seguido promoviendo una visión hegemónica "correcta" de lo que debería ser la democracia y, en consecuencia, han denunciado las distintas iniciativas de participación promovidas por el gobierno del MAS, así como los esfuerzos por reconocer los modelos indígenas de derecho y gobernabilidad. Este implacable ataque ideológico fue evidente durante y después de la adopción de la nueva Constitución, que reconoció el carácter "plurinacional" de Bolivia, y nuevamente consistió en retratar a los partidarios del MAS como peligrosos e iliberales. Se volvió a recurrir a las etiquetas y la distorsión para argumentar que el gobierno había engañado a "las masas" a través de las campañas mediáticas que difunden mensajes poderosos y seductores para promover la movilización de partidarios, la intimidación y la agitación, de esta manera, «las fuerzas del neocomunismo llegaron al poder en las elecciones llevadas a cabo bajo las reglas de la democracia representativa» (*Los Tiempos*, 7 de enero del 2009 y reimpreso en *El Deber*).

Fuentes mediáticas prominentes se refirieron al proceso constitucional y al reconocimiento de los foros indígenas en la adopción de decisiones como un intento de establecer una «monarquía indígena» y exhortaron a los bolivianos a rechazar la Constitución con el fin de «restaurar la democracia» (*La Prensa*, 1º de enero del 2009). Algunos editorialistas sostuvieron que, a partir de entonces, solamente las voces indígenas serían escuchadas y que la opinión de los ciudadanos urbanos y no indígenas serían ignoradas (*La Prensa*, 18 de marzo del 2007). Otros también utilizaron términos como «fascismo indígena» para describir la «nueva Bolivia», que piensan estará dominada totalmente por intereses indígenas y viola los derechos de los mestizos y los blancos (*La Prensa*, 17 de mayo del 2009). Los medios televisivos también participaron en una intensa campaña destinada a desinformar a los bolivianos con respecto a la constitución; gran parte de esta campaña trató de sembrar el miedo en los bolivianos de clase media contra los partidarios indígenas del MAS. Los mensajes consistieron en falsas afirmaciones de

que la constitución impondría prácticas religiosas indígenas a los ciudadanos a expensas del catolicismo, que los modelos comunales de propiedad reemplazarían a la propiedad privada y que la justicia indígena comunitaria (erróneamente equiparada con el linchamiento) se convertiría en la norma (Red Andina de Información 2009).

Los ataques a los partidarios del gobierno asumieron connotaciones racistas durante las campañas políticas, aun en mayor medida que en Venezuela. Días antes del referéndum constitucional de 2009, los Reporteros sin Fronteras (2009), normalmente a favor de los medios privados, se sintieron obligados a condenar a los crecientes «medios de comunicación del odio» en Bolivia. La organización declaró que la radio y la televisión en Bolivia emitían programación que se dedicaba a promover el odio contra la mayoría indígena del país durante la campaña. Expresaron su profunda preocupación por el tipo de mensajes que se estaban transmitiendo a través de los medios de comunicación bolivianos, y citaron como ejemplo típico las observaciones formuladas por el abogado Luis Arturo Mendivil en la emisora de radio FM con sede en Santa Cruz, Radio Oriental. Enfadado con una constitución fuertemente influenciada por los movimientos sociales indígenas, Mendivil representa a Morales y sus partidarios como «cholas, ladrones y traficantes de drogas al servicio de Chávez». Continúa su discurso refiriéndose a los pueblos indígenas (con lenguaje despectivo) como «un montón de criminales, maleantes y mediocres», al igual que su presidente que «no es apto para su papel". Expresa su apoyo a la Unión Juvenil Cruceñista[7] e insiste en que deben estar preparados para hacer lo que sea para defender al pueblo de Santa Cruz de los «collas malditos». La diferencia entre los jóvenes de Santa Cruz (los de ascendencia europea y mestiza) y los jóvenes «collas» es que los primeros son ambiciosos y buscan sobresalir mientras que los

7 Una organización juvenil de extrema derecha, con sede en Santa Cruz, perpetró ataques físicos contra los grupos e individuos vistos como partidarios del gobierno (véase Dangl 2007).

segundos sólo se preocupan por la cocaína y el robo[8]. El programa presentado por Mendivil, *Nuestra Palabra*, es un elemento prominente en una de las principales estaciones de radio de la ciudad. En otro ejemplo, Jorge Melgar Quete, periodista del Canal 18 del departamento de Beni, utilizó su programa diario de televisión para denunciar a los partidarios de Morales como «cabrones masistas» o «masistas de mierda», ignorantes e «indios analfabetos». En cuanto al propio Morales, Melgar sugiere que el presidente y sus colegas deberían ser fusilados[9].

La violencia contra los pueblos indígenas y los partidarios del MAS fue más allá del lenguaje contundente utilizado durante el período de la Asamblea Constituyente, y la cobertura mediática de ciertos acontecimientos es reveladora. Gustafson (2010) documenta el tipo de violencia ejercida contra los partidarios guaraníes del MAS en las tierras bajas del este de Bolivia, una zona dominada por terratenientes y empresarios no indígenas. Él describe esta violencia como una reminiscencia de las formas de «control espacial y corporal que siempre caracterizaron a los métodos aplicados en las haciendas del país guaraní para mantener a los guaraníes en su lugar». Esto incluye latigazos, palizas y otras formas de humillación pública, así como el abuso verbal que invoca «el lenguaje patriarcal y racista de la subyugación colonial». Gustafson señala que, si bien la violencia cometida contra el pueblo guaraní (supuestos partidarios del MAS) durante este período fue denunciada por varias organizaciones internacionales de derechos humanos, los comentarios televisivos en Bolivia se centraron en, por ejemplo, retratar a una escuela de docentes guaraníes como un campo de entrenamiento para las guerrilas de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). El análisis de Sandoval (2008) de los contenidos de la cobertura de los acontecimientos del 24 de mayo de 2008 en ocho periódicos de Bolivia también resulta revelador. Ese día, al

8 Transcripción disponible en http://ratebol.blogspot.com/2008/10/arturo-mendivil-y-sus-tozudos-rebuznos.html

9 Extractos disponibles en http://www.youtube.com/watch?v=Naxlu0xmnDI&feature=related

menos 18 personas que se presumían seguidoras del MAS fueron agredidas físicamente, obligadas a desnudarse y humilladas públicamente en la plaza principal de Sucre. Si bien la violencia física fue cubierta, la "violencia ideológica" (el hecho de que las personas se vieron forzadas al ridículo y a renunciar a sus propias creencias) y el contenido racista de los ataques fueron minimizados y se les restó importancia.

La respuesta de los medios tradicionales a la autonomía y las instituciones de adopción de decisiones tradicionales indígenas se ha caracterizado en general por el desprecio y el miedo. Unos pocos ejemplos ayudan a ilustrar esto. Una de las disposiciones de la constitución tenía por objeto aumentar la representación indígena mediante la creación de circunscripciones especiales para los indígenas y permitir a los funcionarios ser electos de acuerdo con las prácticas tradicionales. Un artículo de opinión de *El Deber* recurre a la jerarquización de fuentes para presentar las opiniones de dos juristas que formulan el mismo juicio: que los esfuerzos por permitir el acceso de más indígenas a cargos de elección popular a través de mecanismos de participación es «discriminatoria y racista». Al comentar sobre los aspectos de la nueva Constitución que legitiman el concepto de "plurinacionalidad" (que implica otorgarles un reconocimiento legal igualitario a las prácticas e instituciones indígenas), el periódico sostiene que el documento genera y perpetúa:

> … las desigualdades entre los bolivianos, ya que da preferencia a los pueblos étnicos e indígenas sobre los mestizos y ciudadanos. Algunos miembros de la Asamblea son electos de una manera y otros, de otra. Por lo tanto, es discriminatorio y racista, ya que la cultura prevalece sobre el concepto de la igualdad de los ciudadanos ante la ley (*El Deber*, 26 de octubre del 2008).

El requisito de hablar dos idiomas para los funcionarios en algunos distritos (entre ellos, una lengua indígena) también es criticado por ser «injusto» y «preocupante», sin embargo, el requisito de que los hablantes nativos de las lenguas indígenas hablen

español no parece ser una preocupación. Estas posiciones también se reflejan en los noticieros de Red PAT, perteneciente a la misma familia que *El Deber* (Apaza 2008). La ironía y la hipocresía de esta posición en un país que se caracteriza por cinco siglos de racismo institucionalizado y la exclusión de la mayoría indígena (raramente reconocida en estas fuentes) parece estar más allá de la comprensión de los periodistas y propietarios de los medios. Los medios utilizan encuadres y etiquetas que retratan a los pueblos «étnicos» (generalmente identificados como partidarios de Morales) como irracionales, por exigir «derechos culturales» especiales por encima de «la igualdad ante la ley».

En los medios de comunicación nacionales, la justicia indígena o comunitaria tiende a asociarse con los linchamientos y las prácticas barbáricas. Los medios de comunicación tienden a centrarse en uno o dos ejemplos negativos (pero no necesariamente típicos) que dan la impresión de que esas formas de hacer justicia son comunes (*El Deber*, el 16 de marzo del 2008, 9 de junio del 2010 y 10 de junio del 2010). Citando el linchamiento de cuatro agentes de policía (con poco contexto de fondo), un artículo editorial advierte de la naturaleza «alarmante» de «la llamada justicia comunitaria», debido a que «los linchamientos se han convertido en una costumbre que ni él ni otros gobiernos han sido capaces de detener» (*La Razón*, 21 de diciembre del 2010). Los editoriales advierten de los peligros de dar reconocimiento legal a la justicia indígena.

> Las tierras indígenas están siendo utilizadas para crear zonas libres de toda autoridad estatal, en las cuales se llevan a cabo actividades ilegales con impunidad. Si no se restaura el orden, vamos a seguir avanzando hacia el caos social y la destrucción del Estado (*El Deber*, 30 de mayo del 2010).

Los medios de comunicación han tendido a la jerarquización de fuentes con respecto a las prácticas indígenas (en su mayoría juristas y abogados pertenecientes a sectores elitistas), sin embargo, no entrevistan a las comunidades o académicos indígenas,

lo que proporcionaría una perspectiva más equilibrada sobre el asunto. Algunos noticieros trataron de sembrar el miedo al proclamar que el gobierno del MAS estaba planeando aplicar la justicia indígena a la población no indígena, o extender estas prácticas a las principales ciudades. *La Razón* (perteneciente a la misma familia propietaria de ATB, una de las principales cadenas) publicó una serie de artículos sobre este tema, afirmando que el MAS tenía la intención de «usar la justicia indígena en contra de los ciudadanos» (*La Razón*, 26 de agosto del 2010 y 14 de diciembre del 2010). De hecho, el gobierno nunca ha afirmado que aplicaría estas prácticas fuera de las comunidades indígenas. La legislación que permite el reconocimiento de la justicia indígena establece límites claros respecto de los cuales esta se puede aplicar (refiriéndose claramente a los integrantes de los pueblos o naciones indígenas) y establece que las decisiones no pueden violar los derechos humanos establecidos en la Constitución (Estado Plurinacional de Bolivia, 2010). Las fuentes mediáticas tienden a ignorar estos aspectos de la ley.

## La identificación de un partidario radical "típico"

Tanto en Venezuela como en Bolivia, los medios de comunicación han recurrido a la distorsión de la información para centrar gran parte de la atención en los actos perjudiciales de algunos partidarios del gobierno, mientras que han restado importancia a los actos similares perpetrados por grupos de la oposición. La distorsión construye una narrativa particular, centrándose en los elementos más «radicales» (Barnett 1997). De esta manera, los medios de comunicación buscan (además de captar espectadores) colocar a todos los partidarios del movimiento en el mismo saco, denunciando así a los rivales ideológicos como extremistas. La cobertura mediática de la activista Lina Ron es un ejemplo de ello. Ron, quien ha afirmado «con Chávez, todo, sin Chávez, plomo», se hizo conocida en todo el país por liderar numerosas manifestaciones callejeras violentas («Venezuelan Radical Lina Ron Dies», 5 de marco del 2011). Los medios de

comunicación venezolanos explotaron esta situación, centrándose en las actividades de esta mujer, sugiriendo que ella es la «Revolución Bolivariana» personificada. Al describir diversos incidentes relacionados con ataques físicos y verbales contra periodistas, Globovisión se ha referido en varias ocasiones a ella como líder de los partidarios del gobierno. De hecho, la cadena atribuye habitualmente a los perpetradores de ataques violentos la etiqueta de «simpatizantes del gobierno», sugiriendo que todos los "chavistas" son proclives a la violencia[10]. De hecho, Chávez había sido crítico de las tácticas de Ron, tildándola de «incontrolable» («Venezuelan Radical Lina Ron Dies», 5 de marco del 2011). Sin embargo, hasta su muerte, los medios de comunicación continuaron vinculándola estrechamente con el gobierno y, más generalmente, con los simpatizantes del gobierno[11].

Del mismo modo, un análisis de los titulares de los medios impresos y televisivos de Bolivia revela una tendencia a utilizar declaraciones generales que atribuyen los actos violentos cometidos por grupos de radicales a los «partidarios del MAS» o a los «pueblos indígenas» (Antelo 2007). Una búsqueda por los archivos de un periódico como *La Prensa*[12] revela que el término "masista" se utiliza para referirse a los funcionarios del gobierno, a los manifestantes violentos y a los criminales (es decir, «masistas atacan a periodistas» o un «masista es enviado a prisión por...»). Se hizo una búsqueda en las mismas fuentes de información sobre las actividades violentas de la Unión Juvenil Cruceñista, opositora del gobierno (y racista), pero no se encontró nada. Chávez y Morales son, sin duda, conscientes de que la capacidad de movilizar a los partidarios es esencial para restringir la fuerza de la oposición y sus aliados transnacionales (no es probable que Chávez, en particular, haya olvidado el papel que desempeñó la movilización de las masas en la sofocación del intento de golpe

10 Ver «Agresiones contra los trabajadores de Globovisión y su sede», 2009.
11 Una búsqueda de noticias sobre Ron en los archivos de varios medios, como *El Universal* (www.eluniversal.com) o Globovisión (www.globovision.com) confirma esta interpretación.
12 www.laprensa.com.bo

de Estado del 2002). Por lo tanto, deben tratar de lograr un equilibrio entre el intento de contener algunos de los elementos más "radicales" de su base y la necesidad de aprovechar la capacidad de movilización de estos grupos cuando se ataca la legitimidad de los gobiernos. Se trata de un delicado acto de equilibrio que los medios de comunicación son capaces de explotar.

## La apertura del mercado de las ideas

Dado que los líderes que desafiaron los intereses de clase establecidos fueron electos libremente a través de las instituciones representativas que los propietarios de los medios dicen apoyar, los críticos deben ir más allá de simplemente desacreditar a estas prominentes figuras. También deben desafiar la legitimidad de los líderes enmarcando a sus partidarios como actores ilegítimos en el proceso político, sugiriendo que sus acciones (y entonces sus votos) no son válidas. De este modo, ponen en duda las credenciales democráticas de los gobiernos electos de manera indirecta. La capacidad de los medios privados de hacer esto, pone de manifiesto el hecho de que la estructura actual de la propiedad de los medios de comunicación en América Latina niega a los individuos de los estratos más bajos de la sociedad el derecho a ser escuchados y, en general, niega al público el derecho al pluralismo de la información, necesario para que funcione la democracia. Lo que se necesita es una diversificación de las fuentes de información. El pluralismo de la información puede ayudar a desarticular la capacidad del sector privado de monopolizar la construcción de los encuadres dominantes, otorgando a los grupos marginados oportunidades de desarrollar y desplegar sus propios esquemas.

Algunos autores sostienen que el Estado todavía tiene un papel que desempeñar en lo que respecta a los medios de comunicación, y que este papel puede ser algo positivo. Los gobiernos pueden fomentar el pluralismo de la información a través de políticas de comunicación progresistas (Morris y Waisbord 2001). Un enfoque implica la creación de fuentes alternativas de

información y esquivar por completo a los medios de comunicación privados a través del «activismo de los medios del gobierno» (Kitzberger 2010). Venezuela se ha convertido en un líder en la creación de medios de comunicación estatales. Si bien la «defensa de la Revolución Bolivariana» en contra de la supuesta desinformación generada por los medios privados sigue siendo una fuerza impulsora detrás de estos canales[13], los observadores independientes han señalado que la variedad de contenido es impresionante, y que las estaciones gubernamentales, tales como Vive TV, han sido elogiadas por sus producciones participativas e innovadoras (Kitzberger 2010). En Bolivia, las cadenas televisivas de propiedad estatal existían antes de que Morales llegara al poder. El gobierno del MAS intentó insuflar nueva vida a estas cadenas, al mismo tiempo que adquiría periódicos y estaciones de radio. El surgimiento de medios estatales alternativos en los países anteriormente dominados por un puñado de conglomerados privados podría significar una mejoría con respecto al pasado. Como mínimo, esto significa que actualmente existe una posición ideológica alternativa a disposición del público y que el dominio de las élites sobre la información y las ideas se ha debilitado. Sin embargo, estos gobiernos también tienen una agenda que probablemente omita su responsabilidad de proporcionar información diversa e imparcial. Por otra parte, el tono agresivo que surge de ambos bandos tiene un efecto desestabilizador en estos países, al exacerbar las divisiones sociales, que ya son profundas.

Muchos argumentan que la solución no se encuentra en el Estado, sino en la sociedad civil. Hace más de tres décadas, Somavía (1979, 1981a y 1981b) escribió a favor del desarrollo de principios sociales que reconocieran la información como un

13 El ex ministro de Comunicación, Andrés Izarra, declaró que la democratización de la esfera pública requiere «el pluralismo de la información», y que los medios públicos son esenciales para fomentar esto y para garantizar que haya alternativas a la «guerra ideológica» llevada a cabo por los medios de comunicación privados, a favor de la hegemonía capitalista (Izarra 2008).

derecho humano y un bien social en lugar de un bien de consumo, así como a favor de los cambios en las estructuras de comunicación, a fin de fomentar la democratización del flujo de información en la práctica. Esto implicaría, entre otras cosas, garantizar que estas estructuras deban rendirle cuentas al público, sean participativas, socialmente responsables y representativas de los diversos sectores de la sociedad. Su modelo mediático alternativo consistiría en incluir medios de comunicación controlados socialmente (ni estatales ni privados) como la mejor manera de garantizar la participación y la representación necesarias para la democratización de la información. Del mismo modo, Reyes Matta (1978 y 1984) considera que la participación activa del público en el proceso de la comunicación es un factor determinante de lo que él llama «comunicación alternativa». Su modelo propone la reestructuración del proceso de comunicación para fomentar la participación dinámica y la interacción entre productores y receptores de la información. Ambos sostienen que la capacidad de controlar la información otorga un poder inmenso, y el poder en una sociedad democrática debería rendir cuentas. Más recientemente, Clemencia Rodríguez (2001) rechazó la etiqueta de «medios alternativos» a favor de la de «medios de comunicación de la ciudadanía», pero su concepción de medios de comunicación más democráticos tiene mucho en común con la de Somavía y Reyes Matta: pasar de la comunicación unidireccional que involucra a receptores pasivos a la comunicación interactiva que implique la participación del receptor.

Otros teóricos también han insistido en el papel de los ciudadanos en la democratización de la información. Horwitz (2001) sostiene que la participación de la sociedad civil en el proceso de formulación de políticas relacionadas con la comunicación de la información, puede crear instituciones que deban rendir cuentas a sectores ajenos al Estado y al capital privado. McChesney (1999) también insiste en que el control de la información debe ser trasladado de las élites económicas a las manos de los ciudadanos. Según él, el punto de partida hacia la democratización de los medios de comunicación es la creación de un sector mediático

viable sin fines de lucro ni comerciales. Este autor argumenta que las fundaciones y las organizaciones laborales organizadas podrían contribuir al desarrollo de las fuentes mediáticas alternativas, pero también reconoce que son necesarias políticas gubernamentales que favorezcan este tipo de medios de comunicación (exenciones fiscales, por ejemplo). Keane (1992) apoya el desarrollo de lo que él llama los medios del servicio público (en oposición a los medios de comunicación públicos). Este modelo, sin estar sujeto a las grandes empresas ni al Estado, tendría como objetivo capacitar a los ciudadanos para que desarrollen y difundan información que represente una pluralidad de intereses y perspectivas. Si bien reconoce que una reforma de este tipo no sería fácil, la desmercantilización máxima y factible y la reincorporación de los medios de comunicación en la vida social de la sociedad civil es una condición esencial de la libertad con respecto a la censura estatal y mercantil (Keane 1992, p. 119).

Venezuela y Bolivia están a la vanguardia en el desarrollo de medios comunitarios y los modelos que han desarrollado guardan cierta semejanza con los principios establecidos en las obras teóricas citadas anteriormente. En ambos países, el número de operadores de televisión y radio comunitarios ha crecido de manera exponencial desde la elección de los gobiernos de izquierda (Kitzberger 2010). Debido al limitado espacio disponible para ellos en los medios de comunicación comerciales, los activistas comunitarios están utilizando la tecnología y aprovechando el lugar, la localidad y la identidad cultural para crear un discurso alternativo (Fernandes 2011). Bolivia posee una larga historia de estaciones de radio participativas y pertenecientes a la sociedad que se remonta a la década de 1940. Más de 25 estaciones de mineros fueron creadas por los trabajadores y dirigentes sindicales como una herramienta de comunicación y de organización. Estas estaciones reflejaban la vida cotidiana en las minas como un canal para la expresión cultural popular, y también servían como fuente de oposición a varias dictaduras militares de derecha, ya que los medios de comunicación comerciales apoyaban o no criticaban a estos regímenes. Debido a sus mensajes antihegemónicos

y el carácter participativo del desarrollo de contenidos y la adopción de decisiones, estas estaciones pueden ser situadas en el marco de una manifestación temprana del tipo de comunicación alternativa mencionado anteriormente (Lozada y Kuncar 2004). Dado que la radio es el medio que aún tiene más probabilidades de llegar a amplios sectores de las comunidades pobres e indígenas rurales en Bolivia, aquí es donde se han concentrado los esfuerzos para ampliar las opciones de los medios de comunicación alternativos. Se creó una red de más de 30 estaciones locales comunitarias y se nombró Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios. La importancia de los medios comunitarios y la obligación del Estado de apoyarlos se han llegado a consagrar en la Constitución del 2009.

En Venezuela, los esfuerzos se han centrado más en las estaciones televisivas comunitarias. Catia Tve, establecida y dirigida por los ciudadanos de un barrio obrero de Caracas, fue la primera estación en aparecer tras la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de 2000 y el modelo parece prometedor (Lloreda 2007). El objetivo declarado de Catia TVe es fomentar la participación de la comunidad en el desarrollo de los contenidos televisivos y reflejar los intereses y las luchas de la comunidad[14]. A fin de dotar a los miembros de la comunidad de las herramientas necesarias para lograr esto, la estación imparte talleres para capacitar a la gente sobre temas como la producción audiovisual. Los participantes que asistan al taller pueden formar un equipo de producción, que puede trabajar en conjunto para desarrollar contenidos (Schiller 2011). De esta manera, los miembros de la comunidad son llamados a contribuir a la creación de contenidos, en lugar de simplemente quedarse en el rol pasivo de receptores. En la actualidad, hay estaciones basadas en

14 El lema de la estación es «No vea televisión, hágala». Si bien hubo una protesta considerable de los medios de comunicación privados nacionales e internacionales sobre la negativa del gobierno de Chávez a renovar la licencia de transmisión terrestre de RCTV, la medida del gobierno de Carmona de cerrar Catia TV durante el intento de golpe de Estado del 2002 (mientras se permitía que las estaciones privadas siguieran transmitiendo) no recibió ninguna condena.

un modelo similar presentes en varios estados, y se dice que los canales comunitarios, tales como TV Rubio (Táchira) y TV Bolívar (Yaracuy) han dinamizado la televisión en las regiones a las que sirven (Lloreda 2007). Sin embargo, en Bolivia y Venezuela, las estaciones de radio y televisión comunitarias deben depender en gran medida de los fondos y equipos proporcionados por el Estado. Mientras que tanto el Estado como las estaciones sostienen que la producción de contenidos es independiente de la interferencia del gobierno, la capacidad de los pequeños medios de comunicación comunitarios para financiar sus propias actividades sigue siendo un problema. Aun así, los que han estudiado los medios de comunicación comunitarios en países como Venezuela argumentan que no deberíamos asumir que los estrechos lazos con el Estado se traducen en una falta de autonomía. Antes bien, los actores de la comunidad que participan en los medios alternativos pueden utilizar la influencia que tienen en el Estado para hacer que las instituciones respondan a las necesidades de las comunidades, lo que hace que la relación sea compleja y recíproca (Schiller 2011). Por otra parte, en contraste con los medios de comunicación controlados por el Estado, la mayoría de las estaciones de televisión y radio comunitarias buscan activamente reducir su dependencia del Estado a través de fuentes alternativas de financiación, incluidas las empresas locales (Fernandes 2011).

La inclusión de voces diferentes de las que responden a intereses privados de élite y al gobierno debe ser facilitada con el fin de promover el pluralismo de la información. La distorsión de la democracia, creada por la concentración de los medios, demuestra que la capacidad de desarrollar encuadres debe extenderse a una gama más amplia de actores, garantizando que los grupos no dominantes tengan acceso a las herramientas que necesitan para difundir sus propios puntos de vista y que sus propias acciones y aspiraciones estén adecuadamente y equitativamente representadas en la esfera pública. Si bien es posible que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil también promuevan su propia agenda en particular, al igual que

los otros dos sectores, su inclusión en el desarrollo de contenidos mediáticos podría contribuir en gran medida a garantizar la "ecualización de las voces" y la representación.

## Referencias

ANTELO, Nicómedes (2007). «La prensa cruceña ataca a la democracia» [documento en línea]. Recuperado el 5 de agosto del 2011 de http://www.alipso.com/monografias3/La_prensa_ataca_a_la_democracia/La_prensa_ataca_a_la_democracia.pdf

APAZA, Reuben (2008, 2 de agosto). «Los dueños de los medios de comunicación en Bolivia: ¿Medios de información o confusión?» *El Cóndor*, Santa Cruz.

ASANTE, Clement (1997). *Press Freedom and Development*. Westport (Connecticut): Greenwood.

BARNETT, Steven (1997, 1º de junio). «New Media, Old Problems: New Technology and the Political Process». *European Journal of Communication, 12* (2), pp. 193.

BARTLEY, Kim y Donnacha Ó Briain (directores) y David Power (productor) (2003). *The Revolution Will Not Be Televised.* [Película]. Irlanda: Power Pictures.

BECERRA, Martín y Guillermo Mastrini (2009). *Los dueños de la palabra*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

BISBAL, Marcelino (2007, octubre-diciembre). «Los medios en Venezuela. ¿Dónde estamos?». *Espacio abierto. Cuaderno venezolano de sociología*, Maracaibo, *16* (4), pp. 643-668.

CÁCERES-PÉFAUR, Beatriz (2005, julio-septiembre). «Imágenes mediáticas en tiempos de crisis: televisión y propaganda política en Venezuela». *Espacio abierto. Cuaderno venezolano de sociología*, Maracaibo, *14* (3), pp. 439-457.

CAMPBELL, Shannon y otros (2004). «Remote Control: How Mass Media Delegitimize. Rioting as Social Protest». *Race, Gender & Class,* Nueva Orleans, *11* (1), pp. 158-176.

CAÑIZÁLEZ, Andrés y Jairo Lugo (2008). «The Media in Venezuela: The Revolution was Televised but No One was Watching». En Jairo

Lugo-Ocando (ed.), *The Media in Latin America*, pp. 193-210. Nueva York: McGraw Hill y Open University Press.

CASTAÑEDA, Jorge (2006, mayo-junio). «Latin America's Left Turn». *Foreign Affairs*, Tampa (Florida), *85* (3), pp. 28-43.

CASTAÑEDA, Jorge y Marco Morales (2008). «The current state of the utopia». En *Leftovers: Tales of the Latin American Left*, pp. 2-17. Nueva York: Routledge.

CASTILLO, Javier (2003, enero). «Hugo Chávez y los medios de comunicación: la guerra "hiperreal" venezolana». *Historia y Comunicación Social,* Madrid, *8* (8), pp. 21-34.

Centro Carter (2007, noviembre). «Observing the 2006 Presidential Elections in Venezuela: Final Report of the Technical Mission» [documento en línea]. Recuperado de https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/democracy/venezuela_2006_eng.pdf

CORRALES, Javier (2006, 19 de febrero). «Hugo Boss». *Foreign Policy* (152) [revista en línea]. Recuperado de https://foreignpolicy.com/2006/02/19/hugo-boss/

_____ (2009, 16 de octubre). «The Many Lefts of Latin America». *Foreign Policy* (157) [revista en línea]. Recuperado de http://foreignpolicy.com/2009/10/16/the-many-lefts-of-latin-america/

CORRALES, Javier y Michael Penfold (2007). «Venezuela: Crowding out the opposition». *Journal of Democracy*, Washington DC, *18* (2), pp. 99-113.

CURRAN, James (2000). «Rethinking Media and Democracy». En James Curran y Michael Gurevitch (eds.), *Mass Media and Society*, pp. 120-154. Londres: Edward Arnold.

DA CORTE, María Lilibeth (2008, 10 de febrero). «Andrés Izarra: "Haremos una TV pública con público"». *El Universal* [periódico en línea]. Recuperado de http://www.eluniversal.com/2008/02/10/pol_art_haremos-una-tv-publ_704987.shtml

DAHL, Robert (1982). *Dilemmas of Pluralist Democracy*. New Haven (Conneticut): Yale University Press.

DANGL, Benjamin (2007, 24 de enero). «The Dark Side of Bolivia's Half Moon». *Upside Down World Underground* [página en línea].

Recuperado de http://upsidedownworld.org/main/content/view/603/1/

DUNO, Luis (2011). «The Color of Mobs: Racial Politics, Ethnopopulism and Representation in the Chávez Era». En David Smilde y Daniel Hellinger (eds.), *Venezuela's Bolivarian Democracy*, pp. 271-297. Durham (Carolina del Norte): Duke University Press.

_____ (2004). «Mob Outrages: Reflections on the media construction of the masses in Venezuela (April 2000-January 2003». *Journal of Latin American Cultural Studies,* Londres, *13* (1), pp. 115-135.

ELLNER, Steve (2010). «Hugo Chavez's first decade in office: Breakthroughs and shortcomings». *Latin American Perspectives,* Riverside (California), *37* (1), pp. 77-96.

_____ (1999). «The Heyday of Radical Populism in Venezuela and Its Aftermath». En Michael Conniff (ed.), *Latin American Populism*, pp. 117-137. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

ENTMAN, Robert M. (1992, 1º de junio). «Blacks in the News: Television, Modern Racism, and Cultural Change». *Journalism & Mass Communication Quarterly,* Chapel Hill (Carolina del Norte), *69* (2), pp. 341-361.

Estado Plurinacional de Bolivia (2010). «Ley de 29 de diciembre de 2010» [documento en línea]. Recuperado de http://www.gobernabilidad.org.bo/images/documentos/leyes/l073_ley_de_deslinde_jursidiccional_bolivia.pdf

FERNANDES, Sujatha (2011). «Radio Bemba in an Age of Electronic Media». En David Smilde y Daniel Hellinger (eds.)*, Venezuela's Bolivarian Democracy*, pp. 131-156. Durham (Carolina del Norte): Duke University Press.

FOX, Elizabeth y Silvio Waisbord (eds.) (2002). *Latin politics, global media*. Austin: University of Texas Press.

GERMANI, Gino (1978). *Authoritarianism, Fascism and National Populism*. Nuevo Brunswick (Nueva Jersey): Transaction Books.

GITLIN, Todd (1980). *The Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left*. Berkeley (California): University of California Press.

GÓMEZ VELLA, Andrés (2006). *Mediopoder: Libertad de expresión y derecho a la comunicación en la democracia de la Sociedad de la Información*. La Paz: Gente Común.

GUNARATNE, Shelton (2002, 1º de agosto). «Freedom of the press: A world system perspective». *Gazette*, Universidad Estatal de Pensilvania, *64* (4), pp. 343-369.

GUSTAFSON, Bret (2010). «When States Act Like Movements: Dismantling Local Power and Seating Sovereignty in Post-Neoliberal Bolivia». *Latin American Perspectives,* Riverside (California), *37* (4), pp. 48-66.

HAUSMANN, Ricardo (2013, 25 de febrero). «The legacy of Hugo Chávez: Low growth, high inflation, intimidation». *The Guardian* [periódico en línea]. Recuperado de https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/25/hugo-chavez-venezuela-legacy

HAWKINS, Kirk (2010). «Who mobilizes? Participatory democracy in Chávez's Bolivarian Revolution». *Latin American Politics and Society*, Cambrigde, *52* (3), pp. 31-66.

HERMAN, Edward y Noam Chomsky (1988). *Los guardianes de la libertad*. Barcelona: Crítica.

HERNÁNDEZ, Juan Antonio (2004). «Against the Comedy of Civil Society: Posthegemony, media and the 2002 coup d'état in Venezuela». *Journal of Latin American Cultural Studies*, Londres, *13* (1), pp. 137-145.

HERRERA SALAS, Jesús (2006). «Ethnicity and Racism: The Political Economy of Racism in Venezuela». En Steve Ellner y Miguel Tinker Salas (eds.), *Venezuela: Hugo Chávez and the decline of an "exceptional democracy"*, pp. 99-118. Lanham (Maryland): Rowman & Littlefield Publishers.

HORWITZ, Robert (2001). «Negotiated Liberalization: The Politics of Communication Sector Reform in South Africa». En Nancy Morris y Silvio Waisbord (eds.), *Media and Globalization*, pp. 37-55. Oxford: Rowman and Littlefield.

HUGHES, Sallie (2012). «Democracy in the Newsroom: The Evolution of Journalism and the News Media». En Roderick Camp (ed.), *The Oxford Handbook of Mexican Politics*, pp. 367-397. Nueva York: Oxford University Press.

_____ (2006). *Newsrooms in Conflict. Journalism and the Democratization of Mexico.* Pittsburgh: Universidad of Pittsburgh Press.

JAMES, Daniel (2000). *Doña María's Story: Life, History, Memory and Political Identity*. Durham y Londres: Duke University Press.

Jóvenes Afrovenezolanos (2011, 3 de abril). «Los y las afrovenezolanas contra la discriminación». *Jóvenes Revolucionarios Afrodescendientes de Venezuela* [página en línea]. Recuperado de http://kafungabarlovento.wordpress.com/2011/04/03/los-afrovenezolanos-contra-la-discriminacion/

KEANE, John (1992). «Democracy and the Media-Without Foundations». *Political Studies*, Londres, *40* (1), pp. 116-129.

KITZBERGER, Philip (2010, noviembre). «The Media Activism of Latin America's Leftist Governments: Does Ideology Matter?». *GIGA Working Papers*, Hamburgo: German Institute of Global and Area Studies, GIGA, (151).

LASERNA, Roberto (2011). «Mire, la democracia boliviana en los hechos». *Latin American Research Review*, Austin (Texas), *45* (4), p. 27-58.

LAWSON, Chappell (2002). *Building the Fourth Estate: Democratization and the Rise of a Free Press in Mexico.* Berkeley: University of California Press.

LLOREDA, Oscar (2007, marzo). «Televisión comunitaria en Venezuela: una mirada en perspectiva». *Temas de Comunicación,* Caracas, *1* (14), pp. 125-142.

LOZADA, Fernando y Gridvia Kúncar (2004). «Miners' Radio of Bolivia: A Historic Experience of Self-Managed Communication». En Alan O'Connor (ed.), *Community Radio in Bolivia: The Miners' Radio Stations*, pp. 19-43. Lewiston: Edwin Mellen Press.

LUGO-OCANDO, Jairo (ed.) (2008). *The Media in Latin America*. Maidenhead y Nueva York: McGraw Hill/Open University Press.

LUPIEN, Pascal (2015). «Ignorant Mobs or Rational Actors? Understanding Support for Venezuela's Bolivarian Revolution». *Political Science Quarterly,* Nueva York, *130* (2), pp. 319-340.

MAYOBRE, José Antonio (2002). «Venezuela and the Media». En Elizabeth Fox y Silvio R. Waisbord (eds.), *Latin Politics, Global Media*, pp. 176-186. Austin: University of Texas Press.

MCCHESNEY, Robert (1999). *Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times*. Urbana: University of Illinois Press.

MCQUAIL, Denis (1992). *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. Londres: Sage Publications.

_____ (2000). *McQuail's Mass Communication Theory*. Londres y Newbury Park: Sage Publications.

MENESES BARRANCOS, Óscar José (2008). «El Bien y el mal hechos palabra: la representación informativa de los conflictos». En *Medios a la vista: Informe sobre el periodismo en Bolivia, 2005-2008,* pp. 111-119. La Paz: Fundación UNIR Bolivia.

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (2009, 6 de diciembre). *Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Bolivia. Informe final* [documento en línea]. Recuperado de http://www.eueombolivia.eu/ES/PDF/Final_report/MOE_UE_Informe_Final.pdf

MORRIS, Nancy y Silvio Waisbord (2001). «Rethinking Media Globalization and State Power». En *Media and Globalization,* pp. 155-160. Oxford: Rowman and Littlefield.

NORRIS, Pippa (ed.) (2010). *Public sentinel: News media & governance reform*. Washington, D.C.: The World Bank.

PALACIOS, Ángel (director) (2004). *Puente Llaguno: Claves de una masacre.* [Documental]. Venezuela: Pana Films.

PARENTI, Michael (1986). *Inventing reality: The politics of the mass media*. Nueva York: St. Martin's Press.

PATRICK, John (1987). «Education on the U.S. Constitution». *ERIC Digest,* Syracuse, (39), pp. 2-5.

PETKOFF, Teodoro (2005, mayo-junio). «Las dos izquierdas». *Nueva Sociedad,* Buenos Aires (197), pp. 114-128.

Red Andina de Información (2009). «Bolivian Constitutional Referendum Analysis: An Overview». *Andean Information Network* [página en línea]. Recuperado de http://ain-bolivia.org/2009/01/bolivian-constitutional-referendum-analysis/

REYES MATTA, Fernando (1978). «Un modelo de comunicación con participación social activa». *Nueva Sociedad*, Buenos Aires (38), pp. 94-110.

_____ (1984). «Búsqueda de una comunicación democrática. Nuevo orden informativo (1973-83)». *Nueva Sociedad,* Buenos Aires (71), pp. 62-68.

RICHARDS, Joel (2009, 31 de diciembre). «Bolivia Debates Media Reform Law». *Upside Down World* [página en línea]. Recuperado de http://upsidedownworld.org/main/news-briefs-archives-68/2289-bolivia-debates-media-law-reform

RODRÍGUEZ, Clemencia (2001). *Fissures in the Mediascape: an International Study of Citizens' Media.* Cresskill (Nueva Jersey): Hampton Press.

RODRÍGUEZ, Francisco (2008, marzo-abril). «An Empty Revolution». *Foreign Affairs*, Tampa (Florida), *87* (2), pp. 86-87.

ROSNICK, David y Mark Weisbrot (2013). *A Statistical Note on the April 14. Venezuelan Presidential Election and Audit of Results.* Washington, D.C.: Center for Economic and Policy Research.

SÁNCHEZ URRIBARRI, Raúl (2007). «Venezuela, The Left Turning Further Left?». En Jorge Castañeda y Marco Antonio Morales-Barba (eds.), *Leftovers: Tales of the Two Latin American Left*, pp. 174-192. Londres: Routledge.

SANDOVAL ARENAS, Vania (2008). «Violencia en Sucre y diarios: ¿Quiénes protagonizaron las noticias?». En Observatorio Nacional de Medios, Onadem (ed.), *Medios a la vista: Informe sobre el periodismo en Bolivia, 2005-2008,* pp. 121-125. La Paz: Fundación UNIR Bolivia.

SCHILLER, Naomi (2011). «Catia Sees You». En David Smilde y Daniel Hellingerm (eds.), *Venezuela's Bolivarian Democracy,* pp. 104-130. Durham (Carolina del Norte): Duke University Press.

SCHMITTER, Philippe y Terry Lynn Karl (1991). «What Democracy Is… And Is Not». *Journal of Democracy,* Nueva York, *2* (3), pp. 75-88.

SMILDE, David (2011). «Introduction: Participation, politics, and culture: emerging fragments of Venezuela's Bolivarian Democracy». En David Smilde y Daniel Hellinger (eds.), *Venezuela's Bolivarian Democracy,* pp. 1-27. Durham (Carolina del Norte): Duke University Press.

SOMAVÍA, Juan (1979). *La Democratización de las comunicaciones: una perspectiva latino-americana*. Ciudad de México: Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales.

_____ (1981a). «The Democratization of Communications: From Minority Social Monopoly to Majority Social Representation». *Development Dialogue* (2), pp. 13-29.

_____ (1981b). «The Transnational Power Structure and International Information». *Development Dialogue* (2), pp. 125-138.

VILLANUEVA, Erick (2008). «The Media in Bolivia». En Jairo Lugo-Ocando (ed.), *The Media in Latin America*, pp. 29-45. Nueva York: McGraw Hill/Open University Press.

WEISBROT, Mark (2008, marzo). «An Empty Research Agenda: The Creation of Myths About Contemporary Venezuela?». *Issue Brief*, Washington, D.C.: Center for Economic and Policy Research.

WEISBROT, Mark y Tara Ruttenberg (2010, 13 de diciembre). «Television in Venezuela: Who Dominates the Media?». *Monthly Review* [revista en línea]. Recuperado de https://mronline.org/2010/12/13/television-in-venezuela-who-dominates-the-media/

Word Press (2006, 6 de marzo). *Estructura Bolivia. Los inicios de la televisión en Bolivia (1969-1984)* [documento en línea]. Recuperado de http://estructurabolivia.wordpress.com/2006/06/03/television/

## Artículos o columnas sin firma[15]

«Agresiones contra los trabajadores de Globovisión y su sede» (2009). *Globovisión* [página en línea]. Recuperado el 21 de julio del 2011 de http://www.globovision.com/news.php?nid=132780

«Buena parte del electorado votó porque quería una dictadura» (2007a, 21 de enero). *El Universal*, Caracas.

«Defensor negocia con pobladores de Uncía» (2010, mayo). *El Deber*, Santa Cruz de la Sierra.

«Dos "justicias" enfrentadas por la Ley del Deslinde» (2010, 21 de diciembre). *La Razón*, La Paz.

15 Las referencias citadas a continuación se presentan por orden cronológico.

«El poder popular es una ficción» (2007b, 21 de enero). *El Universal* [periódico en línea]. Recuperado de http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2007/01/21/entrevista-a-Manuel-Caballero-El-poder.html

«Editorial» (2002, 14 de octubre). *El Nacional*, Caracas.

«Editorial» (2007, 18 de marzo). *La Prensa*, La Paz.

«Editorial» (2009, 1º de enero). *La Prensa*, La Paz.

«¿Fascistas? No: tontons macoutes» (2002, 13 de enero). *El Universal*, Caracas.

«La justicia indígena trascendería el área rural» (2010, 26 de agosto). *La Razón* [periódico en línea]. Recuperado de http://la-razon.com/nacional/justicia-indigena-trascenderia-area-rural_0_1237676229.html

«La justicia indígena trascendería el área rural» (2010, 26 de agosto). *La Prensa*, La Paz.

«La rebelión de las masas» (2005, 25 de diciembre). *El Deber*, Santa Cruz de la Sierra.

«La seducción de las masas» (2009, 7 de enero). *Los Tiempos*, Cochabamba.

«La violencia como arma política» (2009, 21 de enero). *El Universal*, Caracas.

«Linchamiento» (2009, 6 de febrero). *El Nacional*, Caracas.

«Los casos de linchamiento se duplicaron» (2008, 16 de marzo). *El Deber*, Santa Cruz de la Sierra.

«Los niños de la guerra» (2011, 20 de abril). *El Universal*, Caracas.

«MAS plantea usar la justicia indígena con los citadinos» (2010, 14 de diciembre). *La Razón* [periódico en línea]. Recuperado de https://la-razon.com/nacional/plantea-usar-justicia-indigena-citadinos_0_1303669638.html

«Muertes y protestas no frenan justicia indígena» (2010, 9 de junio). *El Deber*, Santa Cruz de la Sierra, pp. 1-A.

«Observan falta de independencia judicial» (2010, junio). *El Deber*, Santa Cruz de la Sierra.

«On eve of constitutional referendum, politicians and media urged to act responsibly» (2009, 19 de enero). *Reporters Without Bor-*

*ders* [página en línea]. Recuperado de http://en.rsf.org/bolivia-on-eve-of-constitutional-19-01-2009,30024.html

«Opinión» (2006, 8 de enero). *El Deber*, Santa Cruz de la Sierra.

«Oposición protesta por la justicia comunitaria» (2010, 9 de junio). *El Deber*, Santa Cruz de la Sierra.

«Opinión: Malandros electorales» (2012, 5 de marzo). *El Nacional*, Caracas, pp. 8-Nación.

«Otra víctima del fascismo indígena» (2009, 17 de mayo). *La Prensa*, La Paz.

«Rojos, rojitos» (2006, 12 de noviembre). *El Universal*, Caracas.

«Se perfila más participación indígena y poca fiscalización» (2008, 26 de octubre). *El Deber*, Santa Cruz de la Sierra.

«Un país dividido aprueba la nueva CPE con el 58,7 %» (2009, 26 de enero). *La Razón* [periódico en línea]. Recuperado de http://ultimasnoticiasdebolivia.blogspot.com/2009/01/un-pas-dividido-aprueba-la-nueva-cpe.html

«Venezuelan Radical Lina Ron Dies» (2011, 5 de marzo). *BBC* [página en línea]. Recuperado de http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-12657849

«Voz de los expertos» (2002, 17 de marzo). *El Universal*, Caracas.

«64 % duda de la capacidad de los consejos comunales» (2010, 26 de diciembre). *El Universal*, Caracas.

# Conclusiones

## Observaciones referentes a la izquierda radical del siglo XXI y el camino latinoamericano

Además de las características destacadas de la izquierda radical latinoamericana del siglo XXI (IRL21) reseñadas en este apartado, surge la pregunta de hasta qué punto es la IRL21 un fenómeno básicamente latinoamericano. Mantengo que la acumulación de experiencias latinoamericanas basadas en luchas, movimientos y políticas del pasado, ha moldeado la IRL21 y contribuye a su naturaleza compleja y ecléctica. La influencia latinoamericana es a veces incongruente con el pensamiento izquierdista tradicional, que fue inspirado por la experiencia soviética de 1917 y que también ha impactado la IRL21. La tensión entre las dos fuentes de influencia refuerza la complejidad de los desafíos enfrentados por la IRL21, como plantearé en los siguientes párrafos.

Un aspecto del legado latinoamericano es la apelación de la IRL21 al sentimiento nacionalista a través de la glorificación de figuras históricas que lucharon contra los poderes extranjeros, algunos de los cuales datan de la conquista española. Los analistas y actores políticos de diferentes persuasiones ideológicas, durante mucho tiempo minimizaron la importancia de algunos de estos líderes, innegablemente porque estaban asociados con

sistemas políticos y económicos, y estilos de vida considerados anacrónicos. Los ejemplos incluyen a los rebeldes indígenas que resistieron la conquista y el dominio español, como Bartolina Sisa y Tupac Katari (en Bolivia), y Guaicaipuro (en Venezuela), que han sido glorificados por Morales y Chávez, respectivamente. La IRL21 también exalta a los líderes políticos que los historiadores tradicionales etiquetaban como "caudillos", entre ellos Cipriano Castro y Eloy Alfaro (alabados por Chávez y Correa), ambos de los cuales se enfrentaron a intereses poderosos nacionales y extranjeros. Por cierto, Chávez calificó de "burgués" e "importado" la tendencia de llamar a los héroes nacionales "caudillos" (Blanco Muñoz 1998, p. 103).

En su revisión del pasado, la IRL21 se alimenta de una tradición populista representada por Juan Domingo Perón, quien también celebró símbolos históricos nacionales opuestos a la intervención extranjera, aun cuando no promovieron la transformación en favor de la democracia y la igualdad social (como en el caso de Juan Manuel de Rosas, en Argentina, y Cipriano Castro, en Venezuela). Los izquierdistas radicales latinoamericanos en las últimas décadas del siglo xx también se identificaron estrechamente con los héroes nacionales, e inclusive formaron organizaciones que llevaban sus nombres, como es el caso de los Sandinistas en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí en El Salvador y los Zapatistas en México.

En este sentido, la IRL21 se encontró más cercana a los movimientos populistas y nacionalistas del siglo xx que a los partidos comunistas y socialdemócratas inspirados por los modelos que miraron hacia el futuro, en vez del pasado. Las escuelas mecánicas y deterministas del marxismo, rechazadas por los pensadores de la IRL21 y sus precursores, datan de la posición favorable de Marx sobre el triunfo de los Estados Unidos en la Guerra Mexicana, basada en la suposición que el resultante desarrollo económico de California crearía las condiciones conducentes al surgimiento de movimientos radicales y sindicales. Los partidos socialdemócratas, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que dirigió la revolución de 1952 en Bolivia,

aceptó presunciones positivistas similares. El MNR promovió la homogeneización de la población campesina con el fin de estimular la productividad, mientras pasó por alto la importancia de las instituciones comunales indígenas, como el ayllu (Dunkerley 2013, pp. 341-343).

La IRL21 también se alimenta de una tradición del pensamiento izquierdista que centra su análisis en la realidad latinoamericana mientras que rechaza fórmulas importadas moldeadas por visiones eurocéntricas, y las verdades supuestamente universales provenientes de la época de la ilustración (Nash 2009, pp. 212-213). En este sentido, la IRL21 ha elogiado a los pensadores latinoamericanos que enfocan la especificidad de las condiciones en el continente. Chávez insistió en la originalidad como un imperativo, al citar frecuentemente la frase "inventamos o erramos", acuñada por Simón Rodríguez, que era el renombrado tutor de Simón Bolívar. Otros ejemplos incluyen a José Carlos Mariátegui y otros comunistas latinoamericanos, cuyas posiciones divergieron de las del movimiento internacional comunista (Caballero 1986, pp. 48-49, 101-106, 160) sobre todo en la década de 1920. Mariátegui, por ejemplo, se distanció del marxismo ortodoxo del Comintern (la Internacional Comunista) controlado por los soviéticos, en cuanto a su énfasis sobre las dimensiones culturales y la importancia de la lucha por la tierra, como también su planteamiento de que el potencial revolucionario de los campesinos indígenas se comparaba favorablemente con el del proletariado. Su visión de la comunidad indígena tradicional como «la célula del Estado socialista moderno» (citado en Saladino García 1995, pp. 39, 33-34), no encontró un equivalente en el discurso soviético. José Martí, quien fue otro pensador frecuentemente citado por Chávez (como también por Fidel Castro), celebró la identidad latinoamericana, a pesar de que no es una categoría acorde con el concepto marxista de internacionalismo. Aunque Martí admiró a Marx, rechazó la primacía del análisis basado en clases sociales.

Los rasgos latinoamericanos de la IRL21 van más allá de la retórica y las formulaciones teóricas abstractas, y tienen implicaciones concretas en la política, la estrategia y la priorización de

metas. Varios partidos izquierdistas en América Latina –como el Movimiento al Socialismo en Venezuela en los años 70 y 80, y los comunistas mexicanos en los 80– (Carr 1993, p. 88) levantaron la bandera de "la vía" venezolana y mexicana al socialismo, pero la relación entre esa consigna y las políticas concretas nunca estaba clara. En el caso de la IRL21, el planteamiento de la vía latinoamericana al socialismo, indirectamente y a veces directamente, fortalece ciertas posiciones y argumentos en debates de larga data sobre el cambio estructural. Las posiciones de la IRL21 sobre los asuntos siguientes, han sido influenciadas por su identificación con la tradición y el nacionalismo latinoamericano, aun cuando el pensamiento de sus líderes está fundamentado en el marxismo.

## Peso de la población marginal en la lucha por el cambio radical

Como resultado de la urbanización masiva y no controlada en el siglo xx en América Latina, se multiplicó el número de miembros de los sectores marginales, entendidos como aquellos que trabajan en la economía informal o en los márgenes de la economía formal. Esos trabajadores, en gran parte, carecen de representación organizada y protección legislativa. Los líderes políticos y analistas a menudo mezclan sus intereses con los de la clase obrera. La teología de la liberación en América Latina fue uno de los primeros movimientos en los cuales se priorizaron los problemas de las clases marginales y lo relacionaron con la enseñanza bíblica. Subsecuentemente, los movimientos que representaron a los sectores marginales en América Latina, incluyendo a los grupos indígenas, desempeñaron un papel crítico en la lucha contra el neoliberalismo en los años noventa, y así crearon las condiciones para el surgimiento de la IRL21. Los teóricos de la IRL21 vieron la importancia de los sectores marginales reflejados en la clase obrera en lucha por la transformación radical y, en este sentido, rompieron con el marxismo ortodoxo. Al mismo tiempo, los movimientos y gobiernos de la

IRL21 levantaron la bandera de la incorporación de los sectores marginales en la vida política, institucional y cultural de la nación. Este compromiso contrasta agudamente con el discurso de los gobiernos y los líderes políticos de los Estados Unidos, que privilegian a "la clase media", mientras que pasan por alto la suerte de los pobres.

## El rechazo a presunciones positivistas

El compromiso con el mejoramiento social y el éxito de los programas sociales de la IRL21 en el poder ha sido generalmente reconocido, aún por los críticos (López Maya y Lander 2011, pp. 63-74; De la Torre 2013, p. 40). Al mismo tiempo, los analistas de diversas tendencias políticas apuntan a la falta de progreso significativo en el área del desarrollo económico. Así, por ejemplo, el gobierno de Chávez originalmente visualizó el programa masivo de las cooperativas de trabajadores como un modelo económicamente viable, pero luego empezó a enfocarse en metas exclusivamente sociales. En el mismo sentido, el programa de los consejos comunales de Venezuela no ha representado en términos generales una buena inversión desde el punto de vista económico, pero logró promover un sentido de empoderamiento y espíritu de acción colectiva entre las clases populares. Además, el gobierno de Chávez en un momento determinado abogó por la reducción de la jornada semanal de trabajo de 44 a 36 horas, con el propósito de ofrecer a los trabajadores una oportunidad de participar en actividades con fines no materiales, o los que algunos escritores de la IRL21 llaman el "desarrollo humano" (Lebowitz 2010). Los gobiernos de Bolivia y Ecuador, por su parte, justificaron mega-proyectos mineros, altamente cuestionados por la población indígena por razones ecológicas, con el argumento de que el ingreso derivado de ellos contribuiría al financiamiento de los programas sociales (Becker 2012, pp. 124-128). Estas estrategias contrastaron con la posición soviética asociada con Stalin, que sostenía que el avance de las condiciones objetivas (materiales) es esencial para la construcción del socialismo.

Diversas tradiciones del continente alimentan estas estrategias por parte de la IRL21. La doctrina del "Buen Vivir" defendida por el gobierno de Morales en Bolivia articula los valores indígenas basados en las prácticas comunales, la sensibilidad ecológica y el rechazo al estilo de vida materialista que datan de la época preconquista. Este concepto choca con las nociones positivistas de la inevitabilidad del "progreso" asociadas con diferentes ideologías, incluyendo el marxismo ortodoxo.

Un antecedente latinoamericano del voluntarismo defendido por los pensadores de la IRL21 fueron los escritos del peruano José Antonio Mariátegui. El escribió que «cada palabra, cada acción del marxismo pone el acento sobre la fe de voluntarismo, de la convicción creativa y heroica cuyo impulso no se encuentra en la mediocridad y sentimiento pasivo del determinismo» (citado en Palacios Badaracco 1995, pp. 55-56). Otro antecedente fue la teología de la liberación, cuya figura fundadora, Gustavo Gutiérrez, fue inspirado por el marxismo pero insistió que solamente la acción (o "praxis") «con la participación del pueblo de diferentes puntos de vista» podría crear una teoría aplicable a la realidad latinoamericana (Gutiérrez 1971/1979, pp. 90-91). Una influencia adicional fue Che Guevara, quien negó la primacía de las metas materiales en el proceso revolucionario. Su afirmación de que el amor y la auto-transformación fueron una parte integral del carácter de los revolucionarios influenció el discurso de la IRL21, que lo diferencia de otras experiencias de la izquierda en el poder. Aunque esas creencias son lejos de ser originales, diferencian a la IRL21 de otros movimientos izquierdistas en el poder, en otras partes del mundo.

## La identificación con el cristianismo

La teología de la liberación, que desde los años sesenta llevó a sectores de la iglesia a posiciones cerca de la esfera de pensamiento izquierdista y que influenció la IRL21, fue en gran parte un fenómeno latinoamericano, como reconoció Gutiérrez y otros miembros destacados del movimiento. Sus exponentes atribuyeron los avances de la teología de la liberación en América

Latina a la sensibilidad de los latinoamericanos a la desigualdad y la opresión, y al mayor compromiso espiritual cristiano que los caracterizó, en comparación con los europeos (Cox 1987, p. 21). El Vaticano II contribuyó a esta tendencia ya que ayudó a América Latina a lograr un grado de independencia teológica (Castro y Betto 1987, p. 72). Subsecuentemente, Fidel Castro vio la teología de la liberación como altamente positiva, al mismo tiempo que la religión organizada en Cuba hacía avances en los frentes institucionales y doctrinales. La relación entre la iglesia y el Estado había alcanzado su nivel más bajo con la excomulgación de Castro en 1962, pero luego mejoró y eventualmente la creencia atea fue levantada como requerimiento para membresía en el Partido Comunista, y al mismo tiempo se permitió que los cubanos participaran en procesiones religiosas y la Navidad fue reconocida como día feriado. El papel prominente jugado por los clérigos Ernesto Cardenal y Miguel d'Escoto como ministros bajo el gobierno sandinista en los años 80, formó parte de la misma tendencia revisionista en la izquierda latinoamericana.

La teología de la liberación, la evolución en la posición de Castro sobre la religión organizada, la liberalización de la política del gobierno cubano sobre la religión y el discurso religioso de diferentes líderes sandinistas en los años 80, impactaron a la IRL21. Correa, por ejemplo, quien recibió gran parte de su educación formal en escuelas católicas, reconoce la influencia marcada de la teología de la liberación sobre su formación (como también en el caso del expresidente paraguayo Fernando Lugo), mientras que Chávez hacía referencia constante a Cristo, aún cuando estos presidentes chocaron con la jerarquía de la iglesia. Las convicciones religiosas de Correa, Morales, Chávez, Nicolás Maduro y otros, representan un rompimiento con la izquierda tradicional y constituye una innovación importante en el discurso izquierdista. También influyeron las políticas defendidas por la IRL21 y condujeron a alianzas informales. Así, por ejemplo, las vinculaciones amistosas entre la izquierda radical en el poder y los grupos religiosos en Nicaragua, Venezuela y otras partes la inhiben de asumir posiciones polémicas sobre asuntos sociales, como el

derecho al aborto, una omisión que decepciona a miembros del movimiento feminista en esos países. Por cierto, la legislación anti-aborto en Nicaragua es una de las más duras en el mundo.

## La promoción de la unidad latinoamericana

Desde el comienzo de su presidencia, Hugo Chávez abrazó el concepto del "mundo multi-polar" como una respuesta al dominio norteamericano y como un imperativo impuesto por la globalización. Estas posiciones fueron alimentadas por el fervor del nacionalismo y la unidad latinoamericana, un espíritu que databa de Simón Bolívar. En 1826, Bolívar organizó el Congreso de Panamá, que hizo un llamado en favor de la formación de una confederación continental, el cual ha inspirado a los nacionalistas latinoamericanos hasta el presente. En el siglo xx, los esfuerzos de unificar los gobiernos y movimientos en América Latina encontraron expresión en la creación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) fundada en 1924 como la sucursal peruana de un partido anti-imperialista a nivel continental. Otro ejemplo de la unidad organizacional fue la confederación de trabajadores latinoamericanos dirigida por el izquierdista Vicente Lombardo Toledano y otra dirigida por los sindicalistas demócrata cristianos en oposición a las organizaciones panamericanas que incluyeron a América del Norte, promovidas por el American Federation of Labor estadounidense y, después de 1955, por la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés). El llamado unitario por parte de la IRL21 ha contribuido a importantes logros como la fundación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y el ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur). La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que incluye a Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba (los gobiernos que son el enfoque de este libro), ha actuado como un bloque y

ha formulado agendas y posiciones que influyen la discusión en encuentros de gobiernos latinoamericanos (Ellner 2012, p. 10).

La estrategia izquierdista de promover la unidad entre los gobiernos latinoamericanos fue el producto de un aprendizaje durante muchos años. En los años sesenta, Cuba se solidarizó con los movimientos armados en el continente y en el proceso sacrificó el apoyo de –o la posibilidad de neutralizar a– los gobiernos democráticos, y consecuentemente se aisló cada vez más. En los años setenta, el gobierno cubano empezó a modificar su política exterior al limitar su apoyo a aquellos rebeldes que operaron en países percibidos como amenazas a la soberanía de Cuba, al mismo tiempo que dirigió más atención a movimientos revolucionarios en África e Indochina. La nueva línea indudablemente influyó en el pensamiento de la IRL21 en el poder y particularmente de Chávez, quien consideró a Castro su mentor (Farber 2011, pp. 109-123).

La atracción de la bandera de la unidad latinoamericana va más allá de la izquierda e implica el apoyo para ciertas políticas aceptables a los gobiernos conservadores. Así, por ejemplo, las relaciones amistosas de los gobiernos de la IRL21 con el presidente colombiano Juan Manuel Santos condujeron a decisiones y acciones que fueron fuertemente criticadas por algunos izquierdistas. Una de ellas fue el acuerdo diseñado por Chávez y Santos que facilitó el reingreso de Honduras a la OEA después del golpe de Estado contra el presidente izquierdista Manuel Zelaya.

* * *

La continuidad de la IRL21 en el poder, en gran parte, no tiene equivalente en otras olas de cambio izquierdista y populista en el pasado del continente. Los ejemplos incluyen los gobiernos en los años inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y otros en el momento del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. La larga duración de los gobiernos de la IRL21 puede ser atribuida a un número de factores. En primer lugar, la unidad lograda durante el pasado reciente no tiene precedente en la historia

del continente, y se fundamenta en el rechazo por parte de los líderes en el poder a la marginalización de los gobiernos de la izquierda radical. La solidaridad extendida a la IRL21 por los gobiernos moderados fue particularmente significativa durante los momentos críticos de la insurgencia de la oposición, como el golpe de Estado y paro general en Venezuela en 2002-2003, y también la intentona en Ecuador en 2010 y las confrontaciones económicas y políticas en Bolivia en 2006 y 2008. En segundo lugar, Estados Unidos, que históricamente ha iniciado acciones agresivas y clandestinas contra los gobiernos de la izquierda radical, ha perdido influencia en el continente, en parte por los avances económicos de China y de otras naciones fuera de la órbita norteamericana. En tercer lugar, la oposición en los tres países de la IRL21 ha perdido fuerza, prestigio y credibilidad, en gran parte por su asociación con políticas neoliberales, especialmente las privatizaciones masivas de los años noventa.

También entran en juego factores sociales y económicos. Uno es el mayor grado de madurez de los sectores marginales, que representan una base social de apoyo importante para los gobiernos de la IRL21. En las décadas de 1940 y 1950, los miembros de los sectores marginales consistían en gran parte de excampesinos, a quienes les faltaba familiaridad con el ambiente urbano, mientras que los del comienzo del siglo XXI habían heredado las experiencias urbanas de varias generaciones, incluyendo la de la economía formal. Además, la economía de Venezuela, Bolivia y Ecuador ha sido favorecida por el *boom* de hidrocarburos, que hasta 2015 no mostró señales de un revés agudo.

Sin embargo, estas consideraciones no garantizan que la IRL21 vaya a lograr consolidar su poder y superar los desafíos apremiantes. Por cierto, los factores propicios no compensan un factor negativo de importancia fundamental: el hecho de que los gobiernos de la IRL21 con sus compromisos sociales no han podido utilizar el ingreso abundante proveniente del hidrocarburo para lograr un despegue en la producción (como hizo la Unión Soviética en los años 30). La falta de capacidad organizativa para aumentar la productividad, conjuntamente con el proceso natural

de desgaste en el contexto de numerosas dificultades durante estos años, podría facilitar el regreso de la oposición al poder.

A la larga, la práctica y no la teoría va a resolver las disputas internas y problemas teóricos y prácticos provenientes de la estrategia experimental de la IRL21. Así, por ejemplo, la sustentabilidad de los programas sociales y la viabilidad de los ensayos en participación de los trabajadores en la toma de decisiones van a influir en el debate sobre el peso relativo de los sectores marginales y la clase obrera en el proceso de cambio. Similarmente, el crecimiento de las organizaciones feministas inevitablemente va a impactar en la posición de la IRL21 en cuanto a los derechos reproductivos, que por su parte va a re-definir sus relaciones con las diferentes iglesias.

Como demuestran los capítulos en este libro, los líderes, activistas y teóricos de la IRL21 tienen que tomar en cuenta un conjunto amplio de factores, algunos de los cuales son cambiantes, en vez de contar exclusivamente con dogmas o fórmulas preconcebidas. La experiencia de la IRL21 en el poder pone en evidencia las limitaciones de pensamiento dogmático y presunciones de larga data. Un ejemplo es la afirmación leninista de que los revolucionarios, por definición, trabajan en función de "liquidar el Estado" y no transformarlo desde adentro. Las doctrinas tradicionales como esta aportan respuestas incompletas a la complejidad de los desafíos que enfrenta la IRL21 debido, en gran parte, a las exigencias provenientes de la heterogeneidad de su base de apoyo. En este contexto, formulaciones originales y creativas por parte de la IRL21 constituyen una variable independiente, que innegablemente va a influenciar el resultado de los esfuerzos de lograr la transformación de largo alcance.

## Referencias

BECKER, Marc (2012). «Social movements and the government of Rafael Correa: confrontation or cooperation?». En Gary Prevost, Carlos Oliva Campos y Harry Vanden (eds.), *Social movements*

*and leftist governments in Latin America,* pp. 116-136. Londres: Zed Books.

CASTRO, Fidel y Frei Betto (1987). *Fidel and religion: Castro talks on revolution and religion with Frei Betto.* (Cuban Center for Translation and Interpretation, trad.). Nueva York: Simon and Schuster.

CABALLERO, Manuel (1986). *Latin America and the Comintern 1919-1943.* Cambridge: Cambridge University Press.

CARR, Barry (1993). «Mexico: The Perils of Unity and the Challenge of Modernization». En Barry Carr y Steve Ellner (eds.), *The Latin American Left: From the Fall of Allende to Perestroika*, pp. 83-99. Boulder, Colorado: Westview.

COX, Harvey (1987). «Introduction». En *Fidel and religion: Castro talks on revolution and religion with Frei Betto,* (Cuban Center for Translation and Interpretation, trad.), pp. 11-27. NuevaYork: Simon and Schuster.

DE LA TORRE, Carlos (2013). «Technocratic Populism in Ecuador». *Journal of Democracy,* Washington, D.C., *24* (3), pp. 33-46.

DUNKERLEY, James (2013). «The Bolivian Revolution at 60: Politics and Historiography». *Journal of Latin American Studies*, Cambridge, *45* (2), pp. 325-350.

ELLNER, Steve (2012). «Latin American Unity Takes Center Stage at Cartagena Summit». *NACLA: Report on the Americas*, Nueva York, *45* (2), pp. 9-11.

FARBER, Samuel (2011). *Cuba since the Revolution of 1959: A Critical Assessment.* Chicago: Haymarket Books.

GUTIÉRREZ, Gustavo (1971/1979). *A theology of liberation: history, politics and salvation* (4ª ed.). Nueva York: Orbis Books.

LEBOWITZ, Michael A. (2010). *The Socialist Alternative: Real Human Development.* Nueva York: Monthly Review Press.

LÓPEZ MAYA, Margarita y Luis E. Lander (2011). «Participatory Democracy in Venezuela: Origins, Ideas, and Implementation». En David Smilde y Daniel Hellinger (eds.), *Venezuela's Bolivarian Democracy: Participation, Politics, and Culture under Chávez*, pp. 58-79. Durham, Carolina del Norte: Duke University Press.

NASH, June (2009). «Modernity, Postmodernity, and Transformation of Revolutions», *Latin American Research Review,* Austin (Texas), *44* (3), pp. 212-223.

PALACIOS BADARACCO, Edilberto (1995). «El indigenismo de Mariátegui». En Alberto Saladino García (coord.), *El problema indígena: homenaje a José Carlos Mariátegui,* pp. 43-56. México, D.F.: Universidad Autónoma del Estado de México.

SALADINO GARCÍA, Alberto (1995). «Aportes de Mariátegui al nuevo indigenismo». En Alberto Saladino García (ed.), *El problema indígena: homenaje a José Carlos Mariátegui*, pp. 21-42. México, D.F.: Universidad Autónoma del Estado de México.

# Sobre las autoras y autores

**Roger Burbach** (1944/2015) fue director del Center for the Study of the Americas en Berkeley, California. Es co-autor de *Latin America's Turbulent Transitions: The Future of Twenty-First Century Socialism* (Zed Books, 2013) y *Fire in the Americas: Forging a Revolutionary Agenda* (Verso, 1987); y co-editor de *Globalization and its Discontents: The Rise of Postmodern Socialisms* (Pluto Press, 1997).

**D.L. Raby** es profesor jubilado de la Universidad de Toronto y actualmente es docente de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Liverpool. Es autor de *Democracy and Revolution: Latin America and Socialism Today* (2006, Pluto Press).

**Marcel Nelson** es doctor en Estudios Políticos de la Universidad de Queen. Sus campos de estudio abarcan la política económica internacional, relaciones internacionales y política canadiense. Actualmente es docente en el Sheridan College, en Canadá.

**Steve Ellner** es profesor jubilado de la Universidad de Oriente y editor participante en *Latin American Perspectives* y *Science and Society*. Su último libro es *El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto (hasta 2013)* (Celarg y Centro Nacional de Historia, 2014). Escribe frecuentemente para *NACLA: Report on the Americas*. Ha publicado en las páginas de Opinión del *New York Times* y *Los Angeles Times*.

**Federico Fuentes** es co-autor con Marta Harnecker de tres libros sobre Bolivia, Ecuador y Paraguay, y co-autor de *Latin America's Turbulent Transitions: The Future of Twenty-First-Century Socialism* (Verso, 2013). Es miembro del colectivo editorial *Green Left Weekly* y de *Venezuelanalysis.com*.

**Héctor Perla (hijo)** es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de California, en Los Ángeles. Sus campos de estudio abarcan la inmigración centroamericana a Estados Unidos y la movilización de la oposición en Nicaragua y El Salvador.

**Héctor Cruz-Feliciano** es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Wisconsin. Actualmente es coordinador de los programas sobre Brasil del CET Academic Programs, en Washington DC.

**Alejandro Artiga-Purcell** está terminando su PhD en Estudios Ambientales de la Universidad de California, en Santa Cruz. Fue investigador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

**Camila Piñeiro Harnecker** es profesora del Centro de Estudios de la Economía Cubana, de la Universidad de La Habana, con una maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de California, en Berkeley. Es compiladora de *Cooperativas y socialismo: una mirada desde Cuba* (Editorial Caminos, 2011).

**George Ciccariello-Maher** actualmente es profesor visitante en la Universidad de New York. Es autor de *We Created Chávez: A People's History of the Venezuelan Revolution* (Duke University, 2013) y *Building the Commune: Radical Democracy in Venezuela* (Verso, 2016).

**Kevin A. Young** es profesor de historia en la Universidad de Massachusetts, y autor de *Blood of the Earth: Resource Nationalism, Revolution, and Empire in Bolivia* (University of Texas, 2017).

**Pascal Lupien** es profesor en el programa de Estudios de Desarrollo Internacional en la Universidad de Guelph (Canadá), y autor de *Citizens' Power in Latin America: Theory and Practice* (State University of New York, 2018).

**Alba Carosio** es doctora en Ciencias Sociales, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora de Investigación del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Autora de numerosos artículos en las temáticas de género, ética y emancipación.

**William I. Robinson** es profesor de sociología de la Universidad de California, Santa Bárbara, y autor de numerosos libros sobre la globalización y América Latina, incluyendo *Globalization and the Crisis of Humanity* (Cambridge University, 2014), *Latin America and Global Capitalism: A Critical Globalization Perspective* (Johns Hopkins University, 2008), *A Theory of Global Capitalism: Transnational Production, Transnational Capitalists, and the Transnational State* (Johns Hopkins University, 2004).

# Índice

**Prólogo**
*Alba Carosio* **5**

**Prefacio**
*William I. Robinson* **9**

**Introducción**
*Steve Ellner* **17**

**Las transiciones turbulentas de la izquierda radical: una visión general**
*Roger Burbach* **49**

**Breves hipótesis sobre el Estado, la democracia y la revolución en América Latina hoy**
*D.L. Raby* **73**

**El conflicto institucional y la Revolución Bolivariana: La negociación venezolana para el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)**
*Marcel Nelson* **97**

**Diversidad político-social y el camino democrático hacia el cambio en Venezuela, 2010-2014**
*Steve Ellner* **121**

**¿Gobiernos de la "mala izquierda" contra los movimientos sociales "buenos"? Tensiones creativas dentro el proceso de cambio en Bolivia**
*Federico Fuentes* **161**

**El paradójico camino hacia un nuevo socialismo en El Salvador y Nicaragua**
*Héctor Perla (hijo), Héctor Cruz-Feliciano y Alejandro Artiga-Purcell* **199**

**Diferentes visiones sobre el socialismo que guían los cambios actuales en Cuba**
*Camila Piñeiro Harnecker* **243**

**Momentos constituyentes, procesos constitucionales, movimientos sociales y la nueva izquierda latinoamericana**
*George Ciccariello-Maher* **287**

**Buena izquierda, mala izquierda e intervenciones benevolentes: periodismo al servicio de una agenda neocolonial**
*Kevin A. Young* **321**

**La comunicación como herramienta de poder: los casos de Venezuela y Bolivia**
*Pascal Lupien* **355**

**Conclusiones** **397**

**Sobre las autoras y autores** **411**

Este libro se terminó de editar
en el mes de octubre del 2018.
En su diseño se utilizaron las familias tipográficas
Warnock Pro y Linotype Finnegan.

A la luz de los acontecimientos políticos y sociales recientes en Latinoamérica, es imprescindible echar la vista atrás y releer las circunstancias, los debates y las decisiones tomadas en un momento determinado por esta compleja izquierda latinoamericana, cuyas consecuencias vivimos hoy.

Esta obra define con franqueza las posiciones de los gobiernos identificados con el Socialismo del siglo XXI, específicamente los de Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, críticos firmes del sistema capitalista, líderes carismáticos que fortalecieron el poder ejecutivo en sus países. Algunos ensayos se centran en los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Cuba, que –al menos en el comienzo– apoyaron posiciones divergentes con las de los moderados. Otros abordan los movimientos sociales surgidos con el ascenso al poder de la izquierda. En suma, una relectura de una compleja circunstancia, hecha por investigadores académicos bajo la coordinación de Steve Ellner, que aporta suficientes herramientas de análisis que ayudarán de seguro a comprender las realidades latinoamericanas en general, y de Venezuela, Ecuador y Bolivia en particular.

Steve Ellner, Ph.D. en Historia Latinoamericana de la University of New Mexico (EEUU) y profesor de Historia y Ciencia Política en la Universidad de Oriente (Anzoátegui, 1977 al 2003). Profesor visitante en la Universidad Central de Venezuela, Georgetown University (2004), Duke University (2005), Universidad de los Andes (Venezuela 2008), Universidad de Buenos Aires (2010), Australian National University (2013) y Tulane University (2015). Autor de *El fenómeno Chávez: sus orígenes y su impacto* (hasta 2013), *Neoliberalismo y Anti-Neoliberalismo en América Latina: El debate sobre estrategias* y *El sindicalismo en Venezuela en el contexto democrático, 1958-1994,* entre otros. Ha colaborado en las páginas de opinión del New York Times y Los Angeles Times.

G-20008198-8

Gobierno Bolivariano de Venezuela | Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno | Ministerio del Poder Popular para la Cultura